



fundación para el análisis y los estudios sociales

JOSÉ VARELA ORTEGA

Un puente sobre el Sena

RICARDO MONTORO

Un año después

DANIELLE PLETKA

El Gran Oriente Medio

SULTANA WAHNÓN

El nuevo antisemitismo

PHILIPPE NEMO

La doble oligarquía de la V República

ROGELIO ALONSO

¿Un Gerry Adams para el País Vasco?

FERNANDO LONDOÑO

Neopopulismo en Latinoamérica

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

PSOE: regreso al pasado

BENIGNO PENDÁS

Nación y otros conceptos

MIQUEL PORTA PERALES

Nacionalprogresismo catalán

FERNANDO G. DE CORTÁZAR

Memoria de Gregorio Ordóñez

ALEJO VIDAL-QUADRAS

IGNACIO TORRIJOS

RAFAEL L. BARDAJÍ

Abril/Junio
2005



de **CUADERNOS**
de **pensamiento político**



12 euros

Cuadernos

de pensamiento político



fundación para el análisis y los estudios sociales

Cuadernos de pensamiento político



Índice

- 5 **Nota editorial**
- 9 JOSÉ VARELA ORTEGA
Un puente sobre el Sena o el regreso a Bruselas
- 77 SULTANA WAHNÓN
El nuevo antisemitismo
- 93 PHILIPPE NEMO
La doble oligarquía de la V República francesa
- 125 RICARDO MONTORO
Un año después
- 153 FERNANDO LONDOÑO
El triunfo del neopopulismo en Latinoamérica
- 165 DANIELLE PLETKA
Gran Oriente Medio: una oportunidad de futuro
- 173 MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO
Los fantasmas del pasado. La revisión crítica de la Transición y el Partido Socialista
- 189 ROGELIO ALONSO
¿Un Gerry Adams para el País Vasco?
- 199 BENIGNO PENDÁS
Nación, comunidad nacional y otros conceptos no intercambiables. Una perspectiva desde la teoría política
- 219 MIQUEL PORTA PERALES
Un visitante en la corte del nacionalprogresismo catalán
- 227 FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Gregorio Ordóñez en el recuerdo

RESEÑAS

- 231 ALEJO VIDAL-QUADRAS: **Adiós, España** (Jesús Laínz)
- 233 CARLOS MARTÍNEZ-CAVA: **Comunismo y nazismo** (Alain de Benoist)
- 236 RAFAEL L. BARDAJÍ: **The Case for Democracy** (Natan Sharansky)
- 239 IGNACIO FERNÁNDEZ BARGUES: **El misterio del europeísmo español. Enjambres y avisperos** (Miguel Ángel Quintanilla Navarro)
- 242 IGNACIO TORRIJOS: **Josep Pla. Notas para una biografía** (Arcadi Espada)

Cuadernos de pensamiento político



fundación para el análisis y los estudios sociales

EDITA:

FAES. FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES

PATRONATO:

Presidente: JOSÉ MARÍA AZNAR

Vicepresidente: ÁNGEL ACEBES

Vocales:

ESPERANZA AGUIRRE	JORGE MORAGAS
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS	ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO
CARLOS ARAGONÉS	EUGENIO NASARRE
JAVIER ARENAS	MARCELINO OREJA
RAFAEL ARIAS-SALGADO	ANA PALACIO
JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO	LOYOLA DE PALACIO
MIGUEL BOYER	ANA PASTOR
JAIME IGNACIO DEL BURGO	JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA
PÍO CABANILLAS	JOSEP PIQUÉ
PILAR DEL CASTILLO	MARIANO RAJOY
GABRIEL CISNEROS	RODRIGO RATO
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS	CARLOS ROBLES PIQUER
GABRIEL ELORRIAGA	JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY	LUISA FERNANDA RUDÍ
ANTONIO FONTÁN	JAVIER RUPÉREZ
MANUEL FRAGA	SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
GERARDO GALEOTE	ALFREDO TÍMERMANS
LUIS DE GRANDES	ISABEL TOCINO
JUAN JOSÉ LUCAS	BAUDILIO TOMÉ
RODOLFO MARTÍN VILLA	FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
JAUME MATAS	JUAN VELARDE
ANA MATO	ALEJO VIDAL-QUADRAS
ABEL MATUTES	CELIA VILLALOBOS
JAIME MAYOR OREJA	EDUARDO ZAPLANA
MERCEDES DE LA MERCED	JAVIER ZARZALEJOS

Secretario general: JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY

Director: JAVIER ZARZALEJOS

Redacción: MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO
JOSÉ MANUEL DE TORRES

PUBLICIDAD, ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPTORES

c/ Juan Bravo, 3-C, 7ª planta. 28006 MADRID

Tel.: 91 576 68 57 • Fax: 91 575 46 95

www.fundacionfaes.org • cuadernos@fundacionfaes.org

Distribución: COMERCIAL ATHENEUM, S.A. Rufino González, 26. 28010 Madrid

Producción, maquetación e impresión: EBCOMP, S.A. • Diseño gráfico: raro

ISSN: 1696-8441 • Depósito Legal: M-45040-2003

Cuadernos de pensamiento político
no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores



ESTA REVISTA ES MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN DE REVISTAS
CULTURALES DE ESPAÑA

NOTA EDITORIAL

Se ha cumplido ya un año desde que se celebraron las últimas elecciones generales en España, el 14 de marzo de 2004. Se trató, sin duda, de un acontecimiento político extraordinario, distinto del resto de las elecciones generales que se han celebrado desde el inicio de la Transición de los años setenta, por las circunstancias en que se produjo y por haber constituido el inicio de un periodo de regresión y no de progreso. No era la primera vez que el terrorismo irrumpía en una campaña electoral tratando de alterar su normal desarrollo: hace apenas unas semanas, a finales del mes de enero, recordamos el asesinato de Gregorio Ordóñez mientras preparaba la campaña de las elecciones municipales que tuvieron lugar en 1995, y recordamos, atendiendo a lo que nos advierte Fernando García de Cortázar en *Gregorio Ordóñez en el recuerdo*, que sólo honrando, comprendiendo y haciendo justicia a las víctimas, podemos mantener la dignidad moral que el terrorismo pretende hacer desaparecer.

Los crímenes del 11 de marzo no fueron más brutales que otros muchos cometidos en las últimas décadas, pero estuvieron caracterizados por rasgos que *hacían posible* su utilización política. Es difícil establecer en qué medida los asesinatos que precedieron a la jornada electoral influyeron o no en sus resultados, y a nadie se le escapa que se trata de una cuestión polémica. Pero determinar la medida en que el terrorismo es capaz de alterar el sentido del voto es una tarea que merece la atención de los pueblos que desean ser libres. Más allá del juicio a que pueda dar lugar el hecho, lo cierto es que las encuestas de opinión realizadas con posterioridad a las elecciones de marzo de 2004, estudiadas detalladamente por Ricardo Montoro en *Un año después*, revelan sin dudas que en esa ocasión muchos españoles alteraron su voto como consecuencia de los asesinatos perpetrados unos días antes, y que contribuyeron sin desearlo

—así lo declaran— a la constitución de un gobierno cuyo gusto por la radicalidad, la laicidad social y el revisionismo del sistema político de 1978, no responde a sus propias preferencias.

Ese nuevo gobierno socialista, portador y rehén de una versión radical de una ideología que ha sido golpeada por la Historia, parece haber hallado su razón de ser en la demolición. También de la nación, y como consecuencia del concepto mismo de «interés nacional». En la medida en que ese interés fue promovido por el PP durante sus gobiernos y en que el PSOE ha hecho suya la convicción de sus socios parlamentarios de que la obra legislativa popular es *vox diaboli*, el nuevo gobierno parece abocado a una suerte de reproducción del infantil juego en el que se prohíbe mencionar cualquier frase que contenga una palabra previamente escogida: Partido Popular; Aznar. Esa parece ser la ocupación principal del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con los lamentables resultados que están a la vista.

En el ámbito de la acción exterior del Estado, y como explica magistralmente José Varela Ortega en *Un puente sobre el Sena o el regreso a Bruselas*, parece que la realidad persiste aun cuando el PP ha abandonado el gobierno. Y esa realidad incomoda a un PSOE que en lugar de políticas de Estado adopta poses y apadrina regímenes y personas escasamente compatibles con nuestro interés nacional: antiamericanismo, europeísmo ingenuo y acercamiento a regímenes y personajes más o menos grotescos pero siempre dispuestos a proferir algún tipo de ofensa contra nuestro país y contra nuestros principios políticos. Especialmente preocupante es que el nuevo gobierno español esté tratando de promover lo que Fernando Londoño denomina *El triunfo del neopopulismo en Latinoamérica*, la impugnación de los procedimientos y de las instituciones democráticas, la promoción de un tipo de política que haría imposible la adhesión de los Estados latinoamericanos a la UE en el caso de tratarse de Estados europeos, pero que se juzga adecuada a la «realidad americana», en un gesto de eurocentrismo casi racista difícilmente disculpable.

En el mismo sentido cabe entender la errónea posición de partida del gobierno socialista con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, y el acercamiento ocasional a lo que Sultana Wahnón llama *El nuevo antisemitismo*.

La celebración de elecciones en Irak hizo posible que se registraran algunas de las imágenes más conmovedoras que hemos podido ver en

los últimos años. El acto de votar se convirtió para los iraquíes en un gesto que merecía arriesgar la propia vida, y su ejemplo parece haber impulsado en todo el mundo un esperanzador interrogante acerca de *las verdaderas intenciones y los verdaderos resultados* de esa posguerra. En ese mismo sentido debe entenderse la Iniciativa del Gran Oriente Medio que patrocina, entre otros, el gobierno norteamericano, una verdadera revolución en la política internacional cuyos principales contenidos expone Danielle Pletka en *El Gran Oriente Medio: una oportunidad de futuro*, y que merece la atención y el respaldo de quienes desean promover la justicia y la prosperidad en Oriente Medio y en el norte de África. Es incomprensible que el gobierno español permanezca al margen de una iniciativa que es vital para la seguridad de nuestro país, sólo porque se trata de un proyecto impulsado por los EE.UU.

En lo que se refiere a la política nacional, el desconcierto del gobierno no parece ser menor. Animado por las servidumbres a las que le llevaron los resultados electorales, pero no por ello contra su propio criterio, el gobierno ha puesto en circulación diversas maneras de negar la existencia de España tal y como es definida por la Constitución, que expresa la palabra y la voluntad de los españoles, aunque, sorprendentemente, el PSOE se empeñe en considerarla como algo distinto de éstas. En *Nación, comunidad nacional y otros conceptos no intercambiables*, Benigno Pendás nos advierte de la necesidad de mantener limpios los conceptos con que aludimos a las ideas y a las instituciones, y constata que con frecuencia damos preferencia al lenguaje de quienes son nuestros adversarios, otorgándoles así una ventaja apreciable a la hora de debatir razonadamente sobre el futuro de España como nación. Como explica Manuel Álvarez Tardío en *Los fantasmas del pasado. La revisión crítica de la Transición y el Partido Socialista*, nada permite presentar a la actual Constitución española como la expresión de una democracia defectuosa, elaborada en un «mal momento» de nuestra historia y que ahora deba ser perfeccionada para corregir las taras que supuestamente la lastran. Ese revisionismo, esa actitud crítica hacia la democracia española, encubre con frecuencia intenciones mucho más «esencialistas» o «inmovilistas» que las que denuncia, y, por supuesto, incomparablemente más que lo que el concepto de España evoca para la inmensa mayoría de los españoles. El abuso que de los símbolos y de las instituciones efectúan los partidos nacionalistas de Cataluña o del País Vasco, es evidente para cualquiera que contemple la vida política española con cierta objetivi-

dad, como trata de hacer Miquel Porta Perales en *Un visitante en la corte del nacionalprogresismo catalán*.

Y de un error a otro. Porque la evidente conversión –no sólo acercamiento– al nacionalismo que está experimentando el PSOE, parece estar llevando a algunos de sus dirigentes a adoptar también el punto de vista nacionalista sobre el terrorismo de ETA. La «búsqueda de la paz» ha sido mencionada por el Presidente del Gobierno al referirse al futuro de los miembros de la banda terrorista y a la posibilidad de que se produzca un proceso de negociación. Rogelio Alonso explora en *¿Un Gerry Adams para el País Vasco?* los peligros de las iniciativas que sugieren la conveniencia de remunerar mediante privilegios políticos el mero acto de dejar de delinquir. La «cálida acogida» que muchos políticos y medios de comunicación españoles ha dispensado a Gerry Adams durante la gira de presentación de su versión de la historia del IRA, debe ponernos alerta ante los peligros de convertir en eje de la vida política democrática a quienes se han dedicado concienzudamente a hacerla imposible, y sólo han accedido a incorporarse a ella después de constatar su propia derrota policial. Conviene que la instrucción judicial no quede en manos del criminal, y que la recreación de los hechos se apoye en testimonios diferentes de los que pueda aportar el propio acusado. No tiene sentido aceptar sin más examen la versión de ETA o del IRA sobre las razones por las que estarían dispuestas a disolverse, especialmente cuando de ellas se sigue que deben obtener una posición privilegiada en el sistema y que el proceso no es irreversible.

Finalmente, el número 6 de *Cuadernos de Pensamiento Político* incluye la segunda y última parte del estudio del profesor Philippe Nemo sobre el republicanismo francés, centrado ahora en *La doble oligarquía de la V República*, y reseña las siguientes obras: *Adiós, España*, de Jesús Laínz, a cargo de Alejo Vidal-Quadras; *Comunismo y Nazismo*, de Alain de Benoist, por Carlos Martínez-Cava; *The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror*, de Natan Sharansky, por Rafael L. Bardají; *El misterio del europeísmo español: enjambres y avisperos*, de Miguel Ángel Quintanilla Navarro, por Ignacio Fernández Bargues, y *Josep Pla. Notas para una biografía*, de Arcadi Espada, por Ignacio Torrijos.

UN PUENTE SOBRE EL SENA O EL REGRESO A BRUSELAS

UNA PALABRA DE JUSTIFICACIÓN A GUISA DE INTRODUCCIÓN

En algún lugar de la inmortal novela, reconviene el desdichado pero noble caballero a Sancho por su villanía de ponerse siempre al lado de los que ganan y mandan. El linaje es alimento de autoridad, indiscutible por definición. Tiene, pues, una digestión racional complicada. Sin embargo, hay quizá razones intelectuales para sostener la aseveración del hidalgo, en la medida que nuestra andadura académica tiene una función crítica y nuestra cabalgada un cierto trote contra-cíclico. O debiera tenerlo. Nunca he acudido más veces a la Fundación Pablo Iglesias que en la anterior legislatura. Y allí tengo buenos amigos que llevan con elegancia mi incompreensión ante la peculiar noción filosófica que identifica la igualdad de oportunidades con la de resultados, o la confusión, que les ha inoculado el virus nacionalista, entre diferencia (cultural) y desigualdad (social). Llevan también con paciencia mi incomodidad ante la idea de construir «una mayoría natural» (cuyo «ensayo general» ya vimos en la II República cómo acabó) y mi asombro ante la reciente fascinación de un partido internacionalista por etnias nacionalistas y religiones intolerantes. No me parecería equilibrado, pues, abandonar a mis amigos de FAES en esta encrucijada electoral. Amigos que tan tolerantes son conmigo y mis creencias en el principio científico del libre examen –incluido el de las células madre– y que con tanta resignación soportan mi insistencia de que catequesis no es lo mismo que historia de la religión, ni

José Varela Ortega es Director del Colegio de España en París.

el derecho individual de recibir aquélla puede convertirse en el deber social de imponerla a «puntazos».

Por razones profesionales evidentes, siempre he estado interesado en estos temas de política internacional. Sin embargo, andaba yo ahora en el negocio de la imagen de España en el extranjero, más que a la inversa. Por eso, cuando Javier Zarzalejos me pidió que escribiera lo que sigue, mi primer impulso fue el de negarme. Luego pensé en que habían perdido las elecciones y que, si desertaba ahora, podría pensarse que lo hacía para seguir en el Colegio de España y en París. Y es verdad. Es cierto que París bien lo vale. Pero no al precio de quebrantar mi juramento socrático: el decir la verdad de lo que pienso (y, si el cerebro me acompaña, pensar la verdad de lo que digo). En eso tenía razón el triste caballero. Porque las rentas fiscales no son carta de nobleza. Son del contribuyente. Van y vienen. La libertad e independencia de juicio, no. Son mías y son irremplazables.

LOS MAPAS DE ESPAÑA

La Exposición Universal de 1900 brindó la ocasión para dar un impulso significativo a la urbanización de París, plasmado, entre otras actuaciones, por *Le Grand et le Petit Palais*. Entre ambos edificios emblemáticos, se proyectaba una gran avenida con la explanada y la cúpula de *Les Invalides* como eje y fondo. El Sena se salvaba con un puente que, no por casualidad, recuerda a los de San Petersburgo. Se comenzó a construir en 1886 y estuvo a tiempo para la Exposición, aunque lleva la fecha de 1903 como contribución de los Zares Alejandro III y Nicolás II a la conmemoración del décimo aniversario del tratado franco-ruso de 1893. Un pacto que ha pasado a la historia como «la alianza trascendental». Y algo de eso hubo puesto que hizo posible «el milagro del Marne», o el agotamiento de la primera gran ofensiva del ejército alemán, en el verano de 1914, obligado a trasladar un número considerable de efectivos al frente oriental. A la finalización e inauguración del famoso puente, los Presidentes del Consejo fueron, por este orden, René Waldeck-Rousseau y Émile Combes. Ambos eran radicales de izquierda, responsable el último de la admirable (en mi opinión) legislación laica de la III República, hoy de nue-

vo en el debate político por el cuestionamiento que de la misma hacen los fundamentalistas musulmanes. No parece aventurado sugerir que la idea que los mencionados políticos radicales tuvieron de la Rusia de los Romanov, imperial, teocrática y autocrática, fuera escasamente positiva. Sin embargo, ellos y los demás políticos republicanos franceses, de la izquierda a la derecha, mantuvieron la estrecha alianza con los rusos hasta 1918. Se ve que nuestros radicales franceses del siglo pasado aparcaron la ideología y se limitaron a mirar el mapa. Vieron a la Alemania imperial en medio y decidieron sacrificar sus gustos en aras de sus intereses. Sus rivales alemanes hicieron otro tanto, aunque a la inversa, claro. Al parecer, el Canciller Bismarck, cuando nacionalistas e imperialistas alemanes le importunaban exigiéndole una revisión de la Conferencia de Berlín (1884-1885), a fin de lograr un nuevo reparto de África más favorable a Alemania, solía desplegar un mapa de Europa señalando, *ahí está Francia, allí Rusia y aquí en el medio estamos nosotros: ese es mi mapa de África.*

Los EE.UU. no son precisamente la Rusia zarista. Nos une a la República Americana una comunidad de valores liberales y democráticos, mucho más intensa de lo que Robert Kagan está dispuesto a admitir. Pero, en todo caso, tampoco en este trance se nos exige hoy a los españoles paladar sino sentido común. Basta con que comprendamos que nos conviene una alianza con *la* potencia hegemónica que, en lugar de amenazarnos, vela por nuestra seguridad –en la medida, claro está, que identifica esa protección que nos otorga con sus intereses estratégicos. Eso, guste o disguste, es verdad simplemente porque forma parte de nuestra realidad. Como también lo es que, desde 1917, a los europeos nos ha ido mejor –a veces nos ha ido la vida en ello– manteniendo una estrecha alianza con los EE.UU., un hecho, lo formule Aznar o su porquero, fácilmente contrastable, sin que por ello tenga nadie que renunciar a sus convicciones socialistas o populares. Puede, pues, que nosotros debamos hacer lo mismo en España que franceses y alemanes de otrora: mirar el mapa y dejarnos de interpretar el tablero internacional en clave ideológica o en función de gustos y colores. Y ahí están, en efecto, los mapas de nuestros intereses para quien quiera observarlos con un mínimo de atención y objetividad.

Del mapa histórico, lingüístico y cultural poco hay que decir. Es una obviedad que la herencia americana está presente de un modo

contundente en nuestra memoria histórica, en la representación que tenemos de nosotros mismos, en la construcción de nuestra propia identidad. El 12 de octubre se celebra en toda América, EE.UU. incluido, y en España se festeja desde el IV Centenario (1892). Como fiesta nacional española es de reciente consagración, pero no ha levantado discrepancias –a salvedad de algún comentario marginal e ignorante– precisamente porque no es un dato arbitrario. Ni siquiera hace falta recurrir a la fábrica de leyendas y epopeyas nacionales. El hecho americano es una historia de familia, una realidad inmediata imponente: hasta hace medio siglo, historias de emigrantes, casonas de indianos, como testigos mudos de una realidad social; hoy, es parte del paisaje humano de nuestras ciudades, esta vez inmigrantes de allá que vienen «acá», para hacer su Europa. Todos, los de aquí y los de allí, componen una realidad cultural formidable que hacen de España un país considerablemente más importante que el saldo de su producto porque –decía Unamuno– *la Patria es el idioma*. Y, en efecto, unos 450 millones de hispanohablantes convierten a nuestro idioma en la segunda lengua occidental (y a las disputas pueblerinas que tenemos en España sobre el asunto en un hecho irrelevante, además de bochornoso). Entre ellos, casi 40 millones son estadounidenses. Muy pronto, serán más numerosos que los propios españoles y tienen más de 30 mil \$ *per capita*.

El guarismo nos lleva al mapa económico y a la conclusión de que en esto, como en tantas cosas en el ámbito internacional, hemos regresado al siglo XVIII. Afortunadamente. Después de doscientos años, España vuelve a tener intereses económicos muy considerables en el continente americano: es el segundo inversor planetario, con cerca de 50 mil millones de dólares (más de 80 mil, si se incluye al Brasil) colocados en activos americanos. Mi amigo Jaime Terceiro, economista sabio y prudente, me indica que es una concentración de riesgo excesiva. Y quizá tenga razón. Pero, en todo caso, un hecho incontrovertible que hemos de asumir y defender. La cifra debe incrementarse de manera muy considerable sumando las inversiones españolas en los EE.UU. y las americanas en España. Estas últimas alcanzan, otra vez, casi medio centenar de miles de millones de dólares de inversión directa norteamericana (países de habla española excluidos) –de hecho, un rubro aún mayor, si tenemos en cuenta que muchas multinacionales americanas operan en España arropadas bajo pabellón de países de la Unión Europea. En total, unos 230.000 puestos de trabajo de-

penden de inversiones bajo bandera americana directa. Tiene, pues, razón la Cámara Americana de Comercio en España: *el antiamericanismo es un mal negocio*. Pero al Presidente del Gobierno no parece importarle mucho. El Sr. Zapatero, que es parlamentario ágil, ha hecho las delicias de su audiencia, ironizando sobre la «obsesión» del Partido Popular en relación al Presidente Bush. A los contribuyentes –no digamos a los empleados en empresas americanas– el chascarrillo nos hace una gracia muy ajustada. La «obsesión», o no, de los populares en el tema nos inquieta mucho menos, puesto que están en la oposición. Nos tranquilizaría bastante, sin embargo, ver al Gobierno, en efecto, obsesionado por sacarnos del mal asunto en que nos ha metido. La realidad es implacable y vengativa. Por eso, me temo que la broma nos salga cara: cara en los organismos internacionales, cara en el reflujo de inversiones extranjeras, cara –y no por difícil de contabilizar es menos importante– en imagen como país.

En todo caso, el negocio americano tiene una dimensión –y unos condicionantes– continentales. Es preciso que tengamos clara esta dimensión. Sobre todo que lo tenga claro la izquierda española y arrumbe en el desván de las ideas extraviadas la literatura «foquista» y «dependentista». Hemos de comprender que, tras la firma del TLC en 1994 por un México gobernado por el PRI (el partido de Cárdenas y de la nacionalización del petróleo, el partido que más retórica antiyanqui ha producido en el Hemisferio Occidental), el pleito está zanjado. Los mexicanos, muy sensatamente, han pensado en inglés: *if you can't beat them join them*, han debido decirse a sí mismos, y se han pasado al «enemigo». Así pues, República Mexicana *locuta, causa finita est*. O debería estarlo para nosotros. Y, desde ese punto y hora, el discurso antiamericano emite falsetes que suenan a hueco. La división del continente entre imperialistas yanquis y sus víctimas iberoamericanas es agua pasada –suponiendo incluso que generalización tan gruesa haya tenido sentido alguna vez. El mercado panamericano es hoy una realidad en movimiento. Y, por si había dudas, la posición favorable del gobierno socialista chileno se ha encargado de despejarlas. Inútil subrayar que el lugar que ocupan los EE.UU. en ese mercado continental es crucial. Siempre lo ha sido. Pero ahora se añade un elemento político decisivo. Cualquiera que lleve años viajando con alguna atención por esas latitudes y haya trabajado o residido por algún tiempo en esos países sabe que, al resentimiento y la envidia ocasionales, sigue casi

siempre una admiración desbordante por el modelo americano, un deseo de emulación y una conciencia absoluta de que los EE.UU. son su socio mayor. En los países iberoamericanos nuestra anterior e intensa relación con Washington, fuera ya de un discurso anti-imperialista marginal, ha producido respeto y despertado el interés que suscita el interlocutor privilegiado. De ese viaje por Washington –hoy interrumpido– nuestra relación con los grandes países latinoamericanos salió mucho más fortalecida que deteriorada. Más allá del color político, basta con preguntarle a cualquier embajador español que haya tenido un destino iberoamericano en estos últimos años. Tomemos buena nota, pues, y seamos conscientes de que el acercamiento a Chávez y a Castro y las deplorables soflamas antiamericanas, de moda hoy en España, tendrán el eco del aplauso populista latinoamericano pero ni generarán su respeto ni servirán a nuestros intereses.

Con ser muy importante, el mapa económico no lo es todo. La vida es antes que la comida, y en el mapa geoestratégico nos va nada menos que nuestra propia existencia, *tout court*. Ahí se rifa la suerte de la Península y sus Islas, cualquiera que sea la organización territorial del espacio. Los portugueses lo han comprendido admirablemente y nunca se han permitido despistes o querellas cainitas en su relación con las potencias atlánticas, primero con Inglaterra y ahora con los EE.UU. Al respecto, basta un botón de muestra: las declaraciones del dirigente socialista luso, José Sócrates (que sí habla con Bush), contrarias a retirar los efectivos de ayuda humanitaria que nuestro vecino tiene desplegados en Irak. Al parecer –y a diferencia de sus correligionarios españoles– el dirigente socialista luso no se siente con fuerzas –ni probablemente ganas– de cambiar la cartografía universal. Porque, en definitiva, de eso se trata. En algún lugar dejó escrito Adam Smith que *la única ley de la historia es la de la geografía*, a la cual llamaba Napoleón *la política de los Estados*. Nunca más cierto que en nuestro caso. La trascendencia que para los países ibéricos tiene la defensa de –y comunicación con– el Atlántico medio y el confín occidental del Mediterráneo, en un eje que se prolonga desde Azores (sí, en efecto, las mismas Azores de la *afrentosa* foto) a Canarias, el Estrecho y Cartagena-Baleares, no necesita ser subrayada. Basta ojear un mapa, iluminado con tonelajes de abastecimiento, y recordar las reflexiones de algún documento imperial, desde el Testamento de la

Reina Católica o la justificación de «la empresa de Orán» del Emperador, a los consejos y planes de Patiño (1732), en relación a Mazalquivir, Orán y Ceuta, y los proyectos de Ensenada.

El dato estratégico parte de un componente físico inalterable, pero está gobernado por variables técnicas cambiantes. La navegación aérea intercontinental ha subrayado la clave ibérica. Desde entonces, hay que mirar la Península como un inmenso portaaviones bi-oceánico y bi-continental entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África. El asunto se remonta a la II Guerra. Los planes alemanes e ingleses durante la contienda en relación al Estrecho y a las Islas ibéricas corroboran esta aseveración. Los americanos comprendieron pronto dichos condicionamientos estratégicos. Prueba de ello fue el establecimiento de bases en las Azores y la cautelosa actitud que adoptaron con el gobierno pro-alemán del General Franco con ocasión del desembarco aliado en Marruecos (1942). Los *Diarios* de Jordana, de un lado, y el propio Churchill en el Parlamento, de otro, dan testimonio de ello. Pero fue la Fuerza Aérea americana la primera en descubrir la Península y sus Islas como el necesario trampolín logístico americano en su paso a Oriente Medio (acuerdo Carlton Hayes-Lequerica de 2 de diciembre de 1944). El 19 de febrero de 1945, un intercambio secreto de cartas entre los dos gobiernos autorizaba al Mando del Transporte Aéreo americano a sobrevolar territorios de soberanía española. Por fin, con el bloqueo de Berlín y el golpe de Praga (1948) la Península, *llave estratégica* del Estrecho para posibles *operaciones en el Sur de Europa* (memorando Schuyler, 3 nov. 1948), quedaba acoplada dentro de una estrategia de contención como la americana de posguerra, en la cual el déficit de efectivos militares terrestres se equilibraba con un dispositivo aéreo-naval nuclear táctico. Precisamente, la situación, disposición de sus archipiélagos, extensión y complicada orografía peninsular daban el fondo geográfico –y le prestaban el tiempo necesario– a la propia noción de contención. La *vital* importancia estratégica que le otorgaban los funcionarios del Pentágono quedaba certificada por el proyecto *Drumbeat* (1947), un plan de contingencia militar, caso de que los soviéticos ocuparan la Península. Franco supo aprovechar –para sí mismo, que era su propósito, y, a la postre, para todos, que fue el resultado– el flotador internacional que le prestaba su posición estratégica.

Los socialistas, que señalaron en su día con buen juicio a sus rivales del PP lo inapropiado de andar a voces con alemanes y franceses cuando un 23% de nuestro PIB en la última década procedía de Fondos Estructurales, debían aplicarse el cuento y recordar que los EE.UU. han contribuido a la defensa europea con el equivalente al 2% del PIB *continental* durante... isesenta años! Simplemente, una cantidad astronómica. Cualquier alternativa de defensa unilateral, fuera del paraguas americano, conllevaría, con toda probabilidad, costes penosos de abordar y opciones militares difíciles de negociar, políticamente hablando. No hace falta ser zahorí para predecir que los mismos que hoy nutren el difuso, pero popular, frente político antiamericano serían los primeros en poner el grito en el cielo ante dichas alternativas. Un escenario quizá aplicable por extensión al resto de Europa Occidental que, como España, está inserta en –y se aprovecha de– el imperio informal americano. Y que, al carecer de una política exterior y de defensa común creíble, lo hace como «socio menor» –por más que determinados países europeos tengan ciertos problemas psicológicos de adaptación al papel que la realidad de su modestia actual les asigna. Por fin, la importancia estratégica del anclaje atlántico ha venido a ser reforzada, en lo que atañe a los intereses españoles, por la decisión de los EE.UU. de considerar y combatir al terrorismo como amenaza global de las democracias occidentales, siendo particularmente sensibles ante cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del Estrecho.

Un tema, el del Estrecho, delicado si los hay. Apaciguado desde el desembarco de Alhucemas en 1925, atravesó milagrosamente incólume las tormentas de la II Guerra, incluso las que pasaron por sus aguas, como la operación *Torch*. La base de Rota reforzó de forma muy significativa nuestra seguridad en ese punto tan expuesto. Y el convertirla en centro logístico de la VI Flota, como estaba acordado antes del estropicio antiamericano, hubiera despejado nuestro horizonte de seguridad en el área y en la región decisiva y quizá definitivamente. El costo de oportunidad dilapidado al respecto por el gobierno actual va mucho más allá de los puestos de trabajo que la operación hubiera creado. Afecta a nuestra seguridad. Un rubro muy caro pero que no tiene precio porque es irremplazable. En una palabra, ha sido desafortunado andar a mandobles, en un juego político

de corto aliento, contra una realidad –nuestros intereses vitales en el vínculo atlántico– que terminará, en todo caso, por imponerse, si bien a costa de correr un riesgo inabordable o pagar un peaje innecesario.

¿QUÉ EUROPA: ATLANTISTA Y LIBRE O ESTEPARIA Y CERRADA?

La insistencia izquierdista en contraponer europeísmo socialista frente al atlantismo popular se trata de un malabarismo electoral, exitoso pero incierto. Convendría que nos acostumbráramos a juzgar las cosas por sus resultados. Y, desde esa perspectiva, no deja de ser una pirueta intelectual complicada sostener que el partido que metió a España en el Euro o promovió la Euro-orden es, al tiempo, adalid del euro-escepticismo. Por otra parte, en España, desde que Costa inventó hace cosa de un siglo esa falacia entre africanismo (de los gobiernos) y europeísmo (de la nación), todos o casi todos somos europeístas. Es un problema de autoestima para la inmensa mayoría. Quizá, una autovacuna contra nuestro complejo de inferioridad. En su día, para bastantes, puede que resultara un arma dialéctica conveniente frente a una dictadura que no podía cumplir los requisitos democráticos del Tratado de Roma. Bueno o malo, el hecho es que aquí no hay una opinión euro-escéptica digna de mención, salvo la que conforman los socios del gobierno, partidos de obediencia nacionalista y estrategia secesionista que temen –con razón desde la actual legislación europea– que la independencia de España implique también la de la Unión Europea. Además, nos ha ido bien con ese señuelo europeo de progreso. *Europa* ha sido, en efecto, *la solución* de algunas cosas, la coartada para reformas impopulares, pero convenientes, y hasta el freno del desvarío y despropósito nacional, sobre todo, del nacionalista. Es, por otra parte, pueril entender que Inglaterra, Irlanda, Portugal o Italia son menos «europeas» que Alemania, Francia o Bélgica.

Sin embargo, la orientación que tome este *artefacto* en construcción –si se me permite la cita familiar– que hoy llamamos Unión Europea es un debate abierto que merece una consideración. Hay, en efecto, una versión de la Unión que proyecta cimentar su construcción en contraposición a los EE.UU. Quizá fuera oportuno que alguno de los muchos socialistas con experiencia internacional le explica-

ra al Sr. Zapatero algunas realidades elementales –por más que ausentes, al parecer, de las cátedras de derecho Constitucional de la Universidad de León: como, por ejemplo, el hecho de que sin la Carta Atlántica, impuesta por Roosevelt en 1941, no hubiera habido desarme arancelario europeo –ni, por ende, el Mercado hubiera sido Común– ni, sin el plan Marshall, reconstrucción ni, sin la presencia de las tropas americanas desde 1945, seguridad frente a la URSS ni tranquilidad para que Europa Occidental se uniera a Alemania, en lugar de defenderse de ella. En cualquier caso, un proyecto con ese propósito y talante antiamericano –fuera ya del juicio que merezca– tiene pocas probabilidades de éxito. Además –y por las razones más arriba expuestas– a nosotros, ibéricos, irlandeses, británicos u holandeses no nos interesa. Y hoy día –tras su experiencia soviética– nuestros nuevos socios de los países del Este tampoco lo quieren. Con todo, es bien cierto que hay una tradición europeísta esteparia y continentalista, en lugar de marítima, estatista y proteccionista, en lugar de comercial y librecambista. Una Europa, en suma, conservadora –en el sentido más real y concreto del adjetivo, latitudes políticas aparte– porque sobre-prima seguridad a costa de libertad y oportunidad. Sería, en suma, una Europa construida desde el punto de vista de productores blindados, en lugar de consumidores liberados. Esa Europa, en efecto, ha mirado siempre con envidia, recelo y antipatía a los EE.UU. Es la Europa bonapartista o gaullista, bismarckiana o hitleriana (salvando, claro, las enormes distancias y diferencias entre todas esas versiones –dicha sea esta matización con la esperanza de evitar descalificaciones ligeras).

Esa Europa no es la nuestra. Habría muchos argumentos razonables para cimentar esta aseveración. Pero hay uno contundente: esa Europa no es la nuestra, simplemente porque no nos conviene. En su viaje copernicano multiseccular, el centro geo-económico planetario parece estar desplazándose hacia el Pacífico, un lago español durante siglos hasta que los viajes del Capitán Cook le pusieron acento inglés, a fines ya del setecientos. Desde que Balboa descubriera en 1513 aquel Océano inmenso, nuestro peregrinar hacia Oriente ha seguido la ruta magallánica en lugar de la de Marco Polo. Nuestro mito –como luego el de los americanos– camina hacia el Oeste. Nuestro transporte no son las caravanas de Alepo y Palmira. Es la *Nao de China*.

Nos será más fácil y más productivo –aunque sea más largo– entrar en esas aguas a través de América, con América y hacia América. Vistas las cosas con perspectiva de Estado, recordando un pasado ya remoto –pero que hoy afortunadamente parece regresar, aunque ni nos enteremos ni lo aprovechemos– cuando en España todavía se hacía gran política, el dilema sobre qué Europa nos interesa a los españoles ofrece pocas dudas. Y pocas tendrían aquellas gentes de otros siglos –de otro porte y educación (Patiño hablaba cuatro idiomas, pero todos hablaban francés y muchos italiano), otras cabezas también. Esquilache o Patiño, Ensenada o Floridablanca, Campomanes o Jovellanos, hubieran traducido nuestra entrada en la Unión en 1985 como el fin de la pesadilla que engrilletaba la política española y la arrinconaba en el Mediterráneo desde la guerra de Sucesión. Lo hubieran interpretado como la ruptura de la maldición de Utrecht y Rastatt (1713-1714) y *el regreso a Bruselas*: la salida a mar abierto, la vuelta, en suma, a la gran política atlántica europea. Hasta la entronización de Rota como base central en el control del Estrecho, relegando Gibraltar a un puesto de quincallería audiovisual estratégicamente irrelevante (por eso, quizá en este punto el gobierno acierte), hubiera tenido para un Gálvez, por ejemplo, el regusto de una victoria. Una victoria ilustrada, del sentido logístico, de la gran maniobra que produce resultados sin dilapidar violencia (sobre todo lo hubiera tenido para aquel militar en el delta del Mississipi, que con tanta habilidad supo maniobrar sus tropas en el norte del Virreinato, entre Florida y Luisiana, logrando distraer fuerzas considerables y vitales de los británicos en combate contra los revolucionarios americanos).

Sea como quiera –y dejando a un lado el caso de España, que es un país de éxito y crecimiento recientes, pero que no es Alemania ni Francia– es hartamente dudoso que esa Europa-fortaleza anti-americana prospere, incluso entre quienes parecen hacer hoy muecas en ese sentido. Porque esta segunda unidad alemana no es la del Canciller de Hierro. No se ha hecho de Este a Oeste, sino al revés. No es prusiana. Es renana y hanseática. En una palabra, es atlantista y pro-americana. Y tienen razón nuestros socialistas: no se puede hacer política internacional en contra de la opinión. Por eso, antes o después, esta Alemania, la Alemania del comercio y del desarrollo, de la libertad y la democracia, volverá por sus fueros y se aproximará a los EE.UU.

UNA ALIANZA NO ES UN CHEQUE EN BLANCO

El reconocer que con América compartimos valores e intereses es un ejercicio de realismo y una prueba de sentido común. No es un cheque en blanco. Tiene razón el actual Presidente del Gobierno. Discrepar de los americanos –en aquello perjudicial para nuestros intereses– no es necesariamente inamistoso. Sobre todo si, dichos intereses se identifican con objetividad, se articulan con claridad, se defienden con firmeza y se expresan desde el consenso con mesura y discreción. Sin olvidar, por ejemplo, que hemos dejado en manos americanas aspectos vitales de nuestra seguridad y que, encima, nos la pagan. Son inamistosas, empero, las ofensas gratuitas a sus símbolos. Suprimir la bandera americana en el desfile del 12 de Octubre, tras la retirada de Irak, es además inoportuno. Y hacerlo pretextando que, en aquella ocasión, se quería conmemorar el sexagésimo aniversario de la liberación de Francia y de París, convierte lo inoportuno en grotesco o macabro –si se recuerdan los cuarenta y tantos mil caídos americanos en aquella gesta– e indocumentado, si se olvida que la división Leclerc se vestía con uniformes americanos, estaba equipada con armas americanas, se desplazaba en vehículos americanos que se movían con gasolina americana, incluidos los *half-tracks* de los republicanos españoles (cuya presencia en ese desfile de despropósitos malamente puede equilibrarse con la de excombatientes de la 250 división de la Wehrmacht, o «División Azul», sin provocar la irritación de cualquier ruso, rojo o blanco, incapaces de olvidar que los divisionarios utilizaron el salón de baile de Catalina la Grande en Peterhof para cuadra de sus caballos). Tampoco es ejemplo de mesura realizar declaraciones públicas en países del Magreb con la brisa del sondeo de opinión pero en contra de los intereses americanos en la región. Y en contra también de los nuestros. Máxime cuando son los EE.UU. quienes nos garantizan la defensa y estabilidad de esa ribera del Mediterráneo, como quedó palmariamente demostrado cuando el gobierno marroquí quiso traficar votos en el Consejo de Seguridad con que apoyar sus ambiciones coloniales en el Sahara, por una amenaza de militarización en el Estrecho, por más que simbólica, y fue el Sr. Powell –que no el de Villepin– quien nos ayudó a arreglar el entuerto. Lo hizo porque le interesaba, naturalmente.

Por el contrario, no tiene por qué considerarse inamistoso pedir al gobierno americano más inteligencia y menor obsesión demoscópica en el tema cubano. A mi juicio, nuestro Ministerio tiene bastante razón en ese pleito. El asedio suele fortalecer a las dictaduras porque alimenta sus recursos nacionalistas. Nosotros lo sabemos bien. La retirada de embajadores produjo la concentración masiva de la Plaza de Oriente (1946), en lugar del debilitamiento de Franco. Otra cosa, claro, es dejar de ayudar a la oposición cubana en su lucha contra la peor y más larga dictadura de América Latina, una tiranía totalitaria que, además, ha convertido un país que contabilizaba la tercera renta *per capita* de América antes de llegar el redentor con su machete, en un erial que ha caído por debajo de la República Dominicana. Debemos mitigar padecimientos, presionando al sátrapa caribeño con determinación pero discreción. Tenemos –sobre todo, tiene que hacerlo un partido de izquierdas con militantes que han sufrido el franquismo– que guardar las formas y la decencia. Y referirse a un psicópata gesticulante como *un personaje fascinante* es pura pornografía política.

Tampoco es inamistoso sugerir al gobierno americano que tome algunas lecciones de su propia experiencia y reflexione en el futuro antes de concertar alianzas con gentes de indeseable condición, no sea que estos, como en Afganistán, cambien de alianza pero mantengan la condición, un factor que raramente varía. Debemos también rogarles quizá menor presión e insistencia en el espinoso tema de la adhesión de Turquía a la Unión y mayor diligencia, en cambio, en la solución del trágico y explosivo problema palestino. El Oriente se llama Próximo porque está cerca de Europa que no de América. Cerca, para que nos afecte singularmente el avispero palestino –sobre todo, si se le aplica el coeficiente multiplicador del problema que supone la población musulmana inmigrante en la Unión. Próximo también para que los americanos comprendan que una cosa es procurar alejar de sus costas los frentes más candentes (una política que viene desde los tiempos de FDR) y otra muy distinta es que la forma de llevar a cabo tan comprensible deseo consista en exportarlo al patio trasero del vecino, convirtiéndolo en *imán del terrorismo* –como reconoce la propia prensa americana. No obstante, como vecinos que somos del mundo árabe, los europeos compartimos, en efecto, un mar entre dos tierras, de modo tal que, en lugar de celebrar las dificultades de los EE.UU. en Irak jaleados por la TVE oficial, deberíamos ser capaces de entender algo tan elemental

como el hecho de que si a los americanos les va mal en la región, a nosotros nos irá peor. De ese Oriente, amén de sernos más Próximo que a los americanos, somos por añadidura mucho más dependientes que ellos en suministros de petróleo. Así pues, por toda suerte de razones, debería haber sido la Unión Europea, que no la Americana, el primer y principal agente de intervención en nuestro Oriente Cercano. No hacer nada –nada decisivo, se entiende– y luego lamentar que unos (los sirios, por ejemplo) intervengan de forma agresiva, hostil a nuestra seguridad e intereses, y otros, aunque sean amigos y aliados, lo hagan a su gusto e interés, que no al nuestro, carece de seriedad y credibilidad.

En términos generales, y sin necesidad de mucho sermón socialista, podemos concordar que a los europeos nos interesa un sistema de defensa y decisiones multilaterales –máxime cuando hemos carecido de voluntad o capacidad para imponer nuestra propia «lateralidad». Por cierto, que otra de las cosas que agradeceríamos alguien le explicara al Sr. Zapatero –aunque sólo fuera para evitarnos algunos sofocos a quienes pasamos buena parte de nuestra vida fuera de España– es el hecho de que el multilateralismo (incluida la ONU) no es un invento europeo. Es un artificio americano, heredero de una arraigada tradición internacionalista wilsoniana, contraria precisamente a la tradicional política europea –tradicional desde Westfalia– del equilibrio de poderes. Pero aquel invento de la Administración Roosevelt-Truman fue también el producto de imperativos estratégicos acuciantes y la respuesta americana a las angustiosas solicitudes de ayuda de los gobiernos europeos –muy singularmente el del General De Gaulle– ante el totalitarismo soviético. Desear la reproducción del multilateralismo, junto al paquete de amenazas totalitarias que lo hicieron imprescindible, no es menos razonable que esperar su perpetuación en un contexto de creciente desequilibrio militar entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Un contexto en el que los países europeos ni siquiera han sido capaces de garantizar la seguridad de su propio continente, como ha quedado patéticamente demostrado en las crisis de la antigua Yugoslavia.

Y CUÁNTO CON FRANCIA

A Francia nos une una larga historia. Tan larga como la frontera que antes nos separaba y ahora nos comunica (aunque no tanto como

nosotros –y los portugueses, por cierto– deseáramos, en la medida que el déficit francés de comunicaciones hacia el sur empieza a ser escandaloso). Se trata de una de las fronteras más estables de Europa. Casi calcada del *limes* romano y que ahora algunos quieren rediseñar. Ha sido una historia fascinante y enriquecedora para ambos países. Sin Francia no puede entenderse la historia de España, sobre todo la de los últimos dos siglos y medio. Y tampoco es fácil comprender la Francia del *grand siècle* sin el componente español, como ha demostrado Jean-Frédéric Schaub en un libro reciente y excelente. Como no podía ser menos, ha sido también una historia conflictiva desde que, a fines del XV, la Monarquía Hispana heredó del reino catalano-aragonés la política de rivalidad con el vecino país.

Desgraciadamente, el nacionalismo español contemporáneo se forjó en una rebelión popular –y una sublevación militar– contra la presencia en la Península de tropas napoleónicas (que requisaban, en lugar de pagar sus vituallas, como observó sagazmente Chateaubriand) en apoyo del gobierno, legal, del rey José –un francés vacilante pero inteligente, honesto, abstemio y mucho mejor persona que «el Deseado», un español muy flamenco pero uno de los seres más abyectos que ha producido la ilustre dinastía. Como suele ocurrir con los de su género, los nacionalistas españoles destruyeron el país que aseguraban querer liberar. La guerra de Independencia fue, pues, *un hecho glorioso pero fatal*. Y hay que tener la presencia de ánimo de D. Antonio Cánovas para escribir esas palabras en pleno siglo de fanfarria nacionalista, y su inteligencia para comprender que aquella victoria revolucionaria se saldó con un desastre que mutilaría España durante más de un siglo. Destrozó la infraestructura y arruinó la economía. Pero, sobre todo, eliminó *toda tradición ordenada de poder y obediencia en el seno de la sociedad española* –como supo apuntar con perspicacia un gran historiador catalán– sustituyendo una cultura de legalidad por hábitos delictivos de rebelión y «cabecillismo», que dijo primero Costa y luego Maura, introduciéndonos en una economía de la violencia que nos relegó a un paisaje de toreros, bandoleros, contrabandistas, guerrilleros y demás matarifes. Eso sí, muy romántico. Pero para *la haute*. Para un buen burgués como el que suscribe, el único personaje tranquilizador del bestiario romántico español era el barbero. Costó casi setenta años enmarcar la discusión dentro del

Código Civil, en lugar de la ordenanza militar o el «grito» insurreccional. El resto del XIX y buena parte del XX, se consumió importando ingeniería política francesa: intentando imponer, primero, y estabilizar, después, el liberalismo con una versión mejorada, más flexible y tolerante, del II Imperio napoleónico, para terminar descalabrándose, en el novecientos treinta, ensayando una imitación radicalizada y apresurada de la democracia de la III República, pero sin sociedad francesa ni Liceo Francés.

Hoy todo ha cambiado. España es un país democrático, desarrollado, dinámico y en rápido crecimiento. Las distancias se han acortado. Y lo siguen haciendo a ojos vistas. Los franceses, que nos expulsaron de la Europa atlántica hace casi tres siglos, nos han ayudado a volver a Bruselas y reemprender nuestro destino histórico. Nos unen multitud de intereses comunes con nuestros vecinos. Francia es nuestro primer cliente y nosotros somos uno de sus proveedores más importantes. Nos une, sobre todo, lo más importante: la construcción de una identidad común en un proyecto europeo sustentado en valores compartidos, la misma moneda y, tras serios desencuentros, una política de seguridad común frente al terrorismo. Los intereses, pues, son comunes. Compartimos también algunos objetivos fundamentales, además del principal que es la construcción europea. Para nosotros resulta vital –en el sentido más trágico y literal del término– el desarrollo y modernización, la democratización y secularización de las sociedades del norte de África. Debemos ser capaces de convertir el Estrecho en una vía de paso (libre, aunque controlado por los americanos, que lo van a hacer de todas maneras y que lo harán con nosotros, si tenemos un poco de sentido común), en lugar de una barrera anti-pateras. Y en Francia conocen el tema, quizá como nadie en Europa. Tienen tanto interés invertido como nosotros en el éxito de Marruecos, a veces puede que un poquito excesivo y no siempre respetuoso con nuestros intereses –como ha venido a reconocer recientemente el propio Presidente Chirac.

Dicho esto, debemos reconocer que, en ciertas áreas, nuestros objetivos son distintos. Francia todavía tiene una economía considerablemente mayor que la de España. Casi tan grande como la del Estado de ... California. Francia es una cultura universal, de una significación e influencia internacional indiscutibles. Es además una po-

tencia nuclear con un pasado hegemónico reciente que busca preservar en alguna medida, acomodándolo y promocionándolo, a veces disfrazándolo, dentro de una política multilateral. Nuestro caso es distinto. Somos crecientemente importantes. Pero, más modestos que nuestros vecinos, no estamos en jugadas de anhelo hegemónico ni debemos dejarnos arrastrar por ellas. No es nuestra política ni nuestro objetivo. En la construcción y profundización de la Unión Europea deberíamos «marchar», como se decía en el XIX, con Alemania y Francia –como, por otra parte, han hecho todos los gobiernos desde el Presidente González. Pero, en el mantenimiento y consolidación del vínculo atlántico, deberíamos seguir el discreto e inteligente ejemplo de nuestros vecinos portugueses, en la medida que nuestros intereses se alinean más bien con el Reino Unido –*ma non troppo*– e Italia, entre otros. En cuanto al diseño del modelo económico europeo, nuestro éxito y crecimiento siempre –desde nuestra revolución Gloriosa de 1868– ha estado asociado a la apertura y la flexibilidad. La España contemporánea es uno de los ejemplos más conmovedores de la noción kantiana de la indivisibilidad de la libertad: proteccionismo y autarquía han sido entre nosotros sinónimo de hambre y tiranía; librecambismo e inversiones extranjeras, de crecimiento, libertad y democracia.

Juzguemos las cosas por sus resultados. *La matemática* –nos enseña el italiano– *non è una opinione*. Y ahí están las cifras de nuestro desarrollo desde las aperturas de 1959 y 1985 para demostrarlo. Escuchemos en este punto a holandeses e irlandeses, que coinciden con los británicos en el modelo económico, pero piensan que Unión y librecambio, por dentro y hacia fuera, son perfectamente complementarios. Fuerte no es igual a fortaleza amurallada. Fuertes son las economías libres y competitivas. Construyamos, pues, la economía europea desde el punto de vista de los consumidores, que es la única economía democrática porque consumidores somos todos. Quizá los franceses puedan permitirse –veremos por cuánto tiempo– las alegrías de la subvención, trabajar cada vez menos horas, el impuesto regresivo del déficit (para Bruselas y Frankfurt hay algunos más iguales que otros) y otros errores de concepción. Nosotros, que venimos de orígenes más modestos y recordamos lo que es la pobreza, no. Y, por la misma regla de tres, escuchemos con atención a nuestros nuevos

socios del Este en asuntos de seguridad y libertad, que saben muy bien lo que es ser invadidos y vivir esclavizados. La libertad y la democracia hay que defenderlas con la vida si es preciso. Y no es retórica. Es un viejo concepto estoico y ciceroniano que está en los orígenes de la democracia clásica. Por algo en Roma la *comitia curiata* coincidía con la *comitia centuriata*. Con la vida, la libertad y la democracia, bromas las precisas: en temas de seguridad –sobre todo, de seguridad y control del Estrecho– marchemos directamente con los americanos, al menos por ahora.

Somos un país de éxito indudable y con una excelente imagen fuera. Pesamos y contamos mucho más de lo que nosotros mismos nos creemos, mucho más que los países europeos que vienen detrás de nosotros y que son todos menos los cuatro grandes. Pero no somos Alemania, Francia o Inglaterra. Nuestro papel es –puede ser, si jugamos bien nuestras bazas– de una importancia creciente pero más discreto que el de nuestros socios mayores. Francia (y Alemania hasta que retome su habitual sendero pro-americano) puede permitirse el error de irritar a los americanos, en una política de diseño y ambiciones hegemónicas. Pagará su precio. Ya lo está pagando. Pero será un precio abordable porque los americanos *no pueden permitirse el lujo de dejar de hablar con ellos* (Colin Powell). Pero con nosotros sí pueden permitírselo. Ya se lo están permitiendo: nos han tenido meses sometidos a cuarentena de embajador y tampoco viajan a España. Por eso, nosotros no podemos permitirnos esas alegrías. Además no nos conviene. Es contrario a nuestros intereses atlánticos. Y no estamos en este mundo para hacer de «mozo de azotes» de los franceses, importunando a los americanos a ritmo de sondeo, mientras nuestros vecinos se apresuran a rectificar su *gaffe*. No sea que nos quedemos sólo con la sonrisa, pero con la sonrisa del simple. Lo nuestro no es andar corriendo tras el Sr. De Villepin, o de su sucesor en el Quai D'Orsay –por bien que se exprese en castellano y aunque lo haga mejor que la ministra española que le tocó en suerte– reclutando votos contra los EE.UU. en Naciones Unidas. Lo nuestro es mediar ante los americanos –como se hizo y con gran éxito, por cierto– para que sean indulgentes con el voto contrario del mismo gobierno socialista chileno que quiere desesperadamente acceder al mercado americano a través del TLC. Eso sí que cumple nuestro destino y sirve a nuestros intereses.

En una palabra más general, se comprende que algunos de nuestros compatriotas europeos, que salen de un pasado hegemónico reciente, tengan ciertos problemas psicológicos de adaptación al discreto papel que la relativa modestia de una realidad surgida de dos hecatombes fratricidas nos ha reservado a todos. Debemos también tener paciencia e indulgencia ante los intentos de recrear un pasado glorioso por medio del uso extensivo, abusivo en ocasiones, de la palabra Europa, en un conmovedor ejercicio para promocionar los intereses propios sin integrar los de los demás. Pero, aquellos que venimos de orígenes históricos recientes más modestos, y quizá por ello seamos más realistas, hemos de resistirnos a sumarnos al coro de los enanos de la venta. Allá por los años ochenta del siglo antepasado, D. Antonio Cánovas, un tanto impaciente con quienes entonces se llenaban la boca exigiéndole los oficios diplomáticos de su gobierno para que España fuera declarada «gran potencia», espetó: *para ser reconocidos como gran potencia, no hace falta declaración alguna; basta con serlo*. Pues bien, si de verdad los europeos queremos jugar en serio otra vez a la política planetaria y recobrar una relación multilateral que tanto nos conviene, pero evitando resucitar el fantasma totalitario que la hizo imprescindible en 1948, en lugar de voces y gestos desafiantes que agujereen un paraguas americano de seguridad para el cual carecemos hoy por hoy de alternativa, tendremos que diseñar una política internacional coherente que integre los principales intereses europeos, y no sólo los de unos pocos, y habremos de disminuir el creciente abismo económico, científico, tecnológico y militar que nos separa de los EE.UU.

DEL ERROR DE PLEBISCITAR A NUESTRO ASESINO Y DE LA NATURALEZA DEL TERROR

Mientras, ejercitemos la humildad que nos recomienda el Presidente del Gobierno. De su consejo nos importa menos el déficit de sinceridad que las rentas de sensatez. Y debemos todos aceptar de buen talante que el entendimiento de lo que nos ha ocurrido, la comprensión del fenómeno que nos amenaza es central para reforzar nuestra seguridad. No hace falta solicitar el carnet del PSOE para asentir a verdad tan elemental como la expresada por el Sr. Zapatero. Yo mis-

mo lo escribí pocas semanas después del terrible atentado de Madrid: la pesquisa policial o la sanción judicial son imprescindibles, pero no es lo mismo que la comprensión intelectual de un fenómeno, por más que ayuden a ello. Mucho menos aún la verdad electoral: un guarismo que traduce la legitimidad de representación en una realidad de poder no es, en modo alguno, un análisis de la realidad que nos amenaza. En la cuenta de los sociólogos y electoreros de *ambos* partidos, aprendices de brujo de nuestro tiempo, debe imputarse el desaguizado analítico cometido. La astucia no es lo mismo que la inteligencia. Y manejar a golpe de sondeo una tragedia como la que nos ha herido y amenaza es, como mínimo, de una sensibilidad e inteligencia menor que medianas. Por eso escribí en tiempo real lo que hoy proclaman los representantes de las víctimas: que plebiscitar a nuestro asesino –ya fuera ETA o Al Qaeda– no era el camino más racional y objetivo para analizar lo ocurrido. El buscar un chivo expiatorio entre nosotros, tampoco. También dije en sazón que el «mea-culpismo» –como le llama André Glucksmann– es un exorcismo de nuestra cultura judeocristiana; si acaso, una terapia psicológica. Pero no es un paradigma de inteligencia. Cometer una injusticia (con el Sr. Aznar, en nuestro caso), ayudará a tranquilizar pero no a explicar ni a comprender la naturaleza del peligro que nos golpeó el 11 de marzo y continúa acechándonos hoy. Precisamente, la sed por encontrar culpables que alentaban algunos socialistas –así lo escribí entonces– obtendría el rédito popular que fuera pero al precio de escamotear responsables y esconder fallos clamorosos: explosivos sin vigilar ni inventariar, robos sin denunciar e islamistas sin seguimiento. Hechos estos últimos que son ciertos, aunque estén hoy en boca de los socialistas, y todos –incluidos los populares– haríamos bien en admitirlos, simplemente para corregirlos. Del mismo modo que todos sin excepción –también los socialistas– deberíamos abandonar la torcida insistencia en seguir explotando la cantera populista del problema iraquí al son de maraca tercermundista con partitura de un antiamericanismo visceral. No sirve a nuestros intereses y, desde luego, incumple el exhorto de comprensión del fenómeno que nos ha hecho el Presidente del Gobierno.

Lo peor de plebiscitar a Al-Qaeda como muñidor electoral de la izquierda es que, al hacerlo, se ha administrado a la opinión una so-

breddosis primaria, en forma de una proposición tan equivocada como letal: guerra de Irak = atentado de Madrid. Es la conclusión falsa a que una campaña de venganza personal ha conducido a buena parte de la opinión, precipitándola en una relación de causalidad falaz. Las bombas de Madrid tienen desde luego un propósito, pero no son la consecuencia la guerra de Irak ni tienen en ésta su causa. Los pretextos son varios pero las causas son otras y no son la misma cosa. El ataque a las Torres Gemelas se produjo antes –que no después– de la intervención en Irak, del mismo modo que los atentados de Bali, Luxor, Casablanca y Turquía se perpetraron contra países musulmanes que se habían opuesto a la guerra. La activa campaña del gobierno francés en contra de la intervención en Irak no les ha librado de la sentencia fundamentalista que pesa sobre el país vecino con pretexto del «velo», como han venido a demostrar varias intentonas terroristas frustradas. Como tampoco nos hubiera librado a nosotros un comportamiento internacional similar al de Francia, en la medida que somos «culpables» del genocidio cometido con Al-Andalus siglos atrás (Ben-Laden *dixit*). Nos lo ha explicado Gustavo de Arístegui con orden y detalle en un libro reciente. Los españoles somos peor que herejes. Fuimos musulmanes y, al dejar de serlo, hemos cometido apostasía, pecado horrendo que nos convierte en objetivo del terrorismo yihadista, con guerra o sin ella. La «Guerra Santa» del terrorismo panislamista «contra judíos y cruzados» fue, al parecer, promulgada en 1998, según nos cuentan los expertos en el tema. Todo ello, se nos antoja tan irreal y delirante desde la óptica de nuestras sociedades prósperas, libres, abiertas y tolerantes que casi provoca una sonrisa. Pero la broma se torna macabra cuando nos ciega el fogonazo de la explosión y olemos el siniestro hedor de la dinamita.

Debemos reconocer que nos enfrentamos a una realidad pavorosa y global que nos ha golpeado antes de Irak y nos sigue amenazando después, que hay países que financian y entrenan a los terroristas y otros sometidos a regímenes tiránicos y totalitarios que se han dotado de armamento atómico con capacidad balística o están a punto de hacerlo. Entre ellos, hay alguno, como el Irán de los Ayatolas, que tardará todavía bastantes años en desarrollar un ingenio capaz de llegar al continente americano, pero muy poco tiempo –conviene tener la honestidad de recordarlo, y la sensatez de admitirlo– en contar con

un cohete al alcance del europeo. Resistamos, pues, dosis excesivas de tranquilizantes psicológicos en forma de traslación de culpa. Evitemos, de igual modo, la formulación de conclusiones simplistas precipitadas. Porque ambas –culpas y conclusiones simplistas– nos llevarán a decisiones erradas. Digamos la verdad, pero toda la verdad, y no confundamos las cosas. Afirmar que la intervención en Irak acrecentó el peligro porque proporcionó el pretexto, es una opinión. Hasta puede entenderse como una opinión razonable, o bien leerse en clave de economía electoral. En todo caso, no es un hecho y... ya nos lo enseñaron los primeros americanos –e inventores de la democracia moderna también– *las opiniones son libres pero los hechos son sagrados*. Es una deducción sólidamente fundamentada, en cambio, basada en evidencias directas que se apoyan en hechos contrastados, el afirmar que los atentados islamistas componen una larga cadena que se extiende antes y después del 11 de septiembre y del 11 de marzo. Es también un hecho demostrado que la tragedia de Madrid se planeó bastante *antes* de la intervención en Irak, que no *después*. Lo cual tampoco otorga patente de curso intelectual que autorice –más allá del negocio electoral, claro– a explotar yacimientos de opinión en sentido opuesto. De modo tal que considerar un error –o un acierto, tanto da– la intervención en Irak y reconocer que no existe relación de causalidad con los atentados es algo perfectamente compatible. Es además razonable. Porque el reconocerlo ayuda a comprender la verdadera naturaleza del fenómeno terrorista que nos amenaza. Conviene que lo que probablemente constituye el meollo de la opinión mayoritaria española al respecto salga de su error: no nos han «castigado» por habernos portado mal en Irak ni dejarán de hacerlo ahora que somos «buenos». De hecho, después, y a pesar, de habernos retirado de Irak han intentado volar la Audiencia Nacional. Y, aunque diga lo contrario para seguir aumentando su renta de sondeo, el gobierno actual debe estar convencido de ello y por eso está tomando sensata, certera y apresuradamente medidas concretas al respecto. Reconocer la realidad es un paso imprescindible para intentar corregirla. Nos protegeremos mejor si terminamos por entender que la variable fundamental no está en la causa sino en la oportunidad. La pregunta que se formulan los terroristas no es *por qué*, sino *cuándo, cómo y dónde* cometer su atentado.

En general, estas políticas de la violencia o estrategias de «guerra barata» no son productos reactivos sino pro-activos. No son reacciones de resistencia sino acciones de revolución. Nos conviene utilizar la preposición adecuada para formular una proposición acertada: la amenaza no nos llega del *por* (qué) tanto como del *para* (qué). De esta suerte –y en contra del optimismo bienpensante– me temo que, desgraciadamente, estos fenómenos pocas veces son consecuencia de intransigencia ni resultante de carencias. Al respecto, parece prudente distinguir entre causas y pretextos o coartadas, no sea que de la legítima atención a las primeras se derive la frustración de comprobar que no resuelven fenómenos de violencia política que responden a resortes más prosaicos y prácticos. Siempre podremos, claro, incrementar la ceremonia de confusión ampliando el alcance del disparate y, con la inestimable ayuda de Günter Grass y del Canciller Schröder, concluir que la causa del terrorismo es el hambre en el mundo, con la tenue esperanza de que la ausencia de la primera de las plagas mencionadas en Burkina-Faso, o su persistencia en el País Vasco y su financiación –amén de activa participación– por parte de algunos millonarios saudíes, les haga a algunos pestañear en el argumento. Es un error común, con frecuencia derivado de la peculiar interpretación etnicista de la historia, rebuscar en la mito-genética del conflicto, en la errada presunción de que estos fenómenos de violencia responden siempre a legados de un pasado de opresión, pesadillas de un remoto y recurrente conflicto histórico, nacional, cultural o religioso. Muchas veces son opciones del presente. Estrategias de poder. De poder totalitario, se entiende, que se alimenta, pero no se sacia, de concesiones o sumisiones. La pregunta sobre el *porqué* en fenómenos multi-causales e infinitamente complejos es racional pero no siempre es razonable. Blanquí y Lenin, que sabían del asunto porque andaban en este negocio de la violencia política, pensaban que la cuestión pertinente es la de *pour quoi faire?* Estaban mucho más interesados en los propósitos y objetivos de la violencia que en investigar sus causas. Y del enemigo, el consejo: el objetivo último del fundamentalismo islámico es un poder teocrático que modele las sociedades musulmanas –al tiempo que destruye las occidentales– al estilo del Irán de Jomeini o el Afganistán de los talibanes; «la Patria lejana» del nacionalismo etnicista es la implantación de un poder totalitario

que logre la limpieza étnica y coadyuve a la construcción de una sociedad nacional-socialista. Lo demás son montajes, pretextos y coartadas; como mucho, etapas.

La búsqueda de una coartada explicativa simple, que nos tranquilice y libere de retos desagradables –por más que inevitables, a la postre– es producto de la indecisión y antesala de la negociación. Y en ésta, los totalitarios violentos traducen por claudicaciones lo que nosotros declinamos como compromisos –una evidencia que populares y socialistas vascos han constatado con su propia sangre. Más que ahorrar, negociaciones y concesiones incrementan el sufrimiento, en la medida que estimulan la violencia remunerándola. Y, lo que es peor, la injertan como un virus en nuestro sistema, de modo tal que la violencia queda incorporada, como un dato letal pero funcional, en nuestra economía de la política. A partir de ese precedente, lo que ha servido para descerrajar un problema de reparto de la soberanía, regatear apoyos a nuestros aliados o correr un «velo», pongamos por caso, este simio imitativo no resistirá la tentación de utilizarlo para imponer cualquier cambio a tiros en vez de a votos. Habremos dado la vuelta a nuestra civilización democrática como a un calcetín: en lugar de procesar problemas sin violencia, lo que habremos integrado en el sistema será precisamente la violencia que buscamos evitar. Nuestro natural anhelo de paz, nuestra saludable repugnancia por –y renuncia a– la violencia será la llave de yudo con la que los terroristas, pasando por la renuncia y la negociación, nos habrán llevado de la indecisión al enfrentamiento entre nosotros, destruyendo nuestros propios valores. Paralización e indecisión son quizá una consecuencia de la incredulidad que produce el sinsentido de la absurda desproporción del acto terrorista. El rechazo de la maldad, la natural repugnancia a enfrentarse con algo demasiado horrible para ser admitido, quizá –como escribiera pesaroso T. S. Elliot, precisamente días antes de estallar la II Guerra Mundial– porque *el género humano no es capaz de soportar una dosis excesiva de [su propia] realidad*. Ahí reside la esperanza del terrorismo. En ello se fundamenta su forma de abordar, por vía de la aproximación indirecta, un problema militar, de salida imposible para los terroristas. Si logran utilizar nuestros complejos de culpa, nuestra voracidad por explicaciones simplistas, nuestra tendencia a generalizar

sobre agregados heterogéneos y a formular correlaciones poco fundamentadas, los terroristas habrán dado un paso estratégico gigantesco en el camino de sus propósitos: la destrucción de la sociedad occidental. Un camino que se pavimentará con la *confusión mental* (la cita es de Hitler pero está en contexto). La confusión *de* –y *sobre* el– enemigo por una campaña de venganza personal que puede precipitarnos en una espiral cainita que nos haga perder en el enfrentamiento lo mucho, lo muchísimo logrado. Pero que además –y a mayor gravedad– oscurezca los problemas que tenemos y oculte los peligros ciertos que nos acechan.

Esa es una de las razones por la que traficar autodeterminaciones o secesiones, «velos» (en Francia) o intervenciones en Irak (de España) –que no son más que objetivos tácticos– no resuelven nada aunque lo agraven todo. Porque remunerar la violencia es estimularla, en lugar de desactivarla. Por eso, como nuestro objetivo estratégico es la derrota de un método –el de la violencia– llevando al enemigo del desaliento al desistimiento, debemos evitar cualquier gesto, cualquier interpretación que alimente la esperanza de que su macabro sistema paga dividendos. Y, con toda probabilidad, retirar la ayuda humanitaria de Irak (dejando en la estacada a unos aliados que, por lo general, los necesitamos nosotros a ellos más que al revés) ha tenido desgraciadamente, guste o no, esa lectura entre los terroristas –escasamente atentos a las protestas del actual Presidente del Gobierno, en el sentido de afirmar, con verdad, que dicha medida ya venía anunciada en el programa socialista mucho antes del atentado. Como ciudadano celebro que un político –me da lo mismo cuál– haya sido fiel a sus compromisos programáticos, pero hubiera respetado aún más al hombre de Estado que, con parecido temple al del Presidente González en el espinoso e impopular tema de nuestro ingreso en la OTAN, hubiera resistido el vaivén de las encuestas en esta coyuntura tan delicada. El actual gobierno tendrá que enfrentarse, antes o después, al hecho de haber alimentado una falacia intelectual que correlaciona intervención en Irak con atentados, confundiéndonos de paso en el análisis de la amenaza, y precipitándonos en una política internacional estrábica; esto es, diseñada también por razones de encuesta, que no de Estado. Empieza a ser ya evidente que la retirada de Irak al son de pandereta antiamericana ha disminuido apoyos sin reducir riesgos.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL ESPAÑOLA O LA HISTORIA DE UN DESINTERÉS

La realidad internacional es desagradable y, como tal, casi siempre impopular. Lo es en casi todos los sitios y lo ha sido en casi todas las épocas. Pero en la España contemporánea quizá en un grado mayor que en otras latitudes. Hasta el presente, han sido pocos los españoles interesados o alerta del escenario internacional, fuera de los profesionales del tema. Quizá porque no hayan percibido la necesidad o el riesgo que el factor exterior lleva aparejado. Después de la invasión napoleónica, no hubo una amenaza extranjera digna de mención, salvo, claro está, la de los EE.UU. sobre Cuba. Una dolencia para la que ningún gobierno español encontró la medicina diplomática adecuada, en la medida que nada podíamos ofrecer a las potencias europeas de la época a cambio de la perspectiva de enfrentarse gratis a los americanos. Y cuando, en el primer tercio del XIX, nos lo ofrecieron los ingleses, rechazamos la cobertura de la Royal Navy frente al expansionismo americano (en el norte del Pacífico, que es lo que temían los británicos y, en el Caribe, que es lo que a nosotros nos amenazaba). Fue un disparate cocinado en el horno de la soberbia del hidalgo calderoniano. La guerra de África, mediado el ochocientos, novelada por Alarcón y pintada por Fortuny, fue popular porque éramos nosotros los agresores y resultamos ser los vencedores, como dan fe los leones del Congreso, fundidos con el bronce de los cañones arrebatados al enemigo. A diferencia de nuestros vecinos portugueses, los españoles se interesaron muy poco en el «reparto» de África y nuestra intervención en la Conferencia de Berlín (1884) fue desganada y marginal. Después del Desastre (1898), a pocos les quedaron ganas de batallas, salvo las de «la escuela y la despensa»; esto es, la llamada «regeneración» interior o modernización de España. Una larga batalla que hemos ganado un siglo después. La guerra del Rif, en el primer tercio del novecientos, fue más un producto de incompetencia militar que una epopeya digna de Kipling. Los gobiernos de la época –la de la Gran Guerra, no se olvide– nunca supieron socializar su necesidad ni el riesgo cierto que España corría en el Estrecho. Ni los graves incidentes en la región con algún crucero alemán (el «Panther») sacudieron una indiferencia alimentada por la ignorancia. En todo caso, la impopularidad del «impuesto de sangre» vino certificada por la Semana Trágica

de Barcelona en 1909, la prolongación del avispero africano fue causa señalada en la liquidación del liberalismo español (1923) y el desembarco y victoria de Alhucemas (1925) –una operación militar de envergadura, por otra parte– más bien se celebró como el final de una pesadilla que con el entusiasmo de la victoria. España, pues, se reafirmó como un país, si no aislado –que nunca lo estuvo, ni siquiera en el franquismo– sí reticente, desconfiado y neutralista.

Quizá por todo ello –o, al menos, en relación con ello– los españoles de la edad contemporánea hemos demostrado –dicho sea parafraseando a D. Juan (L. M.^a Anson)– ser bastante seguros en nuestros errores. Hemos querido siempre vivir de espaldas, mirar para otro lado y mantenernos alejados de una realidad internacional que se nos acercaba implacable. Doblada la centuria, los gobiernos liberales simpatizaron con los aliados en la Guerra del 14 pero mantuvieron a España fuera de la contienda. La II República continuó por la misma senda neutralista. Los gobiernos democráticos españoles rechazaron los avances del Foreign Office para incluir a España en la alianza occidental, en un intento de reequilibrar parcialmente la pérdida –y la amenaza– que suponía en el Mediterráneo la Italia Fascista. *¡Qué nos importa el Negus!*, fue el poco meditado exabrupto con que el Presidente Azaña despachó el intento de los aliados de reclutar a España contra la agresión de Mussolini en Abisinia. Importaba y mucho. El neutralismo terminó por pasarle a la República Española una cuenta letal pocos años después. España no se sumó a la alianza occidental. Siguió siendo un país neutralista. Y los agresores –que ya eran dos– pasaron a ser «apaciguados», en lugar de contenidos, que ni era ni es lo mismo.

Cuando la violencia se apoderó de nuestros campos y los tambaleantes y pusilánimes gobiernos de la República –o lo poco que de ella restaba, tras abrirle los arsenales al «pueblo», licenciar lo que de leal les quedaba del Ejército y disolver el cuerpo diplomático– quisieron comprar armas, no pudieron reclamarlas como aliados ni «vender» su guerra como una agresión al concierto occidental. Y cuando Azaña, señalándole al embajador francés las trincheras de la Casa de Campo, le quiso convencer de que ahí se estaba librando la primera batalla por la libertad de Europa, ya era tarde. No restaba sino la imagen épica y el gesto patético. La oportunidad diplomática había pasa-

do antes, aunque se hubiera perdido entonces. A Azaña con Blum en 1936 le pasó lo mismo que a Paul Reynaud cuando en 1940 imploró la intervención de Roosevelt. Una arquitectura de seguridad no puede improvisarse. Cuando la impresión de riesgo y el temor llegan a las encuestas, ya es tarde.

En el mejor de los casos, los republicanos despertaban simpatía y lástima. Pero no tanta como para arriesgar seguridad. Ni siquiera Blum estaba dispuesto a desmarcarse de los ingleses, provocar a Hitler y hostigar a un Mussolini, a quien, en esos años, se intentaba atraer. Por otro lado, a ojos de muchos políticos conservadores europeos, quizá de la mayoría, la República «roja» era un régimen desbocado y un Estado en disolución. Asaltado por la reacción militar y desbordado por una revolución, quemaba iglesias, masacraba sacerdotes, les arrebató sus empresas y les asesinó empresarios, banqueros franceses e ingenieros ingleses, como el decano de las sociedades extranjeras en España. Franco era un militar profesional, implacable pero organizado. La «calle» de la España nacionalista varió poco de aspecto. Y el terror «blanco» sería más sistemático pero también más ordenado. Quizá se matara a muchos. Hasta puede que a más. Pero «los otros» eran más desconocidos que «los de uno» —excepción hecha de algún poeta universal como Lorca. En aquella Europa tremenda de los treinta, los asesinos eran iguales pero la muerte tenía sus «clases». Los crímenes de D. Melquíades Álvarez, Muñoz Seca o del apoderado del Banco de Lyon, por ejemplo, no eran mayores que los de un jornalero de Extremadura. Simplemente, eran más conocidos. También en Europa y los EE.UU. Y, claro, quizá la burguesía europea, como la española, «preferiera» (Portela) *mieux la terreur blanche*, como le hace decir Marx a aquel político francés (Baraguey d'Hilliers) mediado el ochocientos. A estos efectos —y a ojos de demasiados políticos aliados— 1936 estuvo más cerca de 1917 que de 1938 o 39; y Azaña proyectó una imagen más próxima a Kerensky (Churchill) que a Emil Hacha (el anciano y tembloroso líder checo arrinconado y coaccionado por Hitler en Marzo de 1939). En las cancillerías occidentales, la Guerra Civil Española fue más un *avispero* sangriento entre *bárbaros* (el calificativo viene del Vaticano, siempre tan desinteresado y caritativo) que la agresión de las potencias fascistas a un aliado que quiso serlo cuando ya era demasiado tarde. Franco no despertaba

mayor inseguridad a los políticos aliados que una república soviética y neutralista, además de anárquica e incompetente. Y, de hecho, el Col. Basil Liddel Hart no acertó a transmitir a sus superiores en Whitehall los temores que abrigaba sobre la seguridad del Estrecho y los riesgos ciertos que corría todo el dispositivo británico en el Mediterráneo con una España que pudiera sumarse a las «potencias insatisfechas».

El caso es que *en* aquella guerra (la preposición es pesimista y por eso tiene también un alcance contrafáctico) se perdió la democracia por muchos años. Para muchas generaciones. No sólo para electores potenciales que ya no pudieron ser «sondeados» ni tuvieron nunca ocasión de votar, sino para quienes ni tan siquiera habíamos nacido. Mi madre y yo votamos juntos, y por primera vez ambos, en 1978. Yo tenía 34 años y al lector se le alcanzará enseguida que mi madre debía ser algo mayor que yo. Demasiadas familias españolas tuvieron experiencias parecidas. Valga como melancólico resumen del malogrado experimento. ¡Como para que ahora vengan los nacionalistas diciéndonos –ellos, los insaciables, que en nada cedieron– que la primera Transición fue una mala cosa, un rosario de claudicaciones y que, ellos también, nos la van a rectificar con una segunda vuelta bien radical, sin compromisos ni concesiones! Sirva también para subrayar el hecho de que estos asuntos de política de Estado trascienden elecciones y hasta generaciones. Deben, pues, ponerse al abrigo de los sondeos, por mucho que la demoscopia le apasione al Sr. Zapatero.

Como los españoles de aquellos años trágicos no quisieron estar en sazón con quienes debían, hubieron de recurrir *in extremis* a lugares y gentes poco recomendables. Unos se aliaron con los rusos, que raramente han destacado por ser los más competentes del planeta –ni Stalin como el más internacionalista generoso y magnánimo de sus zares. Los otros se aliaron con alemanes e italianos, los cuales, al menos durante el siglo pasado, han sido especialistas en perder todas las guerras que provocan. La última de aquellas aventuras sangrientas proporcionó ocasión al General Franco –un personaje callado y despiadado, casi tan inteligente como inculto, que no hablaba ningún idioma ni salido jamás fuera del Protectorado– a ensayar una política de Estado; de Estado imperial, se entiende. Franco fue muy sistemático en sus errores de apreciación sobre la evolución y resultado de la

Segunda Guerra. En definitiva, era un general inculto de un país modesto y marginal, con una formación técnica escueta. Como Graziani en Libia, Franco tenía una experiencia reducida a pequeñas operaciones de guerrilla y represión colonial. Estaba mal equipado para entender la *Niederwerfungsstrategie* de tradición franco-alemana y menos aún capacitado para adaptarse a los nuevos métodos de la *Blitzkrieg*. El éxito de estos planteamientos y la caída de Francia le dejaron estupefacto, maravillado y convencido *de que los aliados habían planteado mal la guerra y la habían perdido* (17 julio, 1941). La idea del Caudillo consistía, al parecer, en que Hitler –en opinión de nuestro dictador, una persona *delicada y amable*– se apresuraría, cual nuevo emperador Carlos de la edad contemporánea, a reparar las injusticias cometidas con España, poco menos que desde Westfalia. Se suponía, pues, que el agitador nazi nos iba a facilitar un imperio africano en Marruecos y el Oranesado, a costa de los franceses de Vichy y sin el *imprimatur* del cesar italiano. Pero, a la sazón (1940), el Führer estaba más interesado en apaciguar al mariscal Petain que en proporcionarle argumentos al General De Gaulle, más pendiente de llegar a un «arreglo, general», con Inglaterra que en *la trata de ganado de segunda categoría* (Hitler) que ambicionaba nuestro pequeño general.

Lo cierto es que Hitler miraba al Este y *prestaba* [poco] *interés al teatro mediterráneo*, como terminó por reconocer apesadumbrado el general italiano Mario Roatta. Por eso, no ofreció a los españoles más que lo que a él le interesaba: la conquista de Gibraltar para cerrar el mar interior a la navegación aliada. A Franco seguramente le hubiera gustado convertirse en el Guzmán el Bueno de los tiempos modernos, pero era un hombre calculador y realista, poco dispuesto a arriesgar una guerra *por pequeñeces*. Hubo, pues, de conformarse con reducir su «Imperio africano» a la ocupación de Tánger *por una legión de funcionarios españoles sin afeitar* –como apuntó con sarcasmo el embajador británico en Madrid. No obstante, la ironía inglesa pone también en evidencia que el General Franco era un militar de carrera, en lugar de un demagogo profesional al estilo de sus compañeros de aventuras imperiales. Tomó precauciones. Escuchó a los profesionales de la Armada que tenían un sano respeto por la de sus colegas británicos, una idea bastante aproximada de la descomunal capacidad americana de construcción naval y cifras muy detalladas del tonelaje de abasteci-

miento marítimo de España. Mantuvo una neutralidad simpatizante con el Eje pero, al menos, no beligerante.

Sin embargo, el Generalísimo equilibraba su astucia indudable con la ignorancia. Incluso hasta el día después de Normandía, siguió pensando que «la muralla del Atlántico» era indestructible y que la guerra discurriría prolongándose en fases sucesivas, más o menos favorables a uno u otro lado. A diferencia de su padrino económico en tiempos de conspiración, –D. Juan March, que liquidó todos sus activos en países del Eje tan pronto le llegó la noticia de Pearl Harbor–, a Franco y a sus ministros (con la decisiva salvedad de Jordana) les preocupó sobre todo la postura que adoptarían *los países hermanos hispanoamericanos*. No es, pues, sorprendente que al Ministro británico de Exteriores, Anthony Eden, le pareciera que el Caudillo tenía *una idea muy desenfocada de la realidad internacional*. Como Hitler, Mussolini y tantos dirigentes continentales de antes y ahora, *subestimaba a los Estados Unidos* (Hewel a Speer). Al revés que Stalin, que lo tenía claro, al General Franco le costó entender que las potencias continentales eran más agresivas pero mucho más débiles que las atlánticas. Tardó demasiado en comprender las consecuencias decisivas de la entrada en guerra de la Unión Americana: un país que, al terminar la contienda, producía el 45% de la munición y equipo militar del planeta, habiendo fabricado, desde 1940, cerca de 300.000 aviones, 86.000 tanques, 17.5 millones de armas de calibre corto, casi 70.000 buques, 5.000 de ellos de gran tonelaje, reuniendo una flota que, en 1946, era ya mayor que toda la del resto del mundo junta, la británica incluida; un país, en suma, que contaba con casi dos tercios de las reservas de oro y generaba más de un 30% del producto bruto mundial. Por eso, cuando alemanes e italianos perdieron su última apuesta imperial en 1945, dejaron a la política exterior de la España franquista en la bancada de desguace.

Pero Franco tuvo suerte. Sobre todo, con sus enemigos. Para empezar, con Stalin. Y también con sus enemigos interiores. Fuera de Prieto en la izquierda, y Gil Robles en la derecha, pocos se dieron cuenta cabal de la situación. Los pobres republicanos –o la mayoría de ellos– no terminaron de entender la ecuación internacional. Bastantes perdieron la vida en campos de concentración nazis. Otros la arriesgaron con las tropas aliadas o en el *maquis* francés. Y, cuando entre 1944 y 1945 se vieron en la Francia liberada, no se les ocurrió

nada mejor que establecer un gobierno exclusivamente republicano-socialista en París –una capital hambrienta, reconquistada gracias a los americanos y políticamente irrelevante. Enviaron dos oleadas de guerrilleros, mayormente anarquistas y comunistas, allende el Pirineo. El maquis apenas inquietó a Franco. Más bien le sirvió para cimentar con más sangre la unidad del bloque nacionalista. Pero alarmó a los aliados occidentales, crecientemente temerosos del expansionismo estalinista que, a la sazón, llegaba al Adriático. Los demócratas europeos empezaron a dudar que un imperio soviético desde los Urales al Atlántico fuese mucho mejor que el imperio nazi del Atlántico a los Urales del que apenas se estaban liberando. De esta suerte, no es sorprendente que los excesos verbales contra Franco de los líderes socialistas ingleses en el Parlamento se acompañaran, en la reserva de su correspondencia privada, con la inquietud de que la Península cayera en manos de los comunistas –sin que, al parecer, les abrumara que siguiera en las de los fascistas. Sin sus compinches totalitarios, Franco se había convertido en una anécdota excéntrica, desagradable pero inofensiva. Era mucho más inquietante que otra revuelta civil en España pudiera dar ocasión a los soviéticos para enredar en el extremo occidental del Mediterráneo, como estaban haciendo en la cuenca oriental, aprovechando el conflicto civil helénico.

El Caudillo, que había pasado momentos angustiosos desde el desembarco aliado frente a las costas de Canarias, y luego tras la liberación de Francia en 1944, con una presencia nada desdeñable de antiguos combatientes republicanos españoles, no desaprovechó la oportunidad de venderse como *El Centinela de Occidente* (Franco, 7 marzo de 1946) de una nueva cruzada anti-comunista. Sin embargo, el hecho de que el General Franco lograra sobrevivir a la liquidación de las dictaduras fascistas en 1945 tiene mucho de aleatorio, y sus resultados –observados bajo el prisma del propósito original del autócrata– aún más de paradójico. El régimen de Franco se aferró al flotador internacional que le prestaba su posición estratégica, logrando, en efecto –y contra todo pronóstico– una moratoria prolongada. Pero la sorpresa no termina de agotar la paradoja. Porque, a través del mismo orificio en que el franquismo claveteó su salvavidas, también se coló, como de rondón, la integración de España en el sistema de defensa occidental como corolario –ni planeado ni deseado– de una salida política (la de Franco)

propiciada por un imperativo estratégico (el de los EE.UU.) en su necesidad del portaaviones peninsular. Para sobrevivir en un mundo hostil, el General Franco, un nacionalista visceral, se vio forzado a negociar un tratado internacional que colocó desde entonces a España en un mundo –el occidental– que no era el suyo y le obligó a trampear dentro de un sistema de valores que, en buena medida, había combatido y destruido. No resulta, pues, muy exagerado afirmar que la alianza de Franco con los americanos (1953, en el derecho, pero 1944 de hecho) fue una carambola rocambolesca. A largo plazo, terminó por salirnos bien a los españoles y ha servido a nuestros intereses de Estado, pero como consecuencia más imprevista que buscada, calculada o diseñada. Ninguno de los actores que provocaron (Stalin), negociaron (Truman) o imploraron (Franco) la alianza americana perseguía una política que tuviera en consideración los intereses del Estado español. Sin embargo, y en contra de lo que suele repetirse, la España franquista no fue un régimen aislado, desde el punto y hora que concertó una alianza con la potencia hegemónica de su tiempo –y del nuestro– los EE.UU. Pero sí fue un régimen lastrado por lo espurio de su propio pasado y la naturaleza, exótica en Europa occidental, de su sistema político. El resultado proporcionó seguridad (frente al expansionismo totalitario soviético, que no era poco, aunque los españoles de ayer –y de hoy– no quisieran enterarse) pero limitó severamente las posibilidades de maniobra exterior de España. Estuvo lejos, pues, de atraer la atención e interés de los españoles de su tiempo.

No descubrimos nada si recordamos que, durante el franquismo, la política era un término temido –y una actividad prohibida. Los españoles del novecientos cuarenta –o la inmensa mayoría de ellos– bastante tenían con sobrevivir, y los del cincuenta, con subsistir, hasta que, en los sesenta, se dedicaron rápida y vorazmente a prosperar. La política siguió siendo el quehacer aprovechado de algunos y el arriesgado de los menos. Sinónimo de corrupción y tiranía para los otros, de jerarquía y favores para los unos, era, en definitiva, una palabra malsonante y una actividad conflictiva y problemática, evitada por la indiferencia de la inmensa mayoría. La política internacional ni existía ni se discutía. El acuerdo de 1970 con el Mercado Común, prodigio de negociación y de una trascendencia difícil de exagerar, en la medida que constituyó la integración económica *de facto* en Europa, no fue objeto del debate y la publicidad que merecía. Y un reto tan serio co-

mo fue la invasión –y colonización– por parte de Marruecos del Sahara Occidental, a la sazón bajo administración española, pasó casi desapercibido entre los partes médicos de un Franco agonizante y una expectativa de cambio preocupante. Sólo la izquierda intentó –y, andando el tiempo, logró en la retórica, al menos– convencernos a la mayoría de que la entrega de esas tribus nómadas a una Monarquía teocrática pero imperialista era un acto indigno, y que el contar con un Estado amigo y agradecido, rico en recursos minerales y pesqueros, a la espalda de Canarias quizá fuera provechoso. Sin embargo, por lo que últimamente llevamos tan oído como poco explicado, aquello debió de ser un espejismo.

No deja de ser casi una mueca irónica de la historia que la Monarquía liberal y la República democrática impusieran una política internacional neutralista, a pesar de sus simpatías ideológicas por los aliados, y tuviera que ser Franco, que los odiaba y envidiaba, quien insertara a España, aunque fuera a hurtadillas, en el dispositivo multiforme de cooperación y defensa occidentales. Pero la ironía no es lo mismo que la tontería o el *non sequitur* de renunciar a los beneficios del resultado en función de lo espurio de sus orígenes. Porque de la repugnancia que para algunos, pocos o muchos, traiga el recuerdo del franquismo no se sigue el rechazo a capitalizar los réditos de la herencia, cuando los haya. En alguna medida, la Transición con mayúscula (1975-1982) es también fruto de esta fina distinción semántica. En todo caso –y por este tortuoso sendero de la paradoja histórica– vino España a renunciar, al doblar la sombría década del cuarenta, a un neutralismo casi secular, insertándose en el dispositivo de seguridad, en los modos de vida y, a la postre, en el sistema de valores occidentales. Una historia que ya ha cumplido más de medio siglo y que ha sido respetada por regímenes y gobiernos de diversos colores como política de Estado (hasta el estropicio del gobierno actual): con Franco, primero, por supervivencia; con la UCD, después, por continuidad; con el PSOE del Presidente González, más tarde, y quizá con más inteligencia que entusiasmo; con el PP, por fin, por convicción. Está en el haber y en la inteligencia de los políticos de la Transición –sobre todo en los de izquierda, por el esfuerzo extra que ello les haya podido exigir– el haber sabido asumir, para transformarla radicalmente, la parte de la herencia franquista que les repugnaba, mientras recogían, aceptaban e integraban aquella parte del legado económico, so-

cial e internacional que encajaba dentro de la realidad de su entorno y servía a nuestros intereses colectivos.

El cambio de régimen despertó ilusión y entusiasmos. Y, por una vez, también en el orden internacional se logró socializar una política de Estado: la plena incorporación a la Comunidad Europea. No obstante, no hubo un debate serio de intereses. Fue una política sustentada en un sentimiento de identidad y apoyada por una reafirmación de auto-estima que resultó, además, coincidente con nuestro destino e intereses, ambiciosa y sensata, compartida mayoritariamente, perseguida por todos los gobiernos y gestionada con profesionalidad por excelentes equipos de funcionarios. El éxito de la opción a la vista está. Pero, también a comienzos de la Transición, se difundió en España, con una década de retraso, la deriva amarxista y tercermundista de la izquierda occidental. Políticos procedentes de un franquismo que buscaban hacerse perdonar –un síndrome que hizo también estragos en la lucha contraterrorista y en la organización territorial del Estado– coquetearon incluso con la posibilidad de que España participara en el grupo de Países no Alineados. El Partido Socialista amagó al principio con oponerse a la entrada de España en la OTAN –en un ademán que hubiera enfurecido a D. Indalecio Prieto y que dejó estupefactos a sus homólogos en Europa, casi todos fundadores de la Alianza Atlántica. Pero los socialistas –los de entonces, se entiende– supieron rectificar a tiempo y tuvieron la inteligencia y la presencia de ánimo de anteponer su sentido de Estado al de las encuestas. Sin embargo, con el tema de la OTAN, que no era un asunto menor, hubo fuegos de artificio y un despliegue de colores ideológicos. Pero, como de costumbre, realidad internacional e intereses nacionales estuvieron ausentes. Y, claro, sin esa escolta elemental, el debate racional fue escaso y episódico.

DEL ANTI-AMERICANISMO ESPAÑOL: PREJUICIO E IGNORANCIA

Con antecedentes tan raquíticos, ¿es tan raro que los españoles de hoy tengamos tan poca capacidad para percibir riesgos, identificar oportunidades y señalar objetivos?; ¿tan raro que tengamos tantas dificultades para ordenar nuestro debate internacional en términos de

intereses? Me temo que no. Me temo, en efecto, que una espesa melaza de prejuicios y estereotipos elementales, banderilleados con algunas muletillas tercermundistas, se interpone entre nosotros y la realidad; la realidad de nuestros intereses de Estado, se entiende. Por eso quizá, hace ya tiempo –mucho antes de la Presidencia del Sr. Bush y su intervención en Irak– que el CIS viene registrando datos preocupantes sobre el anti-americanismo de la opinión pública española. En la medida que perjudica gravemente a nuestros intereses de Estado, es una muy mala noticia. Pero si queremos cambiar una tendencia tan negativa tendremos que preguntarnos por sus causas y origen.

La explicación más primaria y generalizada, y para la cual los españoles del Siglo de Oro acuñaron un nombre, es la natural antipatía hacia el potente y prepotente, la potencia hegemónica del momento. La «leyenda negra» fue una muleta inventada por los españoles de aquel tiempo legendario pero una dolencia padecida también por la Francia del Rey Sol, la Inglaterra victoriana y la Alemania bismarckiana. Así las cosas, ya que estamos observando la imagen desde España y sobre los EE.UU., es curioso resaltar el hecho, paralelo a ambos, de que casi a los únicos países hegemónicos a quienes ha ofendido lo negro de su leyenda han sido precisamente a la España de ayer y a los EE.UU. de hoy. A los demás –sobre todo, a franceses e ingleses– la crítica y envidia de los inferiores les ha traído al paio. Les ha parecido lo que cabía esperar de su poder, el precio asumible por su hegemonía y la constatación de su éxito. En lo que hace a los EE.UU. de nuestro tiempo, la prueba del nueve es tentadora: fuera del propio –y si fuera factible el mágico artificio– ¿qué país se elegiría como hegemónico en lugar de los EE.UU.? Esa si que sería una encuesta interesante.

En todo caso, la propuesta que nos ocupa es, como cualquier explicación totalizadora, tan genérica como insatisfactoria. No obstante, algún petróleo de comprensión se puede extraer del yacimiento generalista. Porque la generalización es el objetivo del estereotipo pero su premisa es la ignorancia. El estereotipo es, por lo pronto, una economía de conocimiento, nos describió su reinventor, William Allport, siglos después de Aristóteles. Un prejuicio, pues: una operación intelectual con arreglo a la cual –nos cuentan nuestros colegas juristas, desde que Gabriel Naudé, el bibliotecario del cardenal Mazarino, nos lo explicó hace cosa de tres siglos y medio– se invierte el orden procesal y

mental, al punto que la sentencia precede al juicio. De ese modo, se busca un atajo por el que se pretende llegar a una conclusión sin recorrer el camino del conocimiento. Y, en general, uno no tiene la impresión de que los políticos españoles tengan mucho interés en esa travesía por el conocimiento. No tienen tiempo. Quieren llegar directamente al destino sin hacer el viaje. Es natural y comprensible. En casi todos los países ocurre lo mismo. Pero, en los de nuestro entorno más desarrollado, los políticos suelen preguntar. Preguntan a los especialistas del tema en cuestión, no a los periodistas. Unos profesionales –nos explicaba el Profesor Jover en nuestros tiempos de Facultad– que realizan un trabajo muy difícil: hablar de casi todo sin saber de casi nada.

Nuestros políticos, quizá la mayoría de ellos, se diferencian además de sus colegas europeos en que raramente hablan idiomas. Algunos andan además en el empeño de eliminar el castellano (que es la segunda lengua occidental, un idioma republicano, si los hay, porque fueron las nuevas repúblicas iberoamericanas quienes difundieron su conocimiento dentro del paquete de una enseñanza obligatoria, igualitaria y universal). Esa renuncia a un idioma universal, patrimonio común de tantos millones de ciudadanos en multitud de países, se ajusta a esa composición, tan española y tan inteligente, de «que se fastidie el capitán, que no como rancho». La mayoría de esos políticos monolingües se burlan además si alguno de ellos hace el esfuerzo de aprender inglés ya maduro y tiene la humildad intelectual de intentar chapurrearlo. Y critican a la Comunidad de Madrid por querer introducir su enseñanza bilingüe –lo único verdaderamente serio que he oído en temas de educación en el último cuarto de siglo. Sin ese instrumental elemental de interpretación –el conocimiento del inglés, al menos leído– me pregunto cómo se pueden entender, no ya los EE.UU., sino la realidad internacional en general. Y nuestros políticos, claro, tampoco han residido ni viajado demasiado fuera de España; se entiende que antes –antes de hacerlo en coche oficial y avión estatal, que es lo que vale porque es cuando se aprende. La sintomatología se manifiesta sin pudor delante de nosotros. Hemos visto cómo pontifican desde su atalaya lucense sobre el *lobbying system* del Congreso de la Unión Americana sin tener la menor idea de lo que hablan. Y lo peor –lo peor para nosotros como país– es que rechazan montar en Washington un sistema que todos los Estados medianamente importantes practican porque lo necesitan. Del mismo modo,

hemos oído a una destacada Ministra del Gobierno enzarzarse en una polémica *–one sided*, por otra parte, porque Rumsfeld ni siquiera se molestó en contestarle– con el Secretario de Defensa, para terminar por descubrir abochornados que nuestra ministra había confundido el tiempo del verbo en inglés. Me pregunto cuántos ministros del actual gobierno han leído los *Federalist Papers*, quizá el texto más importante de la democracia moderna. Claro que, bien pensado, dudo que hayan leído a Marx. De haberlo hecho, no tendrían tanto entusiasmo por el nacionalismo, el tercermundismo y algunas de las religiones monoteístas extrañas a nuestra cultura pero hoy de moda en la izquierda.

Se diría que lo único que leen, la sola preocupación de los gobernantes actuales y a la única realidad que parecen prestarle obsesiva atención es a la del dato demoscópico, salvo al reiterado sondeo abrumadoramente favorable a que los políticos consensúen los temas de Estado fundamentales. Por ejemplo, la política internacional. A esa encuesta le hacen poco caso. ¿Será porque la consigna es la de pescar votos por los extremos en lugar de por el centro? Sea como quiera, el problema es que las encuestas del estado de la opinión reflejan las tendencias del sujeto perceptor. No son una descripción del objeto percibido. Son, naturalmente, imprescindibles para cualquier político democrático, pero no son suficientes para un hombre de Estado. Sólo con el sujeto habrá gobiernos, pero sin conocer el objeto difícilmente se construirá una política de Estado. No obstante, la realidad objetiva, que es terca y reflota como un corcho, terminará por pasarnos factura. A la postre, también en las encuestas y hasta en las urnas. Ya lo está haciendo: las inversiones extranjeras en España han caído un 78%. Ha ocurrido en todos los países europeos, pero más acusadamente entre nosotros. Hay muchas otras razones técnicas para ello, sin duda. Pero hacer y decir tonterías sobre los americanos no ha debido de servir de apoyo precisamente. Ya tenemos, pues, dos claves, al menos dos indicios que pueden ayudar a entender este antiamericanismo patológico que tanto nos perjudica: una profunda ignorancia de algunos dispuesta a fomentar el prejuicio de muchos.

Hay otros intentos de explicación del antiamericanismo más concretos, *a priori* nada desdeñables y con un aparente fundamento histórico. Uno de ellos mira más bien a la izquierda. El otro es más antiguo, más genérico, aunque quizá más inclinado a la derecha. Para

empezar trinchando por el lado del tenedor, deberíamos también comenzar por reconocer que, desde junio de 1944, los demócratas españoles en general, y la izquierda en particular, tienen una cuenta pendiente con los EE.UU. o un reproche, justificado, desde su punto de vista –y desde el mío también, por cierto– en tanto que los Sherman del General Patton no continuaron hasta Algeciras (y digo Patton porque los blindados de la división Leclerc tenían tan poca importancia militar como autonomía motriz, un detalle que quizá alguno de sus colaboradores en Defensa se servirá de explicarle al Ministro Bono). De haberlo hecho, muy otra hubiera sido la suerte del país. Y también la mía, que me interesa bastante. Cada uno cuenta la feria según le va. Algunos hubieran salvado la vida. Muchos hubieran obtenido la libertad. Todos, el voto. Lo mío es más modesto y menos épico: quizá me hubieran evitado presenciar en el Paseo de la Castellana de Madrid aquel espectáculo inenarrable del «rosario en familia», oficiado por un tal padre «Pitón», en vulgata vallecana (Payton, en inglés de Irlanda), acompañado de Pepe Solís, la «Lola de España» y otros especímenes de aquella era paleontológica, los cuales, como ahora otros nacionalistas –de otras nacionalidades en construcción pero con las mismas cabezas en deformación– también creían estar *entre los países más avanzados*. Es, pues, un hecho, lamentable para algunos pero indiscutible para todos, que los americanos, a diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, no entraron en España como liberadores sino como colaboradores de la dictadura. Y, claro, no es lo mismo. Quizá en esta experiencia histórica tan diferente esté una de las claves del antiamericanismo español. Dicho esto, deberíamos, empero, ser prudentes al blandir el argumento. Sobre todo, deberían serlo los socialistas. Porque acusar a los americanos de no haber hecho entonces con Franco lo mismo que se les reprocha ahora haber hecho con Sadam-Hussein, no es quizá el razonamiento más coherente que a uno le hayan propuesto.

1898 COMO COARTADA: REALIDAD E IMAGEN DE UNA EXPLICACIÓN

Un lugar común muy repetido, remonta y atribuye el comienzo del despropósito anti-americano a la Guerra de Cuba de 1898. Se trata

de una suposición comprensible y una hipótesis razonable. Sin embargo, de hecho, es un error, o por lo menos lo es en lo que hace a la reacción que produjo dicha contienda (otro asunto, quizá, sean, como veremos más abajo, los años treinta y cuarenta del siglo pasado). En aquel *annus horribilis* de 1898, en efecto, los españoles perdieron una guerra con los EE.UU. y, con ella, 15.700 peninsulares; 2.430.770 españoles antillanos; 9.300.000 españoles filipinos; 128.148 km² de extensos y ricos territorios americanos; 358.000 km² en Filipinas y Jolo; 16 buques de guerra y 60 mercantes; 420 millones de pesetas en material de guerra y sobre 4.560 millones en gastos de campaña, repatriación de tropas, de empleados civiles y del Estado (*Diario del Comercio*, 2 agosto 1898) y... de los restos de Colón que, desde la Habana, fueron trasladados a la Catedral de Sevilla, uniéndose así los restos de un hombre a los de un país (*Norte de Castilla*, 19 marzo 1899), como ilustración del desastre y del fin de una época.

Los españoles de entonces fueron a una guerra forzada que perdieron sin saber bien por qué y es significativo que los de hoy sigamos sin saberlo, fuera del mundo esotérico de los expertos. Y el asunto no es una curiosidad académica irrelevante. Porque la reacción al *Desastre* ha articulado el paradigma de modernización española hasta nuestros días. Un discurso cuyas características no son explicables sin la naturaleza verdadera de aquella contienda ni la reacción que provocó. Es evidente que los especialistas no hemos acertado a transmitir nuestra historia, o los periodistas no han podido aprender o sabido entendernos. Todavía hoy, una imagen generalizada sigue interpretando el 98 como una reacción resentida, pesimista y autoritaria, en la inteligencia de que la decisión y desarrollo de la guerra constituyó el fracaso de un gobierno y unos políticos que habrían arrastrado al país, de forma alocada y en algarada patrioterica, a una guerra imposible. Fracaso también de unos marinos que habrían forzado decisiones «numantinas» poco sensatas. Pero lo cierto es que la verdad está más cerca de lo contrario. Precisamente, debido a que la guerra del 98 fue calculada, impuesta por casi todos a casi todos y perdida de forma abrumadora y rápida, la percepción de la misma no consistió en atribuirle a la voluntad de un gobierno, sino en entenderla como *problema nacional*. Para comprender, pues, la reacción frente al Desastre es importante saber que la decisión de ir a una guerra tan desesperada, como

años más tarde la calificaría Azaña, no fue alegre ni quijotesca, sino medida sobre la base de que, *de dos males, ese era el menor* (General Correa): el gobierno y los políticos –no sólo los del régimen– creyeron que era menos arriesgado enfrentarse al ejército americano que hacerlo a un golpe militar. Por eso planearon también –y desarrollaron después– una estrategia, menos profesional que política, fundamentada en consideraciones ajenas a la técnica militar; a saber: evitar *el peor de dos males; esto es, el conflicto que se desencadenaría en España si nuestro honor y nuestros derechos fuesen atropellados* –léase, el miedo a la opinión revolucionaria y a un pronunciamiento del ejército. Quizá esto ayude a entender que, finalizada la guerra, lo ocurrido se percibiera como un problema del país en general y no sólo de un gobierno, ni siquiera de un régimen.

Sin duda, debates angustiados debieron de ser aquellos que consumieron los Consejos de Ministros entre febrero y abril de 1898 y produjeron la decisión agónica de los gobernantes españoles, en la inteligencia de que era menos arriesgado para la paz interna enfrentarse al ejército americano que hacerlo al propio, como alternativa y previsible consecuencia de plegarse al *diktat* de la República Imperial. Porque, no nos engañemos, la decisión de ir a la guerra nunca fue un acto «numantino», sino el producto –disparatado y cínico, si se quiere, aunque también comprensiblemente conmovedor– del poco confortable dilema que angustiaba a los políticos españoles del momento; a saber: que el gobierno que osara *entregar la isla sin lucha* –la cursiva traduce palabras de un diplomático inglés– se vería irremediablemente abocado a un golpe militar y/o una rebelión popular. La solución, pues, no era fácil y distaba de ser simple. Parafraseando un inteligente artículo de Clarín (1897), tampoco hoy *hay para qué ensartar tonterías so pretexto* del recuerdo de la derrota del 98. Deberíamos, pues, resistir la tentación de considerar a los políticos españoles ochocentistas como una pandilla de «señoritos» terratenientes, reaccionarios, cavernícolas y estúpidos. Desde mucho tiempo atrás, casi todos eran perfectamente conscientes del *pavoroso* (Sagasta) dilema que les asediaba.

Sin embargo, y del mismo modo que buen número de nuestros políticos actuales parecen incapaces de entender las razones de nuestra amistad interesada con los EE.UU., es dudoso también que demasiados políticos de antaño alcanzaran a comprender los motivos de

aquella enemistad. En otras palabras, tampoco ayer se acertó en ver cómo se insertaba el contencioso hispano-americano en la cartografía internacional del momento. Y, por lo que leo, seguimos sin enterarnos. Las cosas habían cambiado mucho desde que las grandes potencias europeas se repartieran el mapa de África mediados los ochenta del siglo antepasado, en una especie de «merienda de blancos». Una década después, el escenario colonial se había trasladado de África a Asia y el Pacífico. Después de la guerra chino-japonesa, la toma rusa de Port Arthur y la ocupación alemana de Kiau-Chau, el gobierno británico comenzó a temer por un despiece de China. Resuelto el contencioso de Venezuela (1896) que le enfrentaba a los EE.UU., y crecientemente ansioso por la inestable situación en Asia y el Pacífico, el gabinete Salisbury solicitó del gobierno americano una extensión de sus líneas estratégicas navales que aliviara las responsabilidades de la armada británica en el área e impidiera el reparto o «la esclavización de China» que ambas potencias repudiaban. Así pues, no era tanto Cuba (para los americanos de antes y de ahora, un problema de política interior) la meta ambicionada por los EE.UU. El objetivo estratégico de la administración McKinley se orientaba hacia el Pacífico, a fin de garantizar una política de «puertas abiertas» en China. Y, en ese propósito, las islas de Hawai, la micronesia española y el archipiélago filipino resultaban imprescindibles para una logística naval dependiente todavía del carbón y, por ende, con una autonomía inferior a catorce días de navegación. Es en este contexto internacional en el que hay que enmarcar las maniobras hipócritas del Presidente McKinley –que conocía bien el espinoso y angosto margen de maniobra de los políticos españoles a través de la diplomacia vaticana– y el estrechamiento de los tiempos en la creciente tensión hispano-americana.

Cuando, en la segunda mitad de los años noventa, los comités de propaganda revolucionaria cubana en los EE.UU., la exitosa –pero mortífera y escandalosa– estrategia represiva del General Weyler y la opinión pública americana intoxicada por la prensa amarillista se combinaron para hacer variar la postura de la Administración republicana del Presidente McKinley, (tan alarmada por los éxitos electorales demócratas en 1897 como interesada en una penetración hacia China), los responsables de la política española se encontraron en una

situación casi indefendible. En España y Cuba, por otra parte, a la opinión de la calle y de las linotipias se sumaba la de los cuartos de bandera, asediados por los españolistas antillanos. Aquellos «cuerpos de voluntarios» (catalanes muchos de ellos) que acusaban de traición y entreguismo a cualquier gobierno con veleidades autonomistas, (como hubo de señalarle el dirigente liberal catalán, Víctor Balaguer, al propio Sagasta) y de cobardía o deshonor al menor signo de vacilación entre los oficiales destinados en la isla, con sus guerreras de cuellos y bocamangas azules, sombreros de yarey, tocados de vistosas escarapelas rojo-gualdas, y relucientes polainas negras, ardiente aunque groseramente arengados por Eva Canel, actriz profesional y agitadora de ocasión, no debían ofrecer un aspecto muy tranquilizador para los pusilánimes gobiernos peninsulares.

En cuanto a los políticos, pocos pensaban lo que decían; pero aún eran menos los que decían lo que pensaban. La mayoría abrumadora de ellos –militares y marinos incluidos– eran perfectamente conscientes de que una guerra contra los Estados Unidos *sin aliados*, era una *dementia* (Castelar) y una *temeridad* (Canalejas). Enfrentarse a un país que, ya para entonces, era líder mundial en la fabricación de armamentos era una *insensatez* –advertía Canalejas, en el sigilo de la correspondencia privada, al propio Presidente del Consejo, Sagasta– que llevaría al desastre, *la ciencia cierta!*, como reconocía en sus cartas el propio Almirante Cervera, futuro Jefe de Operaciones de la Escuadra del Atlántico. En el discreto recato del epistolario personal, pues, casi todos estaban en que lo *más sensato* era negociar... *la paz que se pueda, amén*, como más tarde reconocería el propio D. Antonio Maura. Pero *la paz* –como terminaría por admitir también después, que no antes, el Ministro de la Guerra– *dependía de la opinión del ejército*. Sobre todo a medida que se intensificó la presión norteamericana, *la tensión de la opinión* nacionalista española (Cardenal Ireland a Rampolla) fue haciéndose insoportable en los cuarteles y agobiante en los partidos. Casi ninguno se atrevió, empero, a predicarlo, en sazón, convencidos de que hacerlo desataría las iras *de la opinión ignorante, atrasada, reaccionaria* (*Vida Nueva*), provocando un levantamiento militar.

De esta suerte, en aquel amargo trance a España le faltó su Thiers: alguien de fuste y peso político que apostara por la derrota antes de la batalla y tuviera la entereza suficiente como para arrostrar la impo-

pularidad de predicarlo públicamente en medio de aquel vendaval de belicismo nacionalista. De hecho, la apuesta *ante facto* fue la contraria: que una corona que ceñía un niño huérfano y regentaba una reina extranjera, y un gobierno que presidía un anciano vacilante y conciliador, terminarían por claudicar, sensatamente, como habían hecho los portugueses en 1890 o los franceses en el propio año terrible de 1898, ante el chantaje militar de la otra gran potencia anglosajona. Y, en ese supuesto, la conclusión a que llegaban las oposiciones antidinásticas era que una retirada vergonzosa desencadenaría la misma efervescencia nacional-imperialista y antimonárquica que estaba viviendo el vecino peninsular. De esta suerte, los republicanos, lejos de montar una campaña popular contra gobiernos monárquicos que dilapidaban vidas y haciendas en aventuras coloniales, se prepararon para un escenario de retirada y deshonor, sumándose al estridente coro nacionalista y preparando junto a –y hasta en connivencia con– los carlistas un golpe militar, *si los políticos dinásticos continuaban dejando arrastrar por el lodo la bandera española*. Un golpe, pues, que barriera a gobiernos pusilánimes y a *monarquías entreguistas que nos llevaban a la ignominia* (D. Carlos).

Así pues, y hecha salvedad de algunas excepciones tan valerosas e ilustres como políticamente irrelevantes (el venerable dirigente republicano Pi i Margall, el político y periodista conservador Mañé y Flaquer o el respetable líder socialista Pablo Iglesias, por ejemplo) nadie se atrevió a exponer públicamente la dura realidad. Y la prensa menos que nadie. En ambos países, la crisis cubana fue un tema popular, de una opinión desorejada, agitada por una prensa vociferante y amarillista, altavoz *de los indoctos y los delirantes* (Cajal) que los políticos no supieron digerir con sosiego ni encauzar con destreza. No hace falta suscribir a la letra la contundente opinión de Cambó en el sentido de que *la prensa de gran circulación engañó vilmente a la opinión*, para reconocer que, al menos, *la desorientó decisivamente*. En efecto, diarios respetables como *El Imparcial* o *El Heraldo* no le anduvieron a la zaga a la prensa yanqui en cuestión de jingoísmo. *¿Y los periódicos republicanos? ¡Oh! Esos, dejaban atrás, en cuanto a patriotismo, a los periódicos monárquicos. El País exigía ¡Guerra!, El Motín pedía a los militares un ataque contra los americanos, en la seguridad de que vencedores darán gloria; vencidos, honra. Y El Progreso equiparaba paz a traición,*

amenazando al gobierno que arrastrara *por el fango la bandera de España* con un general que inspirara confianza a la nación y guerra a los EE.UU. En este punto, la evidencia es abrumadora. Multitud de testimonios, variados y contrastados –y la propia secuencia de los acontecimientos– revelan *la verdad de Perogrullo*, como decía el embajador inglés, de que los políticos españoles se debatían en *un terrible dilema: la guerra o el deshonor* (Sagasta); cfr., enfrentarse con el ejército norteamericano, para defender lo indefendible, o hacerlo con el propio, arriesgando lo intocable –la monarquía y las libertades constitucionales y, por ende, la paz interna. Algún periodista acertó a resumir lo espinoso de la opción: *acabar con vilipendio la guerra de Cuba equivaldría a encender la guerra civil en la Península. Si el ejército tuviese que volver por una paz vergonzosa se sentiría entregado. ¿Se puede prever lo que haría con el Gobierno que le obligue a tan deplorable regreso?* Frente a disyuntiva tan dramática, advertía *La Correspondencia Militar*, que escoja el gobierno, antes de que el país y el ejército resuelvan declararle inútil. La verdad es que *ni el presidente Sagasta ni el ministro de Ultramar, Moret, querían la guerra. Hicieron cuanto estuvo en su mano para evitarla, hasta el momento que la presión de carlistas, republicanos y militares les intimidó. Así pues, si difícil era conservar y asegurar nuestro dominio legítimo en Cuba; muchísimo más difícil resultaba abandonarla, porque contra eso se levantaría la nación.* En suma, la guerra del 98 es uno de esos casos, no infrecuentes en ambiente nacionalista que fue enrareciéndose hasta la Gran Guerra, en que *el pueblo se sacrifica a la nación* (Unamuno).

De esta suerte, el pulso entre militares y políticos se resolvió sacrificando la armada –porque *no tenía el peso del Ejército*, para dar un golpe (Cervera)– en una confrontación rápida que tuvo más en cuenta el juego político antes referido que las necesidades estratégicas. En definitiva, se cumplió la predicción que años atrás le hiciera el propio General Martínez Campos a Paul Brooks (Brooks a Olney): España sacrificaría unos cuantos barcos para *salvar el honor* y liquidar rápidamente la guerra. Naturalmente, el guión alternativo nunca fue escrito y no sabemos lo que hubiera ocurrido si el gobierno que presidía ocasión tan dramática hubiera tenido el coraje de enfrentarse a la opinión pública y a los numerosos oficiales *que preferían la guerra a una humillación*. Sagasta murió convencido de que *el deshonor*, en lugar de *la guerra, hubiera acabado con todo y con todos*. ¿Una coartada exculpato-

ria? Puede. Pero, en todo caso, conviene resistir razonamientos simples y displicentes trufados de soberbia intelectual. Quizá *faltó valor cívico, faltó entereza* (*Diario de Barcelona*) y, sin duda, aquellos gobiernos cayeron en errores catastróficos, pero ni la situación era simple ni la alternativa inocua.

La guerra de Cuba comenzó al son *bullanguero* (Costa) de la «Marcha de Cádiz», durante años, el *himno electrizante y enloquecedor* que despedía a la tropa en los muelles peninsulares –y que, desde septiembre de 1898, había pasado a ser tildado de *una desvergüenza musical*– pero se cerró con el coro de repatriados de *Gigantes y Cabezudos* que estremeció al país. Los sobrevivientes, en efecto, que iban llegando a la Península convalecientes de fiebre amarilla, vómito negro o paludismo, deambularon como fantasmas durante años por los caminos de España y, con su uniforme de «rayadillo» y aspecto macilento, demacrado y encorvado proyectaban la imagen de esa España decrepita que denunciaban los regeneracionistas, ilustraran los dibujos de Nonell y describiera Valle-Inclán con Juanito Ventolera en su esperpento teatral *Las galas del difunto*. Aquel Desastre *inenarrable, casi bíblico*, que diría Morote, pareció sacudir al país en sus cimientos. *España había quedado reducida a una expresión histórica*, sentenciaron los intelectuales del momento (Costa), sobrecogidos ante la magnitud de la catástrofe. Los mismos periódicos que meses antes habían duplicado la tirada, atizando a militares levantiscos y forzando la mano de políticos atemorizados, motejados de pusilánimes y débiles, ante el matonismo militar de «los choriceros yankees», la triplicaban ahora, acusando a los gobiernos de la Restauración de haber sumido al país, *por orgullo mal calculado y pasado de moda, en una gran quijotada* (*España*) perdida de antemano. La indignación pareció estallar incontenible, desencadenando un *clamor nacional* (Azorín) de renovación y cambio. Aquella amplia corriente de opinión, se expresó a través de muy diversos medios: la prensa, la literatura y el ensayo, en primer lugar; la historiografía, más tarde. En su vertiente política, afectó a todas las fuerzas políticas e impulsó un movimiento nuevo, que se conoce específicamente como *regeneracionista*.

Los regeneracionistas (entre quienes destacaba Joaquín Costa, una suerte de Zola carpetovetónico, trabajador incansable y honesto pero un autodidacta provinciano y atrabiliario) buscaron, en efecto, capita-

lizar políticamente el abrumador ambiente de indignación y exigencia de cambio, confiando, ilusoriamente, en seguir los pasos de los republicanos franceses tras la *débâcle* (el título, por cierto, de una obra de Émile Zola que enfureció a los generales franceses pero del cual tradujeron portugueses, italianos y españoles para calificar sus correspondientes «desastres»). A los efectos, propusieron una *expiación prudente*. Exigieron *renovar el personal de la política española* y montaron una campaña de agitación que puso al régimen de la Restauración contra las cuerdas: *los políticos a la vida privada, el pueblo a la vida pública*. (Bien entendido que «los políticos» eran los de la Restauración y, «el pueblo», ellos que confiaban en ser llamados a gobernar por la Corona). *También fue vencida Francia en 1870* –escribiría esperanzado el novelista republicano Blasco Ibañez– *y el cogotazo que recibió de Prusia sirvió para que se limpiara de la caspa del Imperio*. Pero lo cierto es que los regeneracionistas quedaron *lejos de haber hecho lo de los republicanos franceses* (Azaña), de modo tal que, a diferencia de la Francia de Napoleón III con la derrota de Sedán, la Restauración española pudo digerir Santiago de Cuba. Hubo manifestaciones, huelgas de contribuyentes y protestas, ruidosas pero huecas e irrelevantes en la práctica, que acabaron disueltas *en un deseo platónico* de cambio, que diría Azaña. En efecto, los regeneracionistas no lograron articular una revolución que arrastrara a sus *clases neutras*, ni tampoco supieron convencer a la Regente de que resistir el vendaval regeneracionista era más peligroso que excluir a los partidos del «*turno*» (que en 1868 habían expulsado a su suegra, la reina Isabel II, precisamente por sus prácticas exclusivistas). De hecho, éste volvió a funcionar con precisión pendular: en 1901 juraba un nuevo gabinete encabezado por... ¡Sagasta!, el mismo que había presidido el *gobierno de la vergüenza* que condujera al Desastre. Maura pronunció la sentencia política de aquel tiempo: *los frustrados no lograron reemplazar a los fracasados*.

Sin embargo, el fracaso sonoro que acompañó la acción política de los regeneracionistas no debiera enmascarar la honda y prolongada influencia de sus ideas y propuestas. Éstas tuvieron duración y trascendencia, tanto en el plano político como en el filosófico. El 98 supuso un aldabonazo en la historia española, como lo fuera, por la misma época, la derrota de Sedán, en la Francia del 70, la derrota de Shimonosheky frente a Rusia para Japón, y Adua, en 1896, para los

italianos, o la crisis del *ultimátum* de 1890 en Portugal. Y lo cierto es que los regeneracionistas, aun cuando fracasaron en su intento de derribar el régimen, obtuvieron, empero, un éxito indudable a la hora de articular el futuro discurso modernizador español –dicho sea, independientemente del juicio que merezca el molde original y el estilo de su formulación. En este sentido –y al contrario de lo ocurrido en otros países– la reacción frente al Desastre fue duradera y profunda, precisamente porque no se pudo culpar a unos políticos o a un gobierno. No fue fácil *echar el muerto al vecino* (*El Tiempo*) porque, si no eran *todos culpables*, como titulaba el conocido escritor y periodista republicano Luis Morote uno de sus famosos artículos, demasiados resultaron responsables. *¿Quién ha tenido culpa de la guerra con los Estados Unidos?* –se preguntaba Morote, apenas unas semanas después de la batalla de Santiago. *¿Quién alentó al pueblo con ilusiones mentirosas para desear la contienda? ¿Quién empujó al Gobierno a aceptar una lucha físicamente imposible? La culpa la ha tenido todo el mundo, todo el mundo que escribe o que habla.* El mismo mundo al que acusara Azaña de haber *explotado el pundonor nacional, la vanagloria, el orgullo lastimado y otras pasiones, sin el contrapeso de la sensatez de un pueblo bien instruido.* En su momento, casi todos sabían que la coartada «madrileñista» no era cierta, aunque hoy se siga utilizando todavía. La guerra del 98 tampoco fue un producto del desvarío impuesto por la «golfería» cortesana madrileña, perezosa, romántica y guerrera a la provincia reflexiva, pacífica y trabajadora. Como reconocía, lamentándose, *La Renaixensa* (uno de los pocos periódicos opuestos a la guerra), en la opinión y en la prensa catalana había *tantos Quijotes como en las llanuras de la Mancha.* Por eso, quizá –razonaba D. Juan Valera– *los culpables han sido y son tantos que lo más prudente no es la absolución, sino la amnistía; olvidar lo que pasó, como se olvida el más terrible sueño, y hacer vida nueva.*

No se encontró, pues, chivo expiatorio a quién endosar la derrota y ésta hubo de digerirse como problema general. La conciencia general de culpa entre quienes escribían y hablaban, políticos, militares y periodistas, hizo que la reacción posterior se manifestara como una suerte de revulsivo nacional, agrio pero positivo, y sirviera como filosofía de modernización por mucho tiempo. En este punto y hora, los españoles dejaron de traducir del francés. La consigna del 98 no fue «*la revanche*» (1870) sino la *regeneración* –un término igualmente con-

fuso y discutible pero positivo en todo caso. Desde esta perspectiva, la reacción española frente a la catástrofe buscó más *el modelo de Prusia* (Altamira) tras Jena que el de Francia después de Sedán: *queremos* –aseguraba un Costa en el cual Morote creía reconocer al Fichte español– *un gobierno de la revancha, pero de la revancha contra los Moltkes y los Bismarks interiores, que son quienes nos han vencido*. Aquella guerra, como ya observara Azaña, *no engendró rencores duraderos. Se hundió todo y España descansó de sus trabajos, incluso del trabajo de aborrecer a los norteamericanos*. Para expresarlo en la conocida rima machadiana, los españoles *dejaron en el puerto la sórdida galera*, de modo tal que casi nadie se acordó de las colonias con nostalgia o resentimiento, *ni sintió el menor odio contra los EE.UU., ni se movió poseído de los rencores de Francia después de su Sedán* (Santiago Alba). Ni siquiera los militares. Hasta el propio Almirante Cervera, jefe de la desbaratada Escuadra del Atlántico, se felicitaba de que ya no quedaran colonias para que así España *concentrara sus esfuerzos en la regeneración interior*, mientras su hijo –también militar– alababa la competencia de los oficiales americanos y criticaba la indolencia de los políticos españoles, a quienes Costa exigía *apartarse de sueños quiméricos y empresas superiores a nuestras fuerzas*.

Por otra parte, no fue en su momento (e independientemente de que luego todos –autoritarios incluidos– bebieran de sus fuentes) la del 98 una reacción autoritaria. Tampoco fue autoritario el ambiente de la posteriormente famosa generación de intelectuales del 98. No hay que confundir con autoritarismo lo desmesurado del tono de una protesta política cuyo fondo quiso formularse desde supuestos y plataformas democráticas. Salvadas algunas excepciones notorias, la generalidad del dictamen regeneracionista fue que el expediente de implantar la democracia yugulando el liberalismo era *tal como aprender a nadar en seco*. Se trata de una respuesta que tuvo su sentido y tiene su explicación. Mal podían los españoles estar desengañados con *lo que no se practica[ba]*, sino se falsificaba: el sistema democrático-parlamentario, *al que ahora pretenden algunos atribuir responsabilidades de nuestras amarguras, como si en España se hubiese ensayado alguna vez lealmente*. Combatían lo que consideraban los defectos –la falsificación del sistema–, no la naturaleza del mismo ni sus principios. Ya supo ver Azaña que los regeneracionistas eran moralizadores, no innovadores. Como

ha escrito Joaquín Romero Maura, «no hubo césares omniscientes, ni misiones históricas, ni nacionalismos rimbombantes. No se acudió a ninguna de estas filosofías del miedo a lo moderno, a la industrialización y al liberalismo, que ya asomaban en Rusia, Alemania o Italia». Tampoco se buscó ahogar la frustración de una claudicación en un sueño imperialista pasado o presente como en el Portugal posterior a la «*data afrontosa*» del *ultimatum* inglés de 1890.

De esta suerte, no hay que entender el 98 como resaca nostálgica del imperio perdido o reacción aislada y pesimista, sino amarga, cáustica y despiadada. Fue una crítica *feroz* (Azorín) pero afirmativa en el fondo y cuya finalidad, según Altamira, era precisamente *combatir el pesimismo*. Una crítica *que derruía los valores tradicionales pero anhelaba una España nueva*. Ya advertiría el propio Azorín en un artículo paradigmático que *cuando se acusa a ese grupo de pesimismo se comete un error*. Eran, en suma, críticos implacables pero *optimistas en lo que afectaba al porvenir*. Su discurso tenía un trasfondo histórico y una proyección de futuro. En la medida que *hubo conciencia de la culpa nacional* (Unamuno), al 98 siguió también un *examen de conciencia nacional* (José de Carracido) que buscaba la expiación por vía de contrición imitativa: la modernización. Para redimir sus culpas –las de la derrota– el pueblo español no eligió el cilicio retrospectivo sino las vidas ejemplares; o, si seguimos con el símil psicoanalítico, hizo de quien le castigaba valor paradigmático. El mundo euro-atlántico se convirtió en el modelo a seguir: *¡paso al norte!*, iba más allá de la simple consigna estética de una revista de pintura (*La luz*), al punto que el propio Costa abogó por tomar *del enemigo, el consejo, dejando a un lado el falso patriotismo, debemos inspirarnos en el ejemplo que nos han dado los Estados Unidos*, se proclamaba en las Cortes. De hecho, la fórmula costista de «reconstitución y europeización de España» contenía los elementos fundamentales de la agenda de la modernización que el país hubo de poner en práctica a lo largo del siglo XX. Por eso, la guerra de 1898 entre España y los Estados Unidos, conserva, aún hoy, alguna relevancia, en la medida en que el discurso de posguerra articula lo que ha sido la ortopedia de modernización ibérica, casi hasta el presente. Al punto que, en las aguas del 98, han pescado todos los grupos políticos e intelectuales españoles hasta el día de hoy, incluso aquellos ferocemente enfrentados en algún momento, si bien recogiendo cada

cual aquella parte del programa noventayochista que le resultará más afín o rentable. De esta suerte, «la política hidráulica», con que se inauguró el siglo, y que parecía iba a continuar hasta hoy; las obras públicas de la dictadura de Primo de Rivera; el énfasis y esfuerzo pedagógico de la II República; la política de industrialización del régimen del General Franco; e, incluso, hasta las obsesiones – y realizaciones – por la convergencia económica y la vocación europeísta de los gobiernos de la democracia actual, son difícilmente inteligibles sin las resonancias que siguieron a la guerra de 1898.

Dentro del romance de España, el 98 supuso la ruptura definitiva con la *laudatio* isidoriana o alfonsina –todavía muy presente en la hagiografía liberal-nacionalista del ochocientos– y el regreso a una *lamentatio* por la pérdida de España (1898), castigo de *la culpa nacional* (Ciges) que una expiación imitativa debería «transformar» en *resurrección* de la España «degenerada», *africanizada*, si no por la concupiscencia como en el romance, por el atraso y desidia de sus pobladores. La reacción al Desastre, en suma, no genera resentimiento contra los americanos sino un deseo de emulación e imitación. Imitación del Occidente más adelantado y progresivo. Para empezar, de los americanos, cuyas reformas en la Isla de Puerto Rico, arrebatada a España en la contienda, se ponían como ejemplo de lo que debía hacerse en la propia España apenas tres años después de la derrota (*Imparcial*, 1901). No hay, pues, por qué endosar el pesado débito del antiamericanismo actual en la cuenta del 98.

IMPERIALISMO: ÚLTIMA FASE DEL ANTI-AMERICANISMO

Sin embargo –dice bien Santos Juliá– cada generación tiene su lectura sobre los grandes hitos históricos. Treinta o cuarenta años después de aquel acontecimiento, los *teenagers* del 98 (V. Cacho) que, por edad, apenas habían vivido o recordado aquella derrota, la reinterpretaron de forma bien diferente. O al menos así lo hicieron algunos de ellos. La filosofía del resentimiento, con su purga autoritaria incluida, no arranca del 98. Es un detritus de la primera posguerra europea. Viene de los veintes y treintas del pasado siglo, aunque tome el 98 como origen y pretexto. Conviene –nos conviene a todos– que

nuestros socialistas de hoy sepan de dónde procede esta *torcida* antiamericana: para empezar, es un producto de la derecha autoritaria, como puede rastrearse fácilmente en el guión de *Raza* –la pieza histórica con que el propio General Franco hizo armas literarias bajo el seudónimo de Jaime de Andrade– o en un artículo profesional del Almirante Carrero en la *Revista de la Marina Española*. Poco después, durante los años cuarenta, los falangistas se encargaron de prestarle un mordiente teórico a la filosofía del resentimiento en su capítulo antiamericano, añadiéndole el ingrediente nacionalista mussoliniano y nazi (*L'Italia fuori*, o la organización de la emigración transalpina, sobre todo en América; y el departamento Ausländer del partido nazi, cuyas operaciones en el Brasil de Vargas inquietaron seriamente a Roosevelt) a las teorías leninistas sobre la fase imperialista del capitalismo mundial. De este modo, los españoles emigrantes en las repúblicas iberoamericanas serían, en el sueño falangista, la punta de lanza de una cruzada hispánica contra el imperialismo yanqui. Pero, claro, aquella España famélica de la autarquía dependía de los suministros americanos del sur para comer y, para moverse, necesitaba la gasolina norteamericana aún más que la división Leclerc. Y así fue como la cruzada falangista antiamericana quedó reducida al Instituto de Cultura Hispánica, como reducto de quimeras coloniales y refugio de iberoamericanos apergaminados, nostálgicos de una sociedad de castas en un tiempo pasado.

Sin embargo –y a pesar del *peaje* económico liquidando la autarquía (J. L. García Delgado) que, afortunadamente, hubieron de abonar los franquistas para sobrevivir en el mundo hostil de la segunda posguerra– la mueca antiamericana quedó arraigada en la cultura de la extrema derecha española. Así, en 1947, jóvenes de Acción Católica vandalizaron varios templos Protestantes anglo-americanos de Madrid y, en junio del año siguiente, otro grupo de militantes de Acción Católica y Falange asaltó un local Protestante americano destruyendo el mobiliario y agrediendo a la «herética» congregación al grito de *¡Viva la Virgen!* En la década siguiente, siendo apenas adolescente, recuerdo perfectamente la invasión y destrozos de que fue objeto mi colegio por su carácter liberal y por estar cobijado en un edificio americano. Sólo la embajada de los EE.UU. quiso y logró detener la agresión. Todavía en 1962, Blas Piñar, a la sazón Presidente de Cultura

Hispánica, publicó una sonora diatriba antiamericana en ABC con el título de *Hipócritas*, donde se arremetía –en clara referencia a la voladura fortuita del USS «Maine» que precedió a la guerra del 98– contra *los que hicieron su historia y su grandeza volando buques y atribuyendo culpas para justificar la intervención armada en beneficio propio*. Y, ya casi en nuestros días, conviene recordar al respecto que Alianza Popular recomendó la abstención en el referéndum de 1983 que dirimía nuestra permanencia en la OTAN –según ha reconocido el Presidente Aznar, *un disparate y una gran equivocación*.

No merece la pena insistir. Pero sí quizá refrescarles lecturas o memoria a alguno de los jóvenes socialistas de la presente Administración para recordarles, además, que el antiamericanismo procedente de la izquierda no viene de una alcurnia intelectual muy distinta ni mucho más noble que el que les ha legado la extrema derecha. En realidad, imperialismo (que es la acusación) y librecambismo (que es la realidad de la política económica americana) es una contradicción en términos. Imperialismo es la política de extraer rentas fiscales de poblaciones y territorios extraños, sometiéndoles a una administración directa para imponerles la producción metropolitana mediante un impuesto arancelario. Los EE.UU. son un país intervencionista, desde 1917, 1940 y 1948 en que se lo pedimos, y 2001, en que les atacaron. Son un país muy potente y, a veces, prepotente. Pero eso es otra cosa. De hecho, el «latiguillo» del *imperialismo americano* es, en buena medida, un producto de la propaganda soviética. En palabras de Hugh Thomas, «como la sífilis, el tabaco y la patata, una idea importada de Latinoamérica», cuando la izquierda –cabría añadir– dejó de leer a Marx, para interesarse en el tercermundismo. Es también una derivada de la teoría sobre la concentración capitalista y enfrentamiento imperialista, como última fase del capitalismo monopolista internacional. Una idea que arranca del reparto de África y el llamado «nuevo imperialismo» de fines del XIX pero cuya explicación económica ya estaba desprestigiada y había sido cumplidamente refutada por los economistas profesionales de la época, cuando Lenin la copió (1916) de Hobson, vía Rosa de Luxemburgo y Rudolf Hilferding. Eso sí, las teorías imperialistas que hacen a la retórica antiamericana, deben enmarcarse dentro de la descolonización posterior a la II Guerra y relacionarse con la sustitución del proletariado industrial del Occidente desarrollado como sujeto revolucionario por el campesinado asiático,

la etnografía nacionalista, el integrismo religioso y otras formas de marginalidad social –calificación ésta que debe ser leída y medida, claro está, con arreglo a parámetros occidentales. Formas y fórmulas políticas que han desarrollado estrategias revolucionarias propias de su raquitismo intelectual, falta de eco social, fracaso de propuesta política e inferioridad militar. La alternativa y respuesta a esa orfandad ha consistido en desencadenar y recurrir a economías de violencia o «guerras baratas», en suma: guerrillas, «foquismo» y terrorismo. Fueron formas de insurgencia que discurrieron entre la Larga Marcha de Mao y la guerra del Vietnam, pasando por la de Argelia, la revolución castrista y la guerrilla guevarista en Latinoamérica. Se desarrollaron, pues, en otras latitudes. Pero, durante la década del sesenta, tuvieron una fuerte resonancia –y un impacto demoledor– en ambientes intelectuales y grupos marginales de una izquierda occidental carente de horizonte revolucionario doméstico, desorientada porque había perdido su propio referente revolucionario y defraudada con las disciplinadas organizaciones de obediencia soviética. En todo caso, fueron y son fórmulas que desentonan en el pentagrama filosófico marxiano y están muy distantes de la tradición socialdemócrata europea, para no hablar ya del mundo de valores propio de la democracia liberal y pluralista. Formas, en suma, que responden a una deriva ideológica, no por más violenta menos reaccionaria –en el sentido más propio y literal del término–, contraria a nuestras tradiciones ilustradas y liberales y a la idea occidental de progreso.

Aclarados, a derecha e izquierda, los orígenes del antiamericanismo, parece llegado el momento de recordar también el hecho de que los liberales y socialistas españoles de antes de la guerra –aun después y a pesar del 98– fueron simpatizantes y admiradores de los EE.UU. Lo fueron Pi y Margall y Castelar (con incidente del *Virginus* y todo) durante la I República, un régimen que admiraba a –y, con escaso éxito, quiso inspirarse en– la gran federación americana. Lo fueron también los liberales de la Restauración, de derecha a izquierda: desde D. Juan Valera, que dirigió nuestra representación diplomática en Washington y hablaba inglés con soltura, a Moret (que era bilingüe) y Canalejas, que recorrió y estudió con minuciosidad la Unión Americana. Los hombres de la Institución Libre y de la Residencia fueron buenos conocedores, admiradores e imitadores del progreso pedagógico de los EE.UU., desde el Sr. Giner a D. José de Castillejo,

que hasta escribía un inglés fluido. María de Maeztu ideó su Residencia de Señoritas (para educación de la mujer universitaria) según el modelo americano. ¿Y qué decir de los socialistas de la II República? Pues que Prieto estuvo invitado a la Conferencia de San Francisco que constituyó la ONU y terminó sus días como ferviente partidario de la OTAN, y Negrín, políglota consumado, tras la Guerra, estuvo refugiado en Londres y en Nueva York. D. Fernando de los Ríos fue embajador de la República en Washington y, finalizada nuestra guerra, él y su familia fijaron su residencia en los EE.UU.

No parece, pues, que el voto socialista o la inscripción en dicho partido exija comulgar con un antiamericanismo tercermundista, antioccidental y contrario a nuestros intereses de Estado. El PSOE es un partido centenario y, como tal, tiene tradiciones casi para todos los gustos. Sería buena cosa para todos que, en este trance internacional, tuviera buen gusto. Y mejor sentido. Y tomara ejemplo del centro-derecha español, que ha sabido marginar –al tiempo que fagocitar– tradiciones de dudosa reputación, ya provinieran de «jóvenes mauristas», primorriveristas, franquistas o «piñaristas», para volver la vista a Cánovas y Maura, Sagasta o Moret, Alcalá Zamora y hasta el propio Azaña (cuya inclusión en el santoral de la derecha es discutible pero siempre preferible para todos que recordarles a Millán Astray). A la inversa, haríamos todos también un buen negocio institucional si el socialismo español, en lugar de inspirarse en el caballerismo (que propugnaba la marginación de la mitad del país con una revolución sangrienta pero incompetente y cuyo faro internacional era el soviético) o en ecos de un «guevarismo» parisino trasnochado, reclamara la herencia intelectual y política que legítimamente le corresponde de Fernando de los Ríos o D. Julián Besteiro, pongamos por caso.

DEMOSCOPIA Y CONSENSO EN POLÍTICA INTERNACIONAL

El Presidente del Gobierno propone, con buen tino a mi juicio, regresar al consenso en política exterior del cual nunca debiera haberse salido. Lo propone pero no lo dispone. Y no parece importarle mucho. Siendo un hombre de talante amable y buenas maneras, que es una ventaja considerable –dicho sea sin ninguna ironía–, resulta sig-

nificativo y preocupante que haya reservado su parte distante, desabrida y hasta insultante para con los americanos. Tratándose de persona tan bien educada y templada, una reacción tal, más que casual debe de ser calculada. Nada que objetar, salvo que no estoy seguro de que el cálculo demoscópico del Presidente busque votos por el centro o sirva a los intereses de Estado. Descontado el déficit de ignorancia que haya en el balance, parece indudable que el Sr. Zapatero está más que dispuesto a que el Estado, que somos todos, pague el precio del deterioro en las relaciones con un país que representa un cuarto del PIB mundial, con tal de incrementar cuarto y mitad la popularidad entre radicales, que sólo son algunos. Así que... ¡palo a la burra americana y carnaza a la fiera! Es cierto que, en un sistema democrático occidental, no puede hacerse política exterior contra la opinión pública. Lo sabemos –y es un ejemplo clásico de cualquier profesor de historia– desde el revolcón que la opinión pública británica dio a su propio gobierno de *appeasers*, tras la ocupación nazi de Praga, en marzo de 1939, y lo hemos comprobado en España recientemente. Es además un precepto elemental de nuestra época democrática que el Sr. Zapatero nos recuerda, con razón, incesantemente. Pero una cosa es cultivar la opinión mayoritaria, atender a la pedagogía, propiciar el debate, dar explicaciones, evitar sobreactuaciones y ser recatado en exposiciones fotográficas, y otra muy distinta es sustituir las ideas por las encuestas y la política internacional por la demoscopia. Los intereses de Estado no pueden ponerse a barlovento de un sondeo, porque van más allá de una elección. Como el déficit, la política exterior afecta a generaciones venideras que aún no han podido expresarse y cuyo futuro no tenemos derecho –no tiene derecho el gobierno de turno– a hipotecar. Por eso debe consensuarse. Nos va en ello nuestra solvencia y capacidad negociadora. La de todos. También la del Partido Popular, que haría bien en contener la sonrisa. Tras la «pirula» del gobierno en Irak, y hasta que no reconstruyamos ese consenso de manera sólida y creíble, cualquier gobierno español –incluido uno del PP– sólo podrá cosechar eso de, *ihola, amigo!* Sin consenso no damos para más.

Pero, claro, bien pensado, ¿qué consenso en política de Estado puede esperarse en un país que cuestiona su propio Estado? Somos el único país de la Unión que ha decidido abrir un proceso constituyen-

te (ahí no nos cuentan, en cambio, con cuánto respaldo de la opinión) y que tiene planteados dos proyectos de secesión. Si a ese panorama inquietante se le añade el deterioro de las relaciones con los EE.UU., ¿puede creer alguien en serio que ese viaje nacional –amén del viraje internacional– nos van a salir gratis? A todos, se entiende. Sobre todo a los secesionistas que piensan en contrafactual y no quieren enterarse de que, en el mercado político y cultural internacional –para no hablar ya del económico–, la suma de las partes vale mucho menos que el todo. ¿De verdad pensamos que puede hacerse política de Estado con esos mimbres? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos del otro lado de la mesa? Convengamos que es razonable que la Sra. Rice –o cualquier Cancillería seria– se pregunte de qué Estado se trata e, incluso, con cuántos Estados va a tener que tratar en el futuro.

Y digo «Estado», pero deberíamos preguntarnos por el tipo de régimen que nos aguarda: ¿vamos a reconstruir una especie de *Acien Régime* pero sazonado de colectivismo nacionalista? Porque de las cosas que uno oye estupefacto de los políticos nacionalistas podría deducirse que vamos a liquidar una sociedad compuesta por ciudadanos libres e iguales, sujetos de derechos individuales fundamentales y soberanos. Se diría que estamos en dar la vuelta al voto de la histórica noche francesa del 4 de Agosto, para retroceder dos siglos y pico y sumirnos en el mundo particularista de estamentos y estados generales, gobernado por el principio filosófico de la desigualdad y el privilegio. Me temo que tendremos que armarnos de paciencia y prepararnos psicológicamente. Sobre todo, tendrá que armarse y prepararse la izquierda –o lo poco que de ella quede, tras el matrimonio morganático con el nacionalismo–; la izquierda, digo, porque es la inventora de la definición del soberano como el conjunto de los ciudadanos individuales e iguales, en su expresión política a través del sufragio universal libre y secreto. No sería extraño que celebráramos el bicentenario de la Constitución de Cádiz (1812) –el código de los pueblos y los ciudadanos de su tiempo, frente a las «Cartas otorgadas» por los reyes– liquidando la idea central de la soberanía nacional o popular, la seña de identidad y la bandera política de la izquierda durante siglo y medio. Por lo pronto, ya hemos oído en el Congreso una mención favorable a la Constitución de Bayona, la Carta otorgada por Napoleón a los españoles en 1808. Un producto de arqueología constitucional

que ya nació bastante agujereado por la polilla de su propia época. No me sorprende nada que les guste a los nacionalistas. Siempre he sospechado que éstos, como sus Cartas y Planes, son pre-modernos, un detritus del particularismo del Antiguo Régimen pero sin Ilustración y trufados de violencia colectivista romántica (por eso es también de su gusto el recuerdo anacrónico de los carlistas). Por razones profesionales obvias soy lector del Diario de Sesiones. Y, sinceramente, nunca creí tropezarme, «en el templo de la soberanía nacional», que decía el «Divino», con el espectáculo insólito de que ese conjunto de palimpsestos constitucionales, rescatados entre la naftalina de un pasado tan superado, no obtuviera respuesta adecuada y contundente desde la izquierda de la Cámara. Porque hay silencios atronadores. Y, aunque no los veíamos, todos los sentíamos. Y, aunque no los oíamos, todos los escuchábamos. Todos sabíamos que allí, entre los escaños de la izquierda, estaban sentados y abochornados, como albaceas de una idea y testigos mudos de una afrenta a su propia historia, desde Argüelles a Prim, de Canalejas a Azaña, de Pablo Iglesias a Julián Besteiro. Y, en la derecha del hemiciclo, también estaban O'Donnell y Cánovas, Maura y Alcalá Zamora, Lerroux y Gil Robles. Pero estaban callados porque estaban asombrados. No era su turno. Tampoco el del Sr. Rajoy, por bien que lo hiciera. Todos sabemos que otro debía haber sido el reparto.

En cierto modo, ya estamos en un debate de Antiguo Régimen: ¿qué otra cosa son las balanzas fiscales regionales, en que los impuestos comienzan a calcularse por colectividades o nacionalidades, en lugar de individualidades? Como dice el Presidente de Extremadura, a este paso, los individuos también terminaremos por reclamar nuestra propia balanza fiscal, cuestionando el principio de progresividad. Pero, en fin, como hace tiempo escribió Fernando Savater, lo peor de todo ese baratillo intelectual nacionalista retro es el producto marginal que nos hacen leer y nos obligan a escuchar. Convencidos de que *en los países avanzados* (sic) viven pendientes de nuestras miserables querellas de aldea, en lugar de hablar de otras cosas –por ejemplo, de agricultura, como dice, otra vez con razón, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o, del deshidratado plan hidrológico– nos enredan en ese debate de tanta altura intelectual y trascendencia internacional entre el valenciano y el catalán, ese nuevo *Affaire Dreyfus* de nuestro tiempo,

que tiene a Europa en vilo y a los parlamentarios de Strasburgo sobrecogidos. Ya lo ha dicho con humor y tino mi buen amigo José María Calleja: «en Iparralde no se habla de otra cosa».

Al parecer, pues, el escenario optimista tampoco se ha cumplido en la esfera interna. Nos dijeron que desaparecido Aznar, que todo lo *tensionaba*, también todo se apaciguaría. Y Aznar se ha ido, pero se ve que se le ha olvidado llevarse la realidad consigo. Ahí sigue el Sr. Ibarreche igual que antes: con su amenaza de referéndum ilegal y su plan a la puertorriqueña. Bueno, igual no. Un poquito peor, porque al plan le han dado otra vuelta de tuerca tras las últimas elecciones generales para radicalizarlo aún más. *No pasa nada*, nos aseguran. Y, en efecto, al menos es tranquilizador que no completen la frase con aquello de... *y si pasa no importa* –que proclamaba el gobierno Giral en Unión Radio, cuando los «savoias» italianos comenzaban a bombardear Madrid, los regulares marroquíes a sitiarla y las bandas de milicianos a «pasear» a los que llevaban corbata (en lugar de parar a los rebeldes en la línea de Talavera, como se lamentaba Azaña e hizo el Mariscal Victor con Wellington).

Para que nos tomen en serio fuera tendremos, pues, que ponernos de acuerdo entre nosotros dentro. Aunque sea un acuerdo de mínimos. Acordar, por ejemplo, si queremos pagar un Ministerio de Exteriores que gestione intereses de Estado o, por el contrario, financiar una ONG de «Españoles sin Fronteras», en donde alguna joven-cita haga prácticas de cooperación con nuestro dinero. Y lo invierta en el África sub-sahariana, donde nosotros tenemos pocos intereses que defender y promocionar –y en donde, dicho sea de paso, los tienen, en cambio, los franceses y por eso cooperan activamente en la región. El Ministerio de Estado, se supone, es una institución seria y venerable. Por eso aparece en primer lugar en el orden protocolario. No es la Cruz Roja. No se hace caridad con la República. La caridad se canaliza a través de multitud de agencias independientes en un esfuerzo de solidaridad ingente, generoso y desprendido a menudo. Pero la eligen y la financian los individuos, *con discreción y sin reflectores* –que decía Cánovas hace siglo y medio. Aseguraba el Presidente González hace pocos años que la antipatía no garantiza que nos tomen en serio. Tiene razón. Tampoco la cooperación coadyuva a la defensa de los intereses de Estado, salvo que los escolte y sirva. En el

mejor de los casos, con esa filosofía de ONG, en lugar de un departamento que defienda y promocióne nuestros intereses, tendremos una agencia de relaciones públicas, que no es igual. Y, por cierto, el Ministerio de Defensa tampoco es lo mismo que el cuerpo de bomberos. Y, en la medida que representa el monopolio de la violencia legítima del Estado, debe demostrar capacidad y –lo que es casi más importante– voluntad de ejercerla.

LA AMÉRICA PROFUNDA: UNA IMAGEN QUE NOS INTERESA Y UN CLICHÉ QUE NOS PERJUDICA

El problema de alcanzar un consenso en política exterior no es sólo, ni siquiera principalmente, de partidos. La cuestión va más allá del concierto con el PP. Con ideas tan esperpénticas, más propias de *Izvestia* o *Gramma* que de un *País* occidental, que nos quieren convencer de que el régimen tiránico de Pyongyang, y el totalitarismo religioso de los ayatolas, se están dotando de armamento nuclear porque se *sienten amenazados* [por los EE.UU.], no hay consenso posible. Al menos no lo hay con un segmento medianamente ilustrado y viajado de la población española. Y no es tanto cuestión de ideas políticas como de respeto intelectual, autoestima personal e identidad occidental. El asunto es que la catarata de antiamericanismo que hemos padecido en estos meses, visceral y primitivo, zafio y arrogante, sonrojante y grotesco, por tanto, nos llena de vergüenza a cuantos, ciudadanos de a pie, conocemos medianamente la República Norteamericana (y que, en el mundo académico, somos legión). Se puede, en efecto, discrepar legítimamente del Presidente Bush, como de hecho lo hacen muchos americanos. Sin embargo, es poco presentable –y menos rentable– construir una caricatura del personaje y del país. Una retórica que no distingue la cultura de la inteligencia, que desprecia al *common man* del medio Oeste y apenas disimula su repugnancia aristocrática ante esa movilidad social americana que tanto fascinaba a Tocqueville, que –como en el 98, por cierto– utiliza expresiones rancias, más propias del Antiguo Régimen que de una democracia moderna, como *rendir pleitesía* [al gobierno americano] o *arrodillarse ante* su bandera (cuando bastaba con levantarse a su paso educadamente), no es sor-

prendente que añada el error de cálculo a la onerosa e inédita imprudencia de apoyar abiertamente a uno de los candidatos en liza –sin entender además que Kerry era, amén de proteccionista, más unilateralista que Bush.

La noción que se tiene de los EE.UU. en buena parte de la izquierda española está tan desenfocada que ni siquiera percibe sus propios intereses sociales y nacionales. No se dan cuenta de que mucho del voto a Bush en la América profunda tiene todavía un eco del hombre independiente y rebelde de la sociedad de frontera turneriana. El mito del Oeste salvaje tiene su origen en Rousseau. «El salvaje» americano no es bárbaro, como entre los positivistas; ni degenerado, como para los neo-darwinistas. El salvaje de las praderas es primitivo; es decir, original, propiamente americano. Por eso se salva. Se salva de la corrupción y *congestión de las grandes ciudades* del Este (Hamlin Garland). Es parte del tardío mito romántico americano. La nostalgia de haber *perdido la Frontera* (Woodrow Wilson). El lamento *del alma pionera* del cowboy que añora *los espacios abiertos* del Viejo Oeste que *permiten* [soñar] *reformas sin violencia* y [celebrar] *la prosperidad de otros sin acidez corrosiva ni odio* (Hamlin Garland). En mucho del Oeste, palpita aún una *instintiva antipatía contra monopolios y privilegios* (Turner). Un recelo *del ciudadano de a pie* frente a las *instituciones financieras del Este*. Hay un regusto de independencia frente a *gobiernos neo-coloniales* (De Voto) de Nueva Inglaterra y los manejos de políticos y financieros del Este, más inglés, más rancio y aristocrático, con otra educación, maneras, expresiones y hasta un acento diferente. Formas cuyo estudiado ropaje intelectual y *gauchiste*, entre Boston y París, no hacen sino incrementar la distancia.

El que algunos nos encontremos más cómodos entre nuestros colegas de Harvard o Yale no debiera oscurecernos la otra realidad ni impedirnos aprovecharnos de ella. Sobre todo, si nos conviene, como es el caso. Porque, dentro de un océano de ciudadanía republicana que comparte la inmensa mayoría del país, esa América profunda del Oeste siempre ha buscado ciertas variantes identitarias. Y junto al mito nativista de la frontera como forja del emigrante europeo, regenerado en americano, reconvertido en un luchador individualista que transforma el medio y se hace a sí mismo, practica y respeta el trabajo manual construyendo una sociedad rabiosamente democrática e

igualitaria, surge también el mito de un pasado diferente. Un mito de origen, en alguna medida, distinto a los Estados del Este. Una leyenda –y realidad– que tomó acento español desde que Charles Lummis publicó (1893) *The Spanish Pioneers* y Helen Hunt Jackson noveló en *Ramona*, una gesta novohispana diseñada, en parte, para rivalizar con los *Pilgrims* de Nueva Inglaterra. No, los esfuerzos cada vez más frecuentes que hacen los candidatos del Oeste –Bush incluido– por charrrear español no abrigan únicamente un propósito electoral. Es también una seña de identidad. Más allá del prejuicio o de la soberbia nutrida por la ignorancia, ¿es posible dudar que todo ese «romance de la tribu americana» (William Goetzmann) de «cowboys contra yankees» (McGeer) nos conviene? Naturalmente que dentro de todo ese mito del Oeste, en general, y de esa leyenda hispanófila, en particular, hay muchas cosas que a los ciudadanos nos gustan muy poco. Por ejemplo, la protesta nativista y anti-urbana de los *cowboys* esconde a veces una carga de primitivismo nacionalista y neo-romántico, contrario a la mejor tradición Ilustrada de los *Founding Fathers* –que ya advirtieron, tiempo ha, Lewis Mumford y John W. Ward– y que hoy aparece señalada con frecuencia en la crítica contra los «neo-cons». Tampoco nos entusiasman siempre a los españoles de hoy los ecos de un pasado felizmente amortizado que nos devuelven edulcorado por la pradera americana. Ya sabemos que no hay nada más incómodo que los elogios ni más embarazoso que le recuerden a uno orígenes y referencias que cree haber superado. Pero el que nos inquieten algunos episodios de nuestra propia historia no debe llevarnos a ignorar su importancia genérica ni a despreciar su rentabilidad.

Que los EE.UU. son un inmenso país continental con cerca de trescientos millones de habitantes y una extensión que triplica la de la Unión Europea, un país hecho de diversas oleadas de emigrantes muy heterogéneos y, como tal, complejo y variado, donde conviven etnias, culturas y tradiciones diversas, exitosamente ahormadas por una cultura política común de igualdad republicana, enorme libertad individual y formidable movilidad social, dentro de la normativa que ha ido desarrollando el Tribunal Supremo, son realidades elementales que demasiados españoles, empezando por alguno de sus dirigentes actuales, parecen desconocer. Una república continental de tamaño envergadura no es comparable con cada uno de los pequeños Estados

Europeos. Un poco como en nuestro viejo continente, en la Unión Americana puede encontrarse casi de todo. Y hay, naturalmente, fenómenos que, juzgados desde la óptica reciente de una Unión Europea próspera (en relación a su inmediato pasado, que no en comparación con los EE.UU.), socialmente cohesionada, libre y tolerante, pueden resultar antipáticos o incluso repugnantes. Pero, en función de la traumática experiencia europea de nuestro inmediato pasado –y con tantas situaciones de nuestro presente– lo que no parece de recibo es que nos sorprendan con el ademán de la cortesana escandalizada. En los EE.UU. se han producido, y se siguen produciendo, incidentes de discriminación e incluso violencia racista intolerables, aunque nunca se haya vivido nada parecido a la experiencia nazi ni al genocidio pasado y presente de nuestros Balcanes.

En los EE.UU. hay, ciertamente, un «cinturón bíblico» (mucho más protestante que judío, dicho sea de paso) que toma el Antiguo Testamento como si de un mapa de carreteras, de fronteras o «de ruta» se tratara, un despropósito que traba y comprime el angosto margen de maniobra de cualquier presidente americano, por buena disposición que tenga en relación al problema palestino. Pero movimientos milenaristas que hacen política de una historia mitológica, inventada e inexistente no faltan entre nosotros. Sin ir más lejos, en la España de hoy basta leer la prensa para toparnos con el anacronismo de una historiografía de corte y confección *pro patria faciendum*, con arreglo al cual Sancho el Mayor sería un independentista vasco o el conde Fernán González un precursor de la Comunidad Autónoma Riojana. El que a los profesionales del ramo nos encante porque nos suministran un inagotable material didáctico, a la hora de explicar lo que es un anacronismo en Historia, no le resta un ápice de fantasía a la imagen. No hace falta insistir. Ejemplos en que se logra un singular equilibrio entre la ignorancia y la palettería, el delirio y el esperpento son abundantes en Europa, desde Cataluña a Irlanda, desde Bretaña a Córcega. Están en la mente de todos y vienen de larga data. Al punto que ya Guicciardini ironizaba en la Italia del Renacimiento sobre lo que, en la década del veinte del siglo pasado, un historiador dio en llamar «el culto» de una antigüedad imaginada (y sus desastrosas consecuencias en los tiempos de la Revolución Francesa).

Conviene, pues, que nos expliquen bien y de verdad cuáles son nuestros intereses. Nuestros intereses de Estado, se entiende, más allá de bambalinas, fuera de ese libreto demoscópico, escrito para un *vau-deville* electoralista de ocasión y que caricaturiza a los EE.UU. en general y a Texas en particular a modo de las series televisivas de *Falcon Crest*, en lugar de relacionarlo, por ejemplo, con la Universidad de Rice, o la Biblioteca de Austin –el mejor fondo bibliográfico iberoamericano que conozco, incluyendo los de Buenos Aires, México, Madrid y Berlín. Bien es verdad que la gente se retrata cuando le va la vida en el envite, la vida colectiva o individual. Los mismos países europeos que hacían gala de un desdén aristocrático respecto a los EE.UU. imploraron su ayuda en 1917, 1940 y 1948. Las mismas personas que critican y desprecian la tosquedad de los rancheros tejanos corren –si pueden– a curarse en los hospitales de Houston cuando se ven amenazadas por una enfermedad grave. Quizá no estuviera de más incrementar nuestra dosis de honestidad intelectual, combinándola con una relación un poquito mejor con la realidad.

EL ADANISMO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Pero, en fin, todo esto es lo de menos. Para empezar a entendernos entre todos, uno rogaría a los gobernantes actuales que redimensionaran sus fobias. Aznar, guste o no, pasará a la historia como un político importante –aunque sólo fuera porque metió a España en *el corazón de Europa* (es decir, en el Euro), socializó la política del equilibrio presupuestario y, como Felipe González en la izquierda, le dio al centro-derecha liberal la seguridad de poder gobernar sin complejos ni culpas (un delito que los teóricos de la «mayoría natural» dudo le perdonen jamás). Muy importante, en efecto. Pero no tanto como parecen creer sus enemigos actuales. No es cuestión de tender la mirada y deshacer todo lo que él hizo. «Lo-contrario-de-Aznar», no es un programa político solvente. Precisamente porque el Presidente Aznar tiene menor importancia que el Estado, sus rivales deberían relajarse un poco, abandonando el temor a coincidir con él en aquello que sirve al Estado común. Lo suyo –lo propio de un gobierno diferente– sería rectificar el tiro (para eso les hemos elegido) pero no la pieza. Pueden salirse de la foto pero sin sacarnos del mapa –del mapa de

nuestros intereses, se entiende. Como han hecho italianos y portugueses, por ejemplo. Hacer lo contrario del rival no es garantía de éxito. El Sr. Zapatero puede dormir tranquilo al respecto. Porque su castidad izquierdista estará amenazada por su promiscuidad con el nacionalismo etnicista, que nada tiene de progresista; o por el tercermundismo, que nada tiene de marxista, pero difícilmente por mantenerse en una política pro-occidental. Que no se preocupen los gobernantes actuales: coincidir con el Sr. Aznar en que dos y dos son cuatro no les convierte en «aznaristas» sino en pitagóricos.

El adanismo es una sintomatología cuya verdadera dolencia hay que buscarla en la ignorancia. En política internacional es, además de primitivo, costoso. Y, en la España democrática, vamos reproduciendo un patrón político, desconocido en el resto de Europa, con arreglo al cual liquidamos una generación de profesionales bien formados y experimentados cada ocho años, como mucho cada doce. No importa de qué partido se trate. Es revelador que, en el actual equipo de Exteriores, una inflación de expertos en Oriente Medio (donde tenemos más preocupaciones que intereses) se acompañe de una ausencia casi total de los grandes diplomáticos de significación socialista que estuvieron en puestos directivos en tiempos del Presidente González. Hay, pues, razones para temer que, en la siguiente alternancia, no quedará del anterior equipo popular ni los restos –salvo posiblemente el Sr. Acebes, que, al parecer, resulta políticamente incombustible, y doña Ana de Palacio, que es inasequible al desaliento (al desaliento de sus colegas en el Palacio de Santa Cruz, se entiende). Tampoco sería sorprendente entonces que asistiéramos a una reedición, en cuero popular –pero tanto da– de un Renouvin inédito, a cargo de otro jovenito que, sin hablar un idioma ni haber residido más de una semana en alguno de los países centrales, nos vuelva a descubrir el mundo y se apresure a reinterpretarlo. Eso sí, de manera exactamente contraria al Sr. Zapatero. Reinaugurando, por ejemplo, una etapa «anti-gabacho», que es uno de esos disparates capaces de cosechar mayor rentabilidad demoscópica en ciertos sectores de la derecha radical española. Como los simios imitativos de nuestra especie siempre copian lo peor, es verosímil que, visto el éxito del Sr. Zapatero poniendo los intereses de Estado a remolque de sondeo, sus futuros rivales populares hagan otro tanto –pero al revés, claro. No sería de extrañar.

Sin debate de intereses, que es la única base racional para un acuerdo entre competidores, será muy difícil articular el consenso. Y sin identificar ni consensuar intereses de Estado estables, sólo restará el capricho. Una política arbitraria que no tardará mucho en introducirse, como un virus, en los nombramientos y, a la postre, en el sistema de selección de funcionarios. Al paso que vamos, pronto veremos oposiciones de diplomáticos al Partido Socialista, frente a los que opositen al Partido Popular (más el «tercio familiar», que diría un franquista, asignado a los partidos nacionalistas, tan del gusto del Sr. Zapatero). Sin embargo, debiéramos tener muy presente que la gran diferencia entre el Estado español y el de otros países de nuestro entorno cultural y lingüístico, digamos que más laxos, no es el simple guarismo de renta *per cápita*. La diferencia central es que en España contamos –quizá desde la Ley de Función Pública de Maura de 1918– con un funcionariado weberiano, independiente, meritocrático y seleccionado mediante exámenes públicos, discutibles pero objetivos e imparciales. Gracias a ello, el franquismo encontró cierto freno y equilibrio. Y, gracias a ello también, fue posible la Transición. La idea no es mía. Fue de mi malogrado primo, Santiago Varela –que era un socialista inteligente y honesto, perteneciente a esa generación que los actuales gobernantes han amortizado casi por completo.

El Estado español no nació el 14 de marzo de 2004. Tiene intereses atlánticos *ab urbe condita*: desde la unión de reyes y coronas en el siglo XV, junto al hecho miliar americano de 1492 y a la política matrimonial que nos llevó a Bruselas en la siguiente centuria. Unos intereses seriamente limitados desde Utrecht, iniciado el setecientos. Unos intereses que parecían definitivamente liquidados en 1898 pero que, en el siglo pasado, la emigración se encargó de mantener, que fueron renovados en el novecientos ochenta y noventa por las ingentes inversiones españolas, y que nuestro regreso a Bruselas en 1985, finalmente ha proyectado y reforzado. Debería ser ocioso recordar que sin la estrecha colaboración con los EE.UU., todo ese capital estratégico –económico, político y cultural– correrá un riesgo cierto. Así pues, amenazar o quebrantar esa relación vital con los EE.UU. que tiene más de medio siglo, respetada y reforzada por todos los gobiernos desde entonces, y que, a pesar de su origen, paradójicamente, ha servido para apuntalar nuestra seguridad (frente a las potencias totali-

tarias, ante el terrorismo y en el Estrecho), incrementar nuestra prosperidad y, por lo tanto, garantizar nuestra libertad –como consecuencia no diseñada pero si rentabilizada y celebrada–, es una gravísima irresponsabilidad que sólo la ignorancia puede explicar, ya que no justificar. Sin duda, cada uno es libre de seguir viviendo su limbo, a ritmo de sondeo y en el regocijo de su ignorancia. Lo único que se les ruega a los actuales robinsones de la política internacional española, es que no añadan soberbia al desconocimiento y que ni prejuicios ideológicos ni voracidad demoscópica les nublen la visión de sus intereses, que son los de todos. Y ya que son tan *de leur gout*, que imiten a los izquierdistas de la vecina República (se entiende, claro, que imiten sus métodos porque, sus objetivos, va de suyo que no son necesariamente idénticos, ni antes ni siquiera ahora). Que tomen, pues, ejemplo de aquellos políticos radicales que inauguraron el famoso Puente de Alejandro III, en amor y compañía con el autócrata de todas las Rusias. Y que, si les desagradan los americanos (el sujeto colectivo no es más abusivo que la caricatura que del mismo se hace), porque ni los entienden ni los conocen, al menos que sean discretos: miren el mapa y aprendan a distinguir entre lo que les gusta y lo que nos interesa, que no siempre es lo mismo. Sobre esas bases, es posible reconstruir el consenso en política exterior. Consejeros con experiencia e inteligencia probadas no les han de faltar. Se supone que los tienen en casa. Basta con preguntarles al Presidente González y a su equipo.

A MODO DE EPÍLOGO Y ESPERANZA

No quisiera cerrar estas reflexiones sin una nota de esperanza. En el fondo, lo que está ocurriendo –la presencia abrumadora del hecho y del debate internacional en España– es un síntoma halagüeño. En definitiva, estamos pagando el precio de nuestro propio éxito. Porque España ya no es un país irrelevante. Es un país importante: de un volumen considerable, con un PIB como el de Brasil o el de Canadá, o un poquito más, y que se expresa en la segunda lengua occidental. Debemos, pues, contener nuestro miedo escénico y salir al estrado internacional. Entre otras cosas, porque, nos guste o no, como a los actores primerizos, nos van a empujar a las tablas nuestros compañeros de reparto. Somos demasiado grandes como para escondernos.

Demasiado relevantes como para «recogernos», que decían los canovistas en el último cuarto del siglo antepasado. No nos van a dejar en paz. Nos sacarán a la palestra, aunque sea a bombazos. Va a ser mejor que nos reconciliemos con el crecido volumen de nuestro nuevo cuerpo y que seamos nosotros, en lugar de otros, quienes elijamos nuestra propia indumentaria internacional. El reto consiste en hacerlo con discreción. Con mesura y tiento pero con decisión y sin complejos. Hasta ahora, hemos manejado con acierto y prudencia nuestro propio fracaso. Hemos superado un conflicto fratricida, reconciliándonos; una posguerra miserable y vengativa, desarrollándonos; una dictadura, democratizándonos –*motu proprio* y sin ayuda americana, como necesitó el resto del continente. Estamos en la OTAN, en la Unión y con el Euro. Hemos salido otra vez a aguas abiertas. La cuestión ahora es si vamos a manejar el éxito con la misma discreción con que superamos el fracaso. Hace cosa de un siglo, un político argentino les advirtió a sus compatriotas, exultantes de riqueza en la celebración de su primer centenario, que el éxito es más difícil de gestionar porque la conciencia de una realidad modesta amortigua el disparate. Puestos a imitar, mejor sería inspirarnos en Carlos Pellegrini, que fundó el Jockey Club y su biblioteca, que en Perón, que lo quemó.

EL NUEVO ANTISEMITISMO

En los últimos años el antisemitismo ha dejado de caracterizar sólo al neonazismo europeo, para convertirse en un fenómeno muy extendido en el mundo arabo-musulmán, donde el rechazo a Israel va casi siempre acompañado del viejo tópico de la conspiración judía, cuando no incluso de argumentos negacionistas. Ya en el mundo occidental, un antisionismo de izquierdas muy radicalizado se ha extendido también de forma espectacular, sobre todo entre la ciudadanía europea. Algo se mueve, pues, en relación con Israel y los judíos, y todo parece apuntar a que se trata de un nuevo antisemitismo o, si se prefiere, de una nueva judeofobia.

Los indicios que hablaban de una nueva violencia antijudía venían acumulándose en las dos últimas décadas: entre otros, el atentado de 1986 contra la sinagoga de Estambul, el de 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires... Y, sobre todo, el terrible atentado, también en la capital argentina, en marzo de 1994, contra la sede central de la Comunidad Judía, la AMIA, que, con cerca de cien víctimas y autoría iraní, fue sin duda alguna el primer gran precedente del 11-S y del 11-M. La situación estalló, sin embargo, en otoño de 2000, coincidiendo con el inicio de la Segunda Intifada y con la difusión mediática de la secuencia, filmada en directo, del niño palestino que murió por un disparo en el curso de los primeros enfrentamientos. Por aquellos días miles de manifestantes musulmanes invadieron las calles de muchas ciudades europeas, coreando lemas que rara vez se habían escuchado en Europa –como «¡Hitler tenía razón!»–, o que hacía mu-

Sultana Wahnón es catedrática de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada.

cho que ya no se oían –«¡Muerte a los judíos!». En Francia, el país donde reside la mayor comunidad judía de Europa, no se trató sólo de manifestaciones, sino de un incremento espectacular de la violencia verbal y física contra los judíos. Los incidentes se multiplicaron: incendios de sinagogas y colegios judíos, agresiones contra ciudadanos franceses por el solo hecho de ser judíos... Gestos de violencia callejera que no se veían en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial sembraban la alarma entre las comunidades judías de las ciudades europeas, entre ellas algunas españolas, donde por primera vez después de muchos años se había vuelto peligroso ser o parecer judío. Y la gran novedad era, además, que los responsables de los ataques antijudíos no eran ya grupos de la extrema derecha, cabezas rapadas o nostálgicos del nazismo, sino jóvenes de origen árabe-musulmán.

Apenas un año después, en septiembre de 2001, unos días antes de los atentados de Nueva York, tuvo lugar la ya famosa Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo que se celebró en la ciudad sudafricana de Durban. En aquel momento fue Nadine Gordimer quien dio la voz de alarma: la delegación israelí había tenido que retirarse de la Conferencia debido a lo que la propia escritora calificó como el «salvaje acoso racista al que se vieron sometidos por una verdadera muchedumbre de extremistas musulmanes, tanto de Sudáfrica como del extranjero». Los extremistas, seguía diciendo Gordimer, habían aprovechado el conflicto entre israelíes y palestinos para «exteriorizar un antisemitismo en el que, al mismo tiempo, estaba ausente el más mínimo respeto al debate de otras cuestiones ante la Conferencia» (Gordimer, 2001). Y, aunque por entonces la autora no entró en más detalles, hoy sabemos ya que una de las formas en que el antisemitismo musulmán se exteriorizó fue el póster en el que bajo una foto de Hitler podía leerse: «Si Hitler hubiese ganado, no habría existido Israel y no se habría derramado sangre palestina». La delegación que distribuyó el póster, la Unión de los Abogados Árabes, era, además, la misma que utilizaba su puesto para vender a buen precio ejemplares de los *Protocolos de los Sabios de Sión*. Lo más curioso fue, no obstante, que, mientras todo esto estaba ocurriendo, la delegación palestina encabezada por Arafat elevó la propuesta de que el sionismo fuera declarado otra vez, como en 1975, una forma de racismo, al mismo tiempo que otro alto responsable de la OLP afirmaba que las prácticas israelíes contra los palestinos superaban «en horror al Holocausto».

Al denunciar estos hechos, Nadine Gordimer se constituyó en una de las escasas excepciones a la regla, que por esas fechas, septiembre de 2001, seguía siendo la de disimular y mirar hacia otro lado en todo lo relacionado con el antijudaísmo de procedencia árabe o islámica. Para los pocos que, como la escritora sudafricana, reaccionaron enseguida¹, era ya obvio, sin embargo, que todas esas manifestaciones de hostilidad a Israel y los judíos distaban mucho de ser sólo, como siempre se había pensado que eran, un mero epifenómeno del antisionismo, un elemento más del conflicto árabe-israelí. Y eso por tres razones. En primer lugar, porque los acusados de racistas, imperialistas y colonialistas ya no eran los sionistas, sino en general «los judíos»; en segundo lugar, por las muy continuas referencias que se hacían en el marco de ese renovado antisionismo al «poder judío»; en tercer lugar, y por si lo anterior no hubiera sido suficiente, porque no era en modo alguno normal que en el contexto del antisionismo se invocase a Hitler, al Holocausto, a la necesidad de terminar la obra que el nazismo dejó inacabada, etc.

Se consolidaba así la tesis, enunciada desde hacía tiempo por algunos investigadores y ensayistas, de que un *nuevo antisemitismo* había hecho acto de presencia, de la mano del antisionismo. Para Pierre-André Taguieff, que llevaba defendiendo esta idea desde los ochenta, se trataba, más bien, de una *nueva judeofobia*. Con esta fórmula, que dio título a un libro reciente del mismo autor, Taguieff ha querido establecer una clara distinción, teórica y conceptual, entre lo que se llamó antisemitismo en el siglo XIX y la nueva variante de hostilidad a los judíos elaborada con posterioridad a la creación del Estado de Israel. Pero, además, ha querido también protegerse de dos de las objeciones que suelen hacerse al uso del término «antisemitismo» para referirse a lo que estaría ocurriendo en el presente: la de que también los árabes son semitas –lo que supuestamente impediría hablar de un antisemitismo árabe– y la de que este término nació estrechamente ligado a la cuestión de la diferencia entre las «razas» semita y aria, en tanto que ahora, por contraste con lo que ocurrió en la Europa del siglo XIX, no se trataría de una cuestión racial, sino política e ideológica, i.e., antisionista.

¹ Sería el caso, entre otros, de Caroline Fourest (2001), representante de una ONG francesa que asistió a la Conferencia y dejó también constancia por escrito del espanto que le produjo todo lo que pudo ver y oír allí.

En cualquier caso, y con independencia de la fórmula que se elija para caracterizar el fenómeno, la de judeofobia o la de nuevo antisemitismo, lo importante es advertir que se trataría de una aversión y hostilidad a los judíos que ya no se revestiría de la forma del prejuicio racial. Muy al contrario. Este tipo de prejuicio característicamente nazi estaría hoy batiéndose en retirada en Occidente, donde las reacciones de solidaridad con los judíos amenazados por el antisemitismo de extrema derecha son casi siempre inmediatas, y esto ya incluso en España². Sin embargo, al mismo tiempo que se rechaza de plano el antisemitismo neonazi, se toleran, y a veces hasta se alientan, otra clase de prejuicios que, aun siendo de otra naturaleza y procediendo de otra parte, serían igualmente antijudíos. Tal como advirtió hace ya tiempo Finkielkraut (1982, 177-181), todo ocurre como si las expresiones de odio a los judíos sólo fueran censurables cuando sus portavoces son cabezas rapadas, y se convirtieran, en cambio, en aceptables y comprensibles cuando quien las pronuncia es cualquier individuo inscribible en la categoría genérica de «los oprimidos».

Y eso incluso cuando el oprimido en cuestión dista mucho de ser, en verdad, un desheredado. Piénsese, por ejemplo, en el caso reciente del ex primer ministro de Malasia, Mahatir bin Mohamad. Cuando hace algunos meses el por entonces todavía primer ministro realizó en un foro público sus ya famosas declaraciones sobre el «poder de los judíos» y sobre su responsabilidad en la invención del Comunismo, el Socialismo y la Democracia, éstas fueron tachadas enseguida de antisemitas por algunos de los asistentes al acto y sobre todo por las organizaciones judías que conocieron luego los hechos. Sin embargo, no parece que esto le haya ocasionado grandes perjuicios en sus relaciones con el mundo occidental. Muy al contrario: ha sido precisamente por esas declaraciones por lo que el pasado verano se le invitó a participar en el Fórum de las Culturas, en el marco de un *Diálogo Oriente-Occidente*. A su paso por España, y en entrevista concedida a *El País*, tuvimos ocasión de enterarnos de que, además de

² Recuérdese en este sentido la protesta de los libreros de Valladolid ante la presencia, en la Feria del Libro de mayo pasado, de una librería que vendía obras pronazis, entre ellas los *Protocolos de los Sabios de Sión*. Al respecto se puede consultar el diario *ABC* del domingo 2 de mayo de 2004.

poderosos, los judíos eran culpables, culpables de todo, y, en especial, del actual conflicto de civilizaciones ³.

El ex primer ministro se adscribía así a la moda islamista, cada vez más extendida incluso entre los meramente islámicos (caso de bin Mohamad), de atribuir a Israel y a los judíos la responsabilidad de todo cuanto ocurre y ha ocurrido no ya en Palestina, ni sólo en Oriente Próximo, sino en cualquier parte del mundo, y sea lo que sea que haya pasado y pase, desde la destrucción de las Torres Gemelas hasta el reciente asesinato del ex primer ministro libanés, pasando por el sida...⁴ La mayor parte de estas calumnias se originan y difunden en los propios países árabes, desde donde los corresponsales y periodistas occidentales, con su prurito de informar sobre todas las «opiniones» existentes, las extienden al mundo civilizado. Pero, por más que luego siempre acaben desmentidas por las investigaciones, la estrategia cumple su principal objetivo: el de crear un clima de generalizada sospecha hacia Israel, desviando el sentido de la *amenaza* desde el Islam, de donde procede, hacia el país que, precisamente, más la padece.

Aunque el método se usa hoy ya, indistintamente, por islamistas y por no islamistas, y por más que el origen de la estrategia culpabilizadora se remonte, en el mundo árabe, a la temprana fecha de 1951, en que se editaron por primera vez en El Cairo los *Protocolos de los Sabios de Sión* ⁵, habría que convenir en que el actual estado de cosas en relación con este asunto, y en general con la propagación del nuevo odio a los judíos, tiene mucho que ver con la difusión y extensión de que ha llegado a gozar el islamismo. Lo que el fundamen-

³ «Lo que ahora llamamos el choque de las civilizaciones se debe realmente a la creación del Estado de Israel tomando tierra palestina y expulsando a los palestinos», afirmó en el diario *El País* el viernes 2 de julio de 2004.

⁴ El rumor de que los judíos estaban detrás de los atentados de Nueva York partió de un periódico oficial sirio, desde donde se divulgó a todos los países musulmanes. Uno de los que la defendieron hasta el final fue el jeque Yasín, líder de Hamás. Muchos periodistas y articulistas occidentales, entre ellos los españoles Haro Tecglen y Vidal-Beneyto, se hicieron eco del rumor.

⁵ El traductor presentó la obra a sus lectores como un documento fidedigno que les permitiría conocer «el *complot infernal* puesto en práctica por los judíos para corromper el mundo y someterlo enteramente al servicio de sus exclusivos intereses». En la edición de 1967, que gozó de una difusión masiva, el prologuista, un periodista sirio, decía ver en los *Protocolos* un medio para alertar al mundo sobre el «peligro» que representaba Israel: «Yo querría simplemente recordar a los lectores de esta obra la actitud pro-judía y antiárabe adoptada por la mayoría de los pueblos de Europa y de la comunidad cristiana en el mundo en el transcurso de los acontecimientos de junio de 1967, y situarles de nuevo frente al peligro real que representa Israel, no ya sólo para los Árabes y los musulmanes, sino sobre todo para los cristianos y la humanidad entera». Citado en Taguieff (2004, 174-175).

talismo islámico ha aportado al ya de por sí radical antisemitismo árabe y a sus ya de por sí poco tranquilizadores sueños de destrucción, ha sido un completo sistema de pensamiento antijudío, cuyas más profundas motivaciones trascenderían con mucho al mero hecho, coyuntural para esta ideología, de la existencia de Israel. Por supuesto que también para los ideólogos islamistas, al igual que para sus antecesores nacionalistas, la existencia de Israel es un problema, una espina clavada en el corazón del mundo islámico, pero esto no ya sólo porque su presencia haga imposible el sueño de la unidad nacional y territorial árabe, sino sobre todo por una cuestión religiosa y/o cultural de mayor calado y de imposible «solución». En el sistema de pensamiento político-teológico que obtuvo su primera gran victoria en el Irán de Jomeini, las razones por las que Israel y los judíos tienen que ser combatidos *eternamente* y más allá del hecho coyuntural de que Israel exista o deje de existir, son insondables razones culturales y religiosas directamente relacionadas con la *identidad* del Islam. Al igual que los antiguos nazis, los islamistas ven en el judaísmo la encarnación misma, cuando no el origen, de todo cuanto amenaza la supervivencia de esa identidad islámica o musulmana: capitalismo, comunismo, materialismo, ateísmo, democracia, corrupción de las costumbres, igualdad de las mujeres, en suma, *modernidad*. Con sus hábitos y formas de vida plenamente occidentales, tanto los israelíes en Palestina como los judíos en el mundo serían culpables, al igual que Occidente en su conjunto, de contaminar la pureza del mundo islámico, haciendo imposible la empresa de restaurar la unidad de los creyentes y de extender la *verdad* islámica por todo el orbe.

A efectos meramente de política israelí, y puesto que la conclusión de todo esto seguía siendo la de que Israel debía ser destruida, se trataba quizás sólo de un mismo perro con distinto collar; pero a efectos de antisemitismo no era, en modo alguno, lo mismo. Entre otras cosas, porque es a los ideólogos del islamismo, imanes, jeques, ulemas y demás, a quienes se debe que la práctica del insulto *antijudío* haya dejado de ser un fenómeno doméstico, reducido al ámbito de lo privado, para volver de nuevo a la palestra, desde donde ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de los países islámicos, sobre todo entre los más jóvenes, para quienes ofender a los judíos sería ya algo completamente normal y habitual. Y el fenómeno se extiende: también en España, y en los últimos tres o cuatro años vuelven a oírse en la calle

y hasta en los medios de comunicación viejos insultos que hacía mucho que no se oían.

Insultar a los judíos era algo a lo que imanes y ulemas estaban obligados por la propia lógica del islamismo. Puesto que su fobia a Israel y al judaísmo tenía que apoyarse, como cualquier otra de sus opciones políticas, en la *letra* del Corán, fue a la letra del Corán, y a la del Hadith, a la que estos ideólogos acudieron en busca de las fuentes originarias y primigenias del «inevitable» odio islámico a los judíos, dando así en resucitar una serie de ancestrales prejuicios antijudíos, que, confinados hasta hace poco en los textos de la tradición, son ahora ya parte integrante de *la lengua del Islam*⁶, con un valor, además, de verdades indiscutibles y axiomáticas. Desde la perspectiva de estos «predicadores del odio», los judíos serían, pues, *esencialmente* y sin posibilidad de enmienda (algo, pues, inherente al hecho mismo de ser o nacer judío), rebeldes, mentirosos, descendientes de monos y de puercos, asesinos de profetas y, sobre todo, *enemigos de Alá y del Islam*. Y, puesto que éste es el discurso sobre los judíos que, por apegado a la letra religiosa, se reproduce una y otra vez en muchos de los sermones que se pronuncian en mezquitas y otros foros públicos del mundo islámico, la difusión que han llegado a tener estos motivos judeófobos es exactamente la misma que ha alcanzado la «revolución cultural» del Islam, con el cada vez más mayoritario «retorno» de los musulmanes a las fuentes religiosas de su cultura⁷.

No obstante, los casos en que la nueva judeofobia islamista se presenta en estado puro, como ristra de insultos tradicionales, son muy escasos. Lo habitual es, más bien, encontrarla en abigarrada mezco-

⁶ Con esta fórmula remedo el título del famoso libro de Víctor Klemperer, cuya tesis central es, precisamente, la de que el nazismo se introdujo «en la carne y en la sangre de las masas» a través del lenguaje, es decir, «a través de palabras aisladas, de expresiones y de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente» (Klemperer, 2001, 31).

⁷ Como ejemplo de esta extraordinaria difusión, citaré aquí algunas de las respuestas que los saudíes dieron a una serie de preguntas sobre los judíos que les fueron formuladas a pie de calle por los encuestadores de un programa de la televisión saudí. A la pregunta «Si un niño te pregunta 'quiénes son los judíos', ¿qué le contestarías?», muchos encuestados respondieron: «Los enemigos de Alá y Su Profeta», «Los asesinos de profetas. Nuestros eternos enemigos, por supuesto», «Los asesinos de profetas, eso es lo que son». Junto a estas respuestas específicamente islamistas, se encontraban otras, más antisionistas (pero sin distinguir entre israelíes y judíos) del estilo de «El judío es el ocupante de nuestra tierra» (Página web del Instituto de Investigación de los media en Oriente Próximo (MEMRI), Serie de Comunicados Especiales, núm. 791, 29 de septiembre de 2004).

lanza con los motivos y temas propios del antisionismo, tanto en los sermones religiosos como en los artículos que se publican en la prensa árabe, que siempre contienen muchas y muy claras referencias al conflicto palestino-israelí⁸. El efecto más importante, y más grave, de este explosivo sincretismo ha sido la *esencialización* del conflicto político-territorial que enfrenta hoy a israelíes y palestinos y que, leído ya en clave islamista, no consentiría ninguna clase de solución pactada o negociada –como tampoco la aceptaría el combate que el islamismo libra contra Occidente en general⁹. Todo esto habría desembocado en la configuración de una nueva ideología mixta, la del *nacional-islamismo*, representada por organizaciones terroristas como Hamás, Yihad Islámica o Hezbollah, cada vez más difundida¹⁰, y para la que no cabe, más allá de una tregua de vez en cuando, ninguna posibilidad de compromiso con el «enemigo judío» al que, sencillamente, habría que destruir. O eso o ser destruidos por él: en este nuevo totalitarismo islámico, como en sus predecesores europeos, no hay más alternativa que la derrota o la victoria *total*.

Con premisas como éstas, se entiende perfectamente que la clase política israelí, trátase de Sharon o de Shlomo Ben-Ami, vea muy difícil establecer una paz negociada y, menos aún, definitiva con una Palestina que, al igual que otros rincones del mundo islámico, o inclu-

⁸ A modo de ejemplo, puede servir este extracto del artículo de Fatma Abdallah Mahmoud, «Maldito por siempre», publicado en 2002 en el diario gubernamental egipcio, *Al-Akhbar*: «Estos malditos son la catástrofe de la raza humana. Son el virus de la generación, destinada a una vida de humillación hasta el día del Juicio. También son malditos porque en varias ocasiones intentaron asesinar al profeta Muhammad. Le lanzaron una piedra, pero fallaron su tino. En otra ocasión, intentaron envenenar su comida, pero no lo lograron. Alá los maldijo cuando llevaron a cabo la masacre criminal de los palestinos en Sabra y Chatilla» (cit. por MEMRI, Serie de Comunicados Especiales, núm. 375, 3 de mayo de 2002).

⁹ Transcribo aquí un fragmento de un sermón pronunciado en una mezquita palestina y emitido en directo por la televisión oficial de la Autoridad Palestina. El sermón fue pronunciado en marzo de 2004 por el jeque Ibrahim Muderis, empleado del Ministerio de Asuntos Religiosos de la Autoridad Palestina, y el pasaje que reproduzco ilustra perfectamente sobre los métodos de *esencialización* del conflicto: «Desde que Alá creó esta vida, hay conflicto entre la Verdad y la Falsedad, una continua batalla entre el bien y el mal, y una constante lucha entre aquellos que son buenos y aquellos que son malvados. En esta tierra santa presenciaremos uno de los capítulos de esta batalla santa, la batalla entre la Verdad y la Falsedad. Nosotros somos los buenos, el pueblo de la Verdad que la defiende con nuestra sangre y almas. Defendemos nuestros derechos, defendemos nuestra tierra y nuestros lugares santos. Por otra parte, nuestros enemigos son malvados, gente falsa que combate usando la espada de la Falsedad. Les ganaremos, porque la victoria será de la Verdad, Alá que lega» (MEMRI, Serie Comunicados Especiales, núm. 683).

¹⁰ En esta extraordinaria difusión desempeñan un papel muy importante los canales de televisión por satélite que, como Al-Yazira, llegan a millones de espectadores musulmanes de todo el mundo. Más grave sería todavía el caso del canal Al-Manar, directamente vinculado al Hezbollah libanés, cuyas emisiones fueron prohibidas hace poco en Francia por su contenido «escandalosamente antisemita».

so mucho más, estaría, en estos momentos, completamente condicionada y sometida a las exigencias de los grupos islamistas, como lo prueban, entre otras cosas, el apoyo entusiasta de las masas a Hamás, la reciente aparición de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, vinculadas a Al-Fatah pero completamente imbuidas ya de ideología nacional-islamista, o la impotencia de la elite intelectual para contener la deriva islamista de la causa palestina. Todo ello, unido al particular sistema de adoctrinamiento antijudío en las escuelas al que la Autoridad Palestina ha venido dando hasta ahora el pomposo nombre de «educación», dibuja un panorama bastante turbio del que parece difícil salir de verdad, es decir, con auténticas perspectivas de convivencia pacífica, sin una previa transformación cultural e ideológica del mundo arabo-musulmán. Una transformación por la que apuestan, entre otros, algunos intelectuales progresistas pertenecientes a ese mismo mundo, como el tunecino Abdelwahab Meddeb, que en *La enfermedad del Islam* ha sometido a crítica racional los fundamentos del islamismo; o como el opositor iraní Amir Jahanchahi (2004), que ha alertado sobre la necesidad cada vez más urgente de derrocar al régimen islamista que gobierna en su país desde 1979. Por desgracia, estas voces disidentes del mundo islámico no siempre encuentran el eco que sería de esperar entre sus homólogos, los intelectuales progresistas de Occidente.

Y es que el *nuevo antisemitismo* o la *nueva judeofobia* no es algo que sólo concierna a los árabes o a los musulmanes. Atañe también a la versión occidental del antisionismo, es decir, a lo que hasta hace poco se conocía como *antisionismo de izquierdas*. Tal como su nombre indica, el antisionismo occidental nació, al igual que su homólogo árabe-palestino, como reprobación del sionismo y, por tanto, del hecho mismo de la existencia de Israel. Sólo en las últimas décadas, y por efecto del mutuo reconocimiento entre Israel y la OLP, la temática antisionista empezó a redefinirse como crítica (siempre, eso sí, implacable) de la política israelí en lugar de como simple y llano rechazo o cuestionamiento de la existencia misma del Estado. En el momento presente, en cambio, y al socaire de las propias oscilaciones palestinas, una buena parte del antisionismo de izquierdas habría regresado a su hábitat natural, retomando así la vieja condena del sionismo propiamente dicho, aunque con importantes novedades respecto de la que se estilaba en los años setenta.

En lo que respecta al antisionismo intelectual, la principal novedad reside en que sus argumentos no se extraen ya sólo de las obras de autores árabes como Edward W. Said u occidentales como Chomsky, sino también de autores ellos mismos israelíes: en versión judeófoba, caso de Israel Shahak, o simplemente antisionista, caso de los partidarios de la «solución binacional», como Michel Warschawski, o de los *nuevos historiadores israelíes*, que, como Ilan Pappé o Benny Morris, han revisado la versión oficial de la historia de Israel y propuesto una versión más coincidente con la de los propios palestinos. Precisamente por proceder de fuentes israelíes, este nuevo antisionismo goza todavía de mayor credibilidad que el anterior, lo que en parte explica el actual exacerbamiento de la temática reprobatoria, con ese nuevo y especial énfasis en lo que ya se conoce como el «pecado original» de Israel.

En lo que respecta al antisionismo popular y su versión mediática, son varias las novedades. En primer lugar, este tipo de antisionismo sería cada vez más pasional y menos intelectual. O, si se prefiere, cada vez más poético y menos teórico. Cuando se trata de Israel y Palestina, lo habitual es renunciar por completo a los cauces de la argumentación racional para seguir las sendas, mucho más cómodas, de la retórica. Por lo mismo, el antisionismo que se ha generalizado en los últimos años, lejos de ser rico en razones, siquiera sea discutibles, lo es sobre todo en metáforas: la de las piedras de David y los tanques de Goliat, la de Barak-Hitler, la de Sharon-Herodes, la de Ramallah-Auschwitz, la de la «sagrada familia» palestina, etc. Gracias a su difusión mediática, todas estas imágenes literarias forman parte ya de la vulgata pro-palestina en auge entre una gran mayoría de ciudadanos europeos. Y, junto a las metáforas, ese tono invariablemente indignado tras el que se adivina la intensa afectividad de esta nueva *pasión* antisionista, es decir, de lo que ya, más que un pensamiento, sería sobre todo un *sentimiento* antisionista.

En segundo lugar, estaríamos ante un antisionismo que, lejos de ser, como a veces pretende, crítica legítima de la política israelí, se caracteriza –precisamente por cuanto que se trata de *antisionismo*– por la condena *a priori* de toda decisión adoptada por Israel, cualquiera que ésta sea. Da lo mismo que se trate de ocupar Gaza, como de retirarse de Gaza: la militancia antisionista tiene siempre motivos para

cuestionar de entrada todo lo que hace Israel, del que se desconfía instintivamente, como dando por sentado que detrás de cualquier cosa que emprenda se ocultarían siempre segundas intenciones, nunca buenas. Naturalmente, lo que subyace a esta tendencia compulsiva a sospechar de Israel es la previa *criminalización* del sionismo operada a lo largo de medio siglo: dadas las premisas, se entiende que no se espere nada positivo de lo que, en esencia y *a priori*, sería completa y radicalmente negativo, esto es, de un movimiento racista, imperialista y colonialista, que ahora, además, se percibe como infligiendo un terrible sufrimiento a los palestinos. El reverso de este apriorístico antiisraelismo sería el pro-palestinismo incondicional, el mismo que, para poder seguir existiendo como tal en los últimos años, ha tenido muchas veces que cerrar los ojos ante la evidencia.

En tercer lugar, el nuevo antisionismo se parecería cada vez más al arabo-musulmán, en el sentido de que ya habría empezado él también a no distinguir entre sionistas, israelíes y judíos. Es verdad que, hasta ahora, esta actitud se diría mucho más generalizada entre la militancia que entre la *intelligentsia* mediática, por lo general más cautelosa en cuanto a la necesidad de distinguir, al menos por escrito, entre judíos y sionistas. Pese a ello, en estos últimos años y a raíz del estallido de la Intifada, habría habido más de un caso en que prestigiosos escritores conocidos por su incondicional palestinofilia habrían empezado a escribir discursos contra «los judíos», a quienes han acusado de racistas, de tener demasiado poder en el mundo, o hasta de parecerse demasiado al Dios «cruel» y «vengativo» del Antiguo Testamento. En general, una buena parte de la ciudadanía europea vuelve a ver en los judíos, como otrora hacía el antisemitismo, a los representantes de una entidad única, tan intrínsecamente negativa, por demás, como el propio sionismo.

Lo que todo esto quiere decir es que el antisionismo occidental se habría recrudecido, acentuando tendencias que ya latían en su interior desde hace muchos años, pero que hasta ahora no habían osado salir a la superficie. Para explicar el actual enconamiento de la temática antiisraelí, se barajan hoy varias hipótesis, todas ellas quizás conciliables entre sí. La primera es la más sencilla. Según esta teoría, la metamorfosis del antisionismo sería una respuesta a la demanda de sentido y de causas con capacidad de movilizar que viene experimen-

tando la izquierda desde la caída del muro de Berlín y del comunismo soviético. Aunque despojados ya del ideal de la «Revolución», los antisionistas de izquierda seguirían orientándose por el mito revolucionario de la tradición comunista, y un Israel convertido, junto con Estados Unidos, en enemigo absoluto, resulta por ello muy útil a la hora de encauzar a los nuevos rebeldes sin causa, reconduciendo hacia otro lugar que ya no sería «el capitalismo» esa compulsión a la crítica y a la protesta sistemática sin la cual la izquierda deja de merecer ese nombre. De ahí, quizás, que antisionismo y antiglobalización sean hoy ya prácticamente sinónimos.

La segunda hipótesis es algo más compleja, y tiene que ver con lo que se conoce como la *islamización* del antisionismo. Desde esta perspectiva, el punto de arranque no fue la caída del muro, sino la Guerra del Golfo, y lo que ocurrió fue que a partir de este corto episodio bélico el antisionismo occidental empezó a contagiarse de las versiones islamistas y, por tanto, judeófobas, del antiisraelismo, de donde la cada vez más radical demonización de la tríada judíos-israelíes-sionistas en los medios izquierdistas, así como la deriva antijudía, con su característica propensión a culpar a los judíos y no ya sólo a los sionistas de todo cuanto ocurre en el mundo –o, cuando menos, a prestar crédito a quienes lo hacen. Por efecto de la presión ejercida por la nueva ideología mayoritaria en Palestina, la nacional-islamista, esos incondicionales pro-palestinos que son los escritores de izquierda y, en general, los periodistas y corresponsales occidentales, acaban asimilando las nuevas formas de oposición a Israel, reproduciéndolas luego acríticamente –tal como lo hizo, por ejemplo, Saramago, al comparar Ramallah y Auschwitz justo minutos después de haberse entrevistado con la plana mayor de la Autoridad Palestina.

La tercera hipótesis es todavía más compleja, y se debe sobre todo a Finkelkraut. Para este autor, que también ha detectado la existencia de un *nuevo antisemitismo* en Occidente, pero muy en especial en Europa, éste no sería, sin embargo, un mero fenómeno de contagio del Islam, sino algo derivado de la propia lógica del *progresismo europeo* –concepto que abarcaría ya bastante más que la izquierda y la extrema izquierda. Por extraño que esto pueda parecer, el nuevo antisemitismo tendría que explicarse entonces a partir de las categorías del *antirracismo* y la *antixenofobia*. Como se sabe, estas dos categorías, ele-

vadas hoy ya a principios básicos de la convivencia europea, se habrían ido constituyendo, a lo largo de las dos últimas décadas, en torno precisamente a la memoria del nazismo y del valor paradigmático de Auschwitz como encarnación del mal radical, todo ello complementado con una ya muy conocida reflexión sobre la «alteridad» y la «diferencia» que tendría mucho que ver también con el judaísmo, por cuanto inspirada en gran medida en la filosofía de Levinas. A base de recordar Auschwitz y de invocar al Otro, se habría, pues, arribado a ese nuevo humanismo tolerante, solidario, hospitalario e integrador que se identifica hoy con el *humanismo europeo* o, más aún, con la idea misma de *Europa*.

A partir de estos nuevos patrones culturales, lo que habría ocurrido sería lo siguiente. Tanto Israel, con su obstinación en seguir existiendo como Estado mayoritariamente judío, como los judíos en general, con su empecinamiento en seguir siendo tales y, además, en defender a Israel, se habrían situado a contracorriente de la nueva forma judeo-europea de pensar, dando lugar así a una paradoja histórica: si en la Europa anterior a Auschwitz se estigmatizó al judío por errante, apátrida, cosmopolita, plurilingüe y pluricultural, ahora, en la Europa posterior a Auschwitz y pro-judía, se le estigmatiza por todo lo contrario, es decir, por apegado a la tierra y a la sangre, por nacionalista, por demasiado vinculado a una *identidad nacional*. O, dicho de otro modo, por no ser ya judíos: por lo menos, no como «los de antes». Lo que la nueva judeofobia europea tiene, pues, en contra de los judíos no es ya que con su presencia en suelo europeo corrompan la identidad alemana o la francesa, sino, a la inversa, que no asuman la nueva querencia de la Europa comunitaria por las identidades intercambiables. Y, sobre todo, que a consecuencia de esto, de este nacionalismo *a destiempo*, estén cometiendo el grave pecado de racismo, al negarse a aceptar como conciudadanos a esos millones de palestinos en los que el imaginario europeo se empeña en ver al Otro de los israelíes, traduciendo así a términos domésticos, de convivencia con el «diferente», lo que no es sino un conflicto político-territorial entre dos naciones. La conclusión de este falaz razonamiento, cuyo mayor defecto, como dice Finkelkraut, reside en no ser capaz de distinguir entre el Otro y el *enemigo*, es por supuesto una radical condena de Israel y de la ideología que lo sustenta, el sionismo, en la que este nuevo *islamo-progresismo* cree haber detectado

la forma contemporánea del racismo y, por ende, el legítimo heredero del nazismo ¹¹.

Se entiende, pues, que todas las versiones actuales de la judeofobia acaben encontrándose, por un camino u otro, en el denominador común del rechazo del sionismo y de Israel. Pero no sólo en él. En el momento actual se constatan múltiples cruzamientos y confluencias de las diferentes temáticas judeófobas, lo que, según Taguieff, apunta a que se estaría constituyendo una especie de discurso político híbrido, mezcla de revolucionarismo marxista, de progresismo antirracista, de neocristianismo humanitario, de nacional-islamismo, de negacionismo de extrema derecha, etc. Este hibridismo sería, me parece, especialmente perceptible en la judeofobia islamista y en el antisemitismo de extrema derecha, que, tratándose de judíos, no dudan en apropiarse de todos los códigos ideológicos, por irreconciliables que éstos puedan ser entre sí: desde el lenguaje de corte marxista-leninista que denuncia el «imperialismo sionista», hasta el de corte nazi que se inspira en los *Protocolos de los Sabios de Sión* para hablar del «complot judío», sin olvidar, por supuesto, las referencias a Hitler o al Corán, indistintamente. Y lo mismo que ocurre con los códigos, ocurre con los argumentos: se puede, por ejemplo, negar el Holocausto al mismo tiempo que se afirma, a veces incluso en el interior de un mismo discurso, que los palestinos sufren hoy un «nuevo Holocausto» ¹². La incoherencia no es ningún obstáculo para ese *delirio paranoico* en que consisten, en esencia, tanto la ideología del nazismo como la del nacional-islamismo.

Aunque en menor medida, las otras versiones de la judeofobia actual también se prestan a contactos e intercambios con ideologías di-

¹¹ A partir de la premisa del carácter aberrante del sionismo, no se repara en que en Israel conviven en igualdad de derechos diversas etnias, colores, culturas, y hasta religiones, incluidos un millón de árabes, sin que la xenofobia sea hasta ahora un problema que quite el sueño a las autoridades. A la hora de condenar a Israel por racista, tampoco se repara en la realidad política de los países árabes, donde prácticamente no quedan ya judíos, y donde, cuando quedan, como en Marruecos, son uno de los blancos predilectos de la violencia islamista.

¹² Esta doble y contradictoria afirmación era, por ejemplo, el contenido del artículo que en julio de 2004 publicó en un periódico egipcio el Dr. Rif'at Sayyed Ahmad, director del «Centro de Investigación de Jaffa» de El Cairo. El artículo llevaba por título «La mentira de la incineración de los judíos», y en él se afirmaban las dos cosas al mismo tiempo: que el Holocausto era una mentira, y que la «matanza a sangre fría de niños, hombres y ancianos indefensos en Palestina hoy» era un «nuevo nazismo» (MEMRI, Serie Comunicados Especiales, núm. 782, 10 de septiembre de 2004). La difusión de este artículo por MEMRI provocó una controversia pública en Egipto, cuyo resultado fue la dimisión del redactor jefe del periódico que admitió su publicación.

ferentes e incluso opuestas, lo que hace que los diferentes motivos antijudíos presenten un grado muy elevado de movilidad, yendo de aquí para allá, como auténticos motivos *errantes*. Por lo mismo, más que de un *discurso*, como hace Taguieff, podría quizás hablarse de una *actividad discursiva*. Definida en términos estructuralistas, la nueva judeofobia consistiría, entonces, en un proceso incesante de fabricación y reciclaje de sentidos antijudíos y antisionistas, proceso estructurante pero nunca definitivamente estructurado, en el que lo de menos sería el contenido concreto de las imágenes y los estereotipos, siempre circunstanciales, y lo de más, la *maquinaria* misma que se ha puesto en marcha con la principal función o finalidad de arrojar sobre Israel y los judíos todas las culpas, las suyas y las ajenas.

BIBLIOGRAFÍA

- Avilés, J. (2003): «Terrorismo y antisemitismo», *Real Instituto Elcano*, Área de Terrorismo Internacional, 1 de diciembre.
- Finkelkraut, A. (1982): *L'avenir d'une négation. Réflexions sur la question du génocide*, Seuil, París.
- , (2003): *En el nombre del Otro. Reflexiones sobre el antisemitismo que viene*, Seix Barral, Barcelona.
- Fourest, C. (2001): «Journal de bord sur la Conférence de Durban contre le racisme», *ProChoix*, núm. 19, octubre.
- Gordimer, N. (2001): «Librémonos de este mal», en *El Mundo*, 26 de septiembre.
- Jahanchahi, A. (2004): «Irán: hacia un nuevo Múnich nuclear», en *El Mundo*, viernes 8 de octubre.
- Kepel, G. (2001): *La Yihad. Expansión y declive del islamismo*, Península, Barcelona.
- Klemperer, V (2001): *LTI. La lengua del Tercer Reich*, Minúscula, Barcelona.
- Meddeb, A. (2003): *La enfermedad del Islam*, Galaxia Gutenberg, Madrid.
- Taguieff, Pierre-André (2002): *La nueva judeofobia*, Gedisa, Barcelona.
- , (2004): «Invention et réinventions du mythe des 'Sages de Sion'. De la 'conspiration juive' au 'complot sioniste mondial' dans le monde arabo-musulman», en *Revue d'histoire de la Shoah*, núm. 180.
- Todorov, Tzvetan (1995): *Los abusos de la memoria*, Paidós, Barcelona.
- VV.AA. (2004): *Antisémitisme et négationnisme dans le monde arabo-musulman. La dérive*, *Revue d'histoire de la Shoah*, núm. 180, enero-junio.

Nueva Revista

DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE

la cultura al día,
la actualidad bien pensada

Si «los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo» (*Tractatus*, 5.6), los ensayos, poemas y relatos de *Nueva Revista* buscan ampliar el horizonte de comprensión de la actualidad para lograr una lectura sin fecha de caducidad.

Nueva
Revista

PRESIDENTE
Antonio Fontán

DIRECTOR
Rafael Llano

Nueva Revista
Javier Ferrero, 2
28002 Madrid
Tel.: 91 519 97 56

www.nuevarevista.com

LA DOBLE OLIGARQUÍA DE LA V REPÚBLICA FRANCESA

La noción francesa de «República» ha sido ambigua a lo largo de la historia. Ha designado un principio constitucional clásico –un régimen democrático liberal parecido al de otras muchas naciones occidentales–, pero también ha designado un proyecto de sociedad esencial, un modelo estatal-socialista que se diferencia considerablemente de las democracias liberales, que es incluso opuesto a ellas. La V República ha acentuado los rasgos estatistas de la forma de gobierno francesa, hasta el extremo de convertirla en una auténtica oligarquía que ha conseguido limitar hasta casi hacerlo desaparecer el papel del Parlamento y de la sociedad civil.

La Constitución francesa de 1958 no se conformó con poner remedio a la inestabilidad gubernamental, único mandato que De Gaulle, convocado para resolver la crisis de Argelia, había recibido de la nación de forma clara. Las trágicas circunstancias de su nacimiento permitieron a De Gaulle ir más lejos y poner en marcha las profundas reformas constitucionales que tenía en mente desde antes de la Guerra, que meditó largamente durante y después del conflicto, y cuyo espíritu difería radicalmente del de la democracia liberal tal y como se había encarnado en la III y IV Repúblicas (Nemo, 2005).

Estas reformas fueron inmediatamente recibidas con alivio, y todo el país pareció amoldarse a ellas durante los años siguientes, a pesar de las fuertes objeciones mostradas por algunas fuerzas políticas minoritarias. Sin embargo, es lícito preguntarse si estas reformas no han producido a largo plazo consecuencias particularmente nefastas en la vida política del país, consecuencias que ningún constitucionalista o

Philippe Nemo es Profesor de la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP-EAP), Director Científico del Centro de Investigación de Filosofía de la Economía.

sociólogo fue capaz de advertir *ex ante*. De hecho, mi opinión es que debido a una cadena de «efectos perversos» en la economía, la política y la sociedad, estas reformas han acabado finalmente –y estoy sopesando cuidadosamente mis palabras– por sustituir en Francia a la democracia por una *oligarquía*, y más en concreto por *una oligarquía duopolística o condominio*, el de la clase alta de la función pública y los sindicatos, que domina y priva de auténtica expresión política a la mayor parte de la sociedad civil. Precisamente, ése es el tema que pretendo analizar a continuación.

LA «SUPRESIÓN DEL PARLAMENTO»

Todo procede del hecho de que la V República –y no se vea en esto exageración alguna– *ha suprimido el Parlamento*.

En efecto, en lugar de constituir los poderes ejecutivo y legislativo como poderes independientes el uno del otro, a la manera del régimen presidencialista norteamericano (Émeri, 1988, 88) los constituyentes de 1958 sometieron totalmente el legislativo al ejecutivo mediante una serie de disposiciones que constituían una auténtica ruptura con la tradición republicana anterior:

- Designación discrecional del Primer Ministro y de los miembros del gobierno por parte del Presidente de la República, tanto para designarlos como para destituirlos (artículo 8) ¹;
- Derecho del Presidente a apelar a la opinión mediante referéndum con el fin de aprobar una ley o una modificación de la Constitución a las que se opusiera el Parlamento (artículos 11 y 89);
- Derecho de disolución de la Asamblea Nacional por decisión única del Presidente (artículo 12);
- Derecho del Presidente a atribuirse plenos poderes en caso de crisis grave (artículo 16);
- Enunciado restrictivo de las materias que corresponden a la ley, según el cual el Parlamento tiene autorización para discutir únicamente sobre estas materias (artículos 34 y 37);
- Control por parte del gobierno del orden del día del Parlamento (artículo 48);

¹ Con respecto al derecho que tiene el Presidente para destituir al Primer Ministro, la Constitución es ambigua. Sin embargo, ese derecho se ha impuesto en la práctica, excepto en los periodos de cohabitación.

- Supresión del derecho de interpelación y limitación rigurosa de las condiciones por las que la Asamblea Nacional puede presentar una moción de censura (artículo 49-2);
- Posibilidad otorgada al gobierno para hacer adoptar una ley sin que se produzcan debates parlamentarios (artículo 49-3) ².

Sabemos que este dominio absoluto del ejecutivo fue consagrado definitivamente cuatro años después, por medio de la reforma constitucional del 28 de octubre de 1962, que establecía la elección del Presidente de la República mediante sufragio universal directo. En efecto, a partir de ese momento, el Presidente gozó de la misma legitimidad que el Parlamento y aspiró a encarnar la soberanía del pueblo en la misma medida. Además ya no le hacía falta andarse con miramientos con los parlamentarios.

Desde aquel día, De Gaulle consideró que su única vocación consistía en ocuparse de la Política *con mayúscula*. En otras palabras, él mismo se encargaría personalmente de tomar todas las decisiones importantes relacionadas con la política exterior o interior. A partir de ese momento, el gobierno, que dependía totalmente de él, pasaría a ocuparse de asuntos de segunda fila, es decir de la «intendencia».

Por su parte, el Parlamento, al que el texto de la Constitución otorgaba importantes poderes –como provocar la caída del gobierno mediante una moción de censura– no tardó en comprender que también tendría que alinearse con el ejecutivo ³.

² Existe una última medida que limita los derechos del Parlamento, pero no la he incluido en esta lista puesto que el ejecutivo no se beneficia de ella. Se trata de la posibilidad que se otorgó al Consejo Constitucional para anular un texto legislativo que se considere inconstitucional. Originariamente, esta medida estaba destinada, desde el punto de vista de los constituyentes, a impedir que el Parlamento retomara, poco a poco, mediante leyes orgánicas, los poderes que la Constitución de 1958 le había arrebatado. Su fin era proteger al ejecutivo contra las intromisiones del poder legislativo. Con el tiempo, se ha producido un efecto imprevisto y casi inverso. Apoyándose en el Preámbulo de la Constitución, declarado parte íntegra del «bloque constitucional», el Consejo Constitucional, basándose en una decisión memorable que data del 16 de julio de 1971, se permitió anular numerosas leyes que el ejecutivo apoyaba expresamente, por considerarlas contrarias a las libertades públicas. Esta práctica se fortaleció aún más a partir de la revisión constitucional de 1974 y permitió que la minoría parlamentaria se apoderara del Consejo. Así fue como el Consejo Constitucional francés pudo empezar a desempeñar un papel más o menos equivalente al del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De Gaulle no previó ese vuelco de la jurisprudencia, que constituye un freno nada despreciable para los abusos de la mayoría, y cuya consecuencia produjo un ataque continuo por parte de los gaullistas y también del ala izquierdista del PS y de los comunistas, que clamaban contra el «gobierno de los jueces». Por lo tanto, no es cierto que los artículos 56 y 63 de la Constitución sean los responsables de la deriva que nos hemos propuesto analizar en este artículo.

³ La Constitución de 1958 no sólo fue redactada por los gaullistas, sino también por un comité formado por De Gaulle y Michel Debré, además de otras personalidades eminentes de la IV República (los «ministros de Estado», miembros del gobierno desde junio de 1958, especialmente Guy Mollet y Pierre Pflimlin). Estas personalidades deseaban fervientemente reforzar el papel del ejecutivo, pero no se puede decir lo mismo

En efecto, la dinámica presidencial de las instituciones no tardó en vencer cualquier posible resistencia. ¿Acaso la voluntad de una fracción de tal o cual grupo político podría impedir la actuación de un Presidente de la República elegido por el conjunto del pueblo? Evidentemente, las fuerzas políticas que incitaron a votar en su contra en las elecciones presidenciales siguieron luchando contra su política en el Parlamento. Sin embargo, sus propios partidarios tampoco pudieron oponerse a él, ya que su legitimidad personal no era capaz de medirse con la suya.

Poco tiempo después, esta situación se formalizó con el concepto de «mayoría presidencial». La fuerza parlamentaria dominante dejó de ser una coalición de partidos con identidad propia y acordó un programa pactado para la legislatura. Se trataba de una alianza electoral que tenía como único objetivo apoyar al Presidente. Aunque dicha noción haya evolucionado sensiblemente y se haya producido un cambio de De Gaulle a Pompidou, Giscard, Mitterrand y Chirac, podemos afirmar que acabó imponiéndose en la vida política de la V República, incluso en la izquierda, donde, sin embargo, los partidos comunista y socialista, antiguos herederos del partido leninista que aspiraba a la dirección suprema de la Historia, siempre habían considerado a sus diputados como simples ejecutores de las decisiones colegiadas del partido. Sin embargo, tuvieron que seguir el compás que les marcó François Mitterrand. Tal y como lo resume Jean-Louis Quermonne, «a partir de 1962, la mayoría parlamentaria ha procedido históricamente de la mayoría referendaria o presidencial, no a la inversa» (Quermonne, 1988, 291 y Avril, 1988, 166-179).

En efecto, los diputados elegidos de la facción presidencial no sólo tuvieron que someterse a la voluntad del Presidente, sino que además tuvieron que hacerlo muy rápidamente, incluso antes de salir elegidos. Además, para ser candidatos, tuvieron que jurarle una fidelidad absoluta. Era sin duda la consecuencia ineludible del escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas, junto con el derecho de disolución y la profesionalización de la vida política. Con este sistema, un diputado sólo puede ser elegido si ha recibido la investidura de un gran

con respecto a su deseo de reducir el del Parlamento. De ahí la elección de un régimen «semi-presidencial» o «semi-parlamentario» mediante el cual, al menos en teoría, cada uno de los tres grandes poderes, Presidente, Gobierno y Parlamento, conservan una parte equitativa de iniciativa. Sin embargo, estas virtualidades parlamentarias del texto de 1958 caducaron rápidamente como consecuencia de la práctica institucional. Cf. con respecto a este tema la introducción de Olivier Duhamel (1988).

partido que forme parte de una de las dos coaliciones mayoritarias, organizadas en torno a un presidente o un candidato presidenciable. Por tanto, la verdadera elección tiene siempre lugar en el círculo del actual o futuro Presidente. Una vez elegido, el diputado conserva su cargo, y por lo tanto su sustento, siempre y cuando no se disuelva la Cámara. Y si eso ocurre, sólo recuperará su escaño siempre y cuando no haya «traicionado» al Presidente y a su mayoría. Los diputados rebeldes no tienen ninguna probabilidad de continuar durante mucho tiempo su carrera política. En consecuencia, todos se muestran dóciles a pesar de que algunos se atreven a mostrarse en desacuerdo en asuntos sin importancia. *De este modo, en la V República el poder ejecutivo tiene en sus manos el destino de los diputados, al contrario de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios clásicos y en el régimen presidencial norteamericano*⁴.

Esta realidad no ocurrió sólo al principio de la V República, cuando estaba al mando la fuerte personalidad del General. En aquella época los diputados del partido gaullista recibían el nombre de «*godillots*» («calzonazos»), término vejatorio que reflejaba el asombro de la opinión pública ante la alineación sistemática de los parlamentarios con las posiciones del gobierno, un comportamiento que nunca se había producido en las Repúblicas precedentes. Esta expresión desapareció bajo los mandatos de François Mitterrand y Jacques Chirac, pero no porque las cosas hubieran cambiado, sino simplemente porque la opinión perdió la capacidad de sorpresa.

Durante la V República a partir de 1962, el gobierno no sólo toma las decisiones propias de un poder ejecutivo, sino que además regula campos más vastos que antes y, por último, ejerce más o menos directamente el poder legislativo. Por ello, desde que no existe separación

⁴ Cada vez que un diputado se muestra demasiado proclive a controlar las actividades de un departamento ministerial, o amenaza con ponerse a la cabeza de una iniciativa para oponerse a alguna medida del gobierno, o para aprobar alguna medida que el gobierno no desee, dicho diputado está políticamente muerto. No figurará en la siguiente Asamblea, pues tendrá que enfrentarse, dentro de su circunscripción, a un competidor investido por el partido mayoritario oficial. En el supuesto caso de que saliera reelegido debido a su constancia y empeño personal y si el Presidente decide vengarse, sufrirá otro tipo de sanción y se le marginará, es decir, no podrá defender eficazmente su circunscripción ante los ministerios y la Administración. Perderá su escaño en un abrir y cerrar de ojos. Creo que, en toda la historia de la V República, apenas existen excepciones a esta ley de bronce. Esta lógica no tiene la misma fuerza en el Senado. Ahora bien, la V República ha conservado las disposiciones de la IV, despojando al Senado de los dos poderes constitucionales que le conferían importancia durante la III: 1) El derecho de votar la ley en igualdad con la Cámara de diputados; 2) El derecho a derrocar al gobierno. Al margen de esta suerte de incapacidad jurídica, el Senado encontró fórmulas para incomodar a los gobiernos de la V República y, por este motivo, De Gaulle decidió suprimirlo definitivamente en 1969. La relativa independencia del Senado es consecuencia de su modelo de elección, que consigue escapar en gran medida al control directo del ejecutivo. Ahora bien, ¿de qué sirve la independencia si no se tiene poder?

de poderes y es el mismo gobierno quien fija las reglas dentro del marco en las que actúa, ya no se somete a ninguna regla. Se trata del restablecimiento de un poder «absoluto», que en algunos aspectos es mucho mayor que el absolutismo ejercido por los reyes de Francia.

Este absolutismo se ha mitigado a menudo en la práctica. Es preciso que la Asamblea vote, pero no se la puede hacer votar cualquier cosa y en cualquier momento, y más teniendo en cuenta que el Senado también vota y que nadie se puede permitir el lujo de conflictos sistemáticos. Por otra parte, estos frenos se reforzaron en el momento en que el partido gaullista dejó de ostentar la mayoría absoluta y tuvo que pactar primero con los centristas y después con la UDF de Giscard y Lecanuet. Lo mismo ocurrió con los gobiernos de izquierdas, durante los cuales el PC pudo imponer sus condiciones al PS, y en ocasiones hasta ha «negociado» las leyes con la Presidencia del gobierno o la Presidencia de la República ⁵.

Sin embargo, lo esencial del poder del Parlamento, tal y como existía en las Repúblicas precedentes, desapareció, en el sentido en que el Parlamento *ya no tiene los medios jurídicos y políticos para mantener a raya al gobierno ni a la Administración*. Por lo tanto, si bien es cierto que representa, aunque sea de manera insuficiente, a la sociedad civil, la *impotencia del Parlamento significa que la sociedad civil ya no puede tener en jaque a la maquinaria del Estado*. Ya no puede impedir que extienda abusivamente sus competencias, ni limitar sus gastos, ni obligarle a intervenir en un problema que considera particularmente importante. Para ella, el Estado ya no es lo que debería ser según el ideal común de las democracias, un simple instrumento. Por el contrario, es el Estado quien está en posición de imponer a la sociedad su voluntad o, lo que es peor, como veremos a continuación, su simple peso sociológico.

EL ABANDONO DEL REFERÉNDUM

Sin embargo, un nuevo cambio institucional privaría pronto a la sociedad civil de uno de sus últimos canales de expresión.

⁵ Los diputados cuentan con medios de presión y llegado el caso, de obstrucción (mediante la presentación de enmiendas) nada despreciables, contra los que el gobierno puede defenderse mediante elementos jurídicos (concretamente con el artículo 49-3), pero son tan desproporcionados que hay siempre muchas dudas a la hora de ponerlos en práctica en la actividad legislativa ordinaria. Por ello, es preciso hacer ciertas concesiones a su mayoría.

La Constitución de 1958, prevé el procedimiento de referéndum. En efecto, en lo que respecta a los principios democráticos, sabemos que dicho procedimiento es ambiguo. El plebiscito, al cual se parece, ha sido siempre el instrumento de los tiranos, desde la tiranía griega hasta los Césares y los Bonaparte. Permite a un hombre fuerte, apoyado en las masas, esquivar todas las mediaciones políticas y sociológicas que existan entre las masas y él, y recibir de este modo un «cheque en blanco». Sin embargo, el referéndum de la V República, al igual que los referéndums suizos, tiene un valor democrático real. A diferencia de los plebiscitos de los dictadores populistas, consiste en una elección regular y sincera, por sufragio universal libre y secreto, precedida de una campaña en la que se exponen puntos de vista contradictorios. El pueblo dispone, ya que no de un poder positivo capaz de orientar la política en el sentido de sus votos, por lo menos de un derecho de *veto*. Hay que reconocer que De Gaulle aceptó esta lógica y sus obligaciones hasta el final: como consecuencia del resultado negativo en el referéndum de 1969, abandonó el poder voluntariamente tres años antes de que su mandato concluyera según lo establecido.

En cambio, bajo el mandato de sus sucesores la práctica del referéndum cayó en desuso. Mientras que en once años, concretamente entre 1958 y 1969, se celebraron cinco referéndums, sólo se han convocado cuatro en los últimos treinta y cinco años de la V República ⁶.

Es preciso señalar que la Constitución de 1958, sin el referéndum, se convierte en un sistema unilateral, donde los gobernantes pueden hacer prácticamente lo que desean. Una vez sorteada la amenaza de la censura parlamentaria, siempre que quieran aprobar alguna medida y sospechen que el pueblo no está de acuerdo, o cuando se nieguen a adoptar una medida deseada por el pueblo, les basta... con abstenerse de realizar cualquier consulta. A medida que pasaban los años, el poder ejecutivo se fue instalando en esta actitud, sumamente confortable.

⁶ Bajo el mandato de De Gaulle (1958-1969): (1) 28 de septiembre de 1958, aprobación de la Constitución de la V República; (2) 8 de enero de 1961, sobre la autodeterminación de Argelia; (3) 18 de marzo de 1962, sobre la independencia argelina; (4) 28 de octubre de 1962, sobre la reforma constitucional que instaura la elección del Presidente de la República por sufragio universal directo; (5) 28 de abril de 1969, sobre la regionalización y la forma del Senado. Bajo el mandato de los sucesores de De Gaulle (1969-2004): (1) 23 de abril de 1972, sobre la adhesión de Inglaterra, Dinamarca e Irlanda a la CEE; (2) 6 de noviembre de 1988, sobre el estatuto de Nueva-Caledonia; (3) 20 de septiembre de 1992, sobre el Tratado de Maastricht; (4) 24 de septiembre de 2000, sobre el quinquenio.

LA EVANESCENCIA DEL «HECHO MAYORITARIO»

Cierto es que las elecciones presidenciales y legislativas –que de momento nadie ha propuesto suprimir en la V República– siguen vigentes. Desde esta perspectiva, la esencia de la democracia permanece a salvo. Pero en este punto, una observación más detallada nos revela una desviación inquietante.

Primero, se considera que estas elecciones colocan en el poder a «mayorías», presidenciales y legislativas. A este respecto, el modo de escrutinio utilizado en la V República da lugar a resultados sorprendentes. Tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas, se trata de un escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas, con restricciones de acceso en la segunda vuelta. Este tipo de votación somete al electorado a una bipolarización, e incluso a una doble bipolarización en el caso de las elecciones legislativas⁷. Este sistema perjudica seriamente la expresión democrática, ya que fuerza a los electores a votar en la segunda vuelta por partidos que no se corresponden con sus posiciones políticas, pero a los que se ven obligados a prestar su voto si quieren descartar a las fuerzas políticas que consideran todavía peores desde su punto de vista. Con dicho sistema, la mayor parte de las sensibilidades políticas del electorado pierden cualquier influencia. No están representadas en el «país legal». Además, este sistema, agravado como está por las medidas relacionadas con la financiación de los partidos, impide la aparición de nuevas fuerzas políticas a menos que sean lo bastante parecidas a algunas de las fuerzas del *establishment* como para poder agregarse a ellas (como Los Verdes a la «izquierda plural», aunque apenas hayan logrado un mínimo margen de reconocimiento). De ahí procede el evidente déficit democrático.

⁷ Según un argumento bien razonado de Jean-Luc Parodi. Por un lado, para ganar las elecciones es necesario reunir una mayoría. Los partidos pequeños, dispersos, representan por separado a una minoría, aunque sea sustancial, de electores, y no tienen ninguna posibilidad de ganar frente a un adversario organizado en un «gran» partido. En la segunda vuelta, este gran partido seguiría en la palestra y probablemente, como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la segunda vuelta, tan sólo se mantendría uno de los partidos pequeños de la oposición, el cual, al contar sólo con sus propios electores, estaría abocado al fracaso. Es un mecanismo inapelable que obliga a los partidos pequeños de cada gran facción política a asociarse con el fin de tener la oportunidad de ganar en la segunda vuelta. De ahí, una primera bipolarización izquierda/derecha. Por otro lado, para ganar en la segunda vuelta, es necesario haberse proclamado el primero de la propia facción en la primera vuelta. Nuevamente, los partidos pequeños de cada facción se ven obligados a aliarse entre ellos para hacer frente al gran partido de la facción. Cada facción se encuentra a su vez bipolarizada. De ahí la existencia, durante la mayor parte de la V República, de cuatro grandes fuerzas partidarias: RPR, UDF, PS, PC. Se habla con ironía de la «banda de los cuatro» para expresar que estos partidos, al margen de su rivalidad, son solidarios entre sí ya que deben su estatus de cuasimonopolio al sistema de escrutinio, un sistema que, naturalmente, han acordado no modificar jamás.

Todo ello provoca un nuevo efecto nocivo. Los electores no se sienten representados como es debido en el «país legal» y por eso, desde hace algunos años, reaccionan con indiferencia a las elecciones. Introducen en las urnas votos nulos o en blanco, se abstienen, ni siquiera se inscriben en los censos electorales o dejan de hacerlo cuando cambian de domicilio. Varios observadores han realizado cálculos alarmantes a partir de este hecho. En los comienzos de la V República, cuando el índice de abstención giraba en torno al 20%, las «mayorías» en el poder representaban en realidad a un 20% de los ciudadanos con derecho a voto (porque la «mayoría» ganaba con un número de votos que representaba al 40% de los electores inscritos, pero en realidad, los elegidos lo habían sido en la primera vuelta sólo por la mitad de dicho 40%). Pero cuando –como ha sido el caso en las elecciones recientes– la acumulación de no inscritos en los censos electorales, las abstenciones y los votos en blancos y nulos rondan el 50%, es probable que, en realidad, el vencedor de la segunda vuelta haya salido elegido sólo por una fracción ínfima de los ciudadanos en edad de votar. En la primavera de 2002, Jacques Chirac obtuvo el 19,88% de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que representa aproximadamente el 12% de electores potenciales⁸. Ahora bien, su comportamiento es digno de un rey de Francia, como hemos podido comprobar recientemente en el asunto, verdaderamente extraordinario, de Turquía... En la primera vuelta de las elecciones legislativas de ese mismo año 2002, la UMP, que en principio agrupa a todas las fuerzas de derecha, obtuvo el 33,3% de los votos. Esto representaba poco más del 17% de los electores potenciales...⁹

Ante estas condiciones, hablar de «hecho mayoritario» resulta una paradoja bastante singular. Los que están en posesión de la integridad de los poderes legislativos y ejecutivos no pueden prevalerse del apoyo de la mayoría popular. El «país legal» *no* representa al «país real».

⁸ Se calcula que el número de los no inscritos ronda los 4 millones. De los 41,2 millones de personas inscritas, hubo un 28,4% de abstenciones y, entre los votantes se contabilizaron un 2,5% de papeletas en blanco y nulas. Total de inscritos que no votaron: 31%. Total de los que podríamos llamar «fuera de juego» (no-inscritos + abstenciones + blancos y nulos): cerca del 40% de los electores potenciales. Por lo tanto, los electores de Jacques Chirac en la primera vuelta constituyen el 20% del 60%, lo que supone tan sólo el 11,9% de los franceses en edad de votar.

⁹ Resultados de la UMP: 33,3% de los votos emitidos. Abstenciones: 35,58% de los inscritos. Blancos y Nulos: 2,79% de los inscritos. Total de los inscritos que no votaron: 38,37%. Total de los que estaban «fuera de juego»: 48% (aprox.). Electores de la UMP en la primera vuelta: el 33,3% del 52% de los franceses en edad de votar, es decir el 17,33%.

El descontento del electorado se advierte de manera indirecta, pero elocuente, en su peculiar comportamiento después de veinte años. En efecto, desde 1981, *ha cambiado de «mayoría» en cada elección, en ambos sentidos*, mediante movimientos de péndulo cada vez más amplios.

En 1981, eligió a François Mitterrand como Presidente de la República, y por lo tanto una cámara de *izquierdas*. En 1986, eligió una cámara de *derechas*, lo que dio lugar a la primera «cohabitación», con Jacques Chirac como Primer Ministro. En 1988, el pueblo reeligió a Mitterrand y, sobre la marcha, una cámara de *izquierdas*, con Michel Rocard como Primer Ministro. En 1993 eligió una cámara de *derechas* y Édouard Balladur ocupó el cargo de Primer Ministro (segunda cohabitación). En 1995, Jacques Chirac fue elegido Presidente de la República y designó como Primer Ministro a Alain Juppé; pero dos años después, en 1997, tras la disolución de la Asamblea Nacional, el electorado envió al Parlamento una cámara de *izquierdas*, lo que permitió a Lionel Jospin convertirse durante cinco años en Primer Ministro gracias a una tercera cohabitación. Finalmente, en 2002, el pueblo reeligió a Jacques Chirac como Presidente y después, sin solución de continuidad, una cámara de *derechas*, convirtiéndose Jean-Pierre Raffarin en Primer Ministro...

Esta inconstancia, esta rabia del electorado nos hace pensar que lo que de verdad le interesa no es elegir un gobierno, sino «menear el árbol» con el fin de que caigan todos los gobiernos. Es un dato al que debemos prestar atención. Sin duda alguna, significa que el electorado no se siente en absoluto representado por ningún gobierno y que tiene el sentimiento confuso de que el sistema de representación democrática es un auténtico caos.

El siguiente análisis confirmará esta sospecha. Tras veinte o treinta años, el pueblo ha dejado de sentirse soberano porque *el verdadero poder, entre tanto, se ha convertido en una oligarquía*.

ESTABLECIMIENTO DE UNA OLIGARQUÍA. PRIMER COMPONENTE: LOS FUNCIONARIOS

El primer Presidente de la V República era, en espíritu, un estatalista. Al igual que los absolutistas y los comunistas, creía en la supremacía

de la política sobre lo económico y lo social y por tanto, en la «omni-competencia» del Estado, consagrado a asegurar no solamente las misiones «de regalía», diplomacia, defensa, policía y justicia, sino también las grandes políticas económicas, sociales e incluso culturales.

Nacido al mismo tiempo que esta filosofía política, el régimen no podía hacer otra cosa que dejar el terreno libre a los funcionarios. Para llevar a cabo las políticas del Estado, tanto las nuevas como las clásicas, De Gaulle necesitaba un buen número de funcionarios escogidos de entre los mejores talentos del país. Su elite pasó a formarse en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA) que él mismo había creado en 1945. Elegía como ministros a los «altos funcionarios», es decir, a hombres procedentes de la alta función pública, antes que a hombres procedentes de la sociedad civil. Aquel fue el fin de la República de los abogados, de los catedráticos, de los médicos y, en general, de las personas «destacadas». Así fue como la V República se convirtió en la República de los altos funcionarios.

No sólo ocuparon los cargos ministeriales y los puestos de más alta responsabilidad en la Administración, sino que además invadieron el mismísimo Parlamento. Mimados y protegidos por el poder, no tenían demasiados problemas para que el partido presidencial los invistiera y salir elegidos. En la Asamblea Nacional, se unen a la cohorte de diputados de izquierdas, de por sí funcionarios, profesores y catedráticos. El estatuto de la función pública, herencia del comunista Maurice Thorez que lo estableció en 1946, facilitó considerablemente estos hechos. Si no salían elegidos o reelegidos, volvían de forma automática a su carrera administrativa normal, aunque con visibles mejoras resultado de su paso por la actividad política. Para ellos, la dedicación a la política representaba un riesgo mínimo. Entre ellos y los candidatos a diputados procedentes de la sociedad civil se instauró una distorsión permanente de la competencia, que iba a tener, a lo largo del régimen, efectos duraderos y acumulativos ¹⁰.

¹⁰ Acumulativos, porque la escasez de los parlamentarios procedentes de la sociedad civil fomentaba la falta de interés por la actividad política de un buen número de entornos profesionales y/o sociales, ya que sabían que en ese mundo tenían muy pocas posibilidades de expresarse. Además, la cultura política tan sólo se mantenía en los entornos (y las familias) de los altos funcionarios, y también, como veremos inmediatamente, en el entorno sindicalista, así como, naturalmente, dentro del entorno periodístico; tres de los componentes del «microcosmos» político parisino. La Francia económica está ausente, al igual que la Francia intelectual.

De hecho, *en la Cámara de los Diputados, los funcionarios se han ido convirtiendo en mayoría, sobre todo los de izquierda*¹¹.

Es cierto que los funcionarios poseen las competencias necesarias, así como una formación en ciencias políticas y administrativas, conocimiento de los archivos, etc. Por tanto, no estoy poniendo en tela de juicio a las personas. Ahora bien, no tienen ningún incentivo, ni por su cultura ni por sus intereses corporativos, para ejercer presión alguna sobre la función pública, y en especial en lo que respecta al alcance de sus funciones ni a las dotaciones presupuestarias de las que se beneficia. Su interés personal les lleva a proteger a los hombres de las administraciones a las cuales habrán de regresar, con toda probabilidad, tras el fin de su mandato. En consecuencia, están mal preparados para comprender la lógica y los valores del sector liberal de la economía, lo que constituye una mutación de consecuencias extremas en relación con los Parlamentos de la III y la IV Repúblicas, que se componían de esas mismas «clases medias» que constituían el electorado de los partidos republicanos moderados.

El simple hecho de que aparezcan sobrerrepresentados en la Cámara, en los gabinetes ministeriales y en el gobierno, junto con la realidad de que, por definición, tienen un monopolio absoluto dentro de la Administración, compromete gravemente los equilibrios democráticos fundamentales. Esto es exactamente lo que trato de explicar cuando digo que el poder se ha convertido en una *oligarquía*.

La oligarquía de los funcionarios gobierna, regula y legisla¹². Por tanto, puede imponer sus conceptos y decidir las políticas que se ajustan a sus convicciones y a sus comportamientos atávicos, políticas que, en la mayoría de los casos, son estatalistas, intervencionistas, no liberales, cuando no antiliberales. Con este sistema oligárquico, los cargos electos no ejercen ya la vigilancia del Estado.

Bien es sabido que, desde que se votó la ley económica, el 90% de los gastos se aprueban año tras año sin discusión, como si el dinero

¹¹ Cuando la izquierda se hundió en 2002, la proporción de funcionarios en la Asamblea Nacional se redujo a una tercera parte.

¹² La mayoría de los textos que se discuten en las asambleas son los «proyectos de ley» que proceden del gobierno (las «propuestas de ley» procedentes de las mismas asambleas casi nunca son discutidas). Sin embargo, los proyectos de ley se elaboran en los servicios ministeriales y apenas se enmiendan en el Parlamento. Los funcionarios son los encargados de legislarlos, más o menos directamente.

que la sociedad asigna a los servicios públicos, cuyo destino decidieron un día los funcionarios, fuera suyo en lo sucesivo y los parlamentarios no debieran intervenir en esos asuntos.

La impotencia del Parlamento ante la Administración es patente. No posee medios de información propios y es tributario, a la hora de juzgar la eficacia de la Administración, de las informaciones que la propia Administración tiene a bien comunicarle ¹³. Ahora bien, funcionarios y ministros se unen frente a las veleidades del control parlamentario. Suele suceder que la Administración no responde a las preguntas u ofrece respuestas escuetas o dilatorias. Cuando un diputado se muestra demasiado curioso o exigente, cuando quiere involucrase en la bandera tricolor para recordar a los servicios administrativos que están bajo la autoridad del pueblo soberano, representado por el honorable parlamentario, el asunto llega hasta el ministro, después a Matignon o al Elíseo y de ahí regresa al diputado en forma de intimidación o amenaza. Así es como suele terminar el trámite.

En la alta función pública, de donde proceden los ministros y los miembros de los gabinetes, existe una «cultura del menosprecio» hacia los cargos elegidos y en general hacia la sociedad civil. No cabe duda de que esta cultura viene de muy lejos, de los tiempos del absolutismo y el bonapartismo. Retrocedió con la III y la IV Repúblicas, regímenes en los que los elegidos del pueblo, no funcionarios, llegaban a ser ministros y eran capaces de presionar a la Administración, incluso con dureza si se consideraba necesario. Pero en la V República recobró fuerzas, ensalzada principalmente por un renovado culto al Estado. Dicha cultura busca que los parlamentarios sean apenas algo más que unos provincianos, «productos del terruño» más o menos incultos, incompetentes e irresponsables, que fingen escuchar, pero de los que no hay que fiarse y a los que, en ningún caso, se pueden confiar asuntos serios ni informaciones sensibles. Los asuntos importantes se tratan en el Elíseo, en Matignon o en Bercy, siempre en las altas esferas. Cuando los propios parlamentarios son altos fun-

¹³ Arnaud Montebourg describe la importancia de este punto (2000) al igual que Bernard Zimmern (2001). Es cierto que los miembros del Parlamento trabajan en diversos organismos administrativos donde pueden obtener la información y que hace poco se crearon las «delegaciones parlamentarias» para tratar distintos asuntos, donde los parlamentarios trabajan en contacto directo con las Administraciones. Pero los medios autónomos de control de que disponen los parlamentarios franceses siguen siendo inferiores a los existentes en otras grandes democracias, especialmente en el Reino Unido.

cionarios, el menosprecio no tiene razón de ser, pero en estos casos se sustituye por la connivencia.

Ante esta circunstancia, la desilusión del pueblo resulta fácil de comprender. La democracia subsiste nominalmente. Cada vez que se celebran elecciones, el pueblo puede darse la satisfacción de expulsar a los parlamentarios que había elegido en las elecciones anteriores y sustituirlos por otros nuevos. Pero como, en cualquier caso, no son los cargos electos los que ostentan el poder, sino los funcionarios, y teniendo en cuenta que los funcionarios de derecha e izquierda se parecen, se protegen y se garantizan mutuamente sus cargos, su estatus y sus privilegios, lo que resulta evidente es que el pueblo ha perdido el tiempo. El sentido de sus votos no cambiará absolutamente nada. Ante tales condiciones, ¿qué sentido tiene ir a votar? La distancia entre el país real y el país legal es cada vez mayor. Hoy en día, podemos enumerar infinidad de asuntos en los que los franceses no están de acuerdo con las medidas adoptadas por los sucesivos poderes o bien consideran que no se les ha prestado la atención necesaria. Basta con citar los problemas relacionados con la educación, la delincuencia, la inmigración, el sistema tributario y Europa. La lista de frustraciones no es precisamente corta.

Como consecuencia, las instituciones de la V República han dado a luz un nuevo efecto perverso.

ESTABLECIMIENTO DE UNA OLIGARQUÍA. SEGUNDO COMPONENTE: LOS SINDICATOS

La lógica del asunto es la siguiente: dado que existe un déficit democrático en las instituciones, que la vía parlamentaria está bloqueada, que ya no se puede esperar una alternancia, la única manera de influir en las decisiones políticas en la V República es por vías extraparlamentarias, es decir, *sustituyendo la democracia institucional esterilizada por una «democracia» extra institucional.*

Se trata de un conjunto de medios legales e ilegales de ejercer presión sobre las autoridades: las manifestaciones legales, pero también las violentas, en las que se producen destrozos de materiales, quemas de coches o de edificios, ocupaciones de lugares públicos; las huelgas

legales, pero también los piquetes informativos, los ataques a la libertad laboral, las ocupaciones de las fábricas, los secuestros de empresarios y directivos; los problemas diversos de orden público, el bloqueo de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, trenes y estaciones...

Siempre ha existido la violencia social. Pero lo que ha aparecido y se ha generalizado durante la V República en Francia es, en mi opinión, algo sumamente específico. La mayor parte de los movimientos sociales de los últimos dos o tres decenios no son movimientos de insurrección. No pretenden apoderarse de los principales edificios públicos con el objetivo de cambiar de régimen, ni buscan el pillaje por sí mismo, ni tampoco destruir por destruir. De hecho, ellos mismos hacen que la sangre no llegue nunca al río. Da la impresión de que lo que buscan es, simplemente, hacerse oír.

En efecto, para hacerse «oír» no basta con hablar, ya que ahora, en el Estado legal, nadie o casi nadie escucha. Uno no se hace «oír» a menos que consiga aparecer en los medios de comunicación y, sobre todo, en la televisión. Pero esto no ocurre si no se llevan a cabo acciones lo bastante espectaculares como para merecer que los medios muestren las imágenes. Parar de trabajar no es lo bastante espectacular, como tampoco lo es manifestarse pacíficamente en la calle. De ahí el recurso a la violencia que genera imágenes impactantes, es decir, a actos violentos. Sólo este tipo de actos son capaces de *forzar la atención*. Fuerzan también a los poderes establecidos *a dar una respuesta* puesto que, si no lo hacen, seguirá creciendo la «factura» de los costes sociales de todo tipo, los costes directos provocados por la destrucción de materiales, los indirectos debidos al bloqueo de la actividad. De esta forma, crean así una situación en la que la responsabilidad de los gobernantes, voluntariamente o no, queda comprometida. Dicho de otro modo, el efecto político de estas acciones es más o menos comparable con las «interpelaciones» del gobierno a la Cámara que eran moneda corriente durante los antiguos regímenes parlamentarios. También se podría pensar que esos actos son, en gran medida, *el sustituto espontáneo encontrado por la sociedad civil para sortear el obstáculo a su expresión democrática normalizada creado por las instituciones de la V República*.

El estudio de las crisis sociales acaecidas durante dos o tres decenios en Francia, de su evolución y resolución, muestra que el ejecutivo ha escuchado casi siempre el «mensaje» así formulado. No es difícil ex-

plicar el porqué. Era la actitud más racional por su parte, teniendo en cuenta el dilema en que tales movimientos sociales lo sitúan.

- Difícilmente puede restablecer el orden por la fuerza. Después de la Liberación, un marxismo difuso está siempre presente en las opiniones de los medios de comunicación. Se ha conseguido extender la idea de que los actos violentos e ilegales, al estar al servicio de las «luchas» sociales, no son delito sino medios de acción lícitos y hasta meritorios. En cambio, lo moralmente injusto es la represión de estos actos, pues contribuye a bloquear la Historia, y sería «fascista» emplear la fuerza para hacer respetar las leyes. En este contexto ideológico, aplicar la ley comporta por tanto un alto coste político ¹⁴.
- Por el contrario, el laxismo es más fácil políticamente. En primer lugar, porque en un país muy estatalizado y socializado como es Francia, donde el Estado del Bienestar controla la mitad de la riqueza producida por la sociedad, el ejecutivo puede satisfacer *de facto* las reivindicaciones más diversas mediante medidas presupuestarias, reglamentarias o legislativas ¹⁵. Por otra parte, para satisfacer las reivindicaciones basta con aumentar los impuestos. Este suplemento en la presión fiscal repercutirá por igual -y, por tanto, cabe esperar que de manera indolora- sobre una sociedad civil que no podrá defenderse, ya que sus supuestos defensores (es decir, los miembros del Estado legal) son precisamente los que tienen la intención de expoliarla. Así, cuando los responsables ceden ante los movimientos callejeros, el coste político para ellos es prácticamente nulo.

Tras hacer este cálculo, los miembros de la oligarquía en el poder decidieron en general ceder, obteniendo así la paz y la perpetuación de su propia posición. Ese era, de hecho, su interés en tanto que grupo sociológico.

¹⁴ Los miembros de los sucesivos gobiernos franceses no han tenido nunca ni las ideas ni el discurso de una Sra. Thatcher, que no dudó en hacer demostraciones de fuerza ante los sindicatos cuando éstos pretendían oponerse a decisiones tomadas de acuerdo a los procedimientos democráticos establecidos. Es cierto que la Sra. Thatcher, que se ganó grandes enemigos entre ciertos sectores de la opinión británica, también gozó de firmes apoyos por parte de otros sectores de la misma. ¿Habría encontrado esos apoyos en Francia?

¹⁵ A diferencia de lo que ocurre en países más liberales, donde el Estado no puede, aunque quiera, influir de forma directa en los ingresos de las distintas categorías de ciudadanos. Es por ello que Friedrich August Hayek ha mostrado que no puede haber una verdadera paz civil si no es en una sociedad más liberal, en la que los ingresos de las distintas categorías sociales dependan casi exclusivamente del mercado. Este es, de hecho, un procedimiento anónimo en el que cada individuo, cuando pierde ingresos o no obtiene los

El problema es que el interés general del país era otro. Al ceder sistemáticamente frente a las acciones violentas, los sucesivos gobiernos han demostrado que la violencia produce beneficios. Sin ser conscientes de ello, han permitido que una nueva regla de juego se haya instaurado en la vida política; una regla no escrita que ha arraigado en las instituciones del país. Ha quedado claro para todos los grupos sociales o profesionales organizados que, si se remiten a los canales legales del aparato del Estado democrático, no se los escuchará, mientras que si salen a la calle, sí que serán escuchados. Han llegado a la conclusión de que el megáfono y el cóctel Molotov son ahora la única papeleta electoral que cuenta y que, en la democracia francesa, no se tiene voz deliberativa hasta que se perturba gravemente el orden público.

Se dirá: «Bueno, la democracia no ha muerto, sólo ha cambiado de terreno de juego». Es un razonamiento falaz, pues es evidente que al pasar del hemiciclo a las calles, la democracia certifica su propia abolición. Son siempre las mismas fuerzas sociales las que quieren y pueden ocupar la calle: los sindicatos y las otras «fuerzas minoritarias» organizadas según su modelo ¹⁶. Pero estas fuerzas no son en absoluto representativas de la sociedad francesa; son minoritarias y situadas siempre en una franja determinada de la sociedad. Sin embargo, ahí están, representados en exceso en la vida pública, muy por encima del número real de ciudadanos cuyas aspiraciones expresan. *Contrariamente a los principios de la democracia, las minorías que recurren a métodos violentos son capaces de imponer su voluntad a la mayoría que respeta la legalidad.*

que desea, no puede hacer otra cosa que culparse a sí mismo, a su mala fortuna o a su falta de discernimiento y donde, como contrapartida, los que están descontentos saben que pueden mejorar su suerte si se proponen responder mejor a las necesidades del mercado mediante sus propias iniciativas y su trabajo. El ejemplo americano muestra cómo una sociedad liberal puede alcanzar un alto grado de consenso. Las «reglas del juego» sobre las que todo el mundo está de acuerdo, aunque en ocasiones parezcan crueles, son iguales para todos. Cuando sufren contratiempos, las diferentes categorías sociales no tienen razones para pensar que son víctimas de una injusticia, de una discriminación o de una menor diligencia por parte del poder. No tienen, por tanto, razón para llegar a las manos con éste, o a luchar unos contra otros y transformar así la vida pública en un cuadrilátero. Por el contrario, cuanto más socialista es una sociedad, más comunes son los recursos; su reparto entre los distintos beneficiarios depende en exclusiva de la voluntad discrecional de los dirigentes. La cuestión es, por tanto, a quién se le van a atribuir los recursos, y cada categoría se esfuerza por persuadir al poder de que la favorezca a ella, antes que a las otras. En algunos casos, son los «lobbies», versión moderna de las camarillas de los cortesanos, los que influyen en este sentido; pero, a escala nacional, la tendencia es que las cosas se arreglen en la calle. Cuando hay una devolución política de los ingresos, la propia competencia económica se torna política. Las políticas socializantes no sólo están, por lo tanto, lejos de atenuar las divisiones sociales, sino que las aumentan. Los gobiernos franceses, tanto los de derechas como los de izquierdas, que han incrementado los impuestos creyendo que así reducían la «fractura social», han fomentado esa fractura.

¹⁶ Recordemos aquí la teoría de las «minorías activas», de la que Mancur Olson ha dado una versión sociológica sofisticada.

No resulta sorprendente el hecho de que los sindicatos deseen y puedan utilizar medios de fuerza. En Francia, son los herederos de una larga tradición insurreccional marxista, según la cual no es ilegítimo incumplir las reglas del Estado de derecho, pues éste no es sino un simple instrumento en manos de la clase dominante. Para oponerse a ellos, el ejecutivo dispone de la policía, de los CRS (Compañías Republicanas de Seguridad) e incluso, en casos extremos, del ejército. Sobre el papel, se les podría hacer frente con facilidad y así hacer respetar la ley. Pero el propio Partido Comunista y la CGT (Confederación General del Trabajo) son grupos armados (sólo fueron desarmados parcialmente tras la Segunda Guerra Mundial). Aunque actualmente los sindicatos no disponen de un arsenal comparable en naturaleza y tamaño a los de los grupos terroristas, sí tienen sus propias fuerzas de seguridad, formadas por individuos preparados para el enfrentamiento físico. En caso de confrontación real, los responsables del orden público saben que la sangre correrá inevitablemente, perspectiva a la que no desean enfrentarse. Por lo tanto, los sindicatos están paradójicamente tan seguros de su impunidad que son capaces de provocar enfrentamientos aún más graves. También los actos violentos y los distintos ataques a las libertades públicas se han convertido para ellos en métodos de acción normales y en una auténtica «cultura».

Los métodos habituales de los sindicatos se han extendido de hecho a otros grupos de minorías activas: las asociaciones que defienden un interés particular determinado o una tesis política extremista; o al menos que poseen suficiente solvencia para mantener militantes a tiempo completo capaces de organizar «acciones» con eficacia. Van desde SOS Racisme a Greenpeace, pasando por Attac, los «Foros Sociales», la asociación «Droit au logement», las asociaciones ecologistas, etc. También en este caso, la experiencia demuestra que estos grupos son de hecho grupos de poder.

Como estas organizaciones han demostrado que son capaces de tomar la calle, el poder tiene la tentación de prevenir, a base de discusiones y concesiones (incluidas las económicas), las acciones violentas que estos grupos podrían provocar. Muy a menudo, se apresura a satisfacer su primera reivindicación, la de recibir alguna forma de subvención. Y una vez subvencionados, ya están provistos de medios suplementarios (militantes y materiales) que les permiten volver a la calle con bríos renovados y así obtener nuevas concesiones. *De esta*

manera, los violentos y los delincuentes se convierten en interlocutores privilegiados del poder. En un primer momento, se les consulta de manera informal y más tarde se les integra en las estructuras permanentes de concertación. Terminan así por tener una influencia política completamente desproporcionada en relación con el número de ciudadanos al que representan. De nuevo, la voz de estas minorías se impone sobre la voz de la «mayoría silenciosa».

De este modo, la oligarquía funcionarial ha ido abriendo paso a una oligarquía bis, la formada por los líderes de los sindicatos y de otras minorías activas que no sólo se han convertido en interlocutores privilegiados y habituales del poder, sino que, además, juegan en la actualidad un papel de cogestores en parcelas estatales enteras, de forma paralela a la Administración oficial. Ahora bien, los sindicatos obedecen exclusivamente a sus propios dirigentes, grupos privados y minoritarios sin la mínima legitimidad democrática.

Por lo tanto, creo sinceramente que el poder político en Francia *todavía nominalmente en vigor, ha sido de hecho sustituido por una «duarquía», un dominio compartido por funcionarios y sindicalistas sobre una sociedad civil privada de derechos políticos reales.*

El gobierno se puede permitir ignorar aquellos grupos sociales que no pueden, ni quieren, servirse de los mismos métodos ilegales. Los ciudadanos pacíficos (por ejemplo los que se conforman con esperar el resultado de las próximas elecciones, o con la influencia que pueden ejercer a través de la prensa, las manifestaciones autorizadas, el proselitismo asociativo, etc.) ya no tienen, prácticamente, ni voz ni voto. O, en caso de que su voz no haya sido aún asfixiada, ha dejado de ser deliberativa. El resultado es que las categorías más civilizadas de ciudadanos de la población, en particular las elites de todos los sectores intelectuales, económicos o administrativos se ven reducidos a la esterilidad política, cuando es precisamente su aportación al debate político la que sería de mayor valor para el país.

El análisis de la vida política del país durante los últimos veinte o treinta años demuestra que todas las decisiones reales las toma este duopolio formado por funcionarios y sindicalistas. A lo largo de los años, y de manera acelerada a partir de 1981, hemos acabado por encontrar normal que toda decisión política de importancia se tome en de forma concertada y de acuerdo con los «interlocutores sociales».

Como si del famoso «síndrome de Estocolmo» se tratase, hasta los políticos de derecha, en sus breves periodos de vuelta al poder (1986-1988, 1993-1997, 2002-...), han acabado por encontrar agradables a estos sindicatos y grupos que los toman como rehenes. Se han acostumbrado cada vez más a hablar su idioma y han elevado el diálogo con los «interlocutores sociales» a la altura de una auténtica alternativa a la democracia parlamentaria. No hay reforma del Estado, ni política alguna, que no deba negociarse previamente con los «interlocutores sociales», *como si éstos tuviesen la misma validez para representar al pueblo soberano que las autoridades regularmente elegidas por sufragio universal y secreto*. Ni siquiera la mayoría parlamentaria puede tomar una decisión susceptible de molestar a estos grupos.

En numerosas Administraciones y empresas públicas, los sindicatos constituyen una jerarquía paralela a la jerarquía legal.

Tal es el caso, como es bien sabido, de la educación nacional, donde sería más justo decir que los sindicatos son la única jerarquía que administra el sistema, ya que la mayor parte de los funcionarios del ministerio que, en principio, lo coadministran, son también sindicalistas obedientes a las órdenes de su organización. El ministro y su gabinete, únicos representantes legítimos del pueblo supuestamente soberano, no tienen ningún poder real por sí solos (incluso y sobre todo en cuestiones de «intendencia»). Pero éste es un caso extremo que merece un análisis específico. Es sabido que el sistema educativo ha sido desde principios del siglo XX el principal eje estratégico de la izquierda, que ha dedicado toda su energía a la completa inversión de este campo, habiendo logrado todos sus objetivos.

Esta situación de gestión conjunta se produce también en el resto de ministerios, especialmente en el ministerio de Hacienda, donde son los sindicatos los que fijan en gran medida la doctrina y la práctica fiscal. Se da asimismo en las grandes empresas públicas, EDF, SNCF, RATP, Air France, etc., en la mayoría de las cuales la CGT y la FO (Force Ouvrière) se reparten el poder a partes iguales con las direcciones oficiales. Los sindicatos, finalmente, gestionan directamente el gigantesco sector de la protección social, que consume más de la mitad de los fondos públicos y un cuarto del PIC (es cierto que los dos componentes de la oligarquía se disputan con dureza el poder en este sector, como hemos visto recientemente tras el asunto de los trabajadores temporales del espectáculo).

La situación de los sindicatos en la vida política francesa es, por lo demás, insólita debido varias razones. Su estatus y su rol son más oficiosos, y derivados de la costumbre, que oficiales y legales. Su papel no ha sido nunca normalizado de verdad, es decir, regulado por escrito dentro del derecho privado y público. Evidentemente, no se ha podido reflejar en la Constitución que las decisiones del gobierno y del Parlamento que representa al pueblo no tienen capacidad ejecutiva a menos que esos grupos privados y minoritarios, los sindicatos, las hayan refrendado. Eso habría significado reconocer que el pueblo ya no es soberano. Del mismo modo, tampoco se han legalizado nunca los métodos insurreccionales utilizados por los sindicatos y las asociaciones. Por ejemplo, el derecho a la huelga sigue consistiendo en la facultad de los trabajadores para detener su actividad sin que su contrato de trabajo quede jurídicamente invalidado. Pero jamás se han regulado los «piquetes informativos», y mucho menos la ocupación de fábricas, el secuestro de directivos, el bloqueo de vías de transporte, etc. Todo ello es, simplemente, producto de la costumbre. También, y de manera análoga, el sistema de protección social se encuentra en gran medida al margen de la legalidad. Los organismos de protección social, gestionados en parte por las organizaciones sindicales, siguen siendo asociaciones de derecho privado («Ley de asociaciones de 1901»), por mucho que disfruten de prerrogativas de poder público (el derecho de recaudar obligatoriamente las cotizaciones sociales). Los conflictos de los particulares con estos organismos no los dirimen los tribunales del Estado, ordinarios o administrativos, sino que se han creado jurisdicciones *ad hoc*, los «Tribunales de Asuntos de la Seguridad Social» («Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale»), en los que los sindicalistas son mayoría y en los que son juez y parte, y en los que a menudo no hay posibilidad de apelación. Esta desmesurada situación del derecho común es, al mismo tiempo, *conocida* por los especialistas y no *debatida* nunca dentro del espacio público.

Las causas de esta situación son fáciles de explicar. Estos aspectos de la situación de los sindicatos son fruto de acuerdos informales entre el ejecutivo y los grupos de presión, adoptados de forma secreta en los ministerios y los despachos para resolver o prevenir conflictos sociales. Para circunscribir la situación de poder de los sindicatos en derecho, habría hecho falta que estas negociaciones hubiesen sido públicas y que los acuerdos se hubiesen ratificado según los procedi-

mientos legales. En los debates que necesariamente habrían tenido lugar, los sindicatos habrían tenido que justificar sus demandas de apoyo por parte de los poderes con argumentos científicos y morales. Esto habría resultado sumamente difícil. Se habrían producido controversias públicas muy serias y auténticas batallas de enmiendas y votaciones en las dos cámaras del Parlamento. Llegado el caso, el asunto habría debido zanjarse mediante referendums populares, precedidos a su vez por grandes movimientos de opinión, etc. No habría habido un consenso para conferir a los sindicatos poderes superiores a los que pueden pretender, dado el juicio real que la opinión pública tiene sobre ellos. Y, por lo tanto, nada induce a pensar que la situación resultante del funcionamiento propio de los procedimientos democráticos habría sido similar a la que se ha producido por el simple juego de relaciones de fuerza.

El resultado es que nunca se ha corrido el riesgo de apelar a este procedimiento. La democracia ha quedado completamente fuera de juego como resultado del proceso que ha conducido al poder actual de los sindicatos. Este poder es fruto de un entendimiento, en principio precario, entre los distintos componentes de lo que llamamos la oligarquía. De igual manera que, en una guerra, el frente se establece allí donde la batalla conduce empíricamente a los ejércitos, la frontera entre los respectivos poderes del Estado legal y los interlocutores sociales se establece allí donde las luchas sociales y las renunciaciones sucesivas de los gobiernos la han situado en la práctica. Es evidente que en este arreglo no ha prevalecido ninguna lógica jurídica ni democrática.

Sin embargo, el arreglo tiene *una* «lógica» descifrable: se ha permitido a los dos componentes de la oligarquía repartirse los despojos de una sociedad civil que no estaba representada ni en el Estado legal ni en la calle.

CONSECUENCIAS: EL CRECIMIENTO INDEFINIDO DEL SECTOR PÚBLICO

Se puede observar cómo los componentes de la oligarquía tienen en el presente un punto en común: vivir del erario público. Esto es obvio en el caso de los funcionarios. No lo es menos en el de los sindicatos, ya sea como organizaciones (la mayor parte de sus recursos es, de

una forma u otra, de origen público), ya sea porque representan los intereses de los asalariados de empresas públicas o de categorías sociales que reciben ayudas. Otro tanto se puede decir de las asociaciones subvencionadas.

Estas categorías, que tienen 1) un interés en aumentar las contribuciones obligatorias y 2) el poder para hacerlo sin límites y sin chocar con los contrapoderes, simplemente... lo han hecho.

El fenómeno se ha producido muy en especial desde que los socialistas llegaron al gobierno ¹⁷. Previamente, si bien los gobiernos de De Gaulle, Pompidou y Giscard, habían sido estatistas, sólo en un grado limitado favorecieron el desarrollo del Estado del Bienestar. Eran conscientes de que, en cierta medida, un crecimiento excesivo del mismo sería perjudicial para el dinamismo y la competitividad de la economía francesa. Pero cuando los socialistas y los comunistas llegaron al poder, se produjo una inflexión decisiva. Según la ideología socialista, el mercado no es la forma normal de gestión de la economía; la clase asalariada de derecho privado se encuentra, por el solo hecho de serlo, en situación de explotación. El resultado es que la mayor parte de la población activa debe pasar a ser funcionaria ¹⁸. Las reticencias ideológicas al crecimiento del Estado dejaron de existir en los sucesivos gobiernos a partir de 1981 (habiendo estado presentes en los gobiernos anteriores), por lo que todos los componentes de la oligarquía, los gobiernos, los partidos mayoritarios, la función pública y los sindicatos se encontraron en la misma longitud de onda. Se pusieron tácitamente de acuerdo para impulsar un crecimiento tentacular del Estado, así como para aumentar el peso de los impuestos, haciendo oídos sordos de forma unánime a los análisis económicos que demostraban el carácter absurdo y suicida de esta política. Los socialistas y comunistas se dieron cuenta en esta ocasión de que las instituciones de la V República les conferían prácticamente todos los poderes deseables; pudieron explotar a fondo las virtualidades del intervencionismo esta-

¹⁷ Es decir, casi sin interrupción desde 1981, puesto que los periodos en que la derecha ha estado en el gobierno han sido, en gran parte, bajo el sistema de «cohabitación», excepto en el periodo 1995-1997 y desde 2002.

¹⁸ Sabemos que esta visión ha sido revisada parcialmente por la «segunda izquierda», la izquierda «moderna» y «americana», pero ésta siempre ha sido minoritaria en el Partido Socialista francés e inexistente dentro del Partido Comunista.

tal presentes desde el principio en estas instituciones, a las que desde entonces se abstuvieron de criticar.

El resultado aparece en las estadísticas. El gasto público, los impuestos, el número de personas que viven del dinero público y de la «redistribución» no han dejado de aumentar desde 1981. Al mismo tiempo, *es en Francia donde más han aumentado entre 1970 y 2004 y es en Francia donde son más elevados* en comparación con los otros países de la UE y de la OCDE.

La tabla siguiente muestra la proporción del gasto público con relación al PIB en el año 2000 en los principales países de la UE ¹⁹.

Bélgica	47
Francia	51,4
Alemania	42,9
Italia	44,4
Holanda	41,5
Reino Unido	39,2
Total UE	44,2

Estas cifras reflejan el aumento del peso en la población activa del sector público y del resto de categorías que viven del dinero público. En 1998, sobre una población activa de unos 26 millones, 6,5 millones eran empleados directos de las Administraciones y empresas públicas (3,2 millones para la Administración del Estado central, 1,6 para la Administración territorial, 0,9 para la sanidad pública, 0,75 para las empresas públicas) ²⁰. A eso hay que añadir los empleados de los organismos de protección social, que también viven de fondos recaudados mediante la coacción, aunque jurídicamente no sean funcionarios. En cuanto a los sindicatos, a los asalariados de las asociaciones subvencionadas, a los de la «economía social», todas estas categorías también viven principalmente del dinero público. En total, y teniendo en cuenta el hecho de que estas cifras han aumentado desde 1998, parece que *entre un cuarto y un tercio de la población activa francesa vive hoy de los impuestos*.

¹⁹ Fuente: Marseille (2002). Ver también, Marseille (2004). Se pueden encontrar muchas otras cifras, que ilustran las mismas tendencias, en el excelente trabajo de Brulé y Drancourt (2004).

²⁰ Fuente: IFRAP (Instituto Francés para el Estudio de las Administraciones Públicas).

Este considerable aumento del peso del Estado en Francia en un periodo de tiempo tan corto tiene sin duda varias causas. En primera posición se encuentra la estructura doblemente oligárquica que acabamos de identificar ²¹. La situación actual de la función pública en Francia resulta de una acumulación de decisiones presupuestarias, reglamentarias o legislativas tomadas a lo largo de los últimos treinta años. *Si todas ellas han ido en la misma dirección, quiere decir que ha sido el mismo tipo de personas el que las ha tomado: los miembros de las dos oligarquías.*

Por lo demás, resulta entretenido ver cómo se disfrazan las cosas en los documentos públicos. Hay quien se sorprende, recurriendo a términos pseudoeconómicos, de la «rigidez a la baja» de los impuestos, como si se tratase de una fatalidad, de una ley objetiva de la economía, cuando se trata de la suma total de las propensiones ideológicas y de los intereses que han determinado las elecciones de los distintos actores. Si dichas propensiones e intereses tuviesen un sesgo distinto, presenciaríamos más bien una «rigidez al alza», como en los Estados Unidos, el Reino Unido o Japón. Un hecho que muestra a las claras la singularidad de la situación francesa es que en numerosos países extranjeros donde no existe ese mismo *condominio*, ha sido posible decidir sin mayores dificultades una bajada sensible de los impuestos en los últimos años ²².

Vayamos más lejos e intentemos analizar ahora la modificación del conjunto de la sociedad que se ha producido como consecuencia del déficit democrático estructural de las instituciones en la V República.

En pocas palabras, se puede decir que se ha producido una *transferencia forzosa de riqueza desde el sector privado al sector público*. Por mucho que se haya hecho en nombre de la justicia social, que consiste en principio en tomar el dinero de los «ricos» para dárselo a los «pobres», la transferencia de riqueza que realmente se ha producido en Francia no ha sido en un sentido vertical desde la «Francia de arriba» hacia la «Francia de abajo», sino una *transferencia horizontal desde las*

²¹ Se ha producido también un crecimiento del Estado durante los últimos decenios en muchos otros países, incluso allí donde las estructuras políticas son muy distintas de las que existen en Francia. Lo que intentamos explicar aquí no es el fenómeno general del crecimiento del Estado del Bienestar en la Europa de la posguerra, sino la magnitud récord que este fenómeno ha alcanzado en Francia.

²² Es el caso de Holanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Japón, según distintos documentos de la OCDE.

clases medias del sector privado no sindicadas hasta las clases medias sindicadas del sector público.

Este hecho no se encamina, desde ningún punto de vista, hacia una mayor justicia social. Se trata en realidad de una expoliación, de un acto de saqueo, de un robo e incluso de un «robo a mano armada», puesto que una parte respeta la legalidad y la otra recurre a la fuerza. Se ha creado una situación de *explotación* en la que algunos se benefician del trabajo de los otros sin prestarles un servicio equivalente. El intervencionismo estatal francés, reforzado durante la V República, se podrá jactar de haber inventado *una nueva forma de explotación del hombre por el hombre y de confiscación de la plusvalía*. Si Marx levantara la cabeza, hablaría de una nueva clase dominante, el *condominio* funcionarios-sindicatos, y de una nueva clase dominada, el sector privado y la sociedad civil. Si observamos los datos recogidos por Jacques Marseille (2004) o por Michel Brulé y Michel Drancourt (2004), la nueva clase dominante, al igual que la del Antiguo Régimen, se beneficia de hecho de auténticos *privilegios*: salarios superiores a los del sector privado (excepto en los puestos más altos), jubilaciones más tempranas y más ventajosas, jornada laboral reducida y, en consecuencia, una expectativa de vida ligeramente superior a la del resto de la población. Los agentes de la EdF, de la SNCF, de la RATP, del Banco de Francia. etc., gozan hoy en día de salarios y ventajas muy superiores a las que tendrían si ofreciesen el mismo servicio en un mercado libre, donde su remuneración estaría ligada al valor marginal que el consumidor estuviese dispuesto a aceptar voluntariamente. Dicho de otro modo, ofrecen bastante menos trabajo, a cambio de unos ingresos determinados, del que deberían ofrecer si el intercambio fuese contractual. *El diferencial está relacionado con el uso de la fuerza*: en primer lugar de la violencia generada por ellos mismos, en tanto que grupos de presión sindicados y organizados que utilizan medios ilegales, y, después, de la violencia coercitiva de un Estado que consigue la paz con los sindicalistas con cargo al bolsillo de los contribuyentes. No nos encontramos en el marco del derecho y las normas, sino en el de la fuerza, de lo que podríamos llamar una «guerra civil fría». La situación, lejos de ser «progresista», es muy similar a las situaciones de saqueo que se han producido durante toda la Historia antes de que se inventase el Estado de derecho democrático y liberal. La forma de actuar de nuestro sector público, en relación

con el sector privado, es poco más o menos como la de los guerreros tuaregs que extorsionaban a los viajeros de las pacíficas caravanas del desierto, o como Gengis Khan, o Tamerlán y otros turcos sometiendo a tributo a los pueblos conquistados.

Insisto en que ninguna ideología, ninguna concepción de la «justicia social», justifica esta lógica del saqueo, menos aún la socialdemocracia, que excluye por principio la existencia de privilegios. El hecho no debe suscitar ninguna sorpresa puesto que no ha habido ninguna *idea* que organice este proceso. Es, en realidad, el fruto de un gigantesco «efecto sociológico perverso»: el desarrollo histórico de aquello mismo que estaba ya presente, aunque fuera en germen, en las instituciones no democráticas de la V República.

CONCLUSIÓN

La única forma en que Francia podrá empezar a recuperarse de esta situación será mediante un cambio profundo en las instituciones y, antes de eso, mediante el restablecimiento de una mejor representación del «país real» en el «país legal».

La V República ha creado una situación de no representatividad del país legal sin precedentes desde los orígenes de la República. Evidentemente, está relacionada con la filosofía personal del general De Gaulle. De Gaulle creyó que un solo hombre podía «encarnar» la nación, dentro de una línea maurrasiana combinada con un misticismo romántico y recuerdos de la historia de Francia interpretados de manera unilateral y sumaria. Fue un doble error. Ciertamente es que un hombre solo, elevándose por encima de los partidos y gracias a su manifiesta superioridad, puede hacer callar las pasiones posteriores a una guerra civil fratricida, como hizo Napoleón tras la Revolución Francesa. También puede ser beneficioso para un país en guerra confiar su suerte a un hombre de talla excepcional, como Gran Bretaña hizo con Churchill; pero es absurdo generalizar e introducir en las instituciones permanentes de un gran país el derecho de un solo hombre a representarlo o, más aún, a «encarnarlo» como si él mismo se hubiese convertido en su sola verdad por encima de todos los problemas de la vida política, económica y social del país.

Este hecho es contrario a todo lo que sabemos acerca de las condiciones epistemológicas reales del conocimiento del hecho social. Se aceptaba esta ficción durante la Antigüedad y la Edad Media, cuando los mitos establecían que un dios comunicara al rey por él elegido una parte de su propia sabiduría trascendente. Para que su tesis fuese aceptada en un tiempo en el que –en principio– predomina el pensamiento científico, los gaullistas se basaron (y por desgracia, no sin razón) en la pervivencia de viejos atavismos monárquicos en el pueblo francés, que también el mariscal Pétain supo despertar. Pero la sociedad civil es fundamentalmente compleja. Se caracteriza por una pluralidad irreductible de categorías sociales, cada una con su propia concepción del mundo y con sus propios valores, intereses y problemas. Es un sinsentido científico pretender que un solo hombre comprenda todo esto y lo tenga en cuenta en todas sus decisiones.

El principio mayoritario tiene virtualmente los mismos defectos y conduce a los mismos callejones sin salida. En este sistema, como ya hemos visto, los parlamentarios deben mostrar su adhesión al jefe para ser investidos, y los electores deben respaldar al candidato impuesto por el jefe. Es, por tanto, un proceso esencialmente reduccionista, que destruye la representatividad del país legal. Es también un proceso autodestructivo ya que si las supuestas «mayorías» son poco representativas y por este motivo el electorado se va absteniendo cada vez más de participar en las elecciones, su representatividad tiende a disminuir hasta la insignificancia.

Las grandes asambleas verdaderamente pluralistas, con una composición que refleja con fidelidad las grandes familias de pensamiento presentes en la opinión, tienen más oportunidades de representar con validez a la sociedad y de solucionar los problemas de la misma, siempre que puedan de verdad ejercer una influencia sobre las decisiones. Es cierto que no proporcionan un espectáculo demasiado atractivo debido a las disputas, a las divisiones en apariencia irreconciliables, a comportamientos por lo común incoherentes y erráticos; por eso debemos establecer una serie de reglas para inculcarles disciplina y garantizar que su trabajo conduzca a la toma de decisiones. Pero cuando se obtiene este resultado –tal como se ha conseguido en muchas de las Constituciones de nuestros países vecinos–, el déficit estético queda compensado por la eficacia funcional. La fuerza de las placas tectóni-

cas de la sociedad se transmite de forma efectiva a las superestructuras del país legal antes de que irrumpen los temblores de tierra ²³.

Estoy convencido de que la democracia sólo se restaurará en Francia si el papel del Parlamento se refuerza de forma decisiva. En el contexto de este artículo, no puedo entrar en detalles sobre una reforma de esas características; simplemente me contentaré con apuntar algunas pautas de reflexión.

La reforma debería abarcar, como mínimo, *la introducción de una buena dosis de escrutinio proporcional* así como *la recuperación del control de su propio orden del día por parte del Parlamento*.

Ahora bien, con el fin de no volver a caer en la parálisis y en la impotencia propias de la IV República, estas medidas destinadas a reforzar el Parlamento deberían compensarse con otras que garanticen de la misma forma la autonomía del poder ejecutivo. Podríamos salir de la actual ambigüedad de un régimen que ha sido calificado de «semi-parlamentario» o «semipresidencial», y optar por un régimen verdaderamente presidencial, en el que el poder ejecutivo sea competencia únicamente del Presidente sin la presencia de ese «fusible» que es el actual Primer Ministro ²⁴.

²³ Se puede decir que ni siquiera seiscientos diputados podrían representar adecuadamente a sesenta millones de ciudadanos. De esto no cabe duda, pero este problema irresoluble, familiar a la filosofía política, sólo existe para un régimen totalitario como el que Rousseau imaginó. Si el Estado puede decidirlo todo acerca de la vida de los ciudadanos, y si el poder del Estado no es totalmente representativo, está claro que el Estado se comporta de forma despótica. Afortunadamente, la cuestión no se plantea en un régimen de democracia liberal que respeta los derechos del hombre, la propiedad, los contratos y las libertades civiles. Puesto que, en ese caso, los ciudadanos son libres para dirigir su vida personal, social y económica como ellos quieran: sus vidas dependen de lo que hacen con lo que poseen y con las relaciones que entablan con los demás a través de contratos libres. Por lo tanto, no necesitan que sus pensamientos, sus preocupaciones ni sus proyectos estén representados en el aparato estatal, incapaz de influir directamente en sus vidas. Por supuesto, necesitan poder hacer oír su voz en los temas que son públicos por naturaleza, a saber, la legislación y el control del gobierno y de la Administración. Además, se puede soñar con que los hombres encargados de estas dos labores no sean los mismos. Personalmente, me identifico con el sistema propuesto por Friedrich August Hayek: un bicameralismo funcional en el que existe una Cámara alta que se encarga únicamente de la legislación, mientras que otra asamblea se encarga de controlar la actividad gubernamental. Ambas asambleas tienen unos métodos de contratación y un periodo de mandato claramente diferenciados. Probablemente, este sistema acabe siendo el de las democracias liberales del futuro (Hayek, 1983, tomo 3, y mi propio análisis en Nemo, 1988, 343-358).

²⁴ Debemos este curioso esquema a De Gaulle. En cuanto empezó a creer en el mito de la «encarnación» de la nación en un hombre, no le molestaba reunir en su augusta persona dos cargos contradictorios, el de jefe responsable del ejecutivo y el de jefe irresponsable del Estado (ya que él consideraba que estaba «por encima de los partidos», como si de un rey se tratara). Rompía con la teoría que inventaron los ingleses y que, hoy en día, ha sido adoptada por todas las monarquías europeas: un rey constitucional que «reina pero no gobierna». De Gaulle inventó la teoría de un presidente que reinaba y gobernaba a la vez y que, por lo tanto, podía protegerse de las sanciones derivadas de sus errores, ya que el jefe del ejecutivo se ocultaba bajo el carácter sagrado de la función del jefe de Estado. Desde entonces, se hizo necesario instaurar al menos un cargo «fusible», el de Primer Ministro, al más puro estilo francés. Sin

El esquema semipresidencial actual sería sustituido por una fórmula presidencial más sincera y comprensible. El Presidente sería elegido para un mandato más breve, de cuatro años, como el Presidente de Estados Unidos, y no de cinco, como el actual mandato presidencial francés. Durante el periodo de legislatura, el Presidente no podría ser cesado por el Parlamento. Estaría protegido de cualquier moción de censura intempestiva del Parlamento, así como de los cambios de mayoría durante el periodo de duración de la legislatura. De esta manera podría dirigir eficazmente el país. En contrapartida, no podría legislar a su antojo, en particular, en el terreno fiscal. El Parlamento, que será más representativo y más independiente, será ineludible. Dispondrá de los medios constitucionales que le permitan *obligar* al Presidente y a su gobierno a tener en cuenta el estado de opinión.

En resumen, lo que propongo es *restaurar en Francia la separación de poderes* para poner fin a la situación actual de neoabsolutismo. Sabemos que la clave de las instituciones libres, por mucho que los hombres de doctrina la hayan analizado y comprendido desde el siglo XVIII, se ha visto siempre amenazada en la práctica por la tendencia del poder a concentrarse y, como dice Montesquieu, a «ampliarse hasta que encuentra unos límites». Creo llegado el momento de volver a estos límites con claridad.

De Gaulle tenía razones más que suficientes para fundar la V República, hace ya cuarenta y siete años. Resolvió los graves problemas que perturbaban al país en 1958. Lo que no podía prever –y no se lo reprocho– eran los problemas a los que se iba a enfrentar la sociedad francesa en 2004, que son de una naturaleza bien distinta. Estoy convencido de que no perjudico a su memoria al sugerir que ha llegado la hora de fundar una «VI República» que permita a la democracia formal funcionar mejor y que, al integrar el país real en el país legal, restablezca en Francia el Estado de derecho.

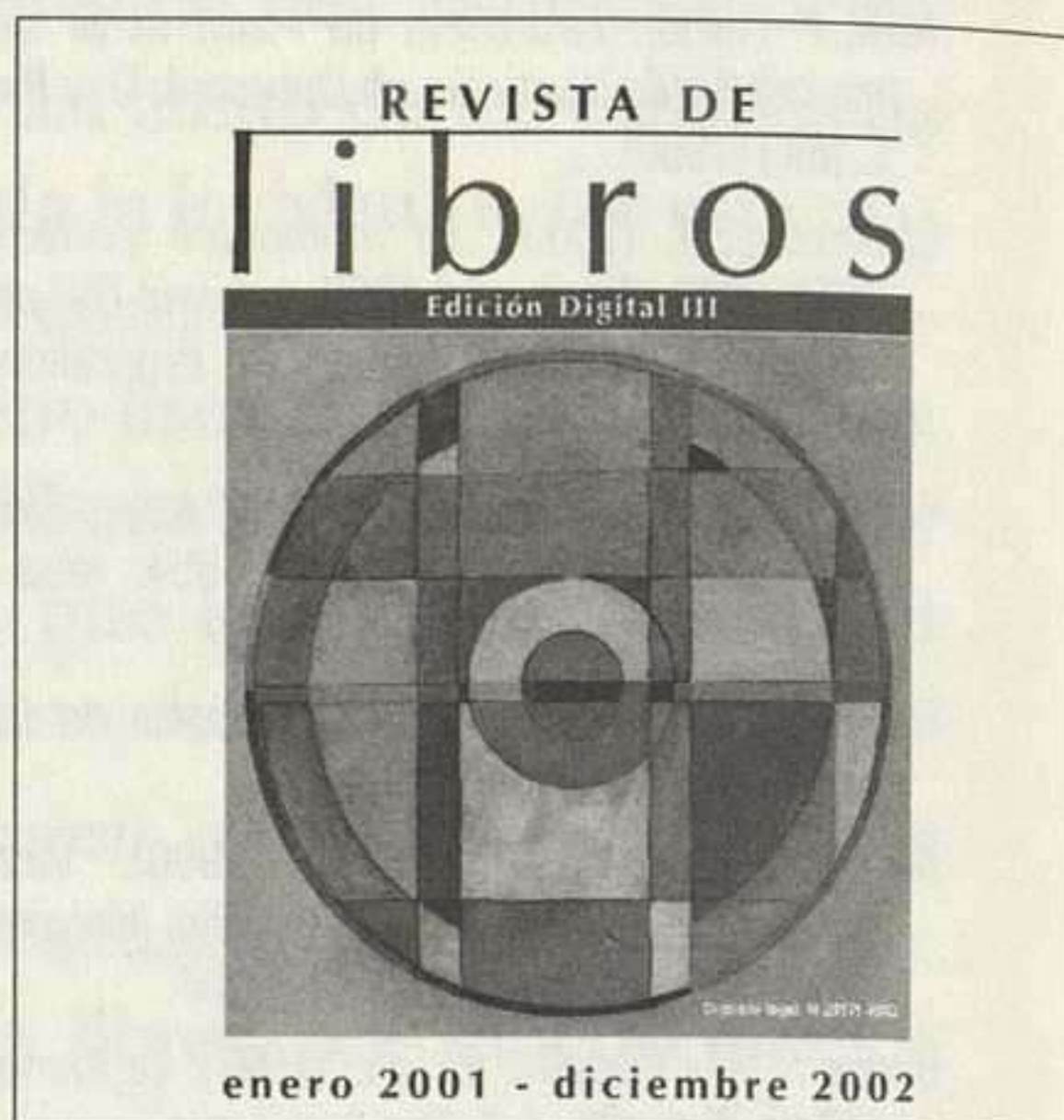
embargo, ese esquema irracional condujo a la omnipotencia pura y dura del Presidente, ya que el Primer Ministro, responsable nominal, no tiene entidad política propia. De nada sirve destituirlo, ya que, de todas formas, será el Presidente el que nombrará a su sucesor y el sucesor podrá ser... incluso el Primer Ministro que acaba de ser destituido (como ocurrió en 1962, fecha en la que De Gaulle volvió a nombrar a Michel Debré Primer Ministro cuando acababa de ser vetado por el Parlamento). Esta fórmula constitucional irracional también ha creado situaciones particularmente absurdas como las de «cohabitación» (en la que conviven simultáneamente un Presidente de derechas y un Primer Ministro de izquierdas, o a la inversa) que se basan en la ficción de que el Presidente no está deslegitimado cuando su mayoría sí lo está.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrieu, C.; Le Van, L y Prost, A. (dir.) (1987): *Les nationalisations de la Libération. De l'utopie au compromis*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Aron, R. (1954): *Histoire de Vichy. 1940-1944*, Fayard.
- Auriol, V. (1970): *Mon septennat*, Gallimard.
- Avril, P. (1988): *Les chefs de l'état et la notion de majorité présidentielle*, en Duhamel, O. y Parodi, J.-L. (dir.) (1988).
- Backouche, I. (2000): *La monarchie parlementaire. 1815-1848. De Louis XVIII à Louis-Philippe*, coll. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- Beau de Loménie, E. (2001): *Les responsabilités des dynasties bourgeoises*, 5 vol. 1954, reed. Ed. du Trident.
- Becker, J.-J. (2000): *Histoire politique de la France depuis 1945*, Armand Colin.
- Becker, J.-J. y Berstein, S. (1990): *Victoire et frustrations. 1914-1929*, Nouvelle histoire de la France contemporaine, n° 12, Seuil.
- Berstein, S. y Rudelle, O. (dir.) (1992): *Le modèle républicain*, PUF.
- Borne, D. y Dubief, H. (1976 y 1989): *La crise des années 30. 1929-1938*, Nouvelle histoire de la France contemporaine n° 13, Seuil.
- Broche, F. (2001): *La III^e République. 1870-1895. De Thiers à Casimir-Périer*, coll. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- Brulé, M. y Drancourt, M. (2004): *Service public : sortir de l'imposture*, éd. Jean-Claude Lattès.
- Courtois, S. y Lazar, M. (dir.) (1991): *50 ans d'une passion française. De Gaulle et les communistes*. Balland.
- Dreyfus, F.-G. (2003): *Histoire de la Résistance*, Editions de Fallois, 1996, reed. Le Livre de Poche.
- Debray, R. (1991): *Que vive la République*.
- Delporte, Ch. (1998): *La III^e République. 1919-1940. De Poincaré à Paul Reynaud*, coll. «Histoire politique de la France», Pygmalion/Gérard Watelet.
- Duhamel, O. y Parodi, J.-L. (dir.) (1988): *La Constitution de la V^e République*, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques.
- Duroselle, J.-B. (1988): *Clémenceau*, Fayard.
- Émeri, C. (1988): *Les déconvenues de la doctrine*, en Duhamel, O. y Parodi, J.-L. (dir.) (1988).
- Fauvet, J. (1969): *La IV^e République*, Fayard.
- Girard, R. (1972): *La Violence et le sacré*, Grasset, 1972; —, (1982) *Le Bouc émissaire*, Grasset.
- Giraud, H.-C.: *De Gaulle et les communistes*, 2 vol.
- Giraud, H.-C. (dir.) (2004): *Réplique à l'amiral De Gaulle*, Editions du Rocher.
- Hayek, F. A. (1983): *Droit, législation et liberté*, puf, tomo 3: «L'ordre politique d'un peuple libre».
- Krautkramer, E. (1992): *Vichy-Alger. 1940-1942*, Economica.
- Loubet del Bayle, J.-L. (2001): *Les anticonformistes des années 1930 [1969]*, reed. Seuil.
- Marseille, J. (2002): *Le grand gaspillage*, Plon.
- , (2004): *La guerre des deux France*, Plon.
- Mayeur, J.-M. (1973): *Nouvelle histoire de la France contemporaine, 10. Les débuts de la III^e République*, Seuil.
- Montebourg, A. (2000): *La Machine à trahir. Rapport sur le délabrement de nos institutions*, Denoël.
- Nemo, P. (1988): *La société de droit selon F. A. Hayek*, PUF.
- , (2005): «Las dos Repúblicas francesas», en *Cuadernos de Pensamiento Político*, n° 5 enero-marzo, Fundación Faes.
- Quermonne, J. -L. (1988): en Duhamel, O. y Parodi, J.-L. (dir.) (1988).
- Rebérioux (1975): *La république radicale? 1898-1914*, Nouvelle histoire de la France contemporaine n° 11, Seuil.
- Roth, F. (2001): *Poincaré*, Fayard.
- Sternhell et «Sternhell (Zeev)», Z. (1978): *La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme*, Seuil.
- , (1983): *Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France*, ed. Complexe.
- Venner, D. (2004): *De Gaulle. La grandeur et le néant*. Éd. du Rocher.
- Weber, E. (1985): *L'Action française*, Fayard.
- Zimmern, B. (2001): *Les Profiteurs de l'Etat*, Plon.

REVISTA DE libros

DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID



III edición

Suscríbase a Revista de libros y consiga de regalo
una suscripción para un amigo

Además recibirá gratis el III CD-rom y las tapas para encuadernar la revista

Suscríbase en nuestra página web: www.revistadelibros.com

o en el teléfono 91 319 48 33

Precio de la suscripción (11 números)

España: 30 €

Europa: 45,92 €

Otros países: 58,90 €

Si no conoce Revista de libros, envíenos sus datos (nombre, apellidos, dirección, ciudad, código postal, provincia, teléfono) por correo a Departamento de Promoción. C/ Rafael Calvo, 42, 2º esc. izda. 28010 Madrid, o por correo electrónico a: promocion@revistadelibros.com y le remitiremos un ejemplar de promoción

UN AÑO DESPUÉS

«Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor, que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura; y, así, es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquiera acontecimiento».

(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Primera Parte, Capítulo XV)

Se acaba de cumplir un año desde el 14 de marzo de 2004, día que fue de cita con unas urnas que dieron el gobierno de España al PSOE después de 8 años de gobierno del PP. Tres días antes de esa cita electoral, el 11 de marzo, se produjeron los atentados terroristas más importantes y sangrientos de la historia moderna de España. Las predicciones electorales señalaban un resultado, y, al final, fue otro bien distinto. ¿Con qué criterios pueden evaluarse aquellas predicciones? ¿Influyó el 11-M en el resultado electoral? De las urnas salió un gobierno que, en este primer año de mandato, ha mostrado unos perfiles muy específicos. ¿Cuáles son esos perfiles? ¿Qué tipo de gobierno rige los destinos de España en estos momentos? Y, por fin, el 20 de febrero de 2005 se celebró en España un *Referéndum* sobre la

Ricardo Montoro Romero es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid.

Constitución Europea. ¿Cómo deben interpretarse sus resultados en el escenario actual de la política española?

Este artículo intenta responder a todas estas preguntas con un propósito claro: realizar un diagnóstico racional del momento político que vive nuestro país en aquellas claves.

LAS ELECCIONES GENERALES DE 2004: UN RESULTADO COMPROMETIDO

Retrocedamos por un momento. Hablemos de 2000 antes de referirnos a 2004. Si aplicamos un determinado modelo de estimación de voto sobre los resultados de la *Encuesta Preelectoral* del CIS correspondiente a las Elecciones Generales del año 2000¹, se observa que su capacidad de predicción fue más que notable. La encuesta predecía 176 escaños para el PP y 126 para el PSOE, y el resultado final fue de 183 y 125 escaños respectivamente. En porcentaje sobre voto válido, la encuesta predecía el 43,65% de los votos para el PP, y obtuvo el 44,52%; y, en el caso del PSOE, predecía el 33,69%, y el resultado final fue del 34,16%. Es más: la encuesta acertó de pleno en 45 de las 52 circunscripciones.

En el caso del PP, la encuesta señaló un *suelo*, y no captó 7 escaños al alza. Pero reflejó un *suelo absoluto*, porque en ninguna circunscripción se produjo que estimase 1 escaño de más que luego no salió. Acertó de pleno en 45 circunscripciones, y en 7 no apreció 1 escaño adicional que entró en cada una de ellas (fueron Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Orense, Valencia y Vizcaya). Fue, por tanto, una predicción ligeramente *a la baja*.

En el caso del PSOE, predecía 123 escaños, y no actuó como *suelo* puesto que hubo variaciones bidireccionales por circunscripciones: en Baleares, Barcelona, Granada, Madrid, y Valencia no captó que entraría 1 escaño más en cada una. Y en Guipúzcoa y Las Palmas predijo 1 escaño más de lo que se obtuvo en cada una (saldo neto, 2 escaños de más). La encuesta acertó de pleno para el PSOE en 46

¹ Cualquiera puede hacerlo. La matriz de datos está depositada en el Banco de Datos del CIS, de público acceso.

circunscripciones, y falló por un escaño hacia arriba o hacia abajo en 6 circunscripciones. Fue una predicción *a la baja* también, pero menos que la anterior, y con más dificultades dado el movimiento habido en algunas circunscripciones.

Pueden verse los datos en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1
Elecciones generales 2000

	ESTIMACIÓN CIS		RESULTADOS FINALES	
	% sobre voto válido	Escaños	% sobre voto válido	Escaños finales
PP	43,65%	176	44,52%	183
PSOE	33,69%	123	34,16%	125
IU	8,65%	17	5,45%	8
CiU	4,17%	14	4,19%	15
PNV	1,69%	7	1,53%	7
ICV	1,17%	2	0,51%	1
EA	0,51%	1	0,43%	1
ERC	0,90%	1	0,84%	1
UV	0,34%	1	0,25%	—
PA	0,75%	—	0,89%	1
BNG	1,26%	4	1,32%	3
CC	0,92%	3	1,07%	4
CHA	0,25%	1	0,33%	1
Otros	2,05%	—	2,93%	—
En blanco	1,10%	—	1,58%	—
Participación	78,5%		68,71%	

Aunque con IU la encuesta tuvo más problemas (suele ocurrir en el CIS debido, sobre todo, a la presencia nacional de un partido de estas características), fue también brillante al captar el movimiento de los partidos regionalistas. La encuesta vaticinó una participación muy alta (78,5%), y, realmente, fue el 70% (sin censo CERA², que es lo que corresponde; 8,5 puntos porcentuales menos). Y, aun con ese enorme diferencial, la encuesta tuvo grandes aciertos.

Recordemos, también, que aquellas no fueron unas elecciones fáciles; al contrario, fueron muy complicadas en sus resultados finales porque hubo muchos movimientos: el PP incorporó algo más de 600.000 votos, el PSOE perdió algo más de 1.500.000 de votos, e IU

² Los españoles con derecho a voto que residen en el extranjero. El CIS hace sus encuestas sólo en el territorio nacional, por lo que sus datos deben ser contrastados con el censo de residentes en España.

bajó casi 1.400.000 votos. La participación final (con CERA) bajó desde el 77,4% de 1996 al 68,7% (8,7 puntos porcentuales menos). Y, con todo eso, la encuesta fue muy certera.

Pues bien. En el año 2004, el CIS utilizó un cuestionario similar al usado en 2000 (incluso, más abreviado y mejorado; más fácil de administrar), la misma muestra en su tamaño y diseño, y el mismo método de recogida de datos. Y, aplicando el mismo modelo de estimación que usamos para el año 2000, la predicción de resultados y los resultados finales fueron los siguientes (ver Tabla 2):

Tabla 2
Elecciones generales 2004

	ESTIMACIÓN CIS		RESULTADOS FINALES	
	% sobre voto válido	Escaños	% sobre voto válido	Escaños finales
PP	42,2%	176	37,71%	148
PSOE	35,5%	131	42,59%	164
IU	6,6%	10	4,96%	5
CiU	3,7%	12	3,23%	10
ERC	1,9%	6	2,52%	8
PNV	1,8%	7	1,63%	7
BNG	1,2%	3	0,81%	2
CC	1,0%	3	0,91%	3
EA	0,5%	1	0,31%	1
CHA	0,3%	1	0,36%	1
Otros	3,5%	—		
En blanco	1,8%		1,58%	
Participación	75,10%		75,66%	

El mismo instrumento, utilizado con los mismos parámetros metodológicos, la misma forma en la recogida de información, y aplicando el mismo modelo de estimación; pero todo falló estrepitosamente esta vez. Los diferenciales registrados en una y otra elección en el caso de los dos grandes partidos son más que notables, y pueden verse en la siguiente Tabla 3.

Tabla 3
Diferencia entre lo estimado por el CIS y el resultado final en 2000 y 2004

	2000		2004	
	En % voto válido (puntos porcentuales)	En escaños	En % voto válido (puntos porcentuales)	En escaños
PP	+ 0,87	+ 7	- 4,49	- 28
PSOE	+ 0,47	+ 2	+ 7,09	+ 33

Los datos son muy elocuentes. En el caso del PP, en 2000, el CIS se desvió 7 escaños a la baja; en 2004, 28 escaños al alza. Con el PSOE, en 2000 se desvió 2 escaños a la baja, y, en 2004, 33 escaños también a la baja. Gran acierto en 2000, gran desacierto en 2004. ¿Qué pasó? Parece que los sucesos del 11-M y sus derivados pueden explicarlo.

LA INFLUENCIA DEL 11 DE MARZO

La *Encuesta Postelectoral* que realizó el CIS después del 14-M arroja datos muy interesantes. Los principales se encuentran en la siguiente Tabla 4, traducidos ya en número aproximado de personas que dicen que hicieron una u otra cosa.

Tabla 4
Los españoles ante el 11-M y las Elecciones Generales

Influencia del 11-M

Dicen que les influyó el 11-M (Base: 26.155.436 votantes)	5.623.325 (21,5%)
Iban a abstenerse pero no lo hicieron debido al 11-M (Base: 5.623.325 que dicen que les influyó)	1.231.437 (21,9%)
Cambiaron el voto debido al 11-M (Base: 5.623.325 que dicen que les influyó)	759.105 (13,5%)
Se habrían abstenido si hubiesen sabido el resultado de las elecciones (Base: 26.155.436 votantes totales)	2.641.655 (10,1%)

Voto debido al 11-M

Votaron al PSOE debido al 11-M (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	1.036.444 (9,4%)
Votaron al PP debido al 11-M (Base: 9.635.491 votantes del PP)	144.525 (1,5%)

Por qué votó

Votaron al PSOE para evitar que ganase el PP (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	1.731.082 (15,7%)
Votaron al PP para evitar una coalición PSOE-IU (Base: 9.635.491 votantes del PP)	298.685 (3,1%)

(Continúa)

Voto de capacidad de gobierno

Votaron al PSOE porque es el más capacitado para gobernar (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	529.255 (4,8%)
Votaron al PP porque es el más capacitado para gobernar (Base: 9.635.491 votantes del PP)	2.264.340 (23,5%)

Voto decidido después del 11-M

Votantes que decidieron votar al PSOE por los atentados del 11-M (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	1.036.459 (9,4%)
Votantes que decidieron votar al PP por los atentados del 11-M (Base: 9.635.491 votantes del PP)	144.532 (1,5%)

Voto influido por la campaña electoral

Votantes que decidieron votar al PSOE durante la campaña, antes del 11-M (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	639.517 (5,8%)
Votantes que decidieron votar al PP durante la campaña, antes del 11-M (Base: 9.635.491 votantes del PP)	404.690 (4,2%)

Voto decidido hace tiempo

Votantes que tenían decidido votar al PSOE desde hace tiempo (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	8.688.616 (78,8%)
Votantes que tenían decidido votar al PP desde hace tiempo (Base: 9.635.491 votantes del PP)	8.816.474 (91,5%)

Decisión de voto influida por el 11-M

Votantes del PSOE que se sintieron influidos <i>mucho+bastante</i> en su decisión de voto por el 11-M (Base: 11.026.163 votantes del PSOE)	3.252.718 (29,5%)
Votantes del PP que se sintieron influidos <i>mucho+bastante</i> en su decisión de voto por el 11-M (Base: 9.635.491 votantes del PP)	1.339.333 (13,9%)

Cambio de voto debido al 11-M

Votantes del PSOE que cambiaron el voto del partido al que pensaban votar inicialmente debido al 11-M (Base: 4.267.062 votantes del PSOE a los que el atentado del 11-M les influyó mucho + bastante+ poco)	712.599 (16,7%)
Votantes del PP que cambiaron el voto del partido al que pensaban votar inicialmente debido al 11-M (Base: 1.811.472 votantes del PP a los que el atentado del 11-M les influyó mucho + bastante + poco)	117.745 (6,5%)

Iban a abstenerse pero no lo hicieron por el 11-M

Votantes del PSOE que fueron a votar por el 11-M y pensaban abstenerse (Base: 4.267.062 votantes del PSOE a los que el atentado del 11-M les influyó mucho + bastante + poco)	960.089 (22,5%)
Votantes del PP que fueron a votar por el 11-M y pensaban abstenerse (Base: 1.811.472 votantes del PP a los que el atentado del 11-M les influyó mucho + bastante + poco)	335.122 (18,5%)

El 21,5% (unos 5.600.000 votantes) dice que el 11-M le influyó *mucho + bastante* para decidir su voto. Incluso, el 7% (1.830.880 personas) dice que le influyó *poco* (pero es algo, está claro). Sumando *mucho+bastante+poco* tenemos el 28,5% que dice que, de alguna forma, se vio afectado: 7.454.299. Y el 71,3% dice que no le influyó.

De aquel 21,5% (5.623.325 votantes) que dice que le influyó el 11-M, para el 54% (3.036.595 votantes) el 11-M les reafirmó en la intención de votar al partido que pensaba votar. Y el 22% (1.237.131 votantes) dice que les animó a votar porque no pensaban hacerlo. Incluso, para el 13,5% (759.149 votantes) hizo que cambiase el voto del partido al que iba a votar. Es decir, 1.996.280 votantes constituyeron un grupo de personas alimentadas por dos motores: salieron de la abstención (no tenían interés inicial por votar), y orientaron su voto movidas por los atentados. ¿Hacia dónde? La gran mayoría hacia el PSOE. Está claro que el 11-M sacó de la abstención a mucha gente, y que reorientó el voto de otros tantos. Tanto es así que el 10% (2.641.655 votantes) dice que, a la vista de los resultados finales, se habría abstenido o habría votado en blanco. Sólo el 1,5% afirma que habría votado a otro partido.

Sabemos que el PSOE obtuvo 11.026.163 votos. Pues bien, el 9,4% de los que votaron al PSOE (1.036.444 de personas) dicen que lo hicieron por los atentados del 11-M, y el 15,7% (1.731.082 votantes) afirma que votaron al PSOE para que no ganase el PP. Está claro que son esos mismos que han votado al PSOE empujados por los atentados, y que no iban a ir a votar porque no son sus *votantes naturales*.

Todo eso referido a la población general (es decir, mayores de 18 años). Pero los más jóvenes jugaron un papel importante en estas elecciones. Lo más relevante de lo que hicieron o dejaron de hacer se encuentra contenido en la siguiente Tabla 5.

Tabla 5
Los jóvenes (18-29 años) ante el 11-M y las Elecciones Generales

Datos generales	
Número aproximado de jóvenes	4.750.000
Votaron	3.750.000
Se habrían abstenido si hubiesen sabido el resultado de las elecciones	800.000
Votaron al PSOE	1.900.000
Votaron al PP	675.000
(Ojo: hay un ocultamiento de unos 10 puntos en el recuerdo de voto del PP en la encuesta)	(740.000)

((Continúa))

(continuación)

Influencia del 11-M

Le influyó el 11-M en la decisión de voto	2.000.000
Le animó a ir a votar, y no pensaba hacerlo	600.000
Cambió el voto del partido al que pensaba votar	260.000
Decidió votar al partido que votó después del 11-M	750.000
Lo decidió durante la campaña, antes del 11-M	375.000

Voto debido al 11-M

Votó al PSOE por el 11-M	300.000
Votó al PP por el 11-M	30.000

El voto en contra

Votó al PSOE para evitar que ganase el PP	450.000
Votó al PP para evitar una coalición PSOE-IU	37.000

Votó porque es su partido

Votó al PSOE porque es su partido	170.000
Votó al PP porque es su partido	22.000

Voto de capacidad de gobierno

Votó al PSOE porque es el más capacitado para gobernar	57.000
Votó al PP porque es el más capacitado para gobernar	170.000

Voto de representación de las ideas de gente como yo

Votó al PSOE porque es el que mejor representa las ideas de gente como yo	475.000
Votó al PP porque es el que mejor representa las ideas de gente como yo	155.000

Muchos jóvenes votando (3.750.000), y también arrepintiéndose de haberlo hecho (800.000). La mayoría de esos votos juveniles, hacia el PSOE (1.900.000; sólo unos 700.000 al PP). A muchos (2.000.000) les influyó el 11-M en la decisión del voto: 600.000 se iban a abstener, pero no lo hicieron por el 11-M; 750.000 decidieron votar al partido que votaron después del 11-M; 450.000 votaron al PSOE para evitar que ganase el PP, y sólo 57.000 votaron al PSOE pensando que era el más capacitado para gobernar. En definitiva, un voto juvenil masivo, abstencionista en situaciones normales, movido por el 11-M, y dirigido hacia el PSOE. Unos y otros datos indican, por consiguiente, que el 11-M incidió en las elecciones de una manera muy precisa.

EL GOBIERNO DEL 14-M

Este nuevo Gobierno socialista salido de las urnas de manera sorprendente, traía más sorpresas escondidas. Todos en España esperaban un

Gobierno de corte socialdemócrata, como hemos conocido en el período 1982-1996. Con sus luces y sus sombras, pero de corte socialdemócrata. Sin embargo, aparece un estilo gubernativo nuevo e inesperado. No el del famoso *talante y diálogo* como lema, que iba de suyo y era previsible, sino un estilo *radical y laicista*, eso sí, de *palabra blanda*.

Una ideología radical y laicista en España de la mano del PSOE y a comienzos del siglo XXI, ¿de dónde sale? Para encontrar una explicación, hay que retroceder al 35 Congreso del PSOE, celebrado entre los días 21 y 23 de julio de 2000 bajo el lema *El nuevo impulso*. En ese Congreso, después de la grave crisis que vive el PSOE en su liderazgo desde la pérdida de las elecciones en 1996, se impone, por un puñado de votos entre 998 delegados, una candidatura encabezada por un líder joven procedente de una larga y oscura estancia en un escaño del Congreso de los Diputados, acompañado de figuras de escasa relevancia y trayectoria pública. Después del relevo fallido de Almunia, que ofrecía mayor proximidad a la izquierda, cierto, pero también continuidad en la política socialdemócrata tradicional, se produce un salto en el vacío con el ascenso al poder socialista de un núcleo de dirigentes que realizan interpretaciones atípicas.

En la oposición, estas nuevas posiciones del PSOE despertaban curiosidad y tenían su atractivo, es cierto; pero el espacio de la oposición política no está sometido a los potentes focos que iluminan cada paso que da un Gobierno, ni tampoco asume las mismas responsabilidades. Los hitos de esta breve andadura son: la reacción ante el *Prestige* y, después, ante el conflicto de Irak; el recurso a la pancarta y la manifestación; el estilo discursivo del líder, adornado de frases preciosamente construidas y mejor dichas, pero con escaso contenido, de *palabra blanda*; y, ante todo y sobre todas las cosas, una intención muy clara de arremeter contra el PP. Aparentemente, este nuevo PSOE estaba muy a la izquierda; pero sólo lo justo para simpatizar con IU. Se situaba, también, en sintonía con los nacionalismos independentistas de ERC, BNG, PNV, EA, e, incluso, de la CHA; pero sólo lo justo para aparentar comunidad de sentimientos con ellos. En la misma pancarta, sí, pero no en el mismo lugar. Con dos cruzamientos muy claros: un *cruce ilógico* de discursos entre todos esos partidos, incluyendo ahora al PSOE, que tenía un único elemento común: derribar al gobierno del PP a toda costa. Y, en el

interior del PSOE, un *cruce ideológico*, a modo de cortocircuito interno, localizado en el PSC, sobre todo después de la fórmula del tripartito catalán. En las elecciones catalanas de 2003, CIU fue el partido que obtuvo más escaños (46). Pero el PSC, con sólo 42, buscó la alianza con ERC (23) e IC (9) para gobernar en un equilibrio casi imposible. No sabíamos que lo que entonces se juzgó como una aventura política de conquista del poder para desalojar a CiU y de escasa viabilidad futura, se convertiría casi en un modelo a imitar desde La Moncloa después del 14-M.

EXIGUA MAYORÍA PARLAMENTARIA

Con sus 164 escaños obtenidos el 14-M, el PSOE se quedó a 12 escaños de la mayoría absoluta (176 escaños). Distancia corta y larga, a la vez. Y, curiosamente, con tan sólo 12 escaños de diferencia hasta la mayoría que necesita un gobierno para gobernar cómodamente, optó por no establecer ningún acuerdo de legislatura, e improvisar día a día. Ya casi nadie recuerda que, en 1996, el PP alcanzó sólo 156 escaños (8 menos que los actuales del PSOE), y que, sin embargo, firmó acuerdos públicos con grupos minoritarios para garantizar la viabilidad de la legislatura (que, por cierto, agotó escrupulosamente). En 2004, el escenario iba a ser distinto.

La lógica de las cosas antes del 14-M, y la dinámica parlamentaria de los pequeños partidos regionalistas tiene mucho que ver con lo que ocurrió, con lo que ahora sucede, y con lo que la gente llega a percibir; merece, por tanto, una breve explicación. IU tiene 5 escaños; CiU, 10; ERC, 8; PNV, 7; CC, 3; BNG, 2; y NB, EA y CHA, 1 cada uno. Nuestro actual sistema electoral, diseñado para primar los nacionalismos periféricos, produce verdaderas paradojas. Así, por ejemplo, la CHA, con tan sólo el 0,36% de los votos válidos, con sólo 94.252 votos, tiene 1 diputado. ERC, con sólo el 2,52% de los votos (652.196), tiene hasta 8 diputados. Mientras tanto, IU-ICV, con el 4,96% de los votos (1.284.081), tiene sólo 5 escaños. Y, curiosamente, el Partido Andalucista (PA), que obtuvo 181.868 votos y el 0,7% de los votos válidos, se quedó sin escaño. Esto es: cuanto más pequeño es el territorio, más concentradas estén las bases electorales, y a menor número de circunscripciones se presente un partido de este tipo,

más oportunidades tendrá de alcanzar mayor número de escaños. Curiosa paradoja, sobre todo si algunos de esos partidos que con tanta facilidad obtienen escaños en el Parlamento Nacional, abanderan ideologías poco o nada nacionales (es decir, poco o nada españolas). Y, pasadas las elecciones, olvidados estos y otros datos elementales, en el día a día parlamentario, lo que el ciudadano de a pie se encuentra, oye y ve es la voz y la imagen de los grupos parlamentarios y de los partidos en el Parlamento. Las voces y las caras que hablan y son vistas por la televisión y los medios. De modo que cuando los representantes de IU, ERC, BNG, EA, PNV, CHA y NA-BAI, que es lo que suele ocurrir, salen juntos ante las cámaras de televisión y acusan al PP de quedarse solo, lo hacen representando a 2.802.147 votantes, y al 10,83% de los votos a candidaturas. Pero son muchos; son 7 personas frente a sólo una, aunque ésta represente a 9.635.491 votantes y al 37,71% de los votos. Es una desproporción que la televisión no capta. La voz de una sola persona es tenue, al lado del corifeo que esconde minorías dispersas. Un numeroso grupo de pequeños le dice al gigante que está solo, y eso se nos presenta como algo normal día a día.

Los equilibrios resultantes son muy inestables. Mientras que en Cataluña el gobierno autonómico presidido por el PSC depende del apoyo de ERC, en Madrid el PSOE depende directamente de los escaños del PSC (que es PSOE cuando le interesa, y cuando no le interesa deja de serlo), e indirectamente de ERC. ERC, apoyado en Madrid por poco más de 650.000 votos, tiene una clara posición independentista. Y, desde el norte, bajo el disfraz de una reforma del Estatuto de Guernica, se presenta un nuevo Estatuto vasco que, *de facto*, rompe España. De vuelta a Cataluña, allí se prepara un nuevo Estatuto bajo la sombra del tripartito; esto es, supervisado estrechamente por ERC. Y, por si fuera poco, el actual presidente del Gobierno de España se ha comprometido a aprobarlo en el Parlamento español tal y como venga. Desde luego, cuenta con los votos necesarios para hacerlo. Por último, y para que no falte de nada, con tanta inestabilidad de poder aquí y allá, se anuncia una reforma de la Constitución; precisamente en un momento como éste. Eso sí; será fácil aprobar el Estatuto catalán en el Parlamento español, pero la reforma constitucional necesita los votos del PP. El presidente del Gobierno tenía razón: el año se ha ido en diálogo y diálogo. Y los que más han

dialogado son, precisamente, los que quieren romper la unidad de España, que son minoría. El resto, que son la mayoría de los españoles, contempla estupefacta que, casi a diario, se hable con tanta alegría y desparpajo de que España deje de ser la que ha sido en los últimos cuatrocientos años.

En esta fragmentación discurre la vida parlamentaria y política hoy día; fragmentación provocada por el PSOE, que ha preferido recorrer la legislatura de pacto en pacto según las circunstancias. Evita, así, que se le vincule demasiado a ninguno de los pequeños partidos; y, por supuesto, se distancia absolutamente del PP, su gran rival. Pero, a cambio, se diluye innecesariamente la figura de la oposición, tan necesaria en el régimen parlamentario. Hasta ahora, según la experiencia que hemos vivido en estos primeros meses de la legislatura, parece que sólo el PP hace oposición. Antes, cuando gobernaba, el PP estaba solo en el gobierno. Ahora, parece seguir solo en la oposición, lo que ya es sumamente extraño. Oposición, se entiende, son todos los partidos que no gobiernan, o que no tienen un acuerdo público y notorio con el partido que gobierna. Y sorprende cómo, los mismos partidos que hacían férrea oposición en la anterior legislatura, se muestran muy conciliadores con un gobierno al que no pertenecen ni con el que tienen nada acordado (al menos, públicamente). Esta inversión de papeles en los mismos grupos políticos no es, precisamente, una buena señal de salud democrática.

UN GOBIERNO RADICAL EN EL SIGLO XXI

En minoría y en improvisación parlamentaria; y también *radical*. En la terminología al uso y que todo el mundo reconoce, una *política liberal* es aquella que apuesta por el libre mercado, por estimular la actuación de los agentes sociales privados, por la defensa de las libertades individuales, y que otorga a los poderes públicos las funciones neutrales de regulación, arbitraje e inspección. Una *política socialdemócrata* moderna defiende también el libre mercado, pero apuesta por una mayor presencia estatal en las principales esferas de la vida pública. En Europa, una y otra políticas suscriben el gran acuerdo social del Bienestar, garantizando la igualdad de acceso a ciertos servicios básicos para todos los ciudadanos. Los gobiernos del PP de

Aznar respondieron al primer esquema. Los del PSOE de Felipe González al segundo. ¿Y el actual gobierno socialista? Este gobierno, sabiéndolo o no, ha adoptado la fórmula del *radicalismo*. Pero, ¿qué es *radicalismo* en política?

Una *política radical* es aquella que toma las posiciones más extremas de los dos modelos anteriores sin conseguir la relativa coherencia interna que uno y otro tienen. Al carecer de parámetros firmes, es libre de acometer aventuras políticas extravagantes basándose en unos supuestos principios morales y políticos que se atribuye en exclusiva, y que toma prestados de aquí y de allá sin orden ni concierto. Es amante del populismo y de los discursos que puedan seducir fácilmente a la gente; dice lo que se quiere oír, tenga o no tenga que ver con la realidad; el hecho de que el discurso se ciña a la realidad es secundario, porque la realidad es ya el discurso mismo. El radicalismo gusta de la intervención pública en todos los órdenes de la vida porque necesita hacerse presente de manera constante. Al carecer de guías, tiende de manera natural a las componendas más o menos declaradas. Carece de un proyecto claro porque su vocación es universal. Por eso tiende a la improvisación, y, a la vez, a apropiarse de la verdad. Sus sueños y sus palabras son la verdad. Y, aunque gusta de presumir de ser flexible y eternamente dialogante, no hay posibilidad de llegar a acuerdos prácticos con él, sino únicamente a acuerdos dialógicos que hoy sirven y mañana no. Le estorban los adversarios que no coinciden con su cosmovisión, y se siente incapaz de atraerlos si no los convierte en lo que el radicalismo es en sí mismo. Todas las ideologías partidistas tienen la vocación de poder en su misma identidad; nacen y existen para ostentar el poder. Pero el radicalismo experimenta esta vocación de manera más exagerada. Porque el radicalismo toma cuerpo teórico y práctico desde el poder; en la oposición es demasiado vulnerable. Las ensoñaciones que abastecen al radicalismo son aceptables desde el poder no por sí mismas, sino porque son el poder; fuera de él, carecen de capacidad de seducción para los no iniciados.

El radicalismo del nuevo Gobierno socialista, y, en especial, de su líder, Rodríguez Zapatero, es extraño, y no responde a lo que cualquiera pensaría que debe ser una sociedad moderna del siglo XXI. Ante la sorpresa de casi todos, incluyendo, probablemente, muchos de los votantes moderados del PSOE, desde el inicio, este Gobierno,

que se presentó a las elecciones con la bandera del diálogo y el talante, se ha mostrado extremista en dos cuestiones, fundamentalmente: 1) en atacar al PP a toda costa y hasta en las cosas más insospechadas (en pasado, presente y futuro); y 2) en poner en marcha a toda velocidad, como si no hubiese toda una legislatura por delante, una serie de medidas *laicistas* para las que ni había verdadera demanda social, ni tampoco respondían a firmes criterios socialdemócratas.

En sus habituales líneas de actuación, este Gobierno despliega su verdadero contenido ideológico radical: ver la derecha como un enemigo de la sociedad, y defender unos supuestos derechos cívicos que no afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Quizá vimos el gesto más claro y rotundo de la radicalidad de la política del nuevo Gobierno el primer domingo después de la toma de posesión del nuevo Presidente, con el anuncio repentino y efectista de la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak, y casi en contra de lo que había dicho o insinuado el mismo Presidente en el debate de investidura (la *palabra blanda*, que nada decía y lo decía todo). Porque, según las encuestas, los españoles se oponían a que España interviniese en la guerra de Irak (y, de hecho, no intervino); y también se oponían a la misma guerra (¿podría ser de otra forma?). Pero, una vez terminada la guerra en su aspecto formal, en el nuevo escenario de presencia militar de muchos países de Europa y del mundo en aquel país para colaborar en su reconstrucción y avance hacia la democracia, ¿era seguro que los españoles deseaban la vuelta de las tropas, si hubiesen conocido el coste que implicaría para España al debilitarse su política internacional? Eso es menos claro. Pero, aun así, lo importante era la acción radical.

Vimos ahí un primer y claro trazo del ejercicio radical del poder. El golpe de efecto. La búsqueda del aplauso popular. El recurso a unos supuestos grandes principios. Luego vinieron la *alianza de civilizaciones* y la *paz perpetua*, pero sólo era más de lo mismo.

EL LAICISMO EN LA VIDA ESPAÑOLA

Un gobierno en minoría, improvisando en el Parlamento, radical, y *laicista*.

Después de 25 años de democracia, de golpe, el término *laicismo* ha salido a la palestra, a la primera fila del discurso público. ¿Dónde estaba hasta ahora? ¿Por qué nadie hablaba de él en los anteriores gobiernos del PSOE?

Por *laicismo* hay que entender aquella «doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa». Y por *aconfesional* debe entenderse «Que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa»³.

Realmente, el moderno laicismo procede de los ilustrados del siglo XVIII, y fue una poderosa arma en sus manos para conseguir la separación entre Iglesia y Estado. Hasta ese momento, los poderes religiosos y políticos habían estado mezclados, se confundían incesantemente. Producida la separación, pudo desarrollarse el universo de derechos y deberes cívicos que impregnan las democracias liberales y parlamentarias de nuestros días. Pero no podemos olvidar que el laicismo de los ilustrados (desde luego el más radical) tenía un doble sentido: separar el Estado de la religión, el poder civil del poder religioso (*laicismo estatal*), y también separar la religión de la sociedad y los individuos (*laicismo social*). Es decir, el laicismo fue un término utilizado como arma ofensiva contra la religión, contra cualquier religión.

Herederos de la Ilustración del XVIII son tanto el liberalismo como el socialismo clásico y marxista. El liberalismo se detuvo en la separación de Estado y confesión religiosa (en el *laicismo estatal*), y sentó las verdaderas bases de aquella modernidad que nos trae hasta nuestros días. El socialismo, sin embargo, fue más lejos; buscó también el *laicismo social*, hasta llegar al lema marxiano de «la religión es el opio del pueblo». Es decir, la religión es un importante elemento de la superestructura ideológica que, al fin y a la postre, sirve para que la clase dominante afiance su explotación sobre la clase dominada. Y, por si fuera poco, además, la religión narcotiza tanto a los dominantes como a los dominados; de ahí su carácter de *opio adormecedor* que le atribuía Marx. Es una herencia del uso radical y agresivo que buena parte de la Ilustración hizo del laicismo, sobre todo en

³ Nos pueden servir estas dos buenas definiciones que se pueden encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Francia y su sangrienta Revolución del siglo XVIII⁴. No es de extrañar que sea Francia el único país europeo en el que se usa habitualmente este término; y no es de extrañar en un país que tiene como himno una marcha de milicianos de aquella época revolucionaria y sangrienta, que celebra su día nacional el 14 de julio, recordando la toma popular de la Bastilla, y que tiene los restos de Napoleón en un fastuoso mausoleo. Parafraseando el dicho popular, se hace bueno aquí lo de «dime qué conmemoras y te diré qué eres».

Pero dejando aparte el caso francés, heredero, como todos los países, de su propia historia, es cierto que el socialismo clásico, el de la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la explotación del hombre por el hombre y tantas otras cosas, ha utilizado como arma el laicismo en las dos versiones: separar al individuo de cualquier confesión religiosa, y no sólo separar el Estado de la religión. Y es fácil pensar que, si se logra ese propósito, si realmente todos los individuos se separan de la religión, el resultado final es la extinción de cualquier confesión religiosa. Eso es, precisamente, lo que el laicismo ilustrado radical buscaba para cambiar la sociedad; y lo que también quería el socialismo.

Pero, por muy buenas que sean las ideas, no siempre dominan la evolución de las naciones. El caso francés es peculiar, y no hace más que reflejar su historia. Realmente, el laicismo de la extinción de la religión triunfó allí donde lo hicieron los regímenes comunistas; en la Unión Soviética, en los países del Este de Europa (Polonia fue otra excepción, también debido a su historia), en China o Cuba. Pero tampoco sirvió para mucho, si se observa el triste destino que han tenido casi todos estos regímenes.

Y es que el fenómeno religioso es muy complejo. En todas las sociedades conocidas hay idearios religiosos de algún signo. Y cuando no existe una organización religiosa potente y capaz de atraer de manera ordenada a masas de población, de inmediato surgen grupúsculos desordenados en los que se refugia la gente. Allí donde no hay organización religiosa aparecen las sectas. El ideal de una vida social equilibrada, habitada por hombres socialistas que viven para el prójimo.

⁴ Para desmitificar lo que fue aquello, nada mejor que leer al gran Dickens y su *Historia de dos ciudades*.

mo y para la comunidad, y que se satisfacen en esa vida comunitaria, no ha pasado de las páginas de libros escritos por iluminados de mayor o menor talento intelectual. El sentimiento religioso forma parte del ser humano desde que lo conocemos como tal.

A comienzos del siglo XXI, es obvio que los Estados democráticos, como grandes organizaciones políticas y de convivencia, aplican el *laicismo estatal*; son independientes «de cualquier organización o confesión religiosa». Y, también obviamente, son igualmente aconfesionales. Uno de los obstáculos para la modernización de los países islámicos se encuentra, precisamente, en que no han logrado la separación entre Estado y religión; en que los jefes políticos son también jefes religiosos (y no, precisamente, al estilo de la reina de Gran Bretaña, que ostenta ambas jefaturas de un modo simbólico y no ejecutivo).

Como no podía ser de otra forma, en la España moderna también se registra el *laicismo estatal*. No tenemos más que leer lo que dice nuestra Carta Magna, donde se plantea muy bien la cuestión. Su Artículo 16 contiene los siguientes tres párrafos:

1. *Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.*
2. *Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.*
3. *Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.*

A veces los textos legales reflejan muy mal la realidad, o lo que se desea hacer. Pero éste no es el caso. Los que redactaron estos párrafos lo hicieron muy bien. Sólo hay que leerlos con atención.

¿A qué se refiere, pues, este nuevo uso del laicismo en la España de nuestros días? No se puede referir al *laicismo estatal*, a la aconfesionalidad del Estado, porque es obvia, está en nuestra Constitución, todo el mundo la entiende y la comparte, y no hay mucho más que avanzar a este respecto. Entonces se trata del otro laicismo, del *laicismo social*, en la trayectoria misma del viejo socialismo marxista que describimos

antes. Se trata de intentar que los individuos apaguen su sentimiento religioso, que se olviden de él, que le den la espalda. Se trata de intentar construir una *sociedad laica*, en la que sólo valgan principios éticos desvinculados de la religión y del catolicismo. Lo más llamativo de este discurso (que, por cierto, no se formula directamente), es su anacronismo. La historia nos enseña que el obstáculo para el desarrollo de la libertad y el orden democrático como hoy lo conocemos estaba en la confluencia del poder estatal y del poder religioso; estaba en el *laicismo estatal*. Superado ese nivel, como demuestra la experiencia de los principales países occidentales desarrollados, la vida social religiosa de los ciudadanos es una forma más de vida social entre todas las posibles. El objetivo debe ser el bienestar y la felicidad de los individuos. Y está claro que, para muchas personas, una fuente principal de ese bienestar es, precisamente, su sentimiento religioso. El que la gente tenga unas creencias religiosas no es obstáculo de nada, sino, al contrario, fuente de bienestar. Ha sido bueno llegar al *laicismo estatal*; la historia así lo demuestra. Pero no hay ninguna razón de peso para intentar alcanzar el *laicismo social*, si aceptamos la existencia de la pulsión religiosa como una de las básicas del ser humano al componer sociedades. Y, en el caso español, todavía hay menos razones, si cabe. Mucho me temo que vemos resurgir los viejos sueños radicales de los revolucionarios franceses del siglo XVIII, pasados ahora por una forma obsoleta de socialismo, a comienzos del siglo XXI y en España.

Como dijimos antes, los sentimientos religiosos forman parte de la cultura de los pueblos, y ocupan un lugar muy destacable en el uso que los individuos hacen de la cultura. Son sentimientos más profundos de lo que comúnmente se cree. Por esa razón han fracasado sistemáticamente todos los regímenes que intentaron acabar con ellos. En el caso de España el hecho es aún más notable. En los últimos quinientos años, España ha sido fundamentalmente católica. Recordemos los hitos básicos de ese discurrir histórico. 1492 fue el año del fin de la presencia musulmana en España, y también de la expulsión de los judíos⁵. Los descendientes de aquellos musulmanes, los moriscos, después de diversos avatares, fueron expulsados de España por

⁵ España expulsó a los judíos de su suelo ese año de 1492, lo que parece algo singular. Se olvida con frecuencia que Portugal los expulsó poco después, en 1497, y que mucho antes, en 1290, el rey Eduardo I de Inglaterra redujo a la miseria y expulsó de la isla a los judíos ingleses, y que el rey Carlos VI de Francia siguió su ejemplo en 1394.

Felipe III en 1609. Y, desde mediados del siglo XVI, España fue uno de los países claves de la llamada Contrarreforma, etapa que significó un gran afianzamiento del catolicismo frente al protestantismo. Son varios siglos en los que se forja la España moderna, y lo hace en el catolicismo. No debe extrañar que, como veremos, hoy día, la inmensa mayoría de los españoles se sientan católicos.

Debemos detenernos algo más al abordar la cultura religiosa de los españoles. Con demasiada frecuencia, se especula en una dirección u otra sobre la religiosidad del pueblo español; pero casi siempre se hace sin mucho fundamento. Sin embargo, disponemos de muy buenas encuestas que nos enseñan lo que sienten los españoles en materia religiosa. Veamos lo que dicen algunas de ellas.

En nuestro país, cuando se hace cualquier encuesta preguntando por las creencias religiosas de los españoles, los resultados que se obtienen son muy poco *laicos* o *aconfesionales*. Así ocurre, por ejemplo, en el Barómetro del CIS de diciembre de 2004. El 78,9% de la población se declara *católica*, y eso que en el listado de proposiciones de esta pregunta figura una elegante opción de *no creyente*, en la que se incluye sólo el 12,2 % de la población. Se declara *ateo* el 5,9%, y *creyente de otra religión* el 1,9%. Si asumimos que las opciones de *no creyente* y de *ateo* son las que se ceñirían mejor a esta fórmula de *laicismo social*, estamos hablando tan sólo del 18,1% de la población.

Aquel 78,9% se traduce en la escalofriante cifra de 27.277.174 españoles que se declaran *católicos*, sobre un monto total de 34.571.831⁶. En la siguiente Tabla tenemos esos mismos datos.

Tabla 6

Cómo se definen los españoles en materia religiosa

Católicos	78,9%	27.277.174
Creyentes de otra religión	1,9%	656.865
No creyentes	12,2%	4.217.763
Ateos	5,9%	2.039.738

Fuente: Datos propios sobre el *Barómetro* del CIS de diciembre de 2004.
Base para el cálculo numérico: 34.571.831 personas.

⁶ Podemos utilizar esta cifra con tranquilidad, puesto que es la del censo electoral del 14-M, y corresponde a los mayores de 18 años que están en España. Más o menos la base sobre la que hay que entender los datos de la encuesta del CIS.

Esas son las cifras: casi 27.300.000 españoles que, espontáneamente, se definen ante los encuestadores como *católicos*. Eso es la manifestación de una *identidad cultural* sin muchos paliativos.

Es cierto que una cosa es identificarse religiosamente de una manera determinada, y otra seguir las prácticas y ritos más elementales. Son cosas relacionadas entre sí, pero no se solapan ni ocultan una a la otra. En la siguiente Tabla vemos cómo baja la cifra de practicantes.

Tabla 7

**Frecuencia con que asisten a actos religiosos
(distintos de ceremonias de contenido social, como bodas o bautizos)**

Católicos	78,9%	27.277.174
Casi todos los domingos y festivos	18,9%	5.279.533
Varias veces a la semana	2,3%	642.483
Alguna vez al mes	12,7%	3.547.623
Varias veces al año	18,9%	5.279.533
Casi nunca	46,5%	12.989.328

FUENTE: Datos propios sobre el *Barómetro* del CIS de diciembre de 2004.

Base para el cálculo numérico: 27.934.039, la suma de los que se declaran *católicos* y *creyentes de otra religión*.

Es decir, casi 15.000.000 de españoles (exactamente 14.944.711) van a misa en algún momento. Y decimos *a misa católica* porque el porcentaje de los creyentes de otra religión es tan exiguo como aquel 1,9%. Y casi 5.300.000 españoles van a misa todos los domingos y festivos, lo que no es una cifra a despreciar.

Puesto que los jóvenes jugaron un papel interesante el 14-M, y, además, existe siempre un especial interés por parte de los partidos políticos en ellos, veamos en las siguientes dos Tablas cómo se desenvuelven en estas cuestiones de la creencia y la práctica religiosa; además, lo comparamos con lo que creen y practican los mayores de 65 años.

Tabla 8

Cómo se definen los jóvenes de 18-24 años y adultos de 65 y más años en materia religiosa

	Jóvenes (*)		Mayores 65 años y más (*)	
Católicos	2.878.500	60,6%	6.601.000	94,3%
Creyentes de otra religión	80.750	1,7%	28.000	0,4%
No creyentes	1.249.250	26,3%	245.000	3,5%
Ateos	513.000	10,8%	84.000	1,2%

FUENTE: Datos propios sobre el *Barómetro* del CIS de diciembre de 2004.

Tabla 9

Frecuencia con que jóvenes de 18-24 años y adultos de 65 y más años asisten a actos religiosos (distintos a ceremonias de contenido social como bodas o bautizos)

	Jóvenes 18-24 años (*)		Mayores 65 años y más años (*)	
Casi todos los domingos y festivos	256.500	5,4%	2.723.000	38,9%
Varias veces a la semana	23.750	0,5%	336.000	4,8%
Alguna vez al mes	280.250	5,9%	1.001.000	14,3%
Varias veces al año	821.750	17,3%	1.302.000	18,6%
Casi nunca	3.339.250	70,3%	1.624.000	23,2%

FUENTE: Datos propios sobre el *Barómetro* del CIS de diciembre de 2004.

(*) El cálculo está hecho sobre la base de 4.750.000 jóvenes y de 7.000.000 mayores de 65 años. Un pequeño porcentaje de ellos, que ignoramos en este momento, se declara en alguna de las formas como *no creyentes*. Por tanto, los números finales serían ligeramente más bajos que los ofrecidos; sobre un 1-2% menos. Base de *católicos + creyentes otra religión* = 28.300.000.

Como vemos, de los 4.750.000 jóvenes que utilizamos como base, el 60,6%, es decir, casi 3.000.000, se definen como católicos, y casi 1.400.000 va a misa con alguna regularidad al año.

Y, todavía más interesante, ¿cuántos votantes católicos tiene el PP y cuántos el PSOE? Tenemos la respuesta en las siguientes dos Tablas.

Tabla 10

Cómo se definen en términos religiosos los votantes del PP y del PSOE (en número)
(Base: 11.000.000 de votantes PSOE y 9.700.000 del PP en el 14-M)

	PP	PSOE
Católicos	9.000.000	8.700.000
No creyentes	300.000	1.400.000
Ateos	87.000	600.000
Creyentes de otra religión	30.000	120.000

FUENTE: Cálculos realizados sobre la Encuesta postelectoral del CIS, marzo 2004.

Tabla 11

Cuál es la práctica religiosa de los votantes del PP y del PSOE que se declaran creyentes de alguna religión (en números)
(Base: 11.000.000 de votantes PSOE y 9.700.000 del PP en el 14-M)

	PP	PSOE
Casi nunca	3.000.000	5.000.000
Varias veces semana	430.000	100.000
Alguna vez al mes	1.400.000	1.200.000
Casi todos domingos y festivos	3.000.000	1.300.000
Varias veces al año	1.800.000	2.000.000

FUENTE: Cálculos realizados sobre la Encuesta postelectoral del CIS, marzo 2004.

Los votantes del PP, es obvio, son más católicos que los votantes del PSOE. Pero quizá llame la atención que 1.300.000 votantes del PSOE van a misa todos los domingos, y que 1.200.000 van a misa alguna vez al mes. Eso sobre la base de 8.700.000 votantes del PSOE que se declaran católicos. Es decir, aproximadamente 4.600.000 votantes del PSOE van a misa en algún momento del año. O de otra manera, casi el 42% de sus votantes. Cifras más que llamativas que hacen más incomprensible, si cabe, este resurgir del *laicismo social* desde que este gobierno está en el poder. La visión radical de la política produce estas paradojas.

Obtengamos, incluso, una radiografía más completa de lo que piensan y sienten los españoles en materia de religión (ya sabemos que mayoritariamente católica). Son indicadores más interesantes, si cabe, que la práctica religiosa, porque se sitúan en el plano de los valores y las creencias.

Según una encuesta del CIS sobre esta materia, realizada en 2002 (CIS, 2002), para el 56% de los españoles, «la religión es muy importante para la educación de los hijos»; el 43% cree en el *pecado*; el 41% en el *cielo*; el 38%, en el *Espíritu Santo*; el 34%, en los *ángeles*; el 33%, en los *milagros*, y el 26%, en el *infierno*. El 37% de los españoles tiene alguna devoción por «algún Santo, Virgen o algún Cristo en concreto». Para el 49% la Biblia «está inspirada en la palabra de Dios». El 42% «cree firmemente en Dios», a lo que se suma otro 31% que «más bien cree en Dios». Para uno de cada 3 españoles «es un deber bautizar a los hijos», a lo que se añade otro 46% que acepta el bautismo como «una costumbre» que ellos siguen con gusto. Y suponiendo que «tuviesen un hijo ahora», el 78% dice que lo bautizaría. Añadamos a esto que el 66% de los jóvenes de 18 a 24 años son de la misma opinión en esto de bautizar a los hijos. Casi la mitad de la población (48%) es partidaria de que los niños o los padres tengan la posibilidad de elegir en materia de enseñanza entre la religión católica, otra religión o ninguna. Y, por fin, el 82% está a favor de que se impartan clases de religión católica en los colegios públicos.

Esta es una breve radiografía, no sólo de la religiosidad de un pueblo, sino de algo mucho más profundo: de la *identidad cultural* de un pueblo; de su identidad más profunda, arraigada en siglos de sucesos y avatares. Y sobre este pueblo, que es el español, en los inicios del si-

glo XXI, cae ahora un desafío de *laicidad social*. Habrá que hacer algo con la Semana Santa y la Navidad, con los Reyes Magos, con las procesiones, romerías, tamborradas, cofradías, festividades de patronos, devoción por vírgenes y cristos, bodas, comuniones, bautizos, funerales, hasta con el carnaval, que no es más que el preludio de la cuaresma, y con tantas otras manifestaciones cultural-religiosas que tanto gustan al «engañado» pueblo español.

EL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA (20 FEBRERO DE 2005)

Acabemos nuestro breve recorrido con lo más reciente. A primera vista, no quedó mal el Referéndum de la Constitución Europea celebrado en España el 20 de febrero de 2005. En los resultados provisionales de la jornada, sin contar los votos CERA, participó el 42,3% del censo electoral, y votó afirmativamente el 76,7% de los que acudieron a las urnas. Las encuestas vaticinaban una participación inferior (superando en poco el 30%), por lo que la cifra del 42,3% en la participación fue muy bien recibida por este gobierno. Sin embargo, una reflexión más honda pone de relieve, de inmediato, que la decisión del gobierno de convocar este *referéndum*, y de convocarlo en tan temprana fecha, antes que ningún otro país que vaya a celebrarlo, es otro acto de política radical en los términos que venimos describiéndola.

Para empezar, no hay tradición en España de convocar un *referéndum* para tratar temas europeos. Ni en España ni en otros muchos países europeos. En la corta historia democrática de nuestro país, se han convocado 4 *referenda*: en 1976, para sacar adelante la Ley de Reforma Política; en 1978, para aprobar la Constitución española; en 1986, para aprobar la permanencia de España en la OTAN; y, por fin, el que nos ocupa. Relacionado con la Unión Europea, en España no se hizo ningún *referéndum* para acceder a ella (como hicieron Malta, Dinamarca, Noruega, Austria, Letonia, Irlanda, Finlandia, Reino Unido, Lituania, Eslovenia, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría); tampoco lo hubo para acceder al euro (como sí hubo en Dinamarca y Suecia), y ni tan siquiera se convocaron para aprobar ninguno de los grandes tratados, como el de Maastricht, Ámsterdam o Niza (sí lo hicieron Irlanda, Francia y Dinamarca). Y es que parece

que hay países que han incorporado en su tradición política la consulta con sus nacionales para aprobar asuntos clave europeos (la minoría, por cierto), mientras que otros, entre ellos España, han optado sistemáticamente por resolverlos en el Parlamento. ¿Por qué el cambio de criterio ahora? ¿Qué buscaba este gobierno, que no había pasado ni un año en el poder, para esta repentina e inusual convocatoria? En sí misma, no es criticable esa decisión. Es llamativa, aunque lógica, sobre todo en la trayectoria que ha llevado este gobierno en los pocos meses de ejercicio. Porque encaja muy bien con esa visión radical de la política que tiene.

Ese 42,3% de participación ha sido presentado como un buen dato, enmarcado en una supuesta tibieza en las consultas de *referenda* relacionadas con temas europeos. Pero eso dista mucho de ser cierto. Si estudiamos los datos de la siguiente Tabla 12, se ve que, desde 1972 hasta la fecha, se han realizado 32 *referenda* sobre distintos temas europeos en diversos países. En 27 de esos 32, la participación ha superado el 50%, e incluso en 22 países la participación superó el 60%. Sólo en 5 países, incluyendo ahora nuestro reciente caso español, la participación no superó el 50%. Estamos situados en la posición 31 de las 32 posibles. Sólo fue peor que nosotros Irlanda en 2001, cuando sometió a *referéndum* el Tratado de Niza.

A la luz de esta ya dilata experiencia, no ha parecido difícil que los ciudadanos acudiesen a las urnas en estas llamadas de *referéndum* en todos estos años. Y tampoco parece que haya sido difícil alcanzar elevados porcentajes de votos afirmativos, contándolos sobre la participación. En más de la mitad (19, para ser más exactos) se obtuvo un porcentaje de voto afirmativo que superaba el 60%. El 76,7% de votos afirmativos obtenidos en nuestro *Referéndum* constitucional europeo nos sitúa en la novena posición de los 32 *referenda* celebrados en Europa, lo que no está mal. Sin embargo, la participación es tan baja que lo desluce. Compárese, por ejemplo, con el *referéndum* italiano de 1989, con un 85,4% de participación y un 88,1% de votos afirmativos, o el de Irlanda de 1972, con el 70,9% y el 83,1%, respectivamente.

En consecuencia, y en términos meramente comparativos, el referéndum español ha registrado una participación extraordinariamente baja, y ha contado con un porcentaje de votos afirmativos elevado, pero bastante normal. Al final, valorando el apoyo real que esta iniciativa

ha tenido entre los ciudadanos, los números son claros: sobre un total de 33.562.119 españoles residentes en nuestro país y con derecho a voto (excluimos ahora el voto CERA), y contando con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, dieron su voto afirmativo 10.804.464 personas (esto es, el 32,19%); 2.428.409 (el 7,2%) dijeron *no* en su papeleta de voto; 849.093 introdujeron en la urna una papeleta en blanco (el 2,5%), y 19.359.017 españoles (el 57,28%) prefirieron no votar. En síntesis: el 32,19% de los españoles (10.804.464) aprobaron la Constitución europea, mientras que el 67,80% (22.757.655) no le dieron su apoyo explícito (porque se abstuvieron, o bien votaron *no*, o votaron en blanco). Menos de 1 de cada 3 españoles apoyaron la Constitución. Los datos son tozudos, pero reales en sí mismos. Y dicen que, por una razón o por otra, el Tratado de Constitución Europea no ha sido recibido en España con el calor necesario.

Tabla 12

Referenda celebrados en países europeos sobre asuntos relacionados con la Unión Europea desde 1972 a 2005.

Votos afirmativos obtenidos y participación. (Ordenados según participación)

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Asunto propuesto</i>	<i>Votos Sí</i> <i>(% sobre votos)</i>	<i>Participación</i> <i>(% sobre ceso)</i>
1 Malta	08/03/03	Acceso a la UE	53,6%	91,0
2 Dinamarca	02/10/72	Acceso a la UE	63,3%	90,4
3 Noruega	28/11/94	Acceso a la UE	47,8%	89,0
4 Dinamarca	28/09/00	Acceso al euro	46,9%	87,2
5 Dinamarca	02/10/72	Acceso a la UE	56,8%	85,6
6 Italia	18/06/89	Proceso de Constitución Europea	88,1%	85,4
7 Suecia	13/11/94	Acceso a la UE	52,7%	83, %
8 Dinamarca	02/06/92	Tratado de Maastricht	47,9%	83,1
9 Suecia	14/09/03	Acceso al euro	42,0%	82,6
10 Austria	12/06/94	Acceso a la UE	66,6	82,4%
11 Noruega	26/09/72	Acceso a la UE	46,5%	79,2%
12 Dinamarca	28/05/98	Tratado de Ámsterdam	55,1%	76,2%
13 Dinamarca	27/02/86	Mercado Común	56,2%	75,4%
14 Letonia	20/09/03	Acceso a la UE	67,0%	72,5%
15 Irlanda	10/05/72	Acceso a la CE	83,1%	70,9%
16 Finlandia	16/10/94	Acceso a la UE	56,9%	70,4%
17 Francia	20/09/92	Tratado de Maastricht	51,1%	69,7%
18 Reino Unido	05/06/75	Pertenencia a la CE	67,2%	64,0%
19 Estonia	14/09/03	Acceso a la UE	66,8%	64,0%

(continúa)

(continuación)

20	Lituania	11/05/03	Acceso a la UE	91,1%	63,4%
21	Eslovenia	23/03/03	Acceso a la UE	89,6%	60,3%
22	Francia	23/04/72	Expansión de la CEE	68,3%	60,3%
23	Polonia	08/06/03	Acceso a la UE	77,5%	58,9%
24	Irlanda	18/06/92	Tratado de Maastricht	68,7%	57,3%
25	Irlanda	22/05/98	Tratado de Ámsterdam	61,7%	56,3%
26	República Checa	14/06/03	Acceso a la UE	77,3%	55,2%
27	Eslovaquia	17/05/03	Acceso a la UE	92,5%	52,2%
28	Irlanda	19/10/02	Tratado de Niza	62,9%	48,5%
29	Hungría	12/04/03	Acceso a la UE	83,8%	45,6%
30	Irlanda	26/05/87	Mercado Común	69,9%	44,1%
31	ESPAÑA	20/02/05	Tratado de Constitución Europea	76,7%	42,3%
32	Irlanda	07/06/01	Tratado de Niza	46,1%	34,8%

Fuente: Diario *La Razón*, 22/2/2005. Datos cotejados en documentación oficial de la UE.

Como vemos, no ha sido buena esta experiencia comparando con Europa. Pero peor ha sido comparando con los otros tres *referenda* celebrados en España. Pueden verse los datos en la siguiente Tabla 13.

Tabla 13

Referenda celebrados en España

	Constitución Europea febrero 2005 (*)	OTAN marzo 1986	Constitución Española diciembre 1978	Ley para la Reforma Política diciembre 1976
CENSO RESIDENTES EN ESPAÑA	33.562.119			
TOTAL CENSO	34.692.278	29.024.494	26.632.180	22.644.290
TOTAL VOTANTES	14.204.663	17.246.452	17.873.271	17.599.562
% votantes	42,32%	59,42%	67,11%	77,72%
ABSTENCIÓN	19.359.017	11.778.042	8.758.909	5.044.728
% abstención	57,68%	40,58%	32,89%	22,28%
BLANCOS	849.093	1.127.673	632.902	523.457
% Blancos	6,03%	6,61%	3,57%	2,98%
SÍ	10.804.464	9.054.509	15.706.078	16.573.180
% sí	76,73%	53,09%	88,54%	94,45%
NO	2.428.409	6.872.421	1.400.505	450.102
% No	17,24%	40,3%	7,89%	2,57%

(*) Los datos están calculados sobre el Censo de Residentes en España.

Como se ve, los tres anteriores contaron con una participación que superaba el 50%. La más reducida se registró en el de 1986, con el 59,4%. El de mayor acogida no fue el de la Constitución, de 1978, con el 67,11%, sino el de 1976, el de la Ley de la Reforma Política, con el 77,7%. Ni tan siquiera el abultado voto afirmativo de 2005 (76,7%) supera al de los dos primeros: 94,4% en 1976, y 88,54% en 1978. Tanto en este de 2005 como en los dos primeros, las principales fuerzas políticas de España lo respaldaban. Fue en el de 1986, con el asunto de la OTAN, contando con la recomendación de abstención de AP, cuando se registra el voto afirmativo más bajo (53,09%) y el voto negativo más abultado (40,3%).

CONCLUSIÓN: HABÍA OTRA POSIBILIDAD

De los aproximadamente 11 millones de votantes que tuvo el PSOE el 14-M, casi 3.000.000 se sitúan en el más puro centro ideológico, y muchos más, casi 6.000.000, se localizan en el centro izquierda. Pues bien, ese votante del PSOE que es moderado en sus posiciones, con seguridad esperaba del nuevo gobierno, no ya talante y diálogo, sino la aplicación de una política práctica y moderna. Que tomase las cosas buenas que había hecho el PP en sus ocho años de gobierno, y que añadiese las nuevas de cosecha propia para seguir impulsando el crecimiento y el bienestar de España. Que llegase donde el PP no había llegado; pero que construyese sobre lo construido, no que demoliese.

Tengo la impresión de que el votante medio español, mayoritariamente centrista hacia la derecha o hacia la izquierda, tiene en mente una alternancia política del tipo europeo o norteamericano: hasta aquí llega un partido, y el relevo sigue a partir de ese punto siempre hacia delante. Y estoy seguro de que nuestro votante se quedó atónito cuando, en contra de todo lo imaginable, en vez de asistir a un espectáculo de relevo político de ese tipo, asiste a otro bien distinto; al clásico de la mirada atrás, el agravio y la falta de ideas para desarrollar. ¿Se imagina alguien un nuevo gabinete norteamericano demócrata que sucede a otro republicano, y que constantemente echa la culpa de todo al anterior? ¿O que lo haga un nuevo gobierno laborista británico después de suceder a otro conservador? ¿O que lo hagan los mismos casos citados, pero al revés? Cuando creíamos que habíamos al-

canzado una madurez política, si no igual, al menos homologable a la de esos países, de pronto hemos vuelto a la política aviesa de echar culpas de todo al de antes, de no reconocerle nada, y de cambiarlo todo *porque sí*. El rancio e inmaduro estilo de hacer política, que tan extendido está en los sistemas políticos más atrasados; el *estilo Penélope*: el eterno hacer y deshacer, el eterno volver a empezar. Y eso aplicado también a lo que es o debe ser España. Exceptuando algunos casos muy concretos y con un pasado perfectamente comprensible (como puede ser Canadá, o, incluso, Bélgica), nuestro país debe de ser el único entre todos los desarrollados y con larga trayectoria histórica en el que todos los días se ponga en cuestión con naturalidad su propia identidad; donde sea normal darle una y mil vueltas al concepto de qué es España; si hay nación, región, comunidad, nacionalidad, españolismo, catalanismo, estado asociado, etc. Las grandes naciones del mundo no pierden el tiempo en esas cosas, y se dedican a asuntos mucho más productivos.

Con seguridad, la inmensa mayoría de los españoles deseaba aquella política de continuidad y de constante superación, al estilo de las mejores democracias del mundo. En cambio, hemos ido en dirección contraria. No ha sido un buen comienzo del siglo XXI. Se está poniendo al pueblo español en situación de quedarse en cruz y en cuadro. En tan solo un año, hay demasiadas sombras, demasiadas sospechas. El diálogo se hace eterno, y el talante se adormece. Mientras tanto, la realidad campa a sus anchas, sin ton ni son.

BIBLIOGRAFÍA

CIS (2002): *Actitudes y creencias religiosas*, estudio n.º 2.443

EL TRIUNFO DEL NEOPOPULISMO EN LATINOAMÉRICA

Ya el título anuncia que alguna vez, se verá cuán próxima, anduvo este continente en mentes, y lo que es peor, en manos populistas. Y que después de algún esfuerzo respetable y sincero por superar esta perversión de la democracia, ha vuelto a las andadas.

Suponemos no desairar alguna mente inquieta de teorías anunciando que no haremos profundo estudio sobre aquello en lo que el populismo consiste. Entre otras cosas, porque no llegaremos a mejor parte que los muchos que lo intentaron antes. El populismo es uno de aquellos conceptos que todos tienen claro y que nadie acertaría a definir. Porque es monstruo de mil cabezas, que como la Hidra mitológica produce dos por cada una que le corten. Y es que se trata de criatura inquieta, que ora se afinca en sentimientos de hirsuto nacionalismo, ora en consideraciones raciales, o en motivos religiosos, o en pasiones socializantes. Y por eso se encontrarán populismos a la derecha o a la izquierda de dondequiera que montemos nuestro puesto de mira sobre la realidad social.

Específicamente, en Latinoamérica hubo populismos para todos los gustos. Como el de Juan Domingo Perón, o el comunistoide de Salvador Allende, o esa extraña amalgama pasional que ha sido el PRI mexicano, o buena parte del caudillismo venezolano, o el del inefable Velasco Ibarra en el Ecuador, o el que montaban los dictadorzuelos anticomunistas que protegía el Pentágono, por ese escaso mérito de su anticomunismo. A nombre del populismo socializante del Estado-

Fernando Londoño Hoyos ha sido Ministro del Interior y de Justicia de Colombia.

Providencia, los uruguayos se sentaron a la mesa y se tragaron el país, y a nombre del populismo democrático se instaló Fidel Castro en el poder, antes de que se descubrieran sus intenciones y se sufrieran sus ejecutorias.

Latinoamérica ha sido tierra fecunda para el populismo. Con lo que queremos decir que poca democracia seria se dio en ella y que no tuvimos una política social y económica consistente. Hemos ido por el mundo empujados por el último viento que sopla en escenarios políticos ajenos, al vaivén de los pequeños intereses que prosperaron amparados por un discurso hábil y perverso. Para los amigos de las simplificaciones, daremos la mala noticia de que no es exacto identificar aquellas aventuras militares con populismos de derecha, como tampoco es cierto que todas las demagogias nacidas de las urnas puedan reputarse de izquierda. El General Velasco Alvarado, en el Perú, era tan militar como francamente comunista; el General Rojas Pinilla, el único dictador militar que Colombia padeció en el siglo XX, era de clara estirpe conservadora y por convicción, o simplemente para no caerse, ensayó en las postrimerías de su corto mandato un populismo «izquierdizante», el que ahora permite a sus herederos coquetear sin pudores con el comunismo criollo; el Presidente Fujimori, también del Perú, montó después de elegido una maquinaria de poder autoritario que envidiaría cualquier golpista uniformado; en México se sucedieron los simulacros electorales con ganador anticipado, y luego, aquella extraña mezcla de ejercicio rudo del poder en el interior y un discurso pro-castrista y antiamericano en sus relaciones internacionales. Si los juicios universales fueron siempre el quebradero de cabeza de los filósofos, tratándose de política en América Latina son una simple tontería. Aquí la praxis le puede a todos los conceptos y no hay teoría que no naufrague en el primer acantilado que pretenda desafiar. Precisamente porque este ha sido el reino de los populismos, y en política el populismo es el caos.

Sin que importe mucho saber la causa, aventurando que hubiera sido una la poca importancia que en los Estados Unidos se le hubiera concedido a las amistades afinadas en el anticomunismo del gobierno, del panorama latinoamericano desaparecieron un buen día las dictaduras militares, de izquierda o de derecha. Apenas ha sobrevivido la de Fidel Castro, el tirano de Cuba que pervive para recordar que esos regímenes fueron posibles, y que si despierta el de Cuba tan

vivas simpatías en amplios sectores retardatarios del Continente, es porque pueden regresar. Para que no se quede nada entre el tintero, recordemos que ha sido en Europa donde Castro ha despertado más franca admiración. Después de haber mandado al paredón de fusilamiento más de quince mil infelices acusados por traidores a la patria, como al mejor estilo estaliniano, y de haber sofocado por cuarenta y cinco años cualquiera tentativa de pensamiento libre, la Unión Europea le acaba de renovar sus afectos porque sacó de sus mazmorras a cinco de los últimos sesenta opositores intelectuales que condenó sin fórmula de juicio. Que no siempre censuran las democracias a los tiranos es una vieja lección, sobradamente conocida.

LA DEUDA EXTERNA Y EL POPULISMO

La restauración, cuando fue el caso, o la aparición de la democracia en Latinoamérica coincidió con uno de los episodios más duros de su historia sin fortuna. Cuando el «shock» petrolero paralizó la actividad económica en los países ricos, los banqueros que recibieron a raudales los dólares que se reciclaban desde los productores árabes, salieron a la búsqueda desesperada de alguien que quisiera captarlos. Era algo tan absurdo como los personajes en busca de autor de Pirandello. Y entonces, maldita la hora, surgimos a la escena.

Los teorizantes estudiosos de Latinoamérica, en cuyo número descollaban muchos de la misma tierra, dijeron por décadas que la pobreza del continente era el efecto de la carencia de capital. Que el día que lo tuviéramos, todo vendría por añadidura. Nos sobraban riqueza minera y agrícola, inventiva, capacidad, inteligencia, que era por acá planta silvestre. Sólo el egoísmo yanqui nos tenía sumidos en centenaria postración. ¡Y nos creyeron!

Así fue como llegó una ola de capital como nunca pudimos imaginarla. Los banqueros se paseaban por estas capitales con maletines cargados de *petrodólares* y nunca fueron mejor recibidos en los grandes centros financieros nuestros ministros de hacienda y nuestros gerentes de los bancos centrales. La banca renunció a todos sus principios, empezando por el del rigor de su técnica y terminando por el de la cautela. Para que tal barbaridad fuera posible, apareció un concepto de al-

cance milagroso: el *Country Risk*. Aquello de estudiar la destinación de los recursos, de examinar los proyectos productivos a donde el dinero iría, vigilar su aplicación y examinar lo que en la jerga bancaria se llama la capacidad de repago, eran chocheras de otro tiempo. Como el riesgo era el país y como los países no se quiebran, a prestar llamaban.

Del otro lado de la mesa, el panorama no era más halagador. Proponerle a un gobierno debilucho e inepto, presionado por mil reclamos populares y un millón de exigencias de sus clientelas políticas, que impunemente recibiera crédito para lo que quisiera, era como amarrar perros con longaniza. Todos los países latinoamericanos tuvieron una disculpa para endeudarse. Las grandes obras de infraestructura que faltaban para su desarrollo, el mejoramiento de los servicios públicos, el salto a la gran tecnología, y por supuesto la educación, y la salud y el transporte, y la seguridad y las comunicaciones y el medio ambiente, eran los pretextos ideales, que produjeron incontenible euforia y lograron a su alrededor lo más extraño que en una democracia pueda concebirse, que es la unanimidad. Desafiaríamos hoy en vano a cualquiera de los partidos políticos que quiebran sus lanzas contra el Fondo Monetario Internacional, que citen una intervención, un discurso, una advertencia oportuna en contra del proceso de endeudamiento que nos sumiría en la tan mal llamada «década perdida» de América Latina.

Pues un buen día, mejor, un mal día, acreedores y deudores llegamos al descubrimiento de que la deuda había llegado a la astronómica cifra de trescientos mil millones de dólares, que eran absolutamente impagables. La plata se había perdido. Los proyectos que se ejecutaron, los menos, no eran rentables en los plazos de la deuda. Los otros eran un desastre, o una ficción o una torpeza. Y en muchos casos, simplemente no había proyecto. Decenas de miles de millones de dólares se fueron por el caño de gastos de funcionamiento, entendiendo la corrupción como una de las más apremiantes necesidades del funcionamiento de una democracia aparente, sembrada por todas partes de minas populistas.

Aquella fue la hora crucial de Latinoamérica, que pondría a prueba su unidad, su fuerza interior, su capacidad de respuesta ante los grandes desafíos. Y nada de eso había entre nosotros. Algunos ilusos propusimos una gran liga continental para discutir con los acreedores un

problema que era común y una responsabilidad que era compartida. No se trataba de un cartel de tramposos, sino de la unidad de quienes cometieron un soberbio error, y estaban dispuestos a pagarlo, pero sin el sacrificio de la paz y el porvenir. Los banqueros también eran culpables y el problema también era suyo. Pero pudieron todos los egoísmos propios y las mentiras ajenas, más que la razón, más que el buen juicio, más que la justicia. A cada país le prometieron arreglar su crisis, con la única condición de que no se contaminara con la ajena. México se tragó entero el cuento de que su vecindad con los Estados Unidos le bastaría para recibir tratamiento preferencial y equitativo; Centroamérica tendría consideración por pequeña, salvo que se sumara al conflicto de los grandes; Venezuela sería consentida por su riqueza petrolera; Colombia, porque había sido la casa buena del barrio malo; Brasil, porque Europa y los Estados Unidos la tratarían de potencia a potencia, pero sin la impedimenta de sus vecinos; Argentina estaba tan cerca del corazón de Europa y Chile tenía gobierno tan vulnerable, que todo aconsejaba la desunión, para lograr individualmente el perdón y la generosidad.

Con esa historia se quebró la unidad latinoamericana y en el naufragio cada uno aceptó una tabla para llegar a la orilla, sin hacerse cuestión de lo que esa orilla fuera. Y la orilla no fue una década perdida, como algunos analistas superficiales aseguran, sino que a los 23 años de explotado el conflicto, lo tenemos convertido en el combustible que incendia el continente por sus cuatro costados. Latinoamérica nunca arregló el problema de su deuda externa, y esa carga gravita sobre su presente, porque envenena de resentimiento el pasado y de desconfianza el porvenir. En un país modelo como Colombia, no porque fuera mejor que los demás sino porque con los dólares de la cocaína ha necesitado menos los del petróleo, el fardo del endeudamiento es tan abrumador que no podría resolverlo sino en un esfuerzo ciclópeo de los próximos diez años. Y hay en Latinoamérica algo que falta dramáticamente, que es tiempo. En la crisis populista del continente, la década perdida se volvió eterna. Y casi nadie lo ha notado.

Quedan así servidas las condiciones para el populismo que hoy brota como los lotos sobre los pantanos. Partidos políticos desprestigiados, por ineficientes y corruptos, la gente empobrecida y sin esperanzas, una excusa, o un motivo, como se quiera, para renegar contra

los imperialismos, y por último una buena mezcla de ignorancia y mala memoria, se alían impremeditadamente para empujar las masas hacia cualquier aventura. Y es cuando aparecen los aventureros...

EL MAPA POLÍTICO SE COMPLICA

No se negará que México hizo un buen esfuerzo. La derrota del PRI en las últimas elecciones, después de más de 70 años en el poder, no fue pequeña hazaña. Pero el PAN no estaba preparado para asumir una responsabilidad tan grande. O su jefe y ahora Presidente, Vicente Fox, no dio la talla. Pero el hecho es que a pesar de un crecimiento económico sin precedentes, entre otras cosas debido a un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos altamente benéfico, y a pesar de un desempleo moderado, y a pesar de ser hoy país más rico que Brasil, con sesenta millones de habitantes menos, la gente no está conforme. Y quiere más de la izquierda que saboreó por décadas en la retórica oficial, sólo que ahora la quiere de veras. El PRI parece moderado a los mexicanos, que andan en búsqueda del paraíso de la izquierda radical con López Obrador.

Centroamérica se mueve al impulso de sus viejas frustraciones, sus conflictos mal resueltos y sus modelos caducos. El Salvador es una buena excepción, donde el Partido Arena ha frenado a los guerrilleros del Farabundo Martí, y desarrollado una política respetable, juiciosa, y curiosamente triunfadora. La situación de Honduras es dramática, arrinconada por unas pandillas, las famosas «maras», que harían parecer a los hombres de Atila como nuevos caballeros de la Mesa Redonda. El que se gane el favor de esos salvajes, tiene ya su ejército y sólo le faltan los votos. Que a veces vienen en estos casos por añadidura. En más de una ocasión, Latinoamérica ha votado mal, pero con la esperanza de apaciguar a los violentos. Olvidaba que algún día España hizo lo mismo. Guatemala y Nicaragua son de pronóstico reservado. La primera acaba de ratificar en el Parlamento un buen TLC, acaso su última esperanza redentora, en medio de sonoras protestas callejeras. El neopopulismo latinoamericano es así. Odia instintivamente cualquier noticia buena, sólo porque venga de los Estados Unidos. La segunda, Nicaragua, anda refrescando su democracia en las fuentes del sandinismo. Daniel Ortega y sus cuadrillas armadas no

dejaron ese pueblo suficientemente hastiado. Al fin y al cabo, las camisetas impresas con la cara del Che Guevara tienen mercado. Y no sólo por estos contornos. Costa Rica, el país de la gente más adorable de América, se mantiene fiel a su tradición conservadora, con buenos índices de crecimiento, pero con una amenaza atroz. La venalidad de sus presidentes, que es fenómeno nuevo y detestable, es un peligro mucho más serio de lo que cualquiera imagina. La corrupción es fertilizante más eficaz para el populismo que la pobreza misma, y por eso Panamá es país de cuidado. Todavía está por verse lo que haga el hijo de Torrijos, el más simpático y desenfadado populista que por aquí gozamos, una vez tome realmente las riendas del poder.

Pero la gran preocupación es Suramérica. Y con razón. Apenas toma posesión de su cargo en el Uruguay Tabaré Vázquez, confeso simpatizante de los tupamaros, acompañado en el poder de otros todavía más recalcitrantes. Es como si en Italia mañana gobernaran las Brigadas Rojas o la ETA tuviera su oportunidad en España. Al otro lado del Río de La Plata, es un hombre cercano a los montoneros el que manda. Y por ahora marcha con velas desplegadas con el discurso sencillo pero altamente efectivo de que no pagará la deuda y financiará su gobierno con el dinero de los prestamistas. En su patio goza de popularidad inmensa. Y los acreedores esquilmados terminaron por recordar que peor es nada y se muestran sumisos ante las propuestas más aberrantes. Con lo que el tema de la deuda se está volviendo inmanejable en Latinoamérica. Si Kirchner tuvo éxito, el que no intente algo parecido es un traidor. Ya por eso se está formando una Liga entre Venezuela, Brasil y Argentina para enfrentar las ambiciones de los acreedores, aun las más razonables.

Paraguay ya está sufriendo los golpes de la mafia armada colombiana, lo que prueba que la capacidad de integración de los bandidos es mayor que la que mostraron por doscientos años los poderes políticos en Latinoamérica. Bolivia es un caso sin remedio a la vista. El dueño del juego es Evo Morales, apenas letrado, capaz de paralizar el país, como lo tiene, con un discurso populista preparado, válganos Dios, por Hugo Chávez, desde Venezuela. Carlos Mesa, el pobre Presidente, un hombre culto, patriota y bienintencionado, es una marioneta en las manos de Morales, quien para empezar exige que las regalías petroleras pasen del 18 al 50%, y que se vaya de Bolivia, sin que

medie indemnización, la empresa francesa que está dando de beber a algunos pueblos del altiplano. Queda el recurso del ejército, ya anunciado, para producir otra mortandad como la que tiene al ex Presidente Sánchez de Losada en el exilio. A Carlos Mesa le exigen autoridad, pero él sabe bien en lo que termina esa audacia por las orillas del Titicaca. Así que tal vez prefiera marcharse.

Brasil y Perú son dos casos interesantes. Tanto el Presidente Lula como el Presidente Toledo provienen de la ultraizquierda, que han querido temperar obrando ya como mandatarios. A Lula se lo vienen tolerando, pero no a Toledo. Será difícil entender cómo se pueda gobernar un país con índices de favorabilidad que no llegan al diez por ciento. Por eso el Perú pareciera querer ir más a la izquierda, salvo que se aceptara la candidatura de Fujimori, quien hoy aventajaría a sus rivales potenciales en cualquier encuesta de opinión. El tema de Lula es apasionante. Se le ha enfrentado a quienes lo empujaron al poder, y está cumpliendo un Gobierno de centro razonable. Pero equilibra las cargas, como tantos lo hicieron, descargando su maza populista con los vecinos. Por eso se siente tan cómodo con Hugo Chávez, aunque por nada del mundo usaría su lenguaje antinorteamericano, ni haría con la economía, con la opinión, con la justicia ni con la prensa, nada de lo que hace su folclórico vecino caribeño.

El camarada, coronel, comandante, paracaidista Hugo Chávez es un caso singular. Audaz, ignorantón pero nada tonto, carente de escrúpulos, es un megalómano convencido, que fue siempre el peor de los megalómanos. Sus áulicos le aseguraron que con la Biblia en una mano, los discursos de Bolívar en la otra, y el consejo de Fidel Castro en el corazón, sería el salvador de América. No sabe bien de qué quisiera salvarla. Pero está dispuesto a intentarlo. Y Dios ha permitido que ese fanfarrón marxista-bolivariano-cristiano, esté lleno de dinero. Vendiendo casi dos millones de barriles de petróleo por día, tiene con qué hacer demagogia en Venezuela, y lo que es peor, con qué exportarla.

Chavez está siguiendo meticulosamente los pasos de su modelo y mentor, Fidel Castro. Ya se tomó por asalto la administración de justicia, hizo suyo el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y, por supuesto, el Congreso. No faltándole nada para cerrar el círculo del poder, se lanzó contra la prensa, que tiene arrinconada con especiosos códigos de comportamiento y con

muy serias amenazas para el caso de su más leve violación. Ya pudo recuperar los sindicatos, purgó el ejército a su voluntad y medida, y acaba de anunciar que se lanzará por los caminos del socialismo. Nos tendrá en suspenso mientras explica de cuál de todos los socialismos posibles se trata, aclarando hasta ahora, apenas, que será el suyo un socialismo «autóctono». Sin que sepamos qué diablos le agrega al socialismo que sea autóctono, o cuál de las cosas autóctonas puede convertirse en socialismo, mucho es de temer que se parezca al de Cuba el que Chávez instaurará en Venezuela. Al fin y al cabo, con sinceridad digna de aprecio ha dicho mil veces que desea para su patria una vida tan plena como la de Cuba. Y como decía algún político colombiano muy eminente, a la gente hay que creerle.

Y LO QUE PUEDE PASAR CON CHILE Y COLOMBIA

Aun cuando en Chile sigue gobernando el socialismo, es el gobierno bastante menos socialista de lo que pudiera pensarse. Las reformas económicas que se introdujeron en la línea de los «Chicago Boys», y especialmente la sólida estructura que logró montar en las postrimerías del régimen de Pinochet ese grande economista que es Hernán Büchi, han hecho de Chile el único país de Suramérica que ya superó la línea del subdesarrollo y que tiene indicadores económicos y sociales de países en franco proceso de crecimiento sostenido. Y los chilenos pueden ser muy apasionados en política, pero no son insensatos. Con mayor razón cuando los que tienen más de 45 años recuerdan lo que fueron las colas desesperadas que ellos o sus padres hacían para abastecerse de lo indispensable en las horas negras del gobierno de Allende.

Colombia también se lanzó a una aventura política, que por pura casualidad fue de signo inverso al de las demás que se cumplían por el resto de Latinoamérica. Álvaro Uribe Vélez fue elegido Presidente sin apoyo de los partidos tradicionales, sin las simpatías de la gran prensa, sin la venia de los más ricos ni de los sindicatos más poderosos. Y ha seguido una línea de gobierno de centro-derecha, que ha empezado por declararle la guerra a muerte al narcotráfico, la causa primera de todas las desventuras nacionales, y a todos los que viven del narcotráfico, que son los movimientos armados, sin excepción ninguna. Y su política económica y social ha sido francamente agresiva, endere-

zada a derrotar el desempleo por el camino de la producción, y más que a generar puestos de trabajo, a desarrollar pequeños empresarios. Hacer de cada colombiano un propietario es para Uribe Vélez algo muy parecido a una obsesión.

La gran pregunta es qué pasará en el inmediato futuro con los experimentos liberales de Chile y de Colombia, en un ambiente tan hostil y anarquizado como el que queda descrito. Sobre todo en Colombia, cuando en las próximas elecciones del año 2006, que se cumplirán exactamente en el mes de marzo, la izquierda no sólo llegará envalentonada por los éxitos electorales que acaba de obtener en las elecciones de varias de las principales ciudades del país, sino que contará con la financiación indeficiente que provendrá del petróleo venezolano, que en exceso se vende a Cuba precisamente con el propósito de invertir el excedente en apoyo político a esos partidos de todos estos países.

Por supuesto que si superando escollos jurídicos que no viene ahora al caso describir, el Presidente Uribe pudiera presentarse como candidato a las próximas elecciones, las ganaría sobradamente. De lo contrario, el horizonte es ceniciento y no se advierte cómo ni de dónde pueda surgir una figura que reúna las dispersas voluntades que han acompañado a Uribe en la Presidencia y que garantice la continuidad de las líneas maestras de su mandato. Serán esas divisiones y los desaliños que traerán consigo los que aprovechen los neopopulistas colombianos para dar el zarpazo que tienen preparado. Si ello ocurriera, como no tendría nada de improbable, Suramérica habría caído entera en las manos de un populismo promarxista, retardatario y francamente agresivo. La pregunta que queda por plantear es por cuánto tiempo tolerarán los pueblos del continente el desorden y la pobreza que vendrán como consecuencia de estos ensayos político-administrativos. Los más optimistas deberían recordar el caso de Cuba, y los que lo consideren muy viejo y favorecido por su característica insular, podrían echar un vistazo hacia Venezuela, donde aparece Chavez, el prototipo de todas las demagogias izquierdistas y que ya se perfila ganador de las próximas elecciones, que le darán otros seis años de vigencia. También está por verse lo que ocurra en un mundo tan vasto de homogeneidad procomunista, pues que se trata de experiencia totalmente nueva. Si la Europa Oriental llegare a parecersele, habrá que

recordar que fue posible con Stalin, con su fabuloso aparato bélico, con su falta absoluta de reatos morales y con la total indiferencia del mundo occidental frente a los pueblos que lo sufrieron. No es imposible que algunas de esas condiciones vuelvan a repetirse, pero sí será altamente probable que la caída de Colombia en el torbellino populista y la consiguiente incapacidad de Chile para resistir el asedio, supongan para este Continente una experiencia más dramática de lo que pudiera imaginarse, y para el sueño mundial del fin de la Historia centrado en la democracia capitalista, un violento y aparatoso retroceso. Sería entonces evidente que a Fukuyama le faltaba razón.

Bien se ve que no somos optimistas sobre el presente y el futuro de Latinoamérica. Pero antes de que se nos tache como profetas de desastres, quisiéramos recordar que lo que ya ha pasado es mucho peor que lo que hace algunos años alguien hubiera imaginado.

LA ILUSTRACIÓN liberal

Revista española y americana

Abril de 2005

NÚMERO

23

La infamia dura ya un año

(POR FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS)



...

ALBERTO RECARTE: *La economía española. Perspectivas*

JOSÉ MARÍA MARCO: *11M. Cómo se destruye una nación*

RAFAEL J. BARDAJÍ: *La 'Alianza de Civilizaciones'. Elementos para una crítica*

CARLOS ALBERTO MONTANER: *Cómo y por qué fracasó el comunismo*

JOSÉ GARCÍA DOMÍNGUEZ: *El lado oscuro de Lluís Companys*

...

RETRATO: Ayn Rand

...

IDEAS EN LIBERTAD DIGITAL • RESEÑAS

EL LIBRO PÉSIMO • EL RINCÓN DE LOS SERVILESS

...

Y acceda a los contenidos
de todos los números anteriores
en nuestra página web

www.lailustracionliberal.com

E-MAIL: lailustracion@libertaddigital.com

GRAN ORIENTE MEDIO: UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO

En junio de 2004, el G-8 aceptó la iniciativa del Gran Oriente Medio y Norte de África, BMENA (Broader Middle East and North Africa), en Sea Island, Georgia (Estados Unidos). En un principio la participación en la BMENA –que consiste en promover una reforma política, social y económica en esta región y en el Norte de África– tiene por finalidad impulsar una agenda de reformas amplia y profunda para el cambio en todo el mundo árabe (y persa). Sin embargo, el plan inicial de Estados Unidos era demasiado amplio y demasiado profundo. Los aliados europeos, en consecuencia, no fueron capaces de asumirlo.

Lo que surgió de la cumbre del G8 fue más bien una tibia llamada a la libertad y a la reforma democrática para la cooperación entre los gobiernos regionales, los líderes económicos y los representantes de la sociedad civil.

La declaración del G-8 sobre la BMENA resulta muy ambiciosa en cuanto a las aspiraciones:

«Nuestros esfuerzos de cooperación se centran en tres campos de acción:

- «El ámbito político, donde el progreso hacia la democracia y el Estado de derecho trae consigo la instauración de garantías efec-

Danielle Pletka es vicepresidenta de Estudios de Política Exterior y Defensa del AEI (American Enterprise Institute).

tivas en el campo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que defienden ante todo el respeto por la diversidad y el pluralismo. Su resultado entrañará la cooperación, el libre intercambio de ideas y la resolución pacífica de las diferencias. Asimismo, la reforma del Estado, la buena gestión y la modernización son ingredientes necesarios para la democratización.

- «El *ámbito social y cultural*, donde la educación para todos, la libertad de expresión, la igualdad entre hombres y mujeres, así como el acceso a la tecnología de la información global, son aspectos cruciales para el desarrollo y la prosperidad. La educación de los trabajadores es la clave para activar la participación en un mundo globalizado. Centraremos nuestros esfuerzos en reducir el nivel de analfabetismo e incrementar el acceso a la educación, en especial de las niñas y las mujeres.
- «El *ámbito económico*, donde la creación de empleo es la prioridad fundamental de muchos países de la zona. Trabajaremos con los gobiernos y los líderes económicos para que las oportunidades y las condiciones de creación de empleo mejoren en el sector privado, para promover la creación de empresas, potenciar el comercio y la inversión, aumentar el acceso al capital, apoyar las reformas financieras, garantizar los derechos de propiedad, defender la transparencia y luchar contra la corrupción. El impulso del comercio entre regiones será otra de las máximas prioridades para el desarrollo económico de la BMENA».

En contraste, las propuestas concretas son más bien escasas. El motor de la iniciativa de la BMENA es el *Foro para el Futuro*. El primer Foro para el Futuro se celebró en Marruecos en diciembre de 2004. El Foro creó un marco de trabajo a nivel ministerial, reuniendo al G-8 y a Ministros de Economía, Asuntos Exteriores y otras áreas de los países de la región con el fin de establecer un diálogo sobre las reformas junto con los líderes de la economía y de la sociedad civil. La intención del Foro fue «proporcionar un entorno de diálogo informal, flexible y abierto, dedicado a reforzar la democracia y la participación de la sociedad civil, desarrollar la formación e impulsar el crecimiento de economías modernas que generen riqueza y que estén totalmente integradas en la economía global» (Foro para el Futuro, 2004).

En la práctica, se trataba de una reducción drástica de los objetivos morales fijados en Sea Island. El nuevo sesgo quedó reflejado en una viñeta del diario marroquí *L'Economiste*. En primera plana, este diario publicó un dibujo sobre la conferencia en el que un soldado norteamericano apuntaba con una pistola a un árabe tendido en el suelo. Citando –según decía la viñeta– a Colin Powell, el soldado le decía al árabe: «Espero que podamos llegar a un entendimiento en cuanto a la necesidad de modernizar la región de Oriente Medio y el Norte de África».

Los funcionarios árabes de alto rango presentes en la conferencia rechazaron la declaración según la cual la Administración Bush afirmaba que la democratización de la zona ayudaría a acabar con el terrorismo. Señalaron insistentemente el ejemplo del conflicto entre israelíes y palestinos y el derramamiento de sangre en Irak como obstáculos a la reforma. De no haber sido por la presencia de los representantes de la sociedad civil, la misma conferencia podría haberse celebrado veinte años antes, en 1984 en vez de en 2004.

Tras un inicio tan escasamente prometedor, un observador razonable podría haber estimado que la BMENA no es más que un puñado de buenas intenciones con escaso futuro. Al fin y al cabo, la historia está llena de este tipo de iniciativas, conferencias con grandes figuras, procesos de paz... reuniones y cumbres que suelen servir de pretexto a excelentes celebraciones gastronómicas, pero que en raras ocasiones han producido un cambio político significativo.

Ahora bien, los líderes de Oriente Medio no son los únicos que mostraron escaso entusiasmo. La mayoría de los ministros europeos de Asuntos Exteriores también se mostraron apáticos ante el plan de acercamiento a la BMENA y ante las reformas políticas y económicas que esta iniciativa debe impulsar. Habían frenado a Estados Unidos en Sea Island y sus declaraciones en el Foro para el Futuro no resultaron precisamente esperanzadoras.

Dado que el impulso primero de esta iniciativa procedía de Estados Unidos, estaba claro que la motivación para continuar el esfuerzo por el cambio también debía provenir de Washington.

¿Por qué tanto empeño por parte del Nuevo Mundo y por qué tan poco por parte de sus interlocutores europeos? Aunque éste no sea el

tema de este ensayo, es necesaria una breve digresión para explicar la falta de idealismo en Europa.

En su ensayo fundamental sobre la brecha transatlántica, Robert Kagan escribe: «El poder militar americano ha producido una propensión a utilizar esa fuerza. La debilidad militar europea ha generado una aversión perfectamente comprensible al ejercicio del poder militar. De hecho, ha incitado a los europeos a instalarse en un mundo donde la fuerza no sea relevante, donde predominen las leyes y las instituciones internacionales, donde esté prohibida la acción unilateral por parte de las naciones poderosas, donde todas las naciones, con independencia de su fuerza, tengan los mismos derechos y estén igualmente protegidas por normas de conducta acordadas internacionalmente» (Kagan, 2002)

Por supuesto, la BMENA no contempla el uso de la fuerza militar; sin embargo, supone un deseo de impulsar la revolución por otros medios y, como tal, es un anatema para los poderes europeos. En última instancia, el recurso a la diplomacia por parte del mundo occidental para presionar a favor del progreso de Oriente Medio supone que si a corto plazo dichos cambios no se producen, se contempla la posibilidad de utilizar métodos más contundentes. Aun así, Europa no tiene interés en utilizar la fuerza.

Por su parte, Estados Unidos tampoco está interesado en promover reformas políticas y económicas mediante el derrocamiento de unos cuantos regímenes políticos. Al contrario, sigue comprometido en apoyar un proceso de paz y desarrollo en Oriente Medio y el Norte África. Queda sobreentendido –pero sólo sobreentendido– que Estados Unidos está dispuesto a desplegar su fuerza militar para apoyar este esfuerzo.

El contraste entre la propuesta europea y la americana es importante. Ahora bien, ¿por qué los americanos tienen tanto empeño en cambiar el Gran Oriente Medio?

Para la Administración Bush, la lógica es sencilla: la tiranía alimenta el extremismo. El nexo entre tiranía y extremismo islámico ha sido el caldo de cultivo de Al Qaeda. En el discurso de toma de posesión de su segundo mandato, el Presidente Bush explicó:

«Hemos comprobado nuestra vulnerabilidad, y sabemos cuál es su origen. Mientras haya regiones enteras del mundo sumergidas en el resentimiento y en la tiranía, abocadas a ideologías que alimentan el odio y justifican el crimen, la violencia estará presente, multiplicará el poder de la destrucción, cruzará las fronteras más impermeables, e incrementará la amenaza de muerte. Sólo hay una fuerza en la historia capaz de romper el odio y el resentimiento, denunciar las ambiciones de los tiranos y apoyar las esperanzas de las personas decentes y tolerantes. Esa fuerza es la libertad humana».

«Los acontecimientos y el sentido común nos inducen a una conclusión: La supervivencia de la libertad en nuestro país depende cada vez más del éxito de la democracia en otros países. La esperanza de paz en nuestro país reside en la expansión de la libertad por todo el mundo».

Quienes han venido observando durante estos años la evolución del Gran Oriente Medio no deberían albergar demasiadas dudas: la ausencia de un espacio político ha convertido a las mezquitas en un refugio natural. Hay muy pocas alternativas para las vidas de 370 millones de habitantes de esta región del mundo; su futuro es desesperanzador, los gobiernos no asumen sus responsabilidades y la educación es escasa, entre otros muchos fallos. Estos hechos lamentables están ampliamente documentados.

Los hechos también demuestran otro factor: no es la falta de dinero lo que conduce a la desesperación a muchas personas en Oriente Próximo y el Norte de África. Es la ausencia de libertad. Las personas buscan alternativas y buscan también los derechos que estas alternativas requieren. Ya sea a nivel local o a nivel nacional, el derecho a cambiar de gobierno, a tener un mercado libre, a crear una empresa, a asistir a la escuela no son ideales occidentales. Son ideales básicos del ser humano frecuentemente negados a los habitantes de estas zonas del mundo.

Sólo si se restablecen estos derechos básicos y se renueva la esperanza en un futuro más abierto, los grupos como Al Qaeda podrán empezar a perder su capacidad de atracción. En el fondo, la retórica de estos grupos no ofrece nada sustancialmente distinto al actual *statu quo*. Al Qaeda no promete trabajo, educación o transparencia; simplemente afirma: «No somos como vuestros líderes corruptos y podridos». Pero cuando no queda otra opción, la oferta de Al Qaeda resulta atractiva.

Un principio fundamental de la propuesta de la BMENA consiste en realizar reformas «desde dentro». Es decir, las promesas de la BMENA para el cambio no se impondrán «desde fuera». Esta afirmación resulta un poco absurda. Más de cincuenta años de gobierno en la región no han traído ningún cambio «desde dentro». Más bien han supuesto la consolidación de las dictaduras, el avance de la cleptocracia y la reducción de todos los niveles de vida, desde la salud hasta el empleo, pasando por la alfabetización.

Ahora bien, aunque parezca paradójico, existen importantes incentivos para que pueda producirse un cambio desde dentro. La situación económica de la mayoría de los países de la zona es insostenible. En la última década, en gran parte de estos países la renta *per capita* ha caído en picado, el ya de por sí escaso acceso a una educación útil (es decir, encaminada a la inserción en el mercado de trabajo) ha disminuido, y el desempleo se ha disparado. Las subvenciones, que antes eran la seña de identidad de los regímenes socialistas árabes y de sus ricos vecinos del Golfo, también han empezado a decaer. Tampoco parece que el aumento actual de los precios del crudo vaya a proporcionar un gran alivio a una sociedad tan necesitada. Y es que a pesar de la disminución del índice de natalidad en casi todo Oriente Medio, la mayor parte de la población es joven. En Libia, más del 60 por ciento de la población tiene menos de 15 años; en 2001 el desempleo rondaba el 30 por ciento. En Arabia Saudí, las cifras son del 38 y del 25 por ciento, respectivamente.

Las cifras de Arabia Saudí son la norma en la zona. En toda la región, el 37,5 por ciento de la población tiene menos de 15 años, lo que quiere decir que cada año tres millones de jóvenes acceden al mercado de trabajo. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo aclara aún más los términos del problema: más de un cuarto de la población joven parada de todo el mundo (entre los 15 y los 24 años), es decir 88 millones de personas, se encuentra en el mundo árabe. Estas son las semillas de la revolución y ese es el problema que hay que solucionar.

Debido a las abrumadoras cifras y al apego enfermizo de los autócratas al poder, es lícito no albergar demasiadas esperanzas. Aun así, y por increíble que parezca, soplan aires de cambio. En parte porque Estados Unidos ha realizado un esfuerzo ingente para dotar de poder

a los reformistas, en parte porque Europa parece querer involucrarse, y en parte por el gran éxito de las elecciones de Irak y Afganistán (a pesar de la persistencia de la violencia en Irak), los pueblos de Oriente Medio no parecen dispuestos a seguir tolerando el *statu quo*.

En el Líbano, el asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri ha provocado grandes manifestaciones que exigían la retirada de las tropas ocupantes sirias y la dimisión del gobierno de Beirut, una marioneta de Siria. Siria ha anunciado una retirada limitada y se ha producido la dimisión del gobierno prosirio. Queda aún mucho camino por delante para alcanzar todos los objetivos, pero nunca antes los libaneses se habían decidido a cruzar las fronteras sectarias internas que les impedían exigir sus derechos.

En Egipto, gracias a una notable presión de Estados Unidos (y tras la cancelación de una visita de la Secretaria de Estado), el presidente Hosni Mubarak ha anunciado que la Constitución egipcia será reformada para permitir que se presenten múltiples candidatos a las elecciones presidenciales. Aunque no se trata de una revolución, sí es la primera señal de que el liderazgo de la nación más importante del mundo árabe está dando paso a una apertura.

Incluso en Arabia Saudí, el rígido liderazgo wahhabita ha permitido las primeras elecciones municipales libres de la historia de la nación. Sabemos que las mujeres no podían participar y que estas elecciones han tenido poco que ver con un modelo democrático; pero constituyen un paso adelante en un país donde estos avances han sido sumamente escasos.

Oriente Medio aún tardará muchos años en convertirse en un lugar nuevo y más habitable, pero el cambio debe prender en algún lugar. El año 2005 constituirá un punto de inflexión. No será el final del inicio, sino el inicio del final del poder de unos dictadores insaciables.

Hay mucha gente que sigue sugiriendo que Oriente Medio y el Norte de África «no están preparados» para la democracia. Quienes lo dicen han olvidado las lecciones de la Historia. Lo mismo se decía hace tan sólo cincuenta años de Japón y de Corea. Ambos países son ahora democracias dinámicas, y su éxito, aunque tardó en llegar, es un modelo para toda la región. Con paciencia, compromiso y ayuda por parte del exterior, todo es posible.

A finales de 2005 se celebrará un nuevo «Foro para el Futuro» en Bahrein. Será una oportunidad para todos los interesados. Para los Estados Unidos, que habrán de persuadir a sus aliados europeos de que la BMENA, si posee convicciones serias, puede ser una herramienta de cambio en Oriente Medio y en el Norte de África. Para Europa, que podrá convertirse en un socio activo en la creación de un futuro mejor para la zona. Y para los líderes y reformistas de estas naciones, que podrán avanzar resueltamente en la instauración de los derechos civiles y políticos, de mercados abiertos y de la libertad que todos merecemos.

BIBLIOGRAFÍA

Foro para el Futuro (2004): Resumen Presidencial, http://www.g7.utoronto.ca/meetings-official/forumforfuture_041211.pdf

Kagan, R. (2002): «Power and Weakness», Policy Review No. 113. <http://www.policyreview.org/JUN02/kagan.html>.

LOS FANTASMAS DEL PASADO. LA REVISIÓN CRÍTICA DE LA TRANSICIÓN Y EL PARTIDO SOCIALISTA

Suele decirse que la democracia española es joven. Lo es, desde luego, si la comparamos con la norteamericana, pero veintiséis años de estabilidad constitucional y de alternancia democrática no son poca cosa. A pesar de lo cual, parece que estamos abocados a «revisar» nuestra Transición a la democracia de los años setenta y nuestra Constitución de 1978, empujados por la presencia pública y por la influencia política de quienes aseguran que la nuestra es una democracia deficiente que debe ser «perfeccionada».

EL ESPACIO DE LOS CRÍTICOS

Veintiséis años no son pocos, desde luego, si tenemos en cuenta los cinco años escasos que duró la experiencia constitucional de la Segunda República (1931-1936), o si advertimos que el cuarto de siglo de nuestra monarquía democrática representa más del cincuenta por ciento del periodo constitucional más amplio y estable, hasta hora, en la historia contemporánea de España, el de la Restauración (1876-1923). Alguna virtud deben tener, por tanto, las reglas de juego que se aprobaron en 1978 y por las que se ha regido la vida política española

Manuel Álvarez Tardío es profesor de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

desde entonces, las mismas que han permitido por fin la alternancia pacífica en el poder y la articulación de una sociedad abierta.

Sin embargo, desde hace unos años a esta parte ha ido en aumento la costumbre de descalificar nuestro sistema político actual, tachándolo de democracia imperfecta. Y puesto que los orígenes de ese sistema están vinculados a un proceso previo de transición desde un régimen autoritario, las mismas voces que cuestionan la calidad democrática del sistema político suelen remitirse, en último término, a una reflexión sobre la naturaleza de la transición: democracia imperfecta por venir de un proceso de transición también imperfecto, «inacabado» en el mejor de los casos, cuando no como una mera y simple traición a determinadas esencias ¹.

Hace bien poco que algunos de los sucesores de quienes en 1978 criticaron severamente las formas y el fondo de la transición han vuelto a esgrimir sus argumentos en el debate público, precisamente en un momento en que su peso político ha crecido de forma considerable: «Después de veinticinco años de transición democrática incompleta, es necesario sentar ahora las bases para una segunda transición que nos encamine hacia una democracia de calidad». (Carod, Errazti y Fuster, 2004). La transición realizada entre 1976 y 1978 habría sido un proceso ajeno a la participación de los españoles; la «democracia de calidad» habría sido sustituida por un sistema político que sólo es democrático en la forma, un sistema en cuyas reglas de juego hay suficientes mecanismos y posibilidades para que, en un momento dado, un determinado ejecutivo gobierne de forma autoritaria.

Por supuesto, la descalificación moderada o radical de la transición, en tanto que fundamento del sistema constitucional vigente, no es nueva. Todo lo contrario, es consustancial al hecho mismo que se critica. La denuncia de aquel cambio complejo de instituciones y de legalidad que desembocó en la elaboración de una Constitución de consenso recibió en su momento innumerables reproches. Incluso desde el Partido Socialista Obrero Español, voces del entonces llamado sector crítico acusaron a sus propios dirigentes de aceptar una «ruptura a medias», de «hacer una Constitución por consenso», de

¹ Un balance en Powell (2001, 627-634). Interesa también el artículo de Juliá (2002) frente a los que hablan de «transición amnésica». Además del texto de Carmen Iglesias en Herrero de Miñón (1999, I).

«reconocer la Monarquía» y de «avalar democráticamente a la derecha ex-franquista»². Pero no por numerosas y ruidosas, aquellas críticas fueron realmente significativas de lo que pensaba la sociedad española, como enseguida se pudo comprobar en las encuestas y en las urnas³.

Los estudios de opinión realizados por el CIS desde mediados de los años ochenta son realmente significativos del abismo que separa a la sociedad española de quienes han descalificado la transición: desde 1985 hasta el año 2000, el porcentaje de los encuestados que consideraba que la transición a la democracia «constituye un motivo de orgullo para los españoles» nunca estuvo por debajo del 75%. Además, según se avanzaba en el tiempo, el porcentaje, lejos de disminuir, crecía; el del año 2000 era, por tanto, el más alto, llegando a un 86%. Pese a los críticos, la inmensa mayoría de españoles sigue considerando la transición como un motivo de orgullo⁴.

En cuanto a las consultas electorales, los resultados de las tres primeras elecciones generales, las de 1977, 1979 y 1982, además de otros factores de índole político y económico, obligaron a batirse en retirada a los críticos del cambio pacífico y la ruptura pactada. Por la derecha, la retirada acabó en una casi absoluta descomposición, hasta convertir en marginales a los grupos ultras⁵. Por la izquierda, sin embargo, el discurso crítico quedó relegado a las filas de atrás pero no se perdió por completo. Se mantuvo en la urna de las esencias ideológicas, como un producto del pasado digno de respeto, como si se tratara de un exceso verbal que habiendo jugado un papel importante

² Palabras de Francisco Bustelo, el que fuera una de las voces principales del sector crítico en el XVIII Congreso socialista, en *El País*, 11 de mayo de 1979, poco antes de la celebración de dicho congreso. Véase Oñate (1998, 192).

³ Especialmente significativas fueron las intervenciones de los representantes de Izquierda Republicana de Cataluña y Euskadiko-Ezkerra, los diputados Barrera Costa y Letamendia Belzunce respectivamente, en el Congreso de los Diputados. Debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso, 8 de mayo de 1978, en Cortes Generales (1989: I, espec. 692 y 700). También la opinión de personajes de la extrema izquierda, como José Sanroma 'Intxausti', secretario general de la ORT, el partido maoísta, que aseguró que se estaba «elaborando una Constitución sobre la base del miedo que tiene la izquierda parlamentaria a la discrepancia. En el caso de la UCD y la Monarquía, es miedo a que el pueblo participe e influya en la redacción...»; o de Eladio García Castro, secretario general del PTE. *Diario 16*, 26 y 28 de junio de 1978.

⁴ En Moral (2001, 20). Además, según los datos del CIS de 1984, el 78% de los españoles consideraba «bueno» que la Constitución fuera un acuerdo entre todos los partidos.

⁵ En las elecciones generales de 1982 la extrema derecha quedó reducida a la mínima expresión: Fuerza Nueva obtuvo un 0,5 por ciento de los votos —apenas cien mil votos—, y Solidaridad Española se quedó en 0,13. Véase AAVV (1996, 550).

ya no era adecuado a los nuevos tiempos y a las exigencias de la democracia competitiva.

Hubo, no obstante, una diferencia más en el porvenir del radicalismo a uno y otro lado de la vida política. En el centro-derecha, la realidad impuesta por el estancamiento electoral de los años ochenta y la necesidad de fortalecer una alternativa realista al gobierno socialista, terminaron por provocar una renovación organizativa e ideológica que dejó fuera cualquier atisbo del discurso crítico con la transición que habían sostenido ciertos sectores conservadores antaño vinculados a Alianza Popular. Pero en la izquierda las circunstancias fueron distintas. Para empezar, ese discurso crítico –y en cierto modo anti-sistema– tenía clientelas muy sólidas en los dos grandes partidos, PSOE y PCE –amén de las izquierdas independentistas. En el primero, ante la posibilidad de convertirse en una alternativa de gobierno –y a la postre la misma victoria electoral de 1982–, fue posible una fuerte purga interna en la dirección y el consiguiente desplazamiento –aunque no la eliminación o expulsión– de los críticos. En el segundo, el camino se recorrió al contrario: primero fue la estrategia de la reforma, sostenida por la dirección eurocomunista en los años de la transición con no pocos problemas entre las bases; y luego, años después, la autocrítica por esa estrategia reformista y moderada. Unos resultados electorales decepcionantes y la frustración de las muy altas expectativas que tenían los dirigentes comunistas, se tradujo en pocos años en una revisión ideológica que devolvería la primacía al discurso crítico con la transición y por tanto, a la condena, más o menos explícita, de la dirección eurocomunista.

En definitiva, en los dos principales partidos políticos de la izquierda los críticos de la transición y defensores de una democracia más pura pudieron seguir respirando y protestando, aunque en el caso del centro-izquierda se tratara, sin duda, de un sector castigado y al que el oxígeno le llegaba en dosis muy controladas, al menos durante las tres primeras legislaturas de gobierno socialista. Aparte estaban, por supuesto, las ramificaciones de esas corrientes críticas y esencialistas que se habían extendido y refugiado en los grupos de la izquierda independentista.

A día de hoy, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos de la actualidad política española y la confusión que parece reinar en el centro-izquierda acerca de la conveniencia o no de modificar la

Constitución y de satisfacer las demandas nacionalistas, cabe preguntarse por la relación que todo esto pueda tener con la evolución ideológica del Partido Socialista y, especialmente, con el papel que ese discurso crítico de la transición ha ido jugando en dicha evolución.

UNA REVISIÓN A MEDIAS

Durante los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular, entre 2000 y 2004, se produjo un hecho singular: cuanto más crecía la desorientación ideológica del Partido Socialista y las dificultades a que debía enfrentarse para definir una alternativa realista y no demagógica a las políticas de los populares, más protagonismo ganaba un tipo de discurso que tanto por su forma como por su contenido guardaba gran relación, cuando no clarísima dependencia, con el de los sectores críticos del socialismo español antaño marginados.

No se trata, por supuesto, de que personajes ya muy pasados de moda recuperaran peso político, sino del creciente y sorprendente protagonismo de las ideas de esos grupos críticos que, paradójicamente, apenas habían merecido la más mínima atención para los socialistas cuando estos gobernaron con mayorías absolutas. En su segunda legislatura en la oposición, un centro-izquierda cada vez más desorientado ideológicamente se fue volviendo más y más vulnerable a los tópicos de los representantes de ese discurso crítico, ya se tratara de los que fueron minoritarios en el debate constituyente, como la Izquierda Republicana de Cataluña, o de los que formaban la coalición de Izquierda Unida, o incluso de los mismos que en su momento simpatizaron con el sector crítico del PSOE a finales de los setenta. Bajo la denuncia de la imperfección del sistema democrático pactado en 1978, unidos, por tanto, en un cierto afán de revisionismo constitucional, dio la impresión, mientras el Partido Socialista vivió sus últimos dos años en la oposición, que la consideración peyorativa de la transición empezó a recuperar terreno en su discurso, con las consecuencias de sobra conocidas para el análisis del actual marco constitucional y, sobre todo, para el juicio que les merecía la alternancia política: la democracia actual es una obra impuesta por los ex franquistas, fruto de intereses conservadores y hecha a conveniencia de

aquellos a los que hubiera perjudicado una mayor participación y movilización popular.

Basta recordar que para los antiguos críticos, como ya dijeron una y otra vez en 1979, inmediatamente después de ser aprobada la Constitución, las libertades formales no podían ser un fin en sí mismo sino el medio para una transformación socio-económica más profunda y una reorganización de la división territorial del *Estado español*. Algunos documentos políticos elaborados por el Partido Socialista entre 1976 y 1978 son suficientemente significativos. No hubo apelaciones firmes a la revolución, pero los socialistas de los años setenta hicieron gala durante la transición de un discurso bastante radical, caracterizado por el anticapitalismo y por la consideración de la democracia parlamentaria como un simple medio en el camino hacia las libertades reales⁶. El nada moderado Programa de Transición aprobado en 1976, estando ya en marcha la Ley para la Reforma Política planteada por el gobierno de Adolfo Suárez en el otoño de ese mismo año, reafirmaba la condición de partido de clase y fijaba el objetivo último del partido en la superación del modo de producción capitalista. Había que profundizar –decía– en «el concepto de democracia superando el carácter formal que las libertades políticas tienen en el estado capitalista, accediendo a las libertades reales». El objetivo último era la «sociedad sin clases con la consiguiente desaparición del Estado», aunque eso exigiera una «etapa transitoria de construcción del socialismo en la que [serían] necesarias intervenciones enérgicas y decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras económicas de la sociedad burguesa». No descartaban, advertían, «las medidas de fuerza que [fueran] precisas»⁷.

No obstante, como es conocido, la estrategia de acción política de los líderes socialistas no se distinguió precisamente por ese radicalismo revolucionario, especialmente desde el momento en que se co-

⁶ Como ha señalado Arranz (2001, 181), mientras los comunistas se moderaban «racionalizando y justificando su ruptura con el leninismo y el modelo soviético (...), el PSOE había aprobado en Suresnes, y reafirmado en su primer congreso legal en España en 1976, un programa a base de socialismo autogestionario, república federal resultante del ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de distintas nacionalidades ibéricas, neutralismo, tercermundismo y, por supuesto, ruptura radical con el régimen de Franco».

⁷ «Programa de Transición» y Resolución Política del XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Citados en Oñate (1998, 132).

noció la opinión de los españoles en el referéndum para la Ley de Reforma Política de diciembre de 1976. En ese sentido, fue importante la intervención de Felipe González en el XXVII Congreso del PSOE celebrado en Madrid entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976, unos días antes del referéndum sobre la Ley para la Reforma, el mismo Congreso en el que se ratificó el Programa Máximo de 1980. Aunque, como algunos autores han recordado, aquel fue un «Bad Godesberg al revés» (Gunther, Sani y Shabad, 1986, 87), lo cierto es que González reconoció que la política del gobierno había desdibujado la diferencia entre los conceptos de ruptura democrática y reforma democrática, llegando a insinuar que los socialistas podrían dar por hecha la ruptura si se celebraban elecciones libres y las futuras Cortes se encargaban de elaborar una Constitución, según lo expresó en el diario *ABC* el 7 de diciembre de 1976.

Como ha contado Alfonso Guerra, lo cierto es que tanto Felipe González como Santiago Carrillo eran «totalmente conscientes entonces de que el cambio hacia la democracia obligaba a un lenguaje lo más medido posible» (AA.VV, 1996, 238). La convocatoria de elecciones para junio de 1977 y los buenos resultados que los socialistas consiguieron en las mismas, desbancando al PCE como interlocutor principal del gobierno, hicieron que la dirección del PSOE se inclinara finalmente por la negociación y el acuerdo con el gobierno, dejando para la vida interna del partido la representación del drama revolucionario.

El respaldo electoral conseguido en 1977 abrió el camino hacia una victoria electoral que se creía inminente. Costó más de lo previsto e hizo falta que UCD entrara en un proceso de descomposición, pero finalmente llegó. Y lo hizo para durar mucho tiempo, tanto que parecía estar cumpliéndose la máxima, tan querida de algunos sectores intelectuales y tan del gusto de las bases socialistas, de que la democracia y la izquierda eran consustanciales. Si las contundentes victorias electorales y el acceso al poder hicieron posible que la dirección socialista liderada por Felipe González consiguiera acallar a los críticos, en el Partido Comunista ocurrió todo lo contrario. En éste, las derrotas electorales hicieron saltar por los aires esa falsa unidad interna que había permitido la hegemonía de la estrategia eurocomunista y había hecho posible, con muchas voces en contra, el apoyo al consenso constitucional. Como ha explicado Santiago Carrillo, ya en

los años ochenta el PCE fue el primero en «abjurar» del eurocomunismo y revisar la política seguida en la transición, en un camino que, a su juicio, conducía al «sectarismo y el dogmatismo» que le habían caracterizado en otra época (Carrillo, 1999, 16).

De este modo, principalmente como consecuencia de los resultados electorales, las voces que habían mantenido la crítica del proceso constituyente y de la restauración democrática en términos de democracia imperfecta y formalista, fueron relegadas a una minoría especialmente radicalizada de la izquierda, incapaz de adaptarse a las exigencias de la competencia electoral y de un sistema de partidos moderno. En unas nuevas circunstancias y con la responsabilidad del gobierno a cuestas, a la dirección del Partido Socialista aquello le resultaba no ya una crítica lejana y en cierto modo superada, sino algo profundamente incómodo; además, con el paso de los años llegaría a sentirse lo suficientemente fuerte como para practicar una política económica que estaba en abierta contradicción con los programas y las resoluciones aprobadas por el partido durante la segunda mitad de los años setenta y primeros ochenta.

Si Felipe González había dicho en la escuela de verano de los socialistas en 1976 que el socialismo que lideraba no compartía nada ni con la socialdemocracia ni con el centralismo burocrático, años después, a finales de los ochenta y sobre todo en la década de los noventa, iba a prescindir de algunos de los presupuestos ideológicos más importantes de la socialdemocracia sin demasiadas explicaciones. En una actitud que recuerda a la esquizofrenia que hoy sufren algunos de los partidos socialistas europeos, especialmente el alemán, el PSOE *gubernamental* ya no quería ser el de la democracia real y la autogestión que se había fijado en las Resoluciones Políticas de los años setenta.

EL REGRESO A LA OPOSICIÓN

Sin embargo, a partir de 1993, con la pérdida de la mayoría absoluta, y especialmente de 1996 en adelante, con la derrota electoral y el paso a la oposición, algo empezó a cambiar en el discurso y la presencia pública del centro-izquierda español. La salida de González dejó al descubierto un partido mucho menos organizado y disciplinado ideológicamente de lo que se creía. Por el contrario, era un partido dema-

siado fraccionado y con múltiples liderazgos internos, un partido al que se habían taponado las vías de renovación generacional, con demasiados problemas mal resueltos y heridas internas sin cicatrizar. No tardó en comprobarse, además, que un amplio sector de opinión dentro del partido no había asimilado ni lo ocurrido en el Congreso Extraordinario de 1979⁸, ni mucho menos lo que vino después, desde el incumplimiento del programa de política económica aprobado antes de las elecciones de 1982 hasta la ruptura con el sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores. Si por un lado se había trasladado a la opinión pública española la sensación de que la *era felipista* había sido la de la modernización del país y la de la justicia social, el abandono obligado del gobierno dejó al descubierto un partido sin ideas claras, o mejor dicho, con demasiadas ideas antiguas. No parecía que González y su equipo hubieran hecho nada realmente sustancial en el terreno del pensamiento. La acción de sus gobiernos ya había puesto de manifiesto que declararse socialdemócrata no era incompatible con desarrollar políticas económicas más o menos liberales⁹. No cabía esperar otra cosa diferente con relación a la vida interna del partido.

Pero la realidad que siguió a la derrota electoral de 1996 se hizo mucho más dura de lo que había sugerido en un primer momento el estrecho margen por el que había ganado el Partido Popular. Enseguida quedó claro que la alternancia no sólo era posible sino saludable, y que la España gobernada por los populares no sólo no dejaba de ser una democracia sino que era encauzada por un camino de reformas pactadas y de crecimiento económico muy provechoso.

⁸ El XXVIII Congreso del PSOE se celebró los días 19 y 20 de mayo de 1979. En el mismo se escenificó la pugna entre oficiales y críticos. Los críticos echaban en cara a la dirección que se confundieran las libertades formales con las reales, y recordaban que tener el poder del gobierno no era suficiente para hacer la tarea de transformación social. Por tanto, pedían una estrategia de partido para «conquistar» «esas otras formas de poder» y crear el bloque o frente de clase —en palabras de Luis Gómez Llorente—. Véase Oñate (1998, 192). Durante el Congreso, la gestión de la Comisión Ejecutiva se aprobó con un alto porcentaje de votos en contra y la Resolución Política que mereció la mayoría del voto de los delegados (el 61 por ciento) fue muy similar en cuanto a radicalismo y marxismo a la del XXVII Congreso. Acto seguido Felipe González dimitió como Secretario General, negándose a todo compromiso con los críticos. Se formó una Comisión Gestora y hubo que preparar un Congreso Extraordinario; en este los críticos fueron derrotados y se aprobó una Resolución Política más moderada en la que al menos no se hacía balance negativo de la transición.

⁹ Obviamente, la política económica de Miguel Boyer no tenía mucho que ver con el programa económico del partido, que postulaba la nacionalización de diez de los grandes bancos y cincuenta de las doscientas mayores empresas. Lo extraño es que esa divergencia no requiriera de algún tipo de revisión ideológica.

En esas circunstancias, un Partido Socialista inmerso en una importante crisis de liderazgo presentaba demasiados huecos por los que se podía colar un tipo de planteamientos que le devolvían al pasado. Dio comienzo así una cierta involución no reconocida. El episodio de las elecciones primarias y la caída de Josep Borrell, la inesperada derrota electoral de marzo de 2000 y el consiguiente desconcierto suministraron un oxígeno muy valioso a un tipo de sensibilidad heredera del viejo sector crítico. Ni los que precedieron a José Luis Rodríguez Zapatero ni este mismo –a pesar de sus intentos de construir una imagen propia como alternativa de gobierno basada en la idea del cambio tranquilo– plantaron cara a ese desafío involucionista que empezó acechando sobre las formas y ha terminado por acercarse al fondo.

Por otra parte, Rodríguez Zapatero, amén del modo en que resultó elegido secretario general, no contaba con el atractivo ni la capacidad de liderazgo que permitió al ex presidente Felipe González superar la crisis interna de su partido en 1979; tampoco disponía de un Alfonso Guerra con capacidad para reorganizarle el partido a su gusto y acallar el desbarajuste ideológico. El nuevo secretario general empezó pactando y ofreciendo una fachada de líder sereno, reservado y perspicaz, intentando convencer a propios y extraños de que iba a imponer un nuevo estilo de oposición que partiera de una premisa central: había que aceptar como algo natural, propio de toda democracia consolidada, que gobernaran los conservadores. Pero esa estrategia, suponiendo que existiera como tal, no soportó demasiado bien ni el paso del tiempo ni los embates de su ala izquierda, quizá porque el soporte doctrinal de la misma no era muy consistente. Primero fueron las bur-las al Rodríguez Zapatero pactista desde sectores afines, luego las críticas fortísimas de algunos medios de comunicación cercanos al PSOE contra la estrategia socialista en el País Vasco...; con el tiempo, la debilidad del liderazgo del nuevo secretario general haría el resto.

Hubo, además, un momento en que Rodríguez Zapatero hizo el gesto que ponía en evidencia la imagen que había querido transmitir al electorado. Ocurrió con el protagonismo de *la política en la calle*, una política que conllevó una nueva amistad sin condiciones con amplios representantes de la izquierda radical antaño marginados e ignorados por el centro-izquierda. El desastre del *Prestige* y el apoyo presta-

do por el gobierno del Partido Popular a la intervención aliada en Irak llevaron al líder de los socialistas a comulgar con lo que los sectores antiliberales de la izquierda española llaman *democracia participativa*: ese tópicus del sector crítico de la transición, con el tiempo capitalizado por los representantes de Izquierda Unida y los independentistas, según el cual la verdadera democracia o democracia real no es la representativa sino aquella otra en la que se produce una constante movilización y participación popular que influye poderosamente en las decisiones que haya de tomar el parlamento. Todo esto, claro está, con dos condiciones: primera, que el grado de participación popular depende de quién disfrute de la mayoría parlamentaria, siendo siempre más relevante cuando gobiernan los conservadores; y segunda, que la dirección y el aprovechamiento político de esa participación democrática poselectoral le corresponde a los grupos de la izquierda.

Bastó ver el episodio de protesta que protagonizaron un grupo de actores en las tribunas del Parlamento en la primera mitad de 2003; y bastó ver cómo aquel día algunos diputados socialistas respaldaban a los diputados de IU en el amparo a una manifestación que violaba dolosamente el reglamento de la cámara. Mientras desde las tribunas del Congreso de los Diputados los *representantes de la cultura* exponían sus mensajes intimidatorios y presionaban a los representantes de la nación para que condenaran la intervención aliada en Irak, la democracia representativa y parlamentaria sufría, para alegría de la izquierda antiliberal, una importante derrota.

Más tarde se sucedieron los intentos de formación de gobiernos de concentración de izquierdas, basados en el simple rechazo del gobierno de los conservadores, primero con la malograda coalición de PSOE e IU en la Comunidad de Madrid, y más tarde con la triple alianza de socialistas, comunistas e izquierda republicana en Cataluña. El PSOE no llegó a acudir a las urnas en listas conjuntas con sus viejos enemigos comunistas –quizá porque seguía pesando demasiado, aunque no se hiciera explícito, el anticomunismo de la transición–, pero parecía confirmarse por lo ocurrido hasta entonces que se estaba asistiendo a una situación que, en perspectiva histórica, no era nueva: la presencia de los conservadores en el gobierno y la dificultad de los socialistas para competir en el espacio electoral de centro, les había conducido a la unidad de acción contra la derecha sin preocuparse por las

ideas. Se trataba de una especie de resurrección del espíritu de los frentes populares, en una edición posmoderna del discurso antifascista –con un ingrediente nuevo y decisivo, el de *la autodeterminación de los pueblos de España*– y en un contexto, por supuesto, bastante menos dramático que el de los años treinta.

EL PASADO REDIVIVO

El apoyo prestado por los socialistas a la *política en la calle* y al frente de izquierdas durante los dos últimos años del gobierno de José María Aznar, no fue un episodio sin importancia, un detalle menor propio de una estrategia calculada para arañar votos por su izquierda. Significó, por el contrario, una cierta resurrección de las ideas de los derrotados en 1979 y de los excluidos durante los años de gobierno de Felipe González. Basta recordar que el Programa de Transición del PSOE, ya mencionado, postulaba la república federal y afirmaba que lo sustancial no era la democracia formal; que eso era sólo una etapa desde la cual la izquierda no sólo podría alcanzar el poder sino también construir el bloque hegemónico de masas con el que asestar el golpe definitivo al sistema capitalista. Al igual que en el interior del PCE, aunque este estuviera muy maniatado por la estrategia de la negociación y la reconciliación liderada por Santiago Carrillo, en las filas socialistas seguía operando el fantasma de la democracia revolucionaria de los años treinta, ahora reconvertida en eso que algunos han llamado el «reformismo revolucionario» (Mateos, 1999). En ese sentido, la transición no debía conducir a un sistema liberal y constitucional sin más, sino que la conquista de las libertades debía combinarse con la movilización popular y el final de la dictadura tenía necesariamente que devolver el protagonismo al *pueblo*. El objetivo último era la *democracia real*, para lo que era decisivo que el Estado quedara al servicio de un proyecto de *revolución pacífica*.

Así pues, a pesar de que la dirección del PCE había comprendido tiempo atrás que no habría democracia en España que no fuera la democracia de todos, la idea protagonista del proceso constituyente de 1931, la idea de que la Constitución debía ser un instrumento de partido y que la democracia es consustancial a la izquierda, seguía siendo

el motor central de las propuestas teóricas de transición del conjunto de la izquierda –si cabe, más radical en el caso de los socialistas.

Sólo cuando el gobierno Suárez planteó la Ley para la Reforma Política y tuvo éxito, primero en las Cortes y luego en las urnas, los líderes del PCE y del PSOE –otra cosa fueron sus bases y aparatos– tomaron conciencia de su propia debilidad y comprendieron que la estrategia de la movilización popular, la huelga general pacífica o el bloque hegemónico, no iba a funcionar, que todo eso, en definitiva, sólo tenía una consecuencia, la de aislarles y marginarles en el proceso de transición que estaba en marcha. Así fue como dieron un giro de ciento ochenta grados y se dispusieron a participar del proceso iniciado por la Corona, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, dando por hecho que lo que consiguieran iba a depender de su capacidad de negociar y de acordar con los reformistas procedentes del régimen franquista. Pero, a juzgar por lo que pasó después, eso no lo explicaron detenidamente dentro de sus partidos –aunque Carrillo hiciera esfuerzos muy importantes en la campaña del referéndum constitucional a finales de 1978. La prueba es el tremendo embrollo en que se vio envuelto el PSOE tras la derrota electoral de 1979 y en el XXVIII Congreso. Nada indica, pese a lo dicho *a posteriori* por Felipe González y otros líderes socialistas, que la estrategia reformista y democrática seguida durante el periodo constituyente fuera acompañada de una revisión de ideas y de cierta autocrítica¹⁰. Si bien, como se ha señalado, el cambio operado por el Partido Socialista en 1979 tuvo una «gran significación política» al permitir que el partido de la oposición subordinara «sus propios valores y programas a los principios supremos de la Constitución», sin embargo, «careció de interés desde el punto de vista intelectual, y tampoco supuso un balance histórico del camino recorrido por el socialismo español» (Arranz, 2001, 182). No

¹⁰ Felipe González ha asegurado, por el contrario, que no fue una «operación táctica» lo de retirar el marxismo, sino que fue parte de un «debate de convicción», basado en la creencia de que «el marxismo estaba sobrepasado en términos históricos». Véase la entrevista en AAVV (1996, 543). Javier Solana ha explicado que eran conscientes de que había «que pasar de ser un partido comprometido con las ideas a ser un partido comprometido también con la adopción de soluciones para los problemas de este país». A los críticos, añade, les preocupaba que el partido se adaptara a la realidad, pero no tenían un modelo alternativo de partido que fuera capaz de hacerse con el poder por la vía electoral. Véase la entrevista en *Ibid.*: 403 y 405. El contraste con la opinión de que hubo un debate y un proyecto coherente lo pone Nicolás Redondo, quien se lamenta de que en el PSOE «se ha ido día a día en todo» y «no ha habido nunca un modelo, nunca, de nada». Señala además que el partido «llega al gobierno en 1982 sin haber analizado las relaciones partido-sindicado, o el interclasismo de los partidos socialdemócratas». Véase la entrevista en *Ibid.*: 635.

hubo, desde luego, afirmación alguna en los documentos políticos del PSOE que explicara si en verdad se había renunciado en el fondo –y no sólo en la forma– a lo expresado en congresos anteriores, que dejara claro que el contenido liberal de la democracia era irrenunciable y, por tanto, un fin en sí mismo.

Se ha dicho que en 1979 el PSOE renunció a unas «señas de identidad» específicas para «ofrecerse como lugar de encuentro y como síntesis de una amplia diversidad de ideologías en la que cabía un poco de todo», sustituyendo «el bloque de clases bajo la hegemonía obrera y la lucha por el socialismo» por «un conglomerado ideológico destinado a llevar la tranquilidad a las clases medias urbanas con objeto de consolidar la democracia» (Juliá, 1996, 411). Pero el hecho de haber dado ese giro sin una revisión profunda y meditada que compartiera la mayoría de las bases y que fuera explícita, ha permitido que en los últimos tiempos, después de veinte años, el Partido Socialista siga siendo demasiado vulnerable a las opiniones derrotadas entonces y, por tanto, al discurso de la democracia imperfecta.

Hasta qué punto la actual Ejecutiva del Partido Socialista esté dispuesta a hacer suya la idea de democracia antiliberal que ha mantenido viva Izquierda Unida, y que fue la derrotada en 1978, depende de muchos factores, aunque tres parecen especialmente relevantes: uno, la capacidad de los socialistas para competir electoralmente en el espacio de centro; dos, su propia confianza en ganar las elecciones sin tener que buscar apoyos por su izquierda; y tres, lo permeables que resulten al discurso antiliberal de inspiración nacionalista.

En todo caso, frente al lenguaje exclusivista que tan bien expresa, por ejemplo, el rupturismo de un Carod Rovira, el Partido Socialista puede recordar los fundamentos implícitos del cambio de rumbo que decidió en 1979, los mismos que explican que la democracia se haya consolidado y no se haya repetido lo ocurrido en la vida política republicana después de las elecciones de noviembre de 1933, esto es: en una democracia representativa y liberal la alternancia en el poder y, por tanto, la toma de decisiones, no puede depender de un supuesto derecho de los partidos a interpretar la voluntad general mediante movilizaciones populares u otros medios, sino, primero, de la indiscutible voluntad de los electores en los procesos electorales, y segundo, de la absoluta e inflexible aplicación de la Constitución y del imperio de la ley. Que no es más democrático un sistema político en el que

cuenta en primer lugar la opinión y expresión de los que más se movilizan y hacen presentes en la calle, lo pone de relieve la vida política del País Vasco y el papel que en la misma ha jugado hasta hace poco el brazo político de ETA. Es evidente que un gobierno democrático debe tener en cuenta la opinión pública, pero cabe preguntarse hasta qué punto ésta se expresa siempre y en todo caso mediante manifestaciones. La democracia liberal que se estableció en 1978, que es la única, en definitiva, que ha funcionado relativamente bien en el Occidente liberal, se fundamenta en la técnica de la representación política y, por tanto, en una consideración de la política que exige al ciudadano de participar de forma permanente. Lo que no significa, contra lo que tantas veces se dice, que la renuncia a la democracia de los antiguos implique, como el mismo Benjamín Constant explicó en 1819, que los ciudadanos no deban «ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes, y reservarse, en periodos que no estén separados por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si se han equivocado y de revocarles los poderes de los que hayan abusado». (Constant, 1989, 282).

La democracia y el liberalismo no son una misma cosa. Lo que hace posible que el poder esté limitado y que reine el imperio de la ley, protegiendo la libertad individual de toda coacción arbitraria y asegurando los derechos de las minorías, no es la democracia, sino los principios liberales que pueden o no caracterizarla. No debiera pasarse por alto que a pesar de los profundos cambios ocurridos en el mundo a partir de 1989, sigue existiendo una poderosa corriente antiliberal que desprecia los fundamentos liberales de la democracia representativa occidental. En España, sus partidarios dejaron constancia de sus argumentos en la transición, pero nunca han contado con una fuerza significativa. Resulta preocupante, sin embargo, la fortaleza que les ha aportado su asociación con el nacionalismo, y cómo, detrás de la máscara identitaria, han conseguido una presencia política con la que ni siquiera en sus mejores años pudieron soñar. Hoy, el principal desafío para la democracia liberal pactada en 1978 proviene de los nacionalismos. La negativa del Partido Socialista y el Partido Popular al plan Ibarretxe es una noticia alentadora, aunque mucho nos tememos que en las filas del centro-izquierda no hay una convicción firme y generalizada acerca del riesgo que suponen los nacionalismos para los fundamentos liberales de nuestra democracia.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV (1996): *Memoria de la Transición*, Madrid.
- AAVV (2001): *Las claves de la España del siglo XX. Ideología y movimientos políticos*, Madrid.
- Arranz, L. (2001): «Entre el programa máximo y el programa mínimo, o cien años de socialismo en España». En AAVV (2001).
- Carod, J.LI., Errazti, B. y Fuster, B. (2004): «Por una segunda transición democrática y plurinacional», *El País*, 31 de marzo.
- Carrillo, S. (1999): *La Segunda República. Recuerdos y reflexiones*. Barcelona.
- Constant, B. (1989): *De la liberad de los antiguos comparada con los modernos*, Escritos Políticos, Madrid.
- Cortes Generales (1989): *Constitución Española. Trabajos parlamentarios*, 4 volúmenes, Madrid.
- Gillespie, R. (1991): *Historia del PSOE*. Madrid. Alianza.
- Gunther, R., Sani, G. y Shabad G. (1986): *El sistema de partidos políticos en España. Génesis y evolución*. CIS. Madrid.
- Herrero de Miñón, M. (ed.) (1999): *La transición democrática en España*, 2 volúmenes, Bilbao.
- Juliá, S. (1996): en AAVV.
- , (2002): «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», en *Claves de Razón Práctica*, nº 129, págs. 14-24.
- Mateos, A. (1999): «Una transición dentro de la transición. Auge, unidad y 'conversión' de los socialistas», en Tusell y Soto (eds.) (1998).
- Moral, F. (2001): *Veinticinco años después. La memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles del año 2000*, Madrid, CIS. Colección *Opiniones y actitudes*, nº 36.
- Oñate, P. (1998): *Consenso e ideología en la transición política española*, Madrid.
- Powell, Ch. (2001): *España en democracia 1975-2000*, Barcelona.
- Tusell, J. y Soto, A. (eds.) (1998): *Historia de la Transición 1975-1986*, Madrid.

¿UN GERRY ADAMS PARA EL PAÍS VASCO?

ENSALZAR AL TERRORISTA

En Irlanda del Norte ninguna otra persona ha estado más entregada a la tarea de alcanzar la paz mediante el diálogo». Así era presentado Gerry Adams el 16 de enero de 2005 en la primera de las dos entrevistas con el político norirlandés que en un mes publicó el diario *El País*¹. Semejante afirmación era falsa, si bien anticipaba el tratamiento que Adams tendría durante su gira por España.

El dirigente del IRA sedujo a los medios de comunicación durante la presentación de sus memorias en nuestro país, consolidando la imagen de hombre entregado a la causa de la paz que tanto cuida ante la generalizada ausencia de críticas a su figura. Todo ello cobraba especial relevancia en unos momentos en los que se debate cómo acabar con ETA, llegándose incluso a reclamar un «Gerry Adams para el País Vasco». El motivo radica en que el ensalzamiento de Adams con el fin de situarlo como referente para el ámbito vasco puede contribuir a un escenario sobre el que el secretario general del Partido Socialista de Euskadi ya ha alertado al advertir que debe evitarse que «lo que ETA ha perdido por la vía policial lo recupere, siquiera parcialmente, por la

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, autor de *Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada* (Alianza Editorial, 2003, Madrid).

¹ La segunda entrevista fue publicada el 17 de febrero de 2005.

vía política»². Expresaba de ese modo un principio compartido por el Partido Popular y recogido en el Pacto por las Libertades, en el que PP y PSOE afirmaron «que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno», comprometiéndose ambos partidos a «trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia».

En contra de esas directrices, el enaltecimiento de Adams se sustenta en falsedades sobre su verdadero papel en el proceso de paz que precisamente le han permitido recuperar por la vía política lo que el IRA perdió por la vía policial. Adams personifica un enorme fracaso personal y político, aunque pocos lo dirían dado el trato de hombre de Estado que se le dispensa internacionalmente. Después de treinta años al frente del IRA, es un hecho constatable que este grupo terrorista ha detenido su violencia sin haber logrado ninguno de sus objetivos. La propia ETA lo apreciaba en uno de sus documentos internos –publicado en el *Zutabe* 91, de junio de 2001– en el que los terroristas vascos evaluaban del siguiente modo el Acuerdo de Viernes Santo aceptado por el IRA y el Sinn Fein en 1998: «Al pueblo irlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación, y por otro lado el gobierno de los 26 condados [de la República de Irlanda] deberá cambiar su constitución, renunciando a 6 condados [los de Irlanda del Norte], hasta que sus ciudadanos decidan otra cosa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo». Así lo corroboraba Gerry Adams cuando aseguraba en 2000 que «la autodeterminación para la población de esta isla todavía tiene que conseguirse», exponiendo por tanto el equívoco repetido por el Partido Nacionalista Vasco que identifica como causa del alto el fuego del IRA el «solemne reconocimiento del Derecho a la Autodeterminación» (Adams, 2000; PNV, 2001). Como los portavoces del IRA y del Sinn Fein admiten, en absoluto se ha reconocido la autodeterminación del pueblo irlandés por la que han justificado su violencia. Al mismo tiempo, muchos son los activistas que definen como muy pobre el balance después de tantos años de terrorismo. En primer lugar, es evidente que Irlanda del Norte continúa bajo plena jurisdicción y soberanía del Reino Unido. Asimismo, desde octubre de 2002 permanece suspendida la li-

² En *El País* del 20 de febrero de 2005 se podía leer: «El PSE propone un nuevo pacto de Ajuria Enea para afrontar la «fase terminal» de ETA».

mitada autonomía norirlandesa transferida tras el alto el fuego, sistema de gobierno éste que en absoluto se correspondía con las pretensiones de autodeterminación y unificación del norte y el sur de Irlanda planteadas por el IRA.

Estas cuestiones suelen pasar desapercibidas para quienes presentan al dirigente del Sinn Fein como el gran artífice de la paz que tanto habría arriesgado para atraer al IRA hacia el alto el fuego, ignorando así aspectos cruciales de un maquiavélico personaje que obligan a reinterpretar su supuesta heroicidad. Es revelador que a mediados de los años ochenta presos del IRA solicitaran el traslado desde la cárcel de Maze a otro centro ante las amenazas de sus compañeros después de haber cuestionado la continuidad de la violencia dictada por la cúpula dirigente, al frente de la cual se encontraba Gerry Adams. El preso Tommy McKearney hizo tambalear los soportes de la violencia del IRA al plantear lo siguiente: «¿Se puede forzar al gobierno británico a abandonar Irlanda como resultado de la presión pública o por la influencia de la fuerza física? A lo mejor la pregunta debería ser: ¿puede el gobierno británico permitirse el lujo de ser forzado? En cualquier caso la respuesta es no» (Alonso, 2003, 226). Es muy significativo que los argumentos con los que en los ochenta McKearney y otros militantes reclamaron el final de la violencia, que les valieron amenazas de muerte del liderazgo del IRA, no difieren de los que posteriormente Adams utilizó para justificar el alto el fuego y su participación en el proceso de paz. Para muchos activistas, ya entonces era el momento de detener la violencia ante las dudas que sobre su eficacia existían entre los propios líderes del IRA. Sin embargo, el terrorismo continuó, y no lo hizo porque estuviera contribuyendo a los objetivos del Sinn Fein, como ha resumido una antigua integrante del IRA: «Teníamos que haber parado entonces, pero no lo hicimos porque Gerry [Adams] y Martin [McGuinness] se habrían vuelto a sus barrios como lo que realmente eran: unos parias y unos don nadie»³.

La supresión de la disidencia se ha dado también en ETA, de ahí la utilidad de examinar cómo el IRA se sirvió de la continuidad del terrorismo para ejercer una presión con la que ciertos líderes fortalecieron sus posiciones dentro del grupo. Por ello, cuando se pide un «Gerry Adams para el País Vasco» conviene tener presente que su falta de va-

³ Entrevista con el autor.

lentía política y humana fue precisamente la que impidió la interrupción del terrorismo mucho antes. Como confiesan antiguos integrantes del IRA, desde mediados de la década de los ochenta destacados responsables del grupo dejaron de contemplar como posible la victoria. La consecuencia lógica tras alcanzar ese convencimiento era la interrupción del terrorismo o el abandono de la organización si ésta no adoptaba semejante decisión. Sin embargo, esos líderes, entre ellos Adams, no sólo continuaron al frente del IRA, sino que además se sirvieron de sus posiciones de autoridad para aislar a quienes planteaban la necesidad de detener la violencia. Al mismo tiempo mantuvieron el terrorismo como instrumento de presión para exigir al nacionalismo democrático y al gobierno británico apoyos a cambio de la renuncia a la violencia. Se complementaba todo esto con un lenguaje como el que Batasuna y ETA emplean ahora prometiéndolo «explorar nuevas vías»⁴ y que también ha seducido a socialistas guipuzcoanos que han exigido del presidente Zapatero «asumir algún riesgo para ganar la libertad» (Zabaleta, Elorza, Itxaso, 2004). Finalmente, el rechazo a dicho chantaje y las medidas coactivas gubernamentales aceleraron el deterioro del IRA que desembocó en el cese de la violencia, proporcionando una sugerente lección a quienes erróneamente manifiestan que el Pacto Antiterrorista y la ilegalización de Batasuna retrasan el final de ETA.

Aunque el alto el fuego llegó sin concesiones para el grupo terrorista, inauguró un proceso en el que Adams se benefició de gestos de los gobiernos británico e irlandés que sirvieron para rehabilitar su imagen de dirigente de una formación política insignificante, incapaz de obtener siquiera el respaldo de más de un uno por ciento del electorado de la República de Irlanda, techo del Sinn Féin en este país por aquel entonces. Se pensaba que de ese modo se facilitaba la transición del terrorismo a la democracia, de ahí que la importante exigencia del desarme del IRA se fuera posponiendo gradualmente una vez el grupo terrorista decretó el alto el fuego. El tiempo ha demostrado el error de aceptar que Adams utilizase el desarme como un elemento de chantaje, pues siete años después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo la negativa del IRA a completarlo sigue obstaculizando la normalización política de la región. La suspensión de la autonomía norirlandesa obedece también a las constantes actividades criminales

⁴ Comunicado de ETA reproducido en *Gara*, 28 de octubre de 2005.

del IRA, una de ellas el mayor robo de la historia del Reino Unido, del que Adams tenía conocimiento previo, como han asegurado los primeros ministros británico e irlandés y el jefe de la policía de Irlanda del Norte. En estas condiciones el IRA vuelve ahora a recibir la presión de los Estados, que siempre ha constituido el mejor incentivo para que el grupo terrorista ceda en sus planteamientos.

EXCUSAS EN EL CAMINO HACIA LA PAZ

Quienes sostuvieron que el objetivo de la paz obligaba a mirar para otro lado cuando se exigía de los gobiernos intransigencia en el tema del desarme y frente a los delitos que el IRA iba cometiendo, se topan ahora con una realidad que cuestiona la eficacia de ese supuesto pragmatismo político. Sencillamente, Adams les ha engañado, como ha engañado a quienes le recibieron en España como «un convencido de la fuerza del diálogo»⁵. También ha sido frecuente el recurso de Adams a un eficaz engaño que ha condicionado todo el proceso de paz, como sintetizara el periodista Ed Moloney: «Adams ha jugado con inteligencia la baza de que los halcones del IRA no le dejaban maniobrar y que por eso no podía haber desarme. Pero cuando salga a la luz toda la historia de este periodo se verá que Adams era un hombre que controlaba por completo la rama política y militar del movimiento, y que de haberlo querido hubiera podido moverse mucho antes y de manera más sustancial en el tema del desarme. Los dos gobiernos han sido engañados magistralmente» (Moloney, 2001).

El tiempo ha demostrado la equivocación que ha supuesto obviar en el caso del Sinn Fein las exigencias que a un partido se le deben plantear para su normal participación en un sistema democrático. El desarme del IRA es una de ellas, a pesar de que ha habido destacadas voces que han defendido lo contrario. Ya en 1999, Michael Oatley, miembro del servicio secreto MI6, criticó a los unionistas norirlandeses al escribir que las peticiones de desarme al IRA constituían «una excusa en el camino hacia la paz» (Oatley, 1999). Una visión similar mantuvieron quienes desde el ministerio británico para Irlanda del Norte (NIO, Northern Ireland Office) sostuvieron que la excarcela-

⁵ Según se afirmaba en *El País Domingo* el 16 de enero de 2005.

ción de los presos debía aceptarse sin ser planteada como una condición a cambio del desarme de los grupos terroristas. Sin embargo, estas opiniones que finalmente se impusieron sobrevaloraron la supuesta buena fe de los dirigentes del Sinn Fein y el hecho evidente de que ese apoyo a las tesis de Adams minó considerablemente la confianza de los partidos democráticos en un sistema que protegía a quienes amenazaban con subvertirlo, esto es, el IRA y su brazo político. La lógica que subyacía bajo este planteamiento era que la transición hacia la democracia requería sacrificios en la forma de concesiones que fortalecieran a quienes teóricamente iban a liderarla. Frente a esta lógica, parece ahora que habría sido más conveniente haber optado por una actitud consistente sencillamente en exigir al Sinn Fein lo mismo que se le exigiría a cualquier otro partido para su plena aceptación en el juego democrático, rechazando por tanto favoritismos que tienen su origen en la presencia intimidatoria y coactiva de un grupo terrorista a la sombra de la formación política que busca incorporarse a la democracia.

Así se desprende de las palabras de los familiares de Robert McCartney, católico asesinado por el IRA en Belfast a comienzos de 2005. Las protestas de la familia del fallecido colocaron al grupo terrorista y a su brazo político ante una presión sin precedentes que provocó la suspensión de siete miembros del Sinn Fein involucrados en el asesinato. Frente a quienes alababan la decisión de Gerry Adams en una actitud ya habitual orientada a transformar en virtud las situaciones adversas, los familiares del asesinado la calificaron en cambio como «nada más y nada menos que lo que se esperaría de cualquier partido democrático»⁶. Este mismo argumento puede contraponerse al defendido por quienes han propugnado la necesidad de arrinconar la exigencia de desarme con el pretexto de que de ese modo se avanzaba en un proceso de paz que a base de prolongarse en el tiempo hacía más improbable el regreso a una campaña de violencia con la cual existiría cada vez una mayor distancia. En realidad, el avance del proceso de paz habría sido mucho más sólido e irreversible de haberse insistido con mayor firmeza en una exigencia que resulta inevitable, tal y como pone de manifiesto el hecho de que hoy en día todos los actores políticos, excepto el Sinn Fein, acepten que el restablecimiento de la autonomía exige el desarme del IRA. Sin embargo, esta formación tuvo un cierto éxito a la hora de

⁶ Véase *Financial Times*, 5 de marzo de 2005 y *Daily Ireland*, 5 de marzo de 2005.

convencer a algunos sectores de opinión de que dicha exigencia resultaba poco realista en determinados momentos, además de contraproducente para el avance del proceso de paz. De ese modo se reforzó el perfil del Sinn Fein en detrimento del que fue durante décadas el principal partido nacionalista norirlandés, el SDLP (Social and Democratic Labour Party), liderado por John Hume hasta 2002, que siempre se opuso a la violencia y que hoy ya ha sido superado electoralmente por la formación que preside Gerry Adams.

Este es el motivo por el que resulta tan contraproducente aceptar la narrativa del proceso de paz y de la historia del conflicto norirlandés que Adams reproduce constantemente, como hizo en su gira española. Adams maneja a la perfección una destructiva duplicidad al presentarse como el líder del Sinn Fein que nada tendría que ver con el IRA y al que se debe alabar y fortalecer con concesiones para que así sea capaz de convencer al grupo terrorista de la necesidad de avanzar en el camino de la paz. Esa táctica intenta esconder que Adams ha sido y continúa siendo uno de los máximos dirigentes del grupo terrorista. Por tanto, quienes reclaman una figura similar para Euskadi deberían tener presente que no es la valentía una de las virtudes de Adams, destacándose más bien por la cobardía que le impide romper con el IRA, pues a esta organización terrorista le debe su rehabilitación política al presentarse como el líder que logrará su disolución siempre que se siga el camino que él dicta. Es ésta una valiosa fórmula para Adams, que le permite perpetuar la existencia del IRA al tiempo que refuerza su perfil político.

LA LEGITIMACIÓN DEL TERRORISMO COMO COACCIÓN

Esta es la trampa de un proceso de paz en el que el IRA ha abandonado el terrorismo pero no las actividades criminales que le garantizan financiación, poder y, peligrosamente, legitimación. El reforzamiento de Adams entendido como requisito para terminar con el IRA ha llevado a muchos políticos a abandonar la denominada «batalla de la historia». En su opinión, puesto que Adams debía ser rehabilitado, parecía inofensivo asumir las mentiras con las que el IRA ha justificado su campaña terrorista y que precisamente constituyen la esencia de las memorias ahora presentadas por Adams en nuestro país.

Pero al contrario de lo que en ellas se defiende, la violencia del IRA no fue una respuesta inevitable ante la opresión de los británicos dada la ausencia de otras alternativas, ni tampoco parte de una guerra de liberación nacional. Como enfatizara el político nacionalista y Premio Nobel de la Paz John Hume, el IRA ha asesinado al doble de católicos que «las presuntas fuerzas de ocupación» (Patterson, 1997, 9 y 10). De ahí que Adams se presente como el líder del movimiento por los derechos civiles que nunca fue, arrogándose un papel en la historia que no le corresponde. La historia sin deformar nos muestra que Hume y otros ciudadanos lideraron un movimiento por los derechos civiles que logró a través de pacíficas manifestaciones en los años sesenta la reforma del injusto Estado norirlandés. Por tanto, el terrorismo no fue «un mal necesario», como le gusta explicar a Adams como si le doliera cada una de las víctimas causadas por el IRA. La violencia fue el resultado del cálculo estratégico y deliberado de un grupo de personas, entre ellas él mismo, que todavía sigue explotando la coacción que supone la promesa de hacer desaparecer al IRA mientras el grupo continúa infringiendo la ley.

La implícita amenaza que supone esta actitud coloca una gran presión sobre las víctimas del terrorismo del IRA, transformando el proceso de paz en un injusto instrumento de coacción. La indulgencia con la que se recibió a Adams en España es un reflejo del privilegiado tratamiento que ha tenido tras el cese del alto el fuego en Irlanda y el Reino Unido, comportamiento habitualmente defendido por quienes argumentan que de lo contrario se «entorpecería el camino de la paz». Es ésta una asunción cuestionable que se ha extendido mediante la instrumentalización de los deseos de paz de una sociedad como la norirlandesa a la que, exhausta tras años de una devastadora violencia, se le han impuesto determinadas medidas definidas como necesarias en el camino hacia la pacificación, a pesar de las dudas que suscitaban al garantizar una peligrosa impunidad política, jurídica y moral. En nuestro propio ámbito se percibe también la utilización de la ansiedad colectiva por hacer que el final de ETA llegue pronto como elemento de presión que obligaría a aceptar ciertos «sacrificios por la paz». No obstante, el complaciente tratamiento que Adams recibe con frecuencia constituye un error y una injusticia, como revelaba Alex Attwood, político del nacionalista SDLP en Belfast, cuando criticaba la arrogancia del presidente del Sinn Fein al

presentarse como el gran artífice de la paz: «Existió un proceso de paz mucho antes del alto del fuego del IRA. Existió porque el pueblo irlandés se opuso a la violencia del IRA»⁷.

Irlanda del Norte nos enseña que lo que el terrorismo ha perdido policialmente no debe ser recuperado políticamente mediante la legitimación de los terroristas que algunos exigen como precio por su cese. La experiencia demuestra que el IRA sólo comenzó a desarmarse ante la presión ejercida por los gobiernos británico, irlandés y estadounidense, y que el final de su violencia llegó a pesar de no haber logrado este grupo ninguno de sus objetivos, sino precisamente por ello. Así pues, la derrota del IRA constituyó el principal incentivo para relegar la violencia, al igual que ha ocurrido con los seis presos etarras que tras reconocer el fracaso de ETA han abogado por interrumpir el terrorismo pese a no haber recibido contraprestaciones políticas a cambio, ya que, como ellos mismos reconocen, su «estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo»⁸. Es por ello por lo que cuando se pide al gobierno que facilite a los seguidores de ETA «una interpretación políticamente creíble y soportable» del final de la violencia⁹, se ignora que ya existe un sólido argumento que cumple esa función y que ha sido válido para otros terroristas particularmente sanguinarios: su derrota. Lo ha sido, además, sin la victoria política que la legitimación de sus acciones pasadas supondría si obtuvieran concesiones como las que algunos reclaman, algunas de las cuales sí se han producido en Irlanda del Norte después de la declaración del alto el fuego, obstaculizando por ello la consecución de la paz en lugar de acercarla.

En consecuencia, y en previsión de una hipotética tregua de ETA, resulta razonable plantear que frente a las peticiones de excarcelación de presos, el desarme y la disolución de la organización terrorista constituyen exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse previamente. Se impediría así que la organización terrorista coartase a otros actores políticos y sociales en un escenario de alto el fuego que en absoluto equivale a un contexto de paz habida cuenta de la conti-

⁷ Véase *Belfast Telegraph*, 10 de febrero de 2005.

⁸ Véase *El Correo*, 3 de noviembre de 2004.

⁹ Véase *El Correo* del día 6 de noviembre de 2004, en el que, Pedro Ibarra, J.M. Castells, Luis Bandrés, Baleren Bakaikoa y J.G. Olascoaga firman «Hacia un final de ETA».

nidad de la intimidación que la mera existencia de ETA supone. La puesta en libertad de los presos a cambio simplemente de una declaración de tregua facilitaría al grupo la coacción durante el proceso político posterior al ceder el Estado un valioso elemento de presión.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, G. (2000): «Take ownership of the peace process», en *An Phoblacht/Republican News*, 2 de marzo.
- Alonso, R. (2003): *Matar por Irlanda. El IRA y la lucha armada*. Alianza Editorial, Madrid.
- Moloney, E. (2001): «Adams conned governments», en *The Sunday Tribune*, 7 de octubre.
- Oatley, M. (1999): «Forget the weapons and learn to trust Sinn Fein», en *The Sunday Times*, 31 de octubre.
- Patterson, H. (1997): *The Politics of Illusion. A Political History of the IRA*. Serif, Londres.
- PNV (2001): Declaración del EBB del Partido Nacionalista Vasco hecha pública el 31 de octubre, Vasco Press, Bilbao.
- Zabaleta, G.; Elorza, O. e Itxaso, D. (2004): «Prender la llama de la paz», en *El Diario Vasco*, 12 de noviembre.

NACIÓN, COMUNIDAD NACIONAL Y OTROS CONCEPTOS NO INTERCAMBIABLES. UNA PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA POLÍTICA

La tentación de imitar al personaje de Dostoievski con su elegante «tristeza cívica» está muy extendida. Es fruto natural de la melancolía que deriva de todo esfuerzo inútil: «¿Qué más podemos hacer?» España debería ser una nación orgullosa por el éxito de la Transición política y el espectacular desarrollo socioeconómico. Hemos llegado, un poco tarde pero con buen nivel, a la altura de los tiempos. Para contemplar, eso sí, con cierta perplejidad, que el grado de exigencia resulta bastante llevadero. Pero la deslealtad profunda de los nacionalistas radicales hacia el proyecto común no nos deja disfrutar del éxito. Han conseguido incluso transmutar el éxito en fracaso.

ESTADO DE ÁNIMO Y FRAGILIDAD POSTMODERNA

Nos hemos acostumbrado a enfocar los asuntos desde su punto de vista limitado y egoísta: no hemos resuelto «su» problema; luego no hemos resuelto «el» problema. Es imprescindible no caer en el desánimo. La minoría, en sentido orteguiano, debe ser consciente de su responsabilidad. Porque el peligro más grave, me temo, deriva de nuestra propia sociedad, que a ratos parece anestesiada, postmoderna sin haber sido nunca plenamente moderna, con tendencia a refugiarse en una suerte de fiebre helenística, mezcla entre cínicos, epicúreos y un vago estoicismo cosmopolita. Todo a cambio de un poco

Benigno Pendás es profesor de Historia de las Ideas Políticas, Universidad Complutense de Madrid.

de seguridad ficticia y de una paz mal construida a través de la indiferencia. Porque el problema más grave, a medio plazo, deriva de la distancia afectiva y de la pérdida de referencias comunes, se llamen selecciones deportivas, «papeles» del Archivo o querellas lingüísticas.

Existen otros riesgos. La indignación, la desmesura, la confusión entre enemigos y adversarios. La irritación es comprensible, pero no debe nublar la claridad del juicio. Estrategia y táctica son más necesarias que nunca cuando se trata de mantener los principios. Hablando claro: sólo el acuerdo entre los dos grandes partidos, concluido y desarrollado con lealtad, permite abrigar una esperanza razonable. Quedarse aislado en defensa de la Justicia cósmica no favorece la causa legítima que muchos compartimos. *Todavía* somos más y somos mejores los que creemos en la España constitucional. Es la hora de los políticos valientes y de los intelectuales libres. Dentro de algún tiempo, no servirá de nada rasgarse las vestiduras.

Decía Paul Valéry que «el escritor se desquita como puede de las injusticias de la suerte». Suerte, en forma de honroso compromiso, que le sitúa ante el folio en blanco para redactar una ponencia cuyo enunciado desafía frontalmente las reglas de la lógica convencional.

Primero, para un profesor de Teoría Política, porque es notorio que los conceptos políticos no viven en un laboratorio aséptico, sino que nacen y existen para la polémica y no quieren dejarse atrapar en la red conceptual que tratamos de construir, prisionero nuestro gremio desde hace siglos de la falacia cientificista. Dicho de otro modo: las palabras en política se burlan un día tras otro del análisis conceptual y lingüístico. Acaso las encauzamos mejor mediante la técnica habilidosa de la Retórica. Sobre todo, las controlamos un poco al aceptar que sólo tienen valor aquí y ahora: *ideas in context*, dirían en Cambridge.

Segundo, porque la simpleza postmoderna contribuye generosamente a este babel de las ideas. Si ya Aristóteles, Montesquieu o Stuart Mill están muy lejos de ser precisos, es fácil suponer la triste suerte que aguarda a la razón pura en el paraíso del pensamiento débil, imperio de lo efímero, deconstrucción ridícula, *soft law*, Derecho dúctil, *liquid love* y otras tantas naderías disfrazadas de ingenio o de erudición.

Tercero (y hablo ahora a título personal), porque un liberal anglófilo se siente incómodo en la lidia de dogmas holísticos, doctrinas co-

munitaristas, políticas vernáculas y multiculturales y, naturalmente, racismos repugnantes. Ni siquiera cabe el consuelo de acudir a la ironía, la paradoja o el oxímoron (progresista reaccionario, podría ser uno), porque el adversario se toma a sí mismo demasiado en serio y porque tampoco está el ánimo para bromas cuando se trata del presente y el futuro de España. Al fin y al cabo, como escribe Bernard Crick, «las naciones no piensan; las naciones, *sienten*».

Sin desánimo, sin irritación, sin abstracciones, sin anclaje en los clásicos, sin ironía... Sólo nos queda Spinoza: «No emocionarse. No indignarse. *Comprender*».

NACIÓN, EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO

No sirve ninguna definición de los manuales al uso. Las monografías, muchas y buenas, incluidas varias de autores españoles, apuntan enfoques, matices y perspectivas, pero nada ni nadie garantiza la pureza conceptual. Es lógico: *ad impossibilia nemo tenetur*. Está claro que son un fracaso los criterios que se dicen objetivos: lengua, religión, raza, cultura o civilización. Por supuesto que nunca falta el territorio irredento, no sólo franjas o enclaves, sino a veces bocados muy apetitosos. Los clásicos tampoco dan con la fórmula, ni siquiera cuando acuñan una expresión brillante, sea el «plebiscito cotidiano» de Renan o el «proyecto sugestivo» de Ortega.

Aquí y ahora. Desde hace ya dos generaciones, España pierde terreno como sentimiento nacional. Hemos recuperado el nombre, poco a poco, frente a la estúpida fórmula del «Estado» o «Estado español». Pero estamos cayendo en otro juego peor: «Euskadi y España», «Catalunya y España». Primera regla: no dejarse arrastrar nunca por el lenguaje del adversario. Una comunidad política, Hobbes *dixit*, deriva de la existencia de un campo de significados comunes dentro del cual reinan el orden y la regularidad. Matiz importante: en el ámbito privado, nunca se ha perdido una idea sencilla y natural de España, expresada por la bandera, el himno o el éxito de los nuestros en la competencia internacional. Lo peculiar es el pudor, el miedo o el recelo hacia la expresión pública del sentimiento. Rotundamente falsa su identificación con fascismos o nacionalismos extremos. Forma

parte de la definición, por ejemplo, de las clases medias inglesas (Britania y utilitarismo) o norteamericanas (barras y estrellas, *american dream*). A la vez que la nación, retrocede cada día la presencia de España como Estado: nos queda un mínimo de Administración periférica; hay muchas leyes, pero son casi todas «básicas» o supletorias; el Tribunal Constitucional ha hecho imposible (muy difícil, prefiero no exagerar) una política armónica del suelo, del patrimonio histórico o, hace poco, del medio ambiente. Hace tiempo que la provincia, vieja institución vertebradora del régimen local general, sobrevive malamente. El contraste con el País Vasco y Cataluña, también con algunos otros, resulta demoledor: educación «nacionalizada»; Universidad secuestrada; museos, archivos y orquestas «nacionales»; nacionalismo transversal desde los clubes de fútbol, las sociedades recreativas o las instituciones que cuentan con alguna *auctoritas* más o menos reconocida.

Sólo una vez hemos reaccionado los defensores de la España constitucional. Pacto por las libertades, Ley de Partidos, ilegalización de Batasuna. Victoria decisiva, ojalá que no transitoria. Ganamos incluso en la batalla de las ideas. Pero, no nos engañemos, ganamos porque se invocaban la libertad, los derechos humanos y la dignidad de nuestra gente. Poco, muy poco, pudo hacerse en nombre y por cuenta del sentimiento nacional de España, una vez más difuminado en el ágora.

Y, sin embargo, existe. Muchos lo compartimos y a veces el resentimiento contra la vieja España ayuda a recuperar las propias señas de identidad. El plan Ibarretxe o el verbo inflamado de Carod-Rovira pueden ayudar a la proyección pública del patriotismo español. Paradojas de la política, espejo de la vida.

ESTADO-NACIÓN, CRISIS DEL ESTADO

Descartados por arbitrarios cualesquiera criterios de apariencia objetiva, se impone la realidad avalada por hechos concluyentes:

- a) La cualidad de nación se adquiere por causa de la estatalidad, sea actual o potencial. O sea, volvemos a Hegel.

- b) Antes de ser Estado, la comunidad que se identifica a sí misma como nación utiliza el concepto como argumento justificativo de su pretensión jurídico-política.

En suma, como decía Max Weber, una nación es una comunidad que tiende *normalmente* hacia la formación de un Estado propio. En la misma línea, hablar de «nación futura» viene a identificar el acceso a la categoría histórico-sociológica en correspondencia con el reconocimiento de la forma política. Más tarde veremos las consecuencias: no hay naciones sin Estado; no existen las naciones de naciones; no valen las definiciones vergonzantes, al estilo de «comunidad nacional». Pensemos ahora en el Estado y desde el Estado, como expresión de territorio, población y poder soberano según la teoría clásica.

Como es notorio, el Estado del Renacimiento sólo cuaja sobre una base nacional o, al menos, pre-nacional. Fracasa *lo stato* en su patria conceptual, ante la indignación de Maquiavelo. Fracasa también en Alemania, por culpa –pero no toda– del Imperio tradicional, brillante cáscara vacía; por causa, no nos engañemos, del egoísmo particularista disfrazado de *deutsche Freiheit*.

El prestigio del Estado crece con el éxito del absolutismo, se refuerza con el despotismo ilustrado y culmina con la Revolución francesa, como supo entender Tocqueville, al mantener y acrecentar su poder pese a cambiar la fuente de legitimidad, desde el derecho divino de los reyes a la soberanía nacional. En este contexto, Hegel eleva al Estado al máximo rango de su «viernes santo especulativo»: el Estado es la culminación del Espíritu Objetivo; integra y supera las contradicciones de la sociedad civil; construye, en relación dialéctica con sus iguales, la Historia universal, versión suprema de la justicia política identificada con el poder. La historia, asegura Ranke, es historia de las grandes potencias. Entonces tenía razón. Mientras tanto, la ambigüedad inherente a los términos políticos sigue haciendo de las suyas. Las naciones se cuelan al más mínimo resquicio. Ejemplo singular: Kant proponía llamar *Staatenrecht* al viejo *ius gentium* de tan prestigiosa trayectoria; sin embargo, gana la batalla conceptual el *International Law*, ocurrencia de Jeremías Bentham, inglés al fin y al cabo, aunque racionalista, poco amante por ello de la retórica estatista. Del mismo tronco lingüístico y conceptual surgen *League of Nations* y *United Nations*. Dicho sin rodeos: nación igual a Estado.

Salto en el tiempo. A día de hoy, 191 ¿Estados? forman parte, en calidad de miembros, de la Organización de Naciones Unidas. Algunos, como China, anuncian un censo reciente con más de mil trescientos millones de habitantes. Otros, como Rusia, suman todavía más de diecisiete millones de kilómetros cuadrados, aunque se dejó casi cinco millones al desintegrarse la Unión Soviética. ¿Qué decir acerca de Antigua y Barbuda, Santa Lucía o las islas Santo Tomé y Príncipe? A un nivel algo mayor: ¿qué ocurre con Bostwana, Zimbabwe o Burundi? ¿Son también culminación del Espíritu Objetivo y suprema expresión de los pasos de Dios sobre la tierra? La degradación de la estatalidad es una manifestación adicional, y no la menos trascendente, del igualitarismo contemporáneo.

Cualquiera puede ser Estado, sea una vieja factoría colonial o un antiguo nido de filibusteros en el Caribe. Mucho cuidado: si cualquiera puede ser Estado, también cualquiera puede ser nación. ¿Ha llegado la hora de reivindicar la estatalidad en sentido material? ¿Habrá que crear dos, incluso tres, categorías en el viejo club aristocrático tomado al asalto por advenedizos y *snob*? Y no hablo sólo de los Estados «canallas», «fallidos» y otras lindezas al uso entre los ensayistas actuales. Me refiero también a los que se portan bien y cumplen con dignidad sus obligaciones internacionales, pero insisten en que, Estados soberanos como son, una alta conciencia de sí mismos les hace sentir como propia la fórmula tradicional del Bajo Medioevo: «no reconocen superior en lo universal». Los juristas vivimos en un universo de ficciones. Pero me temo que con el principio de igualdad soberana de los Estados estamos llegando demasiado lejos.

NO HAY NACIONES SIN ESTADO

Me anticipo a la objeción: kurdos, judíos, armenios... A cualquier otra teoría se le podrían encontrar defectos. Aun así, me parece más apropiado hablar en estos casos de «pueblos», sin olvidar que las clásicas naciones «de la diáspora» cuentan ya con el respaldo de la estatalidad, Israel desde 1947, Armenia desde la explosión del Imperio soviético (aunque amputada de Nagorni-Karabaj y obligada a contemplar el mítico Ararat sin poder acercarse...).

Matiz importante: hay naciones en vías de alcanzar la condición de Estado, porque el prestigio semántico que otorga ser nación ayuda

–decisivamente– a conseguir la plenitud del poder político. Son, pues, naciones «futuras» que, para alcanzar su fin (si el «opresor» lo permite) o una vez alcanzada la independencia, reconstruyen la historia en el sentido que describe Gellner: «comunidades imperecederas (...) *adormecidas* por el enemigo durante largos períodos». Y rescatadas, cómo no, por una élite valerosa de luchadores románticos y apasionados. Mentira cruel: comunidad imaginaria (Anderson), tradición inventada (Hobsbawn), y tantas cosas bien dichas por los mejores estudiosos españoles.

Gusta la paradoja: bajo el rótulo *Nations without State* proliferan jornadas, congresos, libros colectivos y otros festejos que reafirman la propia identidad. Además de catalanes y vascos nacionalistas, comparecen con frecuencia escoceses, algunos bretones y –los más habituales– gentes de Québec armadas de libros de Will Kymlicka y de políticas vernáculas, curtidas en experiencias de referéndum con más o con menos eficacia jurídica. No es casualidad: el asunto suele enlazar con la globalización, la disolución de la soberanía, el derecho a participar en cuantas materias afectan al propio «círculo de intereses», los órganos de cooperación (mejor si tienen facultad de veto y no son sólo consultivos) y cosas similares. Es la postmodernidad que siempre acecha a los conceptos sólidos y pétreos: ahora, todo se diluye, excepto –al parecer– el terruño y sus particularismos atávicos. «Las palabras de la tribu», que diría Mallarmé. Si cuentan con un poder político propio que asegure la financiación de los eventos, mucho mejor. Explosión identitaria más subvención asegurada igual a paraíso multicultural.

A efectos prácticos. Los nacionalistas que persiguen la destrucción de la España constitucional (también los que la toleran) han ganado la batalla de las ideas: no es fácil rechazar, en el ámbito cultural y sociológico, la condición nacional para sus territorios respectivos. La resistencia está a punto de quebrar también en el terreno jurídico-formal. Es imprescindible no seguirles el juego ni una sola vez: ni por error, ni por simplificar, ni mucho menos por ganar falsos amigos. España, además de Estado, y precisamente por serlo, *es* nación. Los demás *no son* naciones. Porque nación llama a soberanía y ésta a Constitución («España se constituye...») y aceptar que son naciones hace imposible rechazar su poder originario, no sujeto a la voluntad

de terceros. Un poder que será, sin remedio, «irrenunciable, permanente y perpetuamente actual». Sièyes en escena. Soberanía nacional.

TAMPOCO HAY NACIÓN DE NACIONES

Enseña Hayek a ser considerado siempre hacia los argumentos ajenos y a no presumir nunca que el adversario actúa con mala intención. Lo intentaremos también en este caso. El deseo legítimo de no incurrir en los defectos que se atribuyen a los demás suele producir consecuencias indeseables. Así ocurre, por desgracia, entre nosotros: para hacer frente al nacionalismo voraz, hemos prohibido, bajo pena capital de incorrección política, cualquier referencia real o hipotética al patriotismo español. Nadie se siente con fuerza, ante el peso abrumador del lenguaje inocuo, para proclamar sus convicciones nacionalistas con referencia a España y, faltaría más, no está bien visto ni siquiera insinuar la eventual superioridad axiológica del nacionalismo español sobre los periféricos. Ha llegado la hora de proclamar que la defensa de la nación y del patriotismo con referencia a España es plenamente compatible con la más rotunda opción en favor del Estado constitucional, la libertad política y la sociedad abierta. Muchos españoles sentimos de forma simultánea e indisoluble el orgullo de nuestra condición (no exenta, claro está, de sentido crítico) y un aprecio intelectual y emocional por los principios constitutivos de la modernidad. No vamos a admitir, por tanto, descalificaciones ridículas, ni prejuicios basados en tonterías que la realidad de la España del siglo XXI desmiente a primera vista. Basta de complejos, y vamos a debatir con razones y no con insultos, chantajes o desprecios.

El desamor de los nacionalistas periféricos daña la construcción del patriotismo constitucional español, que no quiere ni puede, por razones obvias, excluir a vascos y catalanes. Pero no conviene culpar siempre a los demás. Quienes sentimos con naturalidad la condición de españoles hemos procurado eludir cualquier definición: el reproche nos afecta a todos, políticos, intelectuales, ciudadanos. Como mucho, desde territorios ideológicos y académicos variados (Peces-Barba o Seco Serrano, entre los que más insisten) se ha formulado la doctrina confusa y peregrina, seguro que con la mejor intención, de España como «nación de naciones». Dislate conceptual: se es nación

o no; se es titular de soberanía o no; todo ello, por la misma razón por la que no es posible estar «un poco embarazada». Acaso el único precedente de la soberanía «limitada» (por las conquistas del socialismo) sea la doctrina Brezhnev relativa a los Estados miembros del Pacto de Varsovia. Son cosas de los Imperios. Pero no creo que les gusten. Volviendo a la «nación de naciones». Ahora que se extiende la doctrina como última barrera defensiva, conviene ser conscientes de su perfecta inutilidad: los nacionalistas periféricos *tampoco* quieren formar parte de esa entelequia.

Ya está bien de rarezas pseudoteóricas. De «hechos diferenciales», recuperando por cierto, a Cambó; de federalismo «asimétrico» (aportación realmente insólita a la Teoría del Estado); de «ámbitos propios de decisión», «diferencialismos», singularidades, particularismos, distinciones y una larga serie de inventos ingeniosos, propios de la peor ingeniería constitucional, alguno de ellos (como «deshomogeneidad») merecedores de condena eterna por razones literarias. Todos tienen algo en común: se trata, con mejor o peor voluntad, con mayor o menor acierto, de proclamar que unas Comunidades son «*más que*» otras y diferentes, en todo caso, de la nación española común.

Reducción al absurdo: la Constitución se fundamenta en la voluntad concordante de la nación de naciones española y de las naciones que la integran, dotadas de poder originario que determinan ejercer, sin garantía de cara al futuro, mediante la yuxtaposición con sus iguales en un Estado artificial carente de base nacional propia. Algo así proponen algunos distinguidos conciudadanos, con gesto grave y severa reconvención hacia quienes no compartimos retóricas narcotizantes.

EXCURSUS SOBRE LA INVENCION DEL SUJETO CONSTITUYENTE EN EL PLAN IBARRETXE ¹

He aquí una Constitución disfrazada de Estatuto. Un Pueblo Vasco o Euskal Herría, ajeno a la sociedad vasca real, convertido en portador de esencias históricas, en fragua tenebrosa del Espíritu del Pueblo:

¹ Reproduzco en este apartado una parte sustancial de un artículo, con igual título, publicado en *ABC* el 27 de julio de 2003, primero de una serie de ocho acerca del texto desvelado por ese periódico que coincide en lo sustancial con el que fue aprobado en el Parlamento Vasco.

muchos siglos después de Pericles, vuelve el mito a suplantar al «logos». Una aventura soberanista que no se atreve –por ahora– a proclamar su poder constituyente y se esconde bajo el sucedáneo del derecho de autodeterminación. Un Estado que reúne los requisitos clásicos de territorio, población y poder supremo, aunque le falta audacia para utilizar su nombre propio. Hay Estado, en efecto, cuando existe soberanía. Mucho jugar con retóricas sentimentales para terminar en Bodino: la soberanía es, sencillamente, el poder «absoluto y perpetuo» de una comunidad. En este caso, la imagen quimérica del Pueblo Vasco derivada del nacionalismo antiilustrado, tal vez la única ideología en Europa que sigue siendo contrarrevolucionaria porque no asume la modernidad política derivada del Estado constitucional: ciudadanos y no pueblos; individuos y no estamentos; igualdad jurídica frente a privilegios ancestrales.

El texto del Estatuto Político significa la ruptura de la Constitución española, ofende a la Constitución francesa e ignora la Constitución europea. En efecto, el documento supranacional habla de una comunidad de Estados y ciudadanos, no de pueblos ni de entes libres asociados, segregados o flotantes en el complejo espacio del Viejo Continente. Impone también, con sabia prudencia histórica, la conservación de los límites territoriales actuales. En cambio, la nueva Euskadi brinca sin reservas sobre las fronteras tradicionales. Algunos lo llaman «constitucionalismo útil». Se equivoca Miguel Herrero: el texto es, por el contrario, inútil, sectario y perturbador. La vulneración decisiva de la Norma Fundamental y del propio Estatuto de Guernica deriva de la invención artificial de un nuevo sujeto constituyente. El contraste es radical. El texto de 1978, la mejor Constitución de nuestra Historia, construye un pacto político de largo alcance a partir de un fundamento objetivo: la fuente de legitimidad se llama España y no admite la yuxtaposición de supuestos poderes originarios. Quien decide es «La Nación española, en uso de su soberanía...».

Veamos ahora el Preámbulo del Proyecto, amalgama de liturgia esencialista con lugares comunes de nula eficacia práctica, al estilo de «convivencia», «solidaridad» o «valores universales». El sujeto constituyente es el Pueblo Vasco, ente intangible y etéreo, integrado por siete territorios potenciales y una «diáspora» que difunde rasgos mesiánicos a la vez que apunta hacia individuos muy concretos. El

historiador de las ideas rebusca en los manuales al uso. Ahí aparece Samuel Pufendorf, un clásico del Derecho natural, cuando califica de «monstruo político» al Imperio germánico por la naturaleza dispar e imperfecta de sus elementos. Ésta es la situación aquí y ahora: integran, al parecer, el Pueblo Vasco gentes de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava; de la Comunidad foral de Navarra; de los territorios «ubicados» en el Estado francés (que, por cierto, se define como una «República indivisible, laica, democrática y social» según la Constitución de 1958). Con mayoría incierta allí donde gobierna; condenado a la oposición en Álava; con arraigo discreto en Navarra; sin vida propia en el país vecino... Extraña realidad para un poder que se dice constituyente, cuya expresión exige fuerza y autoridad, legalidad y legitimidad, en dosis equivalentes: poder irresistible, en sentido genuino. Euskal Herria aparece descrita en términos románticos y organicistas, ajenos a la mentalidad moderna. Se identifica acaso con la tribu nacionalista, exageración gratuita que la hace irreconocible para los historiadores serios y las personas sensatas: ¿cabe ignorar sin pudor el protagonismo de los vascos en la historia común de España?

En el terreno intelectual, el redactor del texto vive todavía de la creencia platónica en la realidad de los universales: «pertenencia» de los ciudadanos (en masculino y en femenino) al Pueblo Vasco; «propia identidad»; «depósito» de un patrimonio inmemorial. Desconoce la austera teoría del conocimiento formulada al final de la Edad Media por Guillermo de Occam, otra aportación decisiva al espíritu de la modernidad: no cabe multiplicar los entes conforme a las necesidades propias. A diferencia de la Constitución y del Estatuto vigente, donde ese mismo Pueblo Vasco «se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español» (artículo 1º), el preámbulo refuerza el elemento identitario y naturalista, tendencialmente excluyente, en un sentido cercano a las doctrinas biológicas y telúricas, hoy día desprestigiadas por razones fácilmente comprensibles. En este contexto intelectual, suenan a concesión retórica las promesas relativas a una sociedad «dinámica, abierta y no excluyente»; a la «pluralidad social de sus habitantes» o a la compatibilidad entre los sentimientos de pertenencia: ¿se trata, tal vez, de excusas no pedidas? ¿Son quizá actos fallidos en el sentido freudiano? Aunque la sustancia política del documento se encuentra, más allá del viaje al corazón de las tinieblas, en los apartados cuarto y quinto: derecho de autodetermi-

nación más derechos históricos igual a pacto con el Estado español para formalizar la Comunidad Libre Asociada de Euskadi.

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD NACIONAL?

No lo sé: así de claro. Creo que nadie lo sabe. La pregunta evoca a Renan. Para esbozar una respuesta, podemos imaginar que:

- a) Es *menos que* una nación, pero debe de ser muy poco menos. Si es una nación: ¿por qué no llamarla por su nombre? Si no lo es: ¿por qué se equipara a ella?; y
- b) Es *más que* una nacionalidad (en el sentido del artículo 2º de la Constitución) porque, si no fuera así: ¿para qué cambiarlo todo para que nada cambie?

Lo entendamos o no, «comunidad nacional» es el *deus ex machina* de las reformas estatutarias no secesionistas en curso, llámense plan Guevara/Patxi López, proyecto Maragall o doctrina Rubio Llorente. No soy especialista en la materia, pero no he encontrado en el índice de conceptos de las monografías al uso ni una sola entrada que remita a «comunidad nacional». Pero debe de ser una cosa buena, porque se le atribuyen al término y a sus consecuencias jurídico-políticas virtudes taumatúrgicas para reordenar nuestra maltrecha convivencia, al menos durante los veinticinco años que siempre nos dan de margen.

Pero prometí al principio que no iba a utilizar la ironía. Valga decir que es una forma vergonzante de decir nación. Como matiz significativo: comunidad no es sociedad. La *Gemeinschaft* invoca rasgos de armonía y comunión moral ajenos a la tradición liberal, individualista y societaria. Gustaría más a MacIntyre o a Taylor que a Rawls, Nozick o Dworkin, lo cual no es bueno ni malo, pero sí muy ilustrativo. Es exagerado decir que tiene vocación totalitaria, pero no dice nada en favor de la teoría de los ciudadanos libres e iguales. Alude vagamente a la reserva étnica, organicista y romántica. Es Derecho germánico y no Derecho romano. *Sippe*, y no Ticio. Propiedad en mano común, como los viejos montes vecinales de tradición visigoda, ahora bienes «comunales» como dice todavía nuestra legislación de régimen local.

Apela más, como diría Federico Chabod, a la fantasía que a la razón. ¿Cómo se participa en una comunidad? Afectos, sentimientos, folklores, emociones conjuntas, danzas, excursiones, selecciones deportivas, lenguas y tradiciones... Nacionalismo, y no patriotismo.

Si alguien me pregunta, le diría que no me gusta la música del concepto que suena tanto últimamente. En una *sociedad* moderna y racional se puede ejercer el derecho fundamental a no ser molestado (*to be let alone*). En una *comunidad*, sea nacional o de vecinos, no hay más remedio que ejercitar la pseudolibertad a la que llamamos «participación». En este contexto dicen poca cosa las apelaciones a una comunidad nacional de «ciudadanos y ciudadanas libres, iguales, abierta a todos, plural, integradora de sentimientos de identidad y de pertenencia...» o un «proyecto (nacional vasco) de país integrado en sus símbolos y referencias y unido en lo fundamental de nuestro destino». Cita textual del proyecto de reforma del Estatuto Vasco presentado por el PSE-EE. Léase con cuidado. Tiene aire de familia con el Espíritu del Pueblo. El adversario ha ganado hace tiempo la batalla del lenguaje.

NACIONALIDAD, AQUÍ Y AHORA

Hablamos, claro está, del término introducido, no sé si de forma muy meditada, en el artículo 2º de la Constitución y reproducido por los Estatutos de autonomía más aventajados: «...como expresión de su nacionalidad». Nuevas paradojas: era la «bestia negra» de los últimos creyentes en la España centralista; decían que era el caballo de Troya del separatismo y el error más grave de la Constitución del consenso. Ahora, es la opción política (¿el último bastión en retaguardia?) de los defensores del modelo vigente. Lo dicho: la política, espejo de la vida.

Los antecedentes no sirven apenas. O quizá sirvan de algo. El principio de las nacionalidades (léase a P. E. Mancini) juega fuerte en la doctrina del siglo XIX. Apunta en la dirección que ya conocemos: nación exige Estado. El principio sirve para los más variados fines: la unificación italiana, por un lado; la desintegración de los Imperios austro-húngaro y otomano, por otro. A Marx le gusta la palabra y la transmite a los suyos. De Lenin a Stalin; de ahí, a las Constituciones

soviéticas, tanto la del 36 como la del 77. Las partes que integran el Imperio interior utilizan el término en la Unión Soviética. H. Carrère d'Encausse intuye la clave: el triunfo de las nacionalidades. Explota el sistema. Es un peligro conceder el derecho de secesión, aunque sea teórico y condicionado. Más peligroso todavía era otorgar a Ucrania y Bielorrusia la subjetividad jurídico-internacional, como miembros originarios de Naciones Unidas. Cuando el Ejército Rojo ya no pudo actuar como garante, la letra de las leyes sirvió como instrumento eficaz para ganar la independencia. Luego vienen los arrepentimientos: Chechenia no llegó a tiempo. No hay problemas con Minsk, pero en Kiev se visten de naranja. Cuidado, mucho cuidado, con la letra de la ley. En Teoría jurídica, se llama «eficacia constitutiva de la norma». Por último, en Derecho privado, sabemos de sobra a qué se llama nacionalidad: ¡cuántas veces hemos utilizado el argumento!

Aquí y ahora, volviendo a la lógica del contexto, es notorio que nacionalidad debe ser *menos que* comunidad nacional. ¿Cuánto menos? Tal vez el salto sea grande: por ejemplo, el que va desde la autonomía a la soberanía. Todavía, a día de hoy, para los amantes de la España constitucional, las nacionalidades son parte integrante de España, definidas por un grado de autogobierno superior a las regiones. Tales nacionalidades, constituidas en Comunidades Autónomas, no están en condiciones de discutir la supremacía del Estado –*de iure*, quiero decir. Su autonomía resulta ser un «poder limitado», ha dicho mil veces el Tribunal Constitucional. Gozan, eso sí, de una generosa dotación de medios materiales y personales para ejercer un conjunto de competencias y funciones que supera de largo la capacidad de muchos Estados miembros de Estados federales, en Europa y fuera de Europa. Todo cambia con el tiempo: nacionalidades, *buena solución* para todos.

FALACIA DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

Hablemos de la controversia ideológica en relación con este sucedáneo colonial del poder constituyente. De nuevo con el ejemplo del Plan Ibarretxe.

En términos políticos, se trata de combatir el muy extendido sofisma del «ámbito vasco de decisión». Todo lo contrario: lo que atañe al

conjunto, por todos debe ser discutido y aprobado. Es la fórmula medieval «quod omnes tangit...»: queda claro que la historia de las ideas ofrece argumentos de muy diverso tipo, aunque no siempre gusten a los que se sirven de «viejas escrituras ya pasadas», como diría Jorge Manrique. A estos efectos, insisto, todos somos vascos, porque el problema nos concierne como españoles. En términos jurídico-constitucionales el doble fundamento, autodeterminación y derechos históricos, de la eventual soberanía del Pueblo Vasco (coyunturalmente reducido: en potencia, siete territorios más la diáspora; en acto, sólo tres y ya veremos) carece de rigor y resulta inadmisibile. Veamos por qué.

El derecho de autodeterminación de los pueblos es producto de la guerra fría y del proceso de descolonización. Aparece de forma genérica en los «catorce puntos» del presidente Wilson y también en la Carta de San Francisco; pero, en sentido estricto, se perfila en Naciones Unidas entre 1960 (resolución 1541/XV) y 1970 (resolución 2625/XXV), esto es, en plena explosión emancipadora de las antiguas colonias. El resultado es conocido: el número de Estados se ha multiplicado por cuatro en un siglo escaso. Recuérdese el peso del «grupo de los 77» en la Asamblea General de la ONU; de Bandung y la idea del Tercer Mundo; de la eclosión, a veces incontrolada, de nuevos sujetos de apariencia estatal, sin tradición ni solvencia. Pues bien: incluso en este contexto, las resoluciones mencionadas establecen una cláusula de salvaguardia: no es lícito «quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (...) dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo». Por tanto, de acuerdo con el Derecho internacional, sólo se admite la autodeterminación en contra de un régimen no democrático que establezca la discriminación por razón territorial o de otro tipo. Supongo que nadie en el PNV y asociados se atreve a sostener que España practica la explotación colonial respecto del País Vasco. A veces, en cambio, planea sobre el discurso político un argumento intolerable para la gran mayoría de los españoles: que nuestro Estado Constitucional no es legítimo porque desconoce los derechos del Pueblo Vasco. Basta recordar el alto grado de descentralización, tal vez el más amplio de Europa, que alcanza nuestro Estado autonómico. En todo caso, es notorio que no cabe reconocer el falso derecho invocado, cuya teoría y cuya práctica llevan consigo la destrucción de España como sujeto constituyente.

REIVINDICACIÓN DE LAS REGIONES

Nos hemos acostumbrado a tratarlas con desprecio. Con un matiz: si se trata de regiones transfronterizas o de órganos de apariencia supranacional (Comité de las regiones, por ejemplo), nuestros líderes nacionalistas dejan a un lado los remilgos terminológicos. Puede ser cuestión de la vanidad de los políticos, que analiza con sutileza Max Weber. Debe ser, sobre todo, posibilismo: por ahí fuera, nadie entiende las disquisiciones sobre nacionalidades y comunidades nacionales y saltan sin intermediarios del Estado a la región, cuando no directamente al municipio.

Las regiones configuran un mapa hermoso y variopinto: muchas formas distintas y todas confluyentes de ser españoles. Convendría reforzar el valor y el prestigio inherentes al concepto. Para empezar, usarlo con frecuencia y con afecto, destacando su carácter vertebrador del territorio y la plena compatibilidad de los sentimientos de pertenencia. No minusvalorar su condición frente a las naciones sedicentes que –por ahora– deciden mantener con nosotros una «relación amable». Favorecer la cooperación entre ellas, sin caer por supuesto en la federación de Comunidades Autónomas que prohíbe expresamente la Constitución. Ser conscientes del éxito socioeconómico que ha supuesto la «redención» de las regiones. Volvemos a lo de siempre: sale caro, tiene defectos y desarrolla una negativa tendencia al localismo, pero –en perspectiva global– el Estado de las Autonomías ha sido un éxito. No vale la objeción eterna, la de que no ha «resuelto» las cuestiones vasca y catalana. Tenemos que aprender a pensar por cuenta propia y no analizar cada movimiento de las piezas desde el prisma nacionalista. Si alguno de ellos se siente «incómodo»: ¿cómo creen que nos sentimos los demás? La inmensa mayoría de los ciudadanos está deseando percibir este cambio de perspectiva.

Además de agotar nuestras fuerzas, el nacionalismo destruye la moral colectiva porque nos pone en presencia de una radical desigualdad de trato que deteriora la legitimidad del sistema. Algún especialista en medios de comunicación debería medir en términos cuantitativos la presencia de las diferentes Comunidades Autónomas en los medios de alcance nacional. ¿Somos iguales los ciudadanos? España circula por la Historia con un «handicap» permanente. El es-

fuerzo de los mejores está siempre ocupado en debatir sobre esencias inaprensibles y egoísmos perfectamente cuantificables. Las regiones, a esperar. Si se puede cambiar la dinámica, ganaremos a largo plazo una batalla decisiva.

NACIONALISMO, IDEOLOGÍA ABSORBENTE

Escribe E. Gellner: las aspiraciones de los nacionalistas (radicales, matiza, lo mismo que solemos hacer nosotros para combatir el desaliento) no toleran dentro de sus fronteras a un número significativo de personas no adscritas a la comunidad; sobre todo, *si ocupan cargos de importancia*. Nacionalismo, sí, pero lo principal es el poder: ¡que no nos gobiernen extranjeros! No es este el lugar apropiado para discutir sobre orígenes teóricos: en este punto, la mezcla de Herder con Darwin que, a juicio del citado Gellner, cristaliza en Nietzsche, resulta más que discutible.

Es difícil, de verdad, para quienes nunca hemos respirado el aire viciado del nacionalismo extender la mentalidad esencialista a todos y cada uno de los actos de nuestra vida. Sangre y tierra, misticismo fraudulento, esencialismo agotador. Sin embargo, como demuestra E. Kedouri, el nacionalismo es un fenómeno contingente, un accidente ideológico que nace en algunas partes de Europa a principios del siglo XIX. Todos los precedentes merecen ser discutidos: muchos de ellos –léase, por todos, a Cruise O'Brien– cuentan con una matriz religiosa, sea el pueblo de Israel, la herejía husita o la Reforma y sus aliados. Por supuesto, también Irlanda, Polonia, Grecia. Las teorías sobre nacionalismo y economía (sobre todo, la relación con el proteccionismo en favor de la industrialización incipiente) contienen sugerencias atractivas. La historia de H. Kohn, profundamente injusta respecto de España, cuenta muchas aventuras interesantes, más bien concernientes al tiempo del protonacionalismo. De crueldades, limpieza étnica y terrorismo sanguinario, en nombre y por cuenta de la ideología, lo sabemos casi todo los hombres del siglo XX. Los elementos coinciden una y otra vez: lenguas ancestrales y mitologías; paraísos perdidos; irredentismo que unas veces reconoce su frustración (provincias vasco-francesas; Rosellón y Cerdaña) y otras amenazas para cualquier día de estos (Navarra; los «países catalanes»).

Me quedo con dos planteamientos también convencionales, pero con especial relieve –creo– en el caso de España. Primero, explicación sociológica: oligarquías locales contra Administración periférica del Estado. Es una obsesión. Queda la justicia (hablo en términos socio-políticos y no jurídico-constitucionales) en Cataluña y el País Vasco. Queda la Hacienda general en Cataluña. Son objetivos preferentes en los proyectos de reforma que se avecinan. Cuando desaparezca el último funcionario estatal que no resida en Madrid, habremos conseguido el milagro de ser un Estado sin territorio. Convendría detener la sangría y consolidar cuando menos la situación actual. Segundo, explicación psicológica: «ser más que...», por privilegio estamental, no sólo (y no siempre) por ser el mejor en libre competencia. Excepciones al margen, el nacionalista tiende a la ignorancia sobre el mundo exterior, aunque a veces lo disfrace bajo un barniz cosmopolita o bajo una erudición desproporcionada sobre el terruño propio. Admira a Esparta, odia la sociedad abierta, siente vértigo cuando se acerca la libertad. Lo hemos dicho tantas veces que ya resulta aburrido. Lo malo es que no ha servido de nada: la zafiedad pseudointelectual está muy arraigada en la condición humana.

Por enésima vez. A día de hoy España significa libertad, democracia, Europa, bienestar... ¿Cómo van a ser modernos los nacionalismos étnicos, rancios, románticos y excluyentes? ¿Cómo va a ser centralista quien defiende el Estado autonómico? ¿Acaso no es democrática la igualdad ante la ley derivada de la soberanía nacional, única fuente de legitimidad del poder a estas alturas del discurso de la historia? ¿Van a dar lecciones quienes pretenden privilegios jurídicos y económicos, abogan por una sociedad premoderna y magnifican desde su egoísmo insolidario a los ídolos de la tribu? ¿Cuándo se va a superar el gran misterio de la democracia española desde el punto de vista del historiador de las ideas, esto es, la confluencia insólita del nacionalismo burgués con la izquierda progresista? ¿Tenía razón Marx al decir que la ideología es un pensamiento socialmente deformado?

PATRIOTISMO DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

Palabras en su contexto. No procede hablar hoy día de nacionalismo español. Sí de patriotismo. Algo más que patriotismo constitucional.

Patriotismo de la España constitucional. Recordemos alguna que otra obviedad.

España, con sus luces y sus sombras, es una realidad indiscutible, como nación y como Estado. Surge como Estado nacional en los primeros días de la forma política moderna. Ha sido percibida dentro y fuera como una unidad desde tiempo inmemorial. Ha jugado un papel de primer orden en la historia universal. Ha sido protagonista en el «nomos» de la tierra que todavía nos rige. Aporta una lengua y una cultura al mismo nivel de las mejores. Como todos, ha sufrido altibajos y no faltan lagunas y miserias. Como todos, insisto; nada excepcional.

España no es una construcción artificial, producto de la opresión o (para los que prefieran no hacer el ridículo) de la yuxtaposición de otras naciones auténticas. Oigamos al Tribunal Constitucional: «La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conservan unos derechos anteriores y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general» (STC 76/1988). Bien dicho. España no es un fracaso histórico, sinónimo de atraso y decadencia, reunión al azar de gentes pintorescas reñidas sin remedio con la modernidad. No carece de futuro; muy al contrario, ofrece un proyecto muy atractivo que sólo puede molestar a quienes viven de, por y para su identidad diferencial.

España se constituye... El pueblo español es titular de la soberanía nacional. Nacionalidades y regiones son *partes constitutivas* de la nación española. No existen las comunidades nacionales. Tampoco hay naciones de naciones. El acuerdo entre los dos grandes partidos que representan al ochenta por ciento de los electores expresa, en materia de organización territorial, la voluntad constituyente de la nación. Si hace falta, lo diremos mil veces más.

La gran mayoría, por fortuna, no tenemos problemas de identidad. Así nos queda un poco de tiempo –no demasiado– para vivir. Consejo de Kavafis: «aunque no puedas hacer tu vida como quieras / inténtalo, al menos, *cuanto puedas...*». Es una suerte no ser nacionalista.

REVISTA HISPANO CUBANA HC

UE y Cuba ¿Principios o intereses?

V. Havel, V. Roca, O. Fondevila,
M.B. Roque, O. Payá

La Inducción:
¿frío, tibio o caliente?

Jorge Ramón Castillo

Cuba congelada

Rafael Rubio

Alberto Guigou
y la novela de su vida

Vicente Echerrri

Derechos Humanos, Documentos,
Cultura y Arte

Número 21

© 2005



Director
Javier Martínez-Corbalán

Consejo editorial
Cristina Álvarez Barthe
Luis Arranz
María Elena Cruz Varela
Jorge Dávila
Manuel Díaz Martínez
Alina Fernández
María Victoria Fernández-Ávila
Celia Ferrero Romero
Carlos Franqui

José Luis González Quirós
Mario Guillot
Guillermo Gortázar
Jesús Huerta de Soto
Felipe Lázaro
Jacobó Machover
José María Marco
Juan Morán
Eusebio Mujal-León
Fabio Murrieta
Mario Parajón
José Luis Prieto Benavent
Tania Quintero

Alberto Recarte
Raúl Rivero
Ángel Rodríguez Abad
José Antonio San Gil
José Sanmartín
Pío Serrano
Daniel Silva
Rafael Solano
Álvaro Vargas Llosa
Alejo Vidal-Quadras
Redacción
Orlando Fondevila
Begoña Martínez

www.revistahc.com

PÍDALA EN SU QUIOSCO HABITUAL

Información y pedidos:

REVISTA HISPANO CUBANA HC

C/ Orfila, 8, 1ª A. 28010 Madrid

Teléfonos: 91 319 63 13 - 91 319 70 48 Fax: 91 319 70 08

e-mail: revistah@revistahc.com - Internet: <http://www.revistahc.com>

UN VISITANTE EN LA CORTE DEL NACIONALPROGRESISMO CATALÁN

Imaginemos que alguien llega a Cataluña con la intención de conocer de primera mano el llamado hecho diferencial catalán. Nuestro visitante ha leído el ensayo de los politólogos M. Keating, P. Martín y H. Meadwell titulado «Naciones contra el Estado». Gracias a este trabajo, ha sabido que en Cataluña hay un «nacionalismo regional» que, amparándose en la Constitución española, ha construido un «casi-Estado» dotado de amplia autonomía y capacidad de autogobierno. Y ha sabido también que en Cataluña, según parece, existe una identidad colectiva –ahí radicaría el hecho diferencial– sustentada en la lengua propia. Por lo demás, gracias a The Guardian, sabe que en Cataluña, como en el resto de España, gobiernan las izquierdas. Nuestro hombre quiere comprobar en vivo y en directo lo que ha leído en el libro y en diversos artículos.

Ya en la ciudad –en plena campaña del referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa–, contempla un cartel electoral en donde un señor con bigotes –presidente de un partido nacionalista catalán– pide el «no» arguyendo que la Constitución Europea no reconoce la existencia de las naciones sin Estado como Cataluña, ni la identidad nacional catalana, ni la lengua propia de Cataluña que según dice es el catalán, ni el derecho de autodeterminación de Cataluña. Y en la prensa lee las declaraciones de un político –también nacionalista y ex presidente del gobierno

Miquel Porta Perales es crítico y escritor. Su último libro es *Si un persa viatgés a Catalunya*, editado en catalán por l'Esfera dels Llibres.

autónomo catalán– que igualmente reivindica la identidad catalana –así como «nuestra forma de ver y sentir nuestra sociedad y nuestro país»– al tiempo que denuncia la existencia de una concepción *light* de Cataluña que supone un peligro para la cohesión de un país poco protegido. ¿Será Cataluña una nación? ¿En qué consiste la identidad catalana? ¿Existe la lengua propia de Cataluña? ¿Comparten los catalanes una manera de ver y sentir? Esas son las preguntas que se hace nuestro visitante. La respuesta –piensa– está en la calle.

En la Plaza de Cataluña hay un FNAC. Entra. ¿Qué ve? Diarios, revistas, libros, música y juegos diversos editados en distintas lenguas con un claro predominio del castellano y el inglés. Y en la cafetería, la gente habla –*fifty-fifty*– en castellano y catalán. O en catalán y castellano. El Café Zúrich –justo donde empiezan las Ramblas– es una babel de lenguas y nacionalidades. Constata que la mayoría son turistas. Ya en las Ramblas –una fuente, quioscos de prensa, animales enjaulados, tenderetes de flores, y muchos paseantes–, para apaciguar la sed y la curiosidad, entra en el supermercado Champions. Compra una botella de agua –la escoge entre muchas, casi todas ellas etiquetadas en castellano pese a estar envasadas en Cataluña– y se dirige a la caja colocándose en la cola justo detrás de una pareja de piel morena cuya lengua no entiende. Otra vez en el exterior, se pierde en un laberinto de calles estrechas y contenedores de basura, que llevan el escudo del Ayuntamiento de Barcelona, rotulados en catalán y bereber, tiendas de alimentación con letreros en urdú que anuncian productos orientales, y peluquerías de estilo *afro* con música ídem. A lo lejos, le parece oír un son caribeño. Del instituto de educación secundaria Miquel Taradell salen un par de mujeres magrebíes acompañadas de cinco niños. Enfrente, Edicions 62: muchos libros en catalán y pocos en castellano. Calle arriba, tropieza con un edificio blanco, dotado de una fuerte personalidad, situado en una plaza dura tomada por media docena de adolescentes de etnias variadas en monopatín. Es el Museu d'Art Contemporani, le dicen. Entra: mucho edificio y poca obra.

¿En qué consiste la identidad catalana? Nuestro hombre en Barcelona aún no lo sabe. A tenor de lo visto, dicha identidad –si existe– es múltiple. Heterogénea. Heteróclita, incluso. Cabe la posibilidad de que haya paseado por un *suburb* y que su percepción de la realidad sea incompleta. Por ello, decide salir de aquel dédalo de ca-

llejuelas y comercios y regresar al hotel, situado en el centro de la ciudad. En la *city* barcelonesa hallará lo que anda buscando. De camino al hotel, la misma heterogeneidad. En las calles, la gente habla en catalán y castellano. Y en las tiendas ocurre exactamente igual. Además, la carta de los restaurantes está únicamente en catalán, mientras los clientes hacen sus pedidos en catalán y castellano indistintamente. Se pregunta por qué.

Ya en el hotel, nuestro antropólogo urbano hojea la prensa y conecta la radio y la televisión. Este es el resultado del trabajo de campo: seis diarios en castellano, tres en catalán, numerosas radios y canales de televisión que emiten en catalán y castellano. La mayoría programa canción en castellano e inglés. En catalán, poco. Se hunde en un mar de dudas y cavilaciones. ¿Tiene Cataluña una lengua propia? Difícilmente puede ser así, cuando los catalanes hablan dos o más lenguas. A la par, catalán y castellano. Y no suelen tener ningún tipo de problema en cambiar de lengua en función del *partenaire*. Esa infidelidad lingüística le gusta. Y le va de perlas, porque él chapurrea el castellano y de este modo puede entenderse con todos. Así las cosas, le resulta incomprensible que algunos políticos catalanes usen el concepto de «lengua propia». ¿Quizá los territorios hablan? Por supuesto que no. Hablar, lo que se dice hablar, sólo lo hacen las personas. Entonces, ¿por qué empeñarse en el uso del concepto de «lengua propia»? ¿Por qué no aceptar que en Cataluña hay dos lenguas comunes? Por lo demás, si se acepta que el catalán es la lengua propia de Cataluña, ¿cuál es el estatuto del castellano, la lengua de la mitad de los catalanes? ¿Quizá una lengua impropia? Absurdo.

¿En qué consiste la identidad catalana? Nuestro perplejo visitante piensa en el libro de M. Keating y en el mensaje electoral del político bigotudo que pide el «no» al Tratado Constitucional de la Unión Europea. No entiende que Cataluña tenga una identidad propia por el hecho de poseer una lengua propia. No entiende que el ex presidente del gobierno autónomo catalán diga en la prensa que la identidad catalana propia se sustenta también en una «forma de ver y sentir nuestra sociedad y nuestro país». Es decir, una forma de ver y sentir propias. Sonríe. ¿Habrá algo que en Cataluña no sea «propio»? ¿Puede hablarse de una identidad propia sustentada en una lengua propia cuando esta última no existe? ¿Hasta qué punto puede decirse

que en una comunidad determinada existe una –sólo una– «manera de ver y sentir nuestra sociedad y nuestro país»? Incomprensible. De otra parte, ¿qué son y qué identidad tienen aquellos ciudadanos que ven y sienten el país de una forma distinta a la que se considera propia? ¿Quién está legitimado para definir la manera propia de ver y sentir de una sociedad? Bajo la idea de una identidad propia catalana se esconde, sin duda, una afirmación heráldica y una deriva excluyente. La afirmación heráldica de quien desea diferenciarse de lo más próximo (¿quizá España?), y la deriva excluyente de quien niega el certificado de catalanidad a los ciudadanos dotados de una identidad «impropia» (?) como consecuencia de usar una lengua «impropia» y tener una visión del país igualmente «impropia». ¿Se negará a la mitad de los catalanes la identidad catalana? Absurdo. Absurdo. Absurdo. Cómo negar la catalanidad a los castellanohablantes que viven en Cataluña. Cómo negar la catalanidad a los catalanes con una visión de Cataluña no legitimada por el nacionalismo catalán. Un galimatías. Un auténtico despropósito.

Se impone ordenar ideas y sacar conclusiones. Primero, ¿qué es Cataluña? El maestro Anthony D. Smith respondería que Cataluña no es una realidad geológica, sino gastronómica. Es decir, Cataluña no está formada por un conjunto de sedimentos históricos superpuestos, sino por una serie de elementos de procedencia diversa cada uno de los cuales se cocina a su manera. El resultado es una identidad en minúscula. Y, como toda identidad en minúscula, ha de formar parte de una identidad en mayúscula. Pero, ¿de cuál? Segundo, ¿qué es Cataluña? ¿Una nación, según afirma el discurso de los políticos nacionalistas catalanes? Pero, ¿qué es una nación? Aquí empieza el problema. Tradicionalmente, son diversos los criterios utilizados para definir el término «nación». Por ejemplo: el territorio, el origen, la lengua, la tradición, la historia, las leyes, la religión, la cultura, la conciencia, el Estado, el mercado, etc. En función de estos criterios, se suele decir que una nación está formada por una serie de rasgos objetivos (lengua propia, cultura propia, manera de ser propia, historia propia, identidad propia) y subjetivos (la conciencia de pertenencia). Tercero, ¿qué es Cataluña? Sigue sin saberlo. Habrá que pasar de la teoría a la práctica.

Y de la teoría a la práctica. Por última vez, ¿qué es Cataluña? ¿Una nación? Los datos de que dispone le indican que no. Para justificarlo,

otra batería de preguntas. Y respuestas. ¿Lengua propia? Los catalanes utilizan indistintamente el catalán y el castellano. ¿Cultura propia? Los catalanes leen en catalán y castellano y escuchan canciones en catalán y castellano. ¿Manera de ser propia? En Cataluña –como ocurre en cualquier lugar– las gentes tienen una manera de ser diversa. ¿Historia propia? La historia siempre es compartida con los vecinos. ¿Conciencia de pertenencia? A falta de datos, el hecho de que los catalanes hablen en catalán y castellano, y acepten una cultura y una música catalanas y castellanas, induce a pensar que la conciencia de pertenencia es catalana y española. ¿Identidad propia? Si la identidad propia se basa en una lengua y cultura propias, si los ciudadanos de Cataluña no tienen una lengua y cultura propias –de hecho tienen dos: catalana y castellana–, carece de sentido hablar de identidad propia. ¿O es que alguien cree que la identidad de un pueblo es distinta a la de sus ciudadanos?

Nuestro confundido visitante, en función de los criterios usados para definir qué es una nación –criterios propuestos, por cierto, por el propio nacionalismo–, llega a una conclusión que cree difícilmente refutable: Cataluña no es una nación. O, a lo sumo, es una nación tan impropia que acaba no siéndolo. Y empeñarse en mantener lo contrario implica continuar con aquel «ejercicio de ingeniería social deliberada» (Eric Hobsbawm) que consiste en inventar una nación a la carta vía selección/mitificación/mistificación/depuración/exclusión de determinados rasgos. Cataluña, sin duda, forma parte de España. Por lengua, cultura, historia, identidad y voluntad. Cataluña forma parte de una España en donde conviven diversos puntos de color y cúmulos de formas que se combinan armónicamente en un todo. Como una pintura de Kokoschka. Nuestro sagaz visitante concluye que el nacionalismo catalán necesita negar a España para afirmarse. Un caso clínico para el doctor Freud.

El nacionalismo catalán debe olvidar el despotismo de la identidad. Por motivos de salud ciudadana. O lo que es lo mismo, debe renunciar al esencialismo que le es propio. Cosa que implica un cambio radical de mentalidad: el nacionalismo catalán no puede continuar pensando en términos de intrusión y desnaturalización. Y el nacionalismo catalán ha de reconocer y dar carta de naturaleza a la Cataluña real olvidándose de la Cataluña soñada. Traducción práctica: no se

puede definir la identidad catalana con el criterio excluyente de lo que –supuestamente– es propio. Hecho lo cual, el nacionalismo catalán ha de aceptar y asumir que Cataluña debe sustentarse únicamente en el contrato social y en las instituciones y prácticas democráticas de la sociedad liberal y el Estado de derecho.

Negar España para afirmar Cataluña. Dónde lleva eso. Después de barajar algunas hipótesis –la defensa de la lengua y la cultura catalanas, por ejemplo–, nuestro inquiridor concluye que todo obedece a una concepción mecanicista y anacrónica de la política: el nacionalismo catalán bebe todavía en la fuente del viejo principio de las nacionalidades del siglo XIX según el cual a una nación le correspondería, por definición, un Estado. Pero, ¿qué sentido tiene hoy reivindicar un Estado cuando ello podría conducir a una escisión social que distinguiría entre catalanes propios e impropios? ¿Qué sentido tiene hoy reivindicar un nuevo Estado cuando la soberanía se cede a entidades supranacionales como la Unión Europea? El nacionalismo catalán es un retronacionalismo. Y una visión quimérica, como la que ofrecen los sueños o la imaginación calenturienta.

Liberado del fantasma nacionalista, nuestro visitante decide relajar el espíritu. Conecta el televisor. La televisión en España es igual o peor que en todas partes. Nada le gusta. Noticias. Un señor –el Presidente de la Generalitat de Cataluña, se lee en la parte baja de la pantalla– afirma que en el preámbulo del nuevo Estatuto de Cataluña debe constar que «Cataluña es una nación». Estupefacción. ¿No ha leído en *The Guardian* que en Cataluña gobierna la izquierda? Si ello es cierto, ¿cómo es posible que la izquierda cambie internacionalismo y universalismo por nacionalismo? La izquierda anda desorientada. Pero, ¿hasta este extremo? ¿Cómo es posible que en Cataluña los políticos de uno u otro signo estén cortados por el mismo patrón retronacionalista? Una sospecha: Cataluña no es una nación, sino una corte. En el sentido dieciochesco del término. Es decir, un conjunto de personas y familias que rinden pleitesía a un peculiar monarca absoluto de nombre Nación Catalana. Por la Gracia de la Nación Catalana, se acuñaría en las monedas de una Cataluña independiente. Independiente y fuera de la Unión Europea. Menudo negocio. Con tiempo y datos, le gustaría averiguar si debajo de la pleitesía cortesana se esconde alguna razón pro-

saica que justifique la obsesión identitaria, que justifique un hecho diferencial que es incapaz de percibir.

Sentado ante el televisor, se sorprende ahora de las declaraciones de un político que reclama el giro a la izquierda fundamentado en un desarrollo sostenible y una política de paz. Escucha con atención. ¿Desarrollo sostenible? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Sí, la definición oficial de la Comisión Brundtland dice que el desarrollo sostenible es el que «satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». Muy bien. Pero, ¿quién define nuestras necesidades y en virtud de qué criterios? ¿Qué necesidades se deben satisfacer o sacrificar? ¿Quién sabe las necesidades de las generaciones futuras? Muchas veces lo ha manifestado en público y nadie le ha entendido. Siempre le malinterpretan. No quiere ni la destrucción del medio ambiente, ni una vida miserable para sus hijos; sólo desea que no se confunda ideología y ciencia, que no se den lecciones gratuitas de ética y moral, que no se hipoteque el crecimiento y el bienestar en nombre del catastrofismo ecologista que nos invade. Y algo parecido ocurre con la paz. El pacifismo no entiende que la paz no es un valor universal, no entiende que los únicos valores universales son la libertad y la vida digna, no entiende que –en algunas ocasiones– para defender la libertad y la vida digna hay que incurrir en algún grado de violencia contra quien amenaza la seguridad y libertad del mundo y los ciudadanos. Lo contrario equivale a comulgar con la ética del esclavo. Y esa ética es la que le ha parecido ver en una Barcelona en la que todavía cuelgan algunas pancartas con la palabra –así, en italiano– «*pace*», esas pancartas que la ingenuidad pacifista esgrimió durante la intervención militar en Irak que acabó con la satrapía de Saddam Hussein. Muy de otra época.

Si el nacionalismo catalán le retorna al siglo XIX, la izquierda catalana le conduce a los años 30 y 70 del siglo pasado. Una izquierda –lo percibe en las declaraciones del político entrevistado en televisión– que se cree en posesión de la línea correcta que seguir, que se considera expresión de la conciencia crítica de la sociedad, y se presenta como modelo de conducta ética. Y ahí no acaba la cosa, porque el político entrevistado asegura que nos quiere conducir al mejor de los mundos. Se le ocurre que Cataluña, sin ningún género de dudas, es la

capital del imperio del Bien. Menudo peligro. Y es que quienes se creen en posesión de la verdad se permiten el lujo de excomulgar a quien piensa de manera distinta. Lo curioso del caso es que estos ángeles de bondad –al parecer, en estado de gracia permanente e irrefutable por definición– sólo son capaces de ofrecer un discurso negativo repleto de propuestas que se conjugan con los verbos «prohibir» y «eliminar». En realidad, esta izquierda progresista –que se mueve por los espacios de la ficción y que, como Jeremías, sólo sabe quejarse y maldecir– es la reencarnación colectiva de aquella desgraciada figura de la conciencia que fue el llamado intelectual crítico de los 60 del siglo pasado. Igual que aquel intelectual, la izquierda y el progresismo tienen la pretensión de hablar en nombre de la razón universal y son unos ingenuos y unos impostores de bajo vuelo que reducen la complejidad del presente a la simpleza de sus consignas ideológicas.

El nacionalismo y la izquierda –dos movimientos que han perdido el hilo de la historia– están a la orden del día en una Cataluña que se pretende moderna y avanzada. ¿Será eso el hecho diferencial catalán?, se pregunta nuestro paciente visitante frente a una infusión. Y concluye que si el nacionalismo y el progresismo catalanes no aceptan el sentido del límite, si no son capaces de zafarse de sus obsesiones, merecerán pasar a la historia no sólo por su inocencia, sino también por su estulticia y no se sabe si por su sectarismo. *Vade retro*, exclama mientras apura la última gota de ese amargo líquido que le han servido en la corte del nacionalprogresismo catalán.

GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL RECUERDO

El pasado 23 de enero recordamos el décimo aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995 mientras preparaba las elecciones municipales que se iban a celebrar en el mes de mayo. Numerosos políticos, intelectuales, periodistas y amigos se dieron cita en el homenaje que organizó la fundación que lleva su nombre y que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con ese motivo, y mediante el texto que ahora reproducimos, Fernando García de Cortázar rindió tributo a Gregorio Ordóñez y a todas las víctimas del terrorismo, y recordó los fundamentos morales del compromiso con la libertad y con la justicia de quienes perseveran en el combate contra el terror.

De los resistentes es la última palabra (Albert Camus)

Las víctimas del nacionalismo totalitario no tienen razón por ser víctimas pero están en posesión de una verdad moral indubitable, aquella que escribió Jean Améry al relatar su experiencia en los campos de concentración nazis: la verdad moral de los golpes que suenan en sus cráneos y que les confiere más legitimidad para juzgar, no sólo a los ejecutores, sino también a la sociedad que sólo piensa en su supervivencia. Los terroristas piensan que la experiencia de la sangre hace que la sociedad, o las personas individuales que la componen, dejen a un lado los principios para lograr la supervivencia, miren, en fin, hacia otro lado que no sea el del perseguido.

Habría que recordar a quienes predicán la resignación que el único altruismo moral que la Historia no ha deteriorado es el de emigrar hacia la vida de las víctimas para comprenderlas. Habría que recordarles que la aceptación como inevitable y normal de lo que es en sí

Fernando García de Cortázar es catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Deusto.

mismo aberrante conduce al envilecimiento. Habría que preguntarles si piensan, como escribía irónicamente Adenauer, que la mejor forma de aplacar a la bestia es permitiendo que te devore. Habría que gritarles que si no castigamos, si ni siquiera censuramos a quien jalea y ampara el terror estamos haciendo mucho más que «ensombrecer» el tiempo presente que malvivimos, estamos privando a las generaciones de mañana de todo sentido de la justicia.

Es así como crecen los verdugos, y no sólo por culpa de una labor educativa fundada en la enciclopedia del odio. Los jóvenes asimilan que la vileza nunca se castiga y que, al contrario, a veces incluso reporta sueldos parlamentarios.

Hace tiempo que el fantasma del totalitarismo vaga por las calles del País Vasco hambriento de carroña española... Se nos ha pasado la juventud y los años corriendo delante de los grises, imaginando un país sin mordazas ni ejecuciones sumarias. Con la muerte de Franco y la Transición ganábamos la libertad y heredábamos la burocracia criminal de ETA, que había enterrado a Sabino Arana entre antiguallas carlistas y ensueños nazis. Era la revolución de todos los huérfanos del paternalismo mediocre y conservador del PNV, la que iba a traer el paraíso comunista y la autodeterminación a todas las ciudades de la Gran Euskadi con tiros en la nuca y fuegos artificiales bañados en goma 2. Fuimos pacíficos y sencillos, caminamos en manifestaciones barrocas y místicas junto a los nacionalistas, como si la vergüenza del silencio sobreviviera a la lenta procesión de muertos que en vano se aferraban a nuestro recuerdo para no desaparecer del todo.

Aun así esperamos en el crecimiento de la prosa libre, la invasión del poema en las calles como un Nilo desbordado sobre las extensiones del silencio, de la vida, de la realidad de unos hombres y mujeres exiliados en su propia tierra por defender la dignidad y soñar un país en libertad. Los nacionalistas temen que los vascos pidamos por fin la voz y la palabra, que renazca el espíritu de Ermua como un poema o una marea de protesta, como algo que viene creciendo de ola en ola, de grito en grito, de palabra en palabra. Arzalluz y sus hijos descarriados temen, en fin, los viejos versos de aquel poeta comunista: «... *podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera*». El compromiso del intelectual debe implicar la denuncia de todo aquello que ponga en peligro el acuerdo elemental que constituye el funda-

mento ciudadano de nuestra sociedad desde tiempos de la Ilustración. Implica por tanto señalar a los fanáticos y a sus religiones fanatizadas, implica llevar a cabo el examen del discurso del nacionalismo, no sólo los actos vandálicos y crueles del terrorismo sino la esencia de su doctrina para considerar a qué obedece la indulgencia con que ha sido tratada una ideología comunitarista, una forma de exclusión social, que niega los principios de la sociedad liberal y democrática y que está en el origen de la orgía de violencia del siglo XX. No basta con condenar los campos de concentración, hay que condenar el nazismo que los hizo posibles. La ideología nacionalista que está detrás de los crímenes de ETA es una ideología que ha hecho estragos en la conciencia moral y en la cultura cívica del País Vasco, que ha intoxicado a sectores muy amplios de la juventud y que ha embotado los sentimientos más elementales de piedad hacia las víctimas.

La responsabilidad de los intelectuales debe devolver a éstos a la política. A la formación de opinión. Del compromiso del intelectual hemos pasado al intelectual recluido en los soliloquios de la Academia. El intelectual puede dejar de ser un militante de un partido, pero no puede renunciar a ser un dirigente cívico, un educador implacable con quienes ejercen el código de silencio de un discurso que decide quién es un compatriota y quién es un renegado o un enemigo del pueblo. En modo alguno se puede identificar el nacionalismo, genéricamente, con el fascismo. Pero tampoco debe olvidarse que todos los fascismos han sido nacionalistas, comunitarios radicales, presuntuosos poseedores de la definición de una identidad que distribuye a los propios y a los ajenos. La Iglesia vasca, por ejemplo, tiene un discurso rancio, gastado, sobre la nación, cuyo concepto es siempre inadecuado y confuso, como la categoría de pueblo, a la que continuamente apela. Sorprende que el punto de partida no sea la persona, el individuo, sujeto primario de derechos, reconocido como ciudadano en una sociedad democrática que nace de la voluntad popular y que como tal ciudadano prevalece sobre las adscripciones étnicas, religiosas que pueda tener.

El escritor Albert Camus, siempre crítico, siempre actual, advirtió en «el siglo del miedo» de la normalización de la muerte ajena, del peligro de que la violencia acabara convirtiéndose en parte del paisaje de la humanidad, en una forma trágica de cultura, alumbrada por la

esquizofrenia moral de la posguerra europea. En el mundo moderno se mata por interposición, por silencios, por verdades a medias. El hombre rebelde, el intelectual insumiso debe reclamar el final del imperio del miedo porque éste impone el exilio de la libertad. La verdad sobre los crímenes del fascismo, del comunismo, del nacionalismo étnico de los Balcanes o, más cerca de nosotros, de ETA es la mejor barrera para impedir el retorno de tales aberraciones. La verdad no sólo desenmascara el crimen sino también las causas, las estructuras de fondo, que lo permitieron. Por otro lado quedarse sólo en el recuerdo descomprometido de las víctimas, olvidando las responsabilidades de justicia del presente, lleva a traicionar a aquellos a quienes decimos recordar. Sólo honrando a las víctimas, como hoy lo hacemos con Gregorio Ordóñez, y exigiendo justicia para ellas podemos redimir de algún modo la incoherencia de vivir en un mundo en el que el verdugo continúa, con frecuencia, prevaleciendo sobre la víctima.

Adiós, España



JESUS LAÍNZ
Adiós, España

Ed. Destino. Colección Imago Mundi.

Jesús Laínz ha escrito una obra monumental y no es extraño que haya invertido en su redacción siete años de continuo trabajo. Al levantar la vista de la última línea de las ochocientas treinta páginas de este esfuerzo notabilísimo de erudición desbordante y de análisis implacable y riguroso, el lector se ve invadido por la certeza de que no ha dedicado su atención a un libro más de los muchos que han abundado a lo largo del último cuarto de siglo sobre el problema nacionalista en España. Lo que Jesús Laínz ha conseguido en *Adiós, España* va más allá del habitual estudio histórico o de la conocida crítica política a los particularismos divisivos que corroen la médula de la nación desde hace más de cien años, para ofrecernos un auténtico volumen de referencia. Los numerosos autores que se han enfrentado a la cuestión nacionalista en nuestro país desde que recuperamos la democracia a finales de los setenta han tratado con acierto desigual y desde

distintas perspectivas ideológicas los más diversos aspectos de este trascendental asunto, y en la extensa bibliografía generada por tema tan acuciante destacan nombres como Andrés de Blas, Antonio Elorza, Jordi Solé Tura, Jon Juaristi, Juan Aranzadi, Mikel Azurmendi, José Álvarez Junco, Enrique Ucelay-Da Cal, Juan Pablo Fusi, Joan Lluís Marfany, Javier Tusell, Jaime Ignacio del Burgo y César Alonso de los Ríos, en una larga lista de estudiosos, periodistas, juristas y políticos que se han afanado en entender, describir, apoyar o denostar a nuestros profesionales de la centrifugación. Ahora bien, Jesús Laínz ha intentado y llevado a buen término una empresa que era tan necesaria como inaplazable: la redacción de un completo y sistematizado compendio de las mentiras, fantasías y falsedades en las que los nacionalistas se han basado a partir de los impulsos seminales de Sabino Arana, Enric Prat de la Riba y Manuel Murguía para construir ese arte-

facto irracional, destructivo y delirante que amenaza nuestro futuro y nos ha costado ya demasiada sangre inocente. La aportación impagable de Jesús Laínz a la comprensión y evaluación del fenómeno nacionalista en el País Vasco, Cataluña y Galicia consiste en la disección minuciosa y despiadada de todos y cada uno de los mitos, leyendas, deformaciones, inexactitudes o puros y simples engaños que los forjadores de esa doctrina han ido elaborando con paciencia de araña, astucia de serpiente y crueldad de hiena hasta tejer una malla tupida y asfixiante en la que tantas gentes de buena fe han quedado aprisionadas en el convencimiento patológico de que pertenecen a pueblos oprimidos que requieren ser liberados, cuando la realidad es que disfrutan de la ciudadanía de uno de los Estados más impecablemente democráticos, descentralizados y socialmente avanzados del planeta.

El recorrido en el tiempo al que nos invita *Adiós España* comienza en la Edad Antigua y se detiene en la actualidad más candente en el momento en que el libro fue entregado a la imprenta el año pasado. Es tal la precisión de los datos y la solvencia de las fuentes utilizadas por Jesús Laínz que hay pasajes que se transforman involuntariamente en un ejercicio de humor, tal es el contraste hilarante entre determinadas afirmaciones de los nacionalistas y la realidad probada por la evidencia historiográfica. Los eficacísimos resultados que pueden obtener los nacionalistas gracias a su absoluta carencia de escrúpulos intelectuales y morales por una parte y la ignorancia y credulidad de sus víctimas

por otra, despierta, tras leer *Adiós España*, una mezcla incontenible de indignación y alarma en cualquier persona sensata que se acerque a su contenido. El invento de la indomabilidad de los vascones, jamás conquistados por romanos, visigodos o musulmanes, la auténtica naturaleza de los Fueros, que nunca tuvieron el carácter de pacto entre iguales que los nacionalistas y su esbirro académico Miguel Herrero pretenden, la aparición de una conciencia común de España desde los albores de la Baja Edad Media, la imaginaria batalla de Arrigorriaga, el esperpento del duende Culebro, la supuesta hidalguía universal, la sonrojante tontería del tubalismo, el papel de enorme relevancia que los vascos desempeñaron siempre en la Monarquía hispana, la falta de fundamento de la reivindicación de Navarra como parte de un imaginario solar vasco, la clamorosa desconexión entre el carlismo y el nacionalismo, la personalidad psicopática, racista y fanática de Sabino Arana, la inconsistencia del paralelismo irlandés, el origen partidista de la simbología actualmente atribuida a ese ente llamado Euskadi y la actitud cobarde y traicionera del PNV durante la Guerra Civil, son otros tantos puntos magistralmente tratados en *Adiós España*, demostrando de forma irrefutable que todo el edificio nacionalista es un castillo de naipes que se viene abajo en cuanto se le contrasta con las pruebas proporcionadas por la historia objetivamente considerada.

Aunque la parte dedicada a Cataluña y Galicia es de mucha menor extensión que la que centra su atención en el País

Vasco, los respectivos capítulos cubren muy satisfactoriamente los principales hitos del imaginario nacionalista en aquellas Comunidades. Así, Jesús Laínz liquida con unas cuantas pinceladas diestramente trazadas la absurda evocación de un medieval Estado catalán independiente que por supuesto jamás vio la luz, la trola del origen catalán de la enseña cuatribarrada, el ridículo planteamiento de que la lengua castellana ha sido en Cataluña y Galicia un idioma ajeno impuesto por la fuerza, el insostenible mito céltico de los galleguistas, la interpretación de la Guerra dels Segadors como una lucha por la independencia del Principado, la transformación milagrosa de la Guerra de Sucesión en otro combate entre España y Cataluña, la deliberada omisión por parte de la historiografía nacionalista del entusiasmo patriótico español de los catalanes durante la sublevación contra el invasor napoleónico y del heroísmo de los voluntarios de Prim al servicio de la Corona española en las operaciones militares en Marruecos en 1859, la presentación de la Cataluña del cambio de siglo tras el Desastre del 98 como la avanzadilla modernizadora, europea e industrial del régimen de la Restauración dentro de una España caciquil, agraria y retrógrada y el clamoroso pucherazo del referendo sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936.

Pero donde *Adiós España* alcanza mayores niveles de lúcida y valiente denuncia es en la parte en la que expone la estrategia conjunta de los movimientos secesionistas vasco, catalán y gallego en el intenso período que va desde la

transición hasta 2004. Es en estos capítulos finales cuando la pluma de Jesús Laínz se transforma en un escalpelo afilado que pone al descubierto la podredumbre ética de los cultivadores de una doctrina que vive de alimentar la separación frente a la unidad, el rencor frente a la fraternidad y el conflicto frente a la armonía. La miseria axiológica del nacionalismo y su perversidad intrínseca emergen inocultables de los diáfanos y sólidos argumentos con los que el autor de esta valiosísima contribución al que es por desgracia nuestro principal motivo de angustia y de debate en el inicio del siglo XXI, nos demuestra resueltamente que únicamente la verdad, por dolorosa e incómoda que resulte, es la medicina invencible contra los enemigos de la libertad.

ALEIX VIDAL-QUADRAS

RESEÑAS

Comunismo y nazismo

ALAIN DE BENOIST
Comunismo y nazismo
Editorial Áltera, 2004.

Lo anticipaba Oriana Fallaci en su texto más leído y más incendiario: «Si en Europa ocurriera lo mismo que en Manhattan, el responsable sería el Gobierno, no los terroristas». La mentalidad que da fruto en esas actitudes de nihilismo contra la propia civilización arranca de una

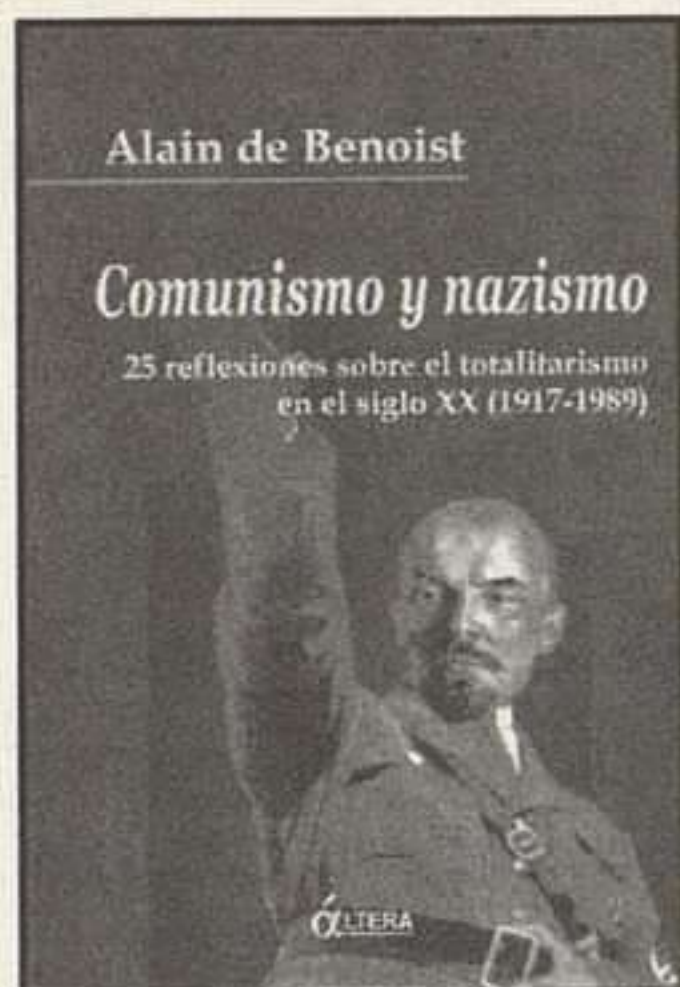
visión del mundo que todavía no ha perecido, pese a caer el muro de Berlín en 1989.

Son muchos los que se preguntan cómo es posible justificar cualquier forma de terrorismo y hacer de ello un elemento de acción política.

Alain de Benoist nos facilita muchas respuestas para entender el alma totalitaria que permanece enquistada en buena parte de las sociedades europeas. Su obra traducida recientemente al español —gracias a la Editorial Áltera y al trabajo de Javier Ruiz Portella y José Javier Esparza Torres— proporciona al lector numerosas claves para entender el porqué de que se sigan disculpando muchos crímenes, de que se siga dialogando con quien nunca tendrá la libertad, ni los valores profundos de la persona como eje de la vida en comunidad.

Cierto es que España tiene una gran deuda con este intelectual. Su ingente obra apenas ha tenido reflejo editorial en nuestro país. Sólo la editorial Planeta, en 1982, publicó *La Nueva Derecha*. Y años más tarde, en 1986, la editorial ya desaparecida Nuevo Arte Thor, la compilación de artículos *Las ideas de la Nueva Derecha. Una respuesta al colonialismo cultural*. Al margen de esas obras, Alain de Benoist ha sido traducido, entrevistado, comentado y citado con profusión en una de las Revistas de mayor altura intelectual en España —cuya desaparición en el 2000 fue lamentada por no pocos—; nos referimos a *Hespérides*.

Pero esta traducción que Áltera ha lanzado, puede empezar a hacer justicia sobre una de las mentes más preclaras en el campo intelectual europeo. Un



intelectual que desde 1968 está combatiendo esa forma de pensamiento único y uniformizador que ha llevado a tanta sequía espiritual y a un nihilismo sin esperanza. Alain de Benoist obtuvo en 1978 el Gran Premio de Ensayo de la Academia Francesa. Director de revistas como *Nouvelle Ecole* y *Krisis*, ha inundado el mercado con ensayos sobre todas las cuestiones de actualidad en un afán de reactualizar el pensamiento griego, el nominalismo y la identidad de Europa. Su obra, polémica y valiente, ha sido en numerosas ocasiones silenciada, manipulada y acusada de servir de armazón intelectual a ideologías con las que él —curiosamente— jamás se ha alineado ni defendido.

Polémico. Inteligente. Dueño de una cultura vasta y profunda. Muchos encontramos en él, en su discurso, el sabor de aquellos «Maestros» que Ortega y antes los regeneracionistas anhelaban para las juventudes.

El libro editado por Áltera, *Comunismo y Nazismo* nos arroja violentamente sobre la reflexión de por qué el comunismo ha tenido una imagen bondadosa y hasta benefactora cuando se ha sabido que fue responsable de la muerte de cien

millones de seres humanos. Alain de Benoist no coloca en una balanza los dos totalitarismos del siglo XX para determinar de qué lado se inclina el fiel. No pretende un juicio sobre ellos. Pero nos va desgranando reflexiones: «*Tenemos derecho a preguntarnos por qué el hecho de matar en nombre de la esperanza en «alegres amaneceres» es más excusable que el asesinato vinculado a una doctrina racista*». Reflexiones que se sumergen en la cuestión moral más pura: «*Hacer el mal en nombre del bien no es mejor que hacer el mal en nombre del mal*». Benoist formula preguntas sobre los «paraísos» que prometían aquellos totalitarismos, «*¿Cómo ha sido posible perseguir en nombre del bien, abrir campos de concentración para liberar al hombre e instaurar el terror en nombre del progreso? ¿Cómo la esperanza ha podido virar hacia la pesadilla?*» La raíz desnuda de ese nihilismo mostró su faz siniestra en el temprano año de 1919: «*Nuestra moralidad no tiene precedente, nuestra humanidad es absoluta, porque descansa sobre un nuevo ideal: destruir cualquier forma de opresión y violencia. Para nosotros todo está permitido, pues somos los primeros que en el mundo han levantado la espada no para oprimir y esclavizar, sino para liberar a la humanidad de sus cadenas. [...] ¿La sangre? ¡Que la sangre corra a mares!*». Palabras del órgano de la Checa de Kiev. Después de aquello y hasta 1989, *cientos millones de muertos por la causa de Lenin y Stalin*. Esta cifra objeto de un riguroso estudio de un grupo de historiadores en Francia bajo la dirección de Stéphane Courtois vio la luz bajo

el título *El libro negro del comunismo* en el 80º aniversario de la Revolución de Octubre. Aquí, en España, fue editada por Espasa Calpe en 1998, pero como es habitual, pasó de puntillas.

Benoist denuncia con valentía las incoherencias de una sociedad que puede denostar a Celine, Drieu la Rochelle o Leni Riefensthal, pero que se rinde en éxtasis ante los poemas de Pablo Neruda, Bertolt Brecht.

Nadie ha querido hacer de los campos de concentración soviéticos museos para defender la causa de la libertad. Al contrario, la obra de Alexander Solzhenitsin ha sido denostada y en nuestro país, tachado de «fascista»...

Por poner un ejemplo de esta mentalidad, en fecha reciente fue estrenada una película en España basada en una novela de Josef Martin Bauer, *Tan lejos como los pies me lleven*. El argumento, un soldado alemán es reclutado para ir a luchar al frente del Este. El soldado, profundamente católico, es despedido por su hija y su esposa, que le anuncia su estado de buena esperanza. Él promete volver por Navidad. Es apresado y pasa ocho largos años en campos de concentración en Siberia. Su fe, las plegarias de su hija a la Virgen pidiendo por el regreso de su padre al hogar, y el coraje de afrontar un largo camino de huida le acaban devolviendo a Alemania tras un sinfín de penalidades. Esta película ha pasado totalmente inadvertida en España. Fue proyectada únicamente durante tres meses en un cine de Madrid en versión original con subtítulos. El hecho del catolicismo del protagonista, de la descarnada maldad de los campos soviéticos, la hicieron

acreedora del más injusto de los silencios... Ésa es la victoria del comunismo intelectual que domina las claves de las sociedades occidentales modernas.

La hermosa lección del libro de Alain de Benoist es que se trata de un alegato valiente a favor de la Libertad profunda del Hombre. Frente a los mercaderes de paraísos, frente a los asesinos de todas las dignidades.

Hoy, un fantasma amenaza a las sociedades libres, de nuevo. El «antifascismo» que ya no tiene enfrente un enemigo gemelo, ha dirigido toda su instrumentación contra las democracias occidentales. Causas como la antiglobalización, los pacifismos que quebraron hasta la exasperación, han provocado que Occidente se enfrente a Occidente —como nos describía André Glucksmann en su última obra. Y la cita no es baladí, Benoist termina su obra con un aserto: «*No hay peor error, para un observador, que el de equivocarse sobre el momento histórico que es el suyo*». Porque si fascismo, antifascismo, comunismo y anticomunismo comparten una misma nostalgia y una misma incapacidad para analizar el presente, es porque forman parte de una etapa que concluyó en 1989. Y quienes caminan en el siglo XXI con la vista puesta en el pasado, queriendo ver el futuro como una repetición, serán incapaces de entrever las nuevas formas del totalitarismo que se pueden presentar.

Benoist nos sirve un escenario de coraje para la denuncia. Frente a la «memoria histórica» de los que, de forma orwelliana, quieren cambiar el pasado para dominar el presente y el futuro.

Atreverse a ver el comunismo y el nazismo como formas del nihilismo, tomar conciencia de ese vacío, es situar la raíz del problema de la libertad en su justo término.

CARLOS MARTÍNEZ-CAVA ARENAS

The Case for Democracy

NATAN SHARANSKY

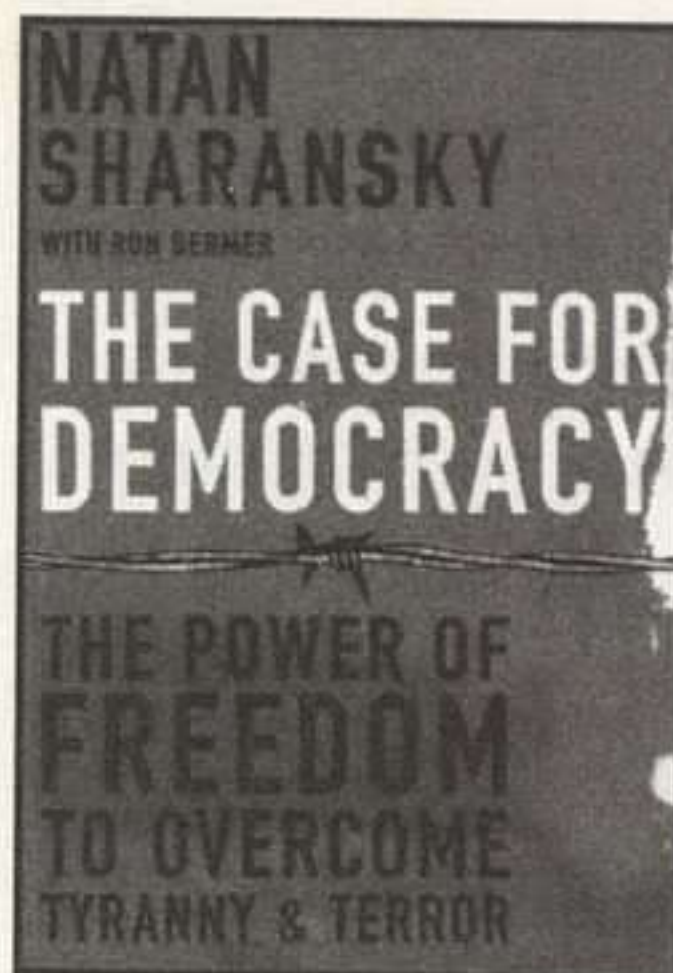
The Case for Democracy. The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror.

Nueva York, Public Affairs, 2004.

Es poco probable que un ensayo político se vea catapultado a la fama por el hecho de que un presidente de gobierno recomiende su lectura encarecidamente. Pero eso precisamente es lo que ha ocurrido con el último libro de Natan Sharansky, *The Case for Democracy*. El Presidente George W. Bush, quien recibió la obra de Sharansky a través de un buen amigo, declaró en una entrevista a comienzos de noviembre: «Si quiere tener una idea sobre cómo veo yo la política internacional, lea el libro de Natan Sharansky». En diciembre no quedaba un solo ejemplar en las librerías de la capital americana y Amazon no podía dar abasto a los encargos del mismo. Como cuenta el propio Sharansky, a mediados de noviembre, aprovechando una visita

suya a Washington para hablar en el American Enterprise Institute, fue invitado a la Casa Blanca. Al llegar, camino de las dependencias del presidente, le recibió afectuosamente la todavía asesora de seguridad nacional, Condoleezza Rice. Llevaba un ejemplar de su libro bajo el brazo. Rice le preguntó, «¿Sabe usted por qué estoy leyendo su libro? Lo leo porque el presidente lo está leyendo y es parte de mi trabajo saber en qué piensa mi presidente».

A decir verdad no es de extrañar que el ensayo de Sharansky le haya entusiasmado al presidente Bush ni que le haya gustado también, por poner otro ejemplo, a José María Aznar. *The Case for Democracy* es, ante todo, un canto a favor de una política exterior moral, construida sobre unos valores y principios claros y rotundos, sobre los que no cabe ni vacilación ni chalaneo. Sharansky está bien preparado para hablar en primera persona de la libertad y el respeto a la dignidad humana como aspiraciones universales. Encarcelado durante nueve años en la Rusia soviética, tras un juicio sin garantías y una deportación rápida al gulag siberiano, fue liberado gracias a la presión internacional y a una gestión directa del presidente americano Ronald Reagan sobre Mijail Gorbachov. De hecho, fue el primer prisionero político liberado de las cárceles de la KGB tras el arranque de la *perestroika*. Tras sus años de suplicios, de los que da buena cuenta en otra obra suya anterior a esta que comentamos, *Fear no Evil*, pero de no menor importancia, Sharansky



marchó a Israel, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, muy particularmente el ministerio sin cartera para la emigración de la diáspora judía hacia Israel, con gobiernos tan distintos en su color político como el de Ehud Barak, Benjamín Netanyahu y Ariel Sharon. Como él mismo escribe en su libro, él nunca se ha planteado las opciones en términos de izquierda y derecha, sino entre lo correcto y lo equivocado.

De hecho, el reto que plantea este nuevo libro de Sharansky es la necesidad imperiosa y actual de las sociedades democráticas occidentales de encontrar la claridad moral para ver el mal. Salir de equívocos, confiar en el cambio, mantener una fe inquebrantable en la victoria del bien sobre el mal en todas sus expresiones. Esa es la base de la obra de Sharansky.

Sharansky basa sus razonamientos en dos supuestos complementarios que conforman toda la obra: en primer lugar, que cuando se permite a las personas elegir entre la tiranía y la libertad, la gran mayoría elige vivir libremente. Es decir, que la aspiración a ser libres y vivir en democracia —el sistema político que

mejor garantiza la libertad de los individuos hoy por hoy— es una aspiración universal e independiente, por tanto, de credo, raza o distribución geográfica. La segunda idea, que la libertad cuenta con una fuerza y un atractivo tal que es el mejor instrumento de transformación social que pueda conocerse. Sharansky divide a las sociedades en dos categorías, las sociedades del miedo y las sociedades de la libertad. Para saber en cuál de ambos tipos uno está viviendo, él propone aplicar el «test de la plaza mayor» y que básicamente consiste en determinar si una persona puede acercarse hasta la plaza de su pueblo y decir en voz alta todo lo que piensa, libre de miedos y sin que su acción le acarree el encarcelamiento, la exclusión o el exilio, entre otros males. Por no hablar del riesgo sobre su propia vida.

Pero lo mejor del libro de Sharansky es su idea-fuerza de que las sociedades libres pueden ayudar y contribuir decisivamente a transformar las sociedades del miedo en sociedades democráticas. Es impactante el relato que hace de su encarcelamiento, cuando un día sus carceleros le dejaron leer el periódico oficial *Pravda*, donde en portada denunciaban a Ronald Reagan por haber llamado a la URSS el «imperio del mal». Ese día sus precarios medios de comunicación (cañerías y retretes vaciados de agua) no pararon de expresar su alegría, porque, por fin, alguien tan importante para el mundo como el presidente americano comenzaba a llamar las cosas por su nombre verdadero. El libro, además, trata en extenso el caso de Israel y la imposibilidad de hacer

avanzar la democracia en Palestina con Arafat, así como del caso de Irak, que para el autor, gracias a la intervención militar, hoy está mucho más cerca de ser una sociedad libre que cualquiera de sus vecinos árabes.

Por último, —y quizá sea este punto el de mayor atractivo para gentes como Bush—, según Sharansky no es que solamente las sociedades libres puedan contribuir a la extensión de la libertad en el mundo, sino que tras los ataques del 11-S y la amenaza que supone el terrorismo islámico, la jihad islámica, es mucho más que un imperativo moral lo que está en juego, es la propia supervivencia del mundo occidental y democrático. La extensión de la democracia es la única alternativa política al terror, puesto que son las sociedades del miedo, la tiranía y la opresión, las que generan la violencia y el resentimiento hacia nuestros valores, nuestros sistemas de vida y, en última instancia, contra nosotros mismos. De ahí el título de la obra, *The Case for Democracy*, esto es, en defensa de la democracia. Para el autor, «promover la paz y la seguridad está conectado vitalmente con la promoción de la libertad y la democracia». Dejar intactos los regímenes teocráticos y totalitarios o tiránicos ya sabemos el resultado que da: opresión, inestabilidad y terrorismo. En palabras de Andrei Sajarov, a quien tanto ayudó Sharansky en la URSS, «un país que no respeta los derechos de su propia gente, no respetará los derechos de sus vecinos tampoco». Si tuviéramos que parafrasearle, podríamos decir ahora que una sociedad que no respeta

la vida de sus miembros, sino que promueve el martirio suicida, no va a respetar la vida de los demás, es decir, de nosotros. Por eso la importancia de transformar estas sociedades y, en el caso del terrorismo islámico, el mundo árabe en primer lugar.

El libro de Sharansky no es sólo de lectura obligada para los americanos. El presidente Aznar también lo ha recomendado con entusiasmo. Y es que hay muchas lecciones a entresacar para nosotros, los españoles. Y no sólo sobre el terrorismo. Por ejemplo, esta obra es el mejor alegato en contra de la idea del presidente Zapatero de la Alianza de Civilizaciones, visión que en lugar de promover el cambio y la libertad, fija la opresión, la teocracia y la tiranía allí donde hoy impera, justificado porque el mundo musulmán cuenta con «otros valores», «otra civilización». Por no hablar de la ignominiosa retirada de Irak de la que el actual presidente se sigue vanagloriando, y que, a la luz de la obra de Sharansky, no fue más que un abandono de la batalla por la libertad y la seguridad.

En fin, este ensayo no sólo encierra las ideas más acertadas de los últimos tiempos, sino que gracias a la colaboración estilística de Ron Dermer, un experimentado columnista del *Jerusalem Post*, está escrito con fuerza y brillantez. Hay que esperar que pronto vea la luz en castellano para todos aquellos que no se atrevan con su versión en inglés. Merece la pena.

RAFAEL L. BARDAJÍ

El misterio del Europeísmo español

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO

El misterio del europeísmo español. Enjambres y avisperos.

Ed. Síntesis. Madrid, 2005.

Es característico de la política española que el europeísmo –concepto no siempre bien definido– apenas se discute. Si en la mayor parte de los países europeos existen partidos, más o menos minoritarios pero con representación parlamentaria, que critican el llamado proceso de construcción o integración europea, el caso español es diferente. De hecho, existe en el Parlamento Europeo un grupo «euroescéptico» en el que por supuesto no está incluido ningún diputado español. Miguel Ángel Quintanilla Navarro analiza el fenómeno del europeísmo español que califica, directamente desde el título, de misterio. El misterio consiste básicamente en la práctica unanimidad que ha habido en las Cortes Generales a la hora de votar la ratificación de los distintos y sucesivos tratados europeos cuando –como el autor expone– la idea europea de los diferentes partidos es en algunos casos muy diferente. De hecho, se ha llegado a afirmar la existencia de un consenso europeo en la política española. Por otra parte, y según los estudios demoscópicos, el europeísmo de los españoles, a diferencia del de sus políticos, no es extraordinario, en el sen-

tido de que no lo es mucho más que la media europea y lo es menos que el de otros países donde sí existe discusión y discrepancia política sobre Europa. Siguiendo el análisis de Quintanilla se irá viendo cómo esa unanimidad responde fundamentalmente al voto, pero no a la idea que cada partido tiene de cómo debe ser Europa. Sólo en el caso muy reciente del Tratado Constitucional se ha producido una discrepancia abierta a la hora de pedir el voto de los ciudadanos. Bien es verdad que, a diferencia de otros países, éste es el primer referéndum europeo celebrado en España. Entre las pistas que sigue el autor para explicar el misterio del europeísmo está la relación entre el proceso constituyente de 1978 y la adhesión a las Comunidades Europeas. Y concluye que no existe una relación positiva, puesto que la pertenencia a la UE contrae y altera el bloque de constitucionalidad, sin consolidarlo o reforzarlo. Al contrario, el sistema político del 78 se ha visto transformado «profunda y gravemente, sin que por ello se hayan producido protestas de los grupos o partidos que, en principio, han sido más perjudicados por esa transformación». Otra de las pistas que rechaza Quintanilla es la tesis propuesta por los revisionistas de la Transición. Según ellos, el voto izquierdista y nacionalista se produjo bajo la misma coacción militar que no permitió la ruptura democrática. El autor rechaza esa tesis y relaciona más bien la moderación con la presión de los ciudadanos, que se decantaron por ella ya a partir del referéndum de la reforma en 1976. Para poder llegar a la solución del misterio, Miguel Ángel Quintanilla continúa



con el análisis de las diversas posiciones políticas de los grupos políticos españoles respecto a la Unión Europea. Por un lado el europeísmo «ortodoxo» del centro derecha y del centro izquierda. Se trataría del europeísmo representado en su día por UCD y AP y posteriormente por el PP. Se trata del que defiende los compromisos ideológicos originales de la Unión Europea, tanto dentro del atlantismo como con la economía libre de mercado y la democracia liberal. Asimismo este europeísmo defiende el mantenimiento de la soberanía de los Estados miembros en los asuntos esenciales. A este europeísmo se sumó el PSOE a partir de 1985, con la sustitución de Fernando Morán por Francisco Fernández Ordóñez en el ministerio de Asuntos Exteriores, pero se separaría de él progresivamente desde 1996 y más claramente desde 2000, hasta volver a lo que Quintanilla denomina «paleoeuropeísmo». Éste vendría a coincidir con el que había defendido hasta 1985 y que coincide con el del PCE. El europeísmo de la izquierda radical es partidario del proceso constituyente europeo, hacia una unión federal, como instrumento para la realización del socialismo. Desde su pun-

to de vista, sólo un poder europeo centralizado y fuerte podría controlar el poder económico del capital monopolístico. Un tercer europeísmo sería el de los partidos nacionalistas, para quienes lo esencial es la ruptura de los Estados nacionales, diluidos en una Europa de los pueblos.

Para Quintanilla el misterio queda resuelto al concluir que cada grupo político habla de algo diferente al referirse a Europa. Algunos con su voto positivo no se adherían a la Europa «real» sino a la que deseaban, por alejada que estuviera, puesto que entendían que aceptando un nuevo tratado se acercaban a ella. «En la teoría política de las diferentes ideologías españolas la UE ha sido un 'concepto comodín', al que cada jugador puede atribuirle un valor diferente según las cartas que juega y siempre para conferir valor final al conjunto. Por eso todos lo han deseado y apreciado, y sólo lo han rechazado cuando ha adquirido un valor incompatible con los naipes de que disponían».

Especialmente negativa resulta la apreciación del autor respecto a la relación entre europeísmo y consenso constituyente: «Cada partido ha diseñado una Unión Europea que le permite recuperar, mediante el proceso de integración (...), el programa máximo al que renunció».

Si las dos primeras partes de la obra se dedican al estudio del misterio del europeísmo español, la tercera las complementa tratando en detalle el proceso por el que se pasa del Tratado de Niza (tan favorable a los intereses españoles) al Tratado Constitucional aún no ratificado. Explica con gran claridad cómo la Convención presidida por Giscard (quien siendo presidente de Francia había blo-

queado la adhesión de España) se apartó conscientemente del mandato de Niza para simplificar los Tratados y decidió impugnar los acuerdos de reparto del poder. Asimismo describe cómo la firmeza de José María Aznar en el Consejo de Bruselas (diciembre de 2003) dio paso en el verano de 2004 a la cesión a las presiones francoalemanas por parte de Rodríguez Zapatero.

Sobre el nuevo Tratado es difícil decir más en menos palabras: «actúa como si fuera una Constitución, o peor aún, un poder constituyente permanente en el tiempo, indefinidamente disponible para las instituciones de la Unión, que cada vez que aprueben algo sabrán que gestan una norma superior a cualquier Constitución nacional. Y al hacerlo así, se emplea la vieja y nociva tradición jacobina propia de la política francesa de los últimos cincuenta años, el trágico deseo de poner al servicio de uno o algunos Estados, el conjunto del proceso de integración europea. (...) Una Unión Europea abiertamente antiamericana (...) y 'privilegiada', es decir, orientada a garantizar un uso privado de las leyes europeas, más favorable para Francia y para Alemania que para el resto de los Estados europeos».

Quintanilla advierte a quienes hacen uso de la demoscopia para orientar las políticas europeas, que la inmensa mayoría de los españoles, según las encuestas, desea que la última palabra en los asuntos que afectan a España la tenga siempre el gobierno español. A muchos sorprenderá que el 80% de los españoles cree necesario proteger los productos nacionales de la competencia de los

demás países europeos. Asimismo la mayoría de españoles cree que España aporta al presupuesto español más de lo que recibe. Nos encontramos por tanto ante una opinión pública profundamente desconocedora de lo que significa nuestra pertenencia a la Unión Europea. Pero hay cosas que los españoles tienen muy claras: menos de un 5% desea ser ciudadano europeo si ello implica merma de su condición de español.

El autor, frente al proceso de integración europea, considera que lo que debe preocupar no es la demarcación territorial en que rijan los principios, sino su propia vigencia. Por tanto, si el europeísmo los debilita no debe aceptarse. Así, el sistema debe mantener su carácter democrático, liberal y plural, «además de respetuoso con la historia política de cada asociado».

Desde el principio de este libro queda patente la capacidad didáctica de su autor, que constantemente busca la aproximación y por tanto la comprensión de sus lectores. Creo que lo consigue sobradamente, sin perjuicio del rigor y de la calidad del texto. Ésta es una obra oportuna y necesaria, que aporta reflexiones y análisis muy poco comunes en el ensayo político español. Para todo aquél que quiera pensar Europa de una manera poco correcta políticamente, saliéndose de los estrechos márgenes habituales, se trata de un libro imprescindible.

El autor, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, es miembro de la redacción de esta revista.

IGNACIO FERNÁNDEZ BARGUES

Notas para una biografía

ARCADI ESPADA

Josep Pla. Notas para una biografía.

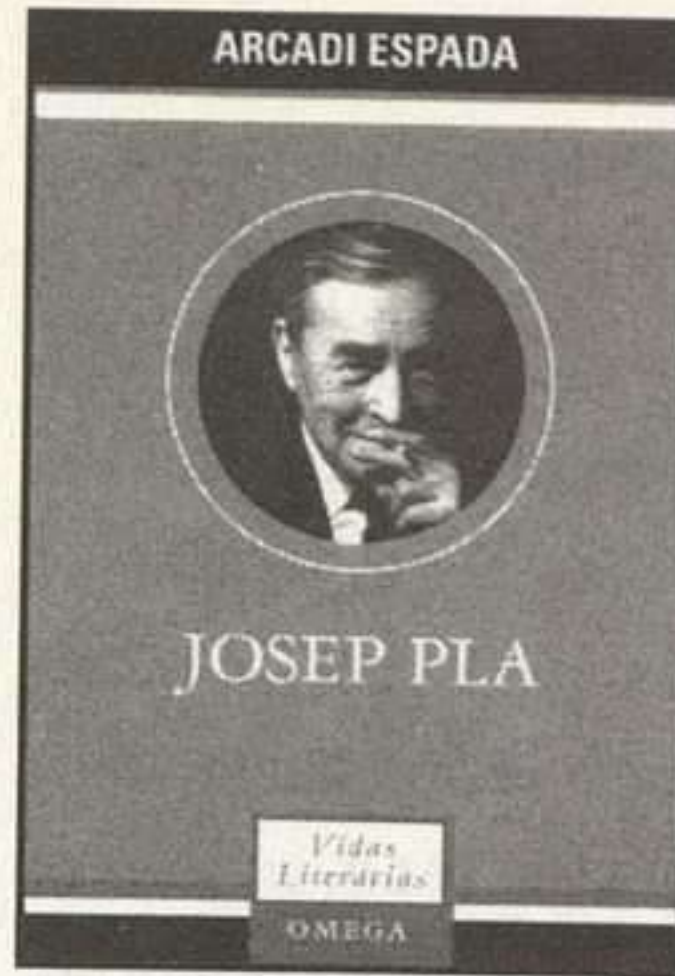
Omega Vidas literarias. 2005. 263 páginas.

Esta es la historia de un señor, Josep Pla (Palafrugell 1897-Llofriu 1981), que en sus libros parece que se nos pone lírico, pero acaba comparando el desfloramiento de los almendros con el vacío fundamental que sintió una vez en Cerdeña cuando le robaron la cartera. Un señor que, no obstante, dijo de sí mismo: «Yo tiendo en público, o cuando escribo, a combatir el sentimentalismo por pornográfico y anti-higiénico, pero lo cierto es que, personalmente, soy una especie de ternero sentimental evanescente». Un señor que no paraba de liar cigarrillos junto al fuego en busca de un adjetivo, por ejemplo para la luz de la mañana, pero que de viejo se evocaba universitario «ya tan realista y materialista como ahora —quizá más que ahora—». Este señor, en fin, que en las entrevistas despejaba preguntas sobre el amor por considerar que eso era un disparate ajeno, pero que en un cuaderno sesentón escribió que se había dormido «durísimo», o sea, erecto.

Se lo pasa uno muy bien leyendo este libro: si ya se conoce a Pla, porque se le reconoce en planos más hondos y escorzos imprevistos; y si no se le conoce, porque se le descubre y dan ganas de conocerlo. Por usar una terna de adjetivos, como era clásico en el estilo de

nuestro señor ampurdanés, diremos que este libro es amenísimo, magnífico, certero, pues en él, desenvainado, a punta de Espada se nos entrega a Pla, en una esgrima literaria cuyo desenlace es, una vez exhibido Pla, el deseo de leer también más a Espada.

El libro se estructura en dos partes. La primera parte corresponde a los comentarios que hace Arcadi Espada al hilo de unos diarios de Pla de los años 1965, 1966, 1967 y 1968. La segunda parte es una selección de textos de Pla: «Un infarto de miocardio» (del libro «Notas para Silvia») y un fragmento del libro «Notas del crepúsculo», obras, ambas, de senectud. Espada, cuya excelencia como ensayista no es preciso subrayar, advierte en el prólogo: «Este libro pretende ser lo que indica su título. Unas notas para la biografía, aún inexistente, de Josep Pla». Sin embargo, sus páginas son mucho más que una notaría de vivencias de Pla, porque, aparentemente limitadas entre las orillas de unos apuntes autobiográficos, atraen todo el caudal de una vida y acaban por darnos el río completo del personaje. No sólo esto: Espada nos guía de tal modo corriente abajo, que cuando llegamos a la parte segunda, o sea a los textos del propio Pla crepuscular, tenemos la sensación de que nos había mostrado todo ese paisaje para que disfrutáramos mejor del momento en que el protagonista nos revela por propia mano su desembocadura: infartado, pero sano de pura libertad: «He tratado de ser un hombre libre y, por el momento, dentro de mi absoluta limitación, lo he logrado. ¿Existe acaso mayor fortuna?».



«Es evidente —escribe Pla— que la cosa que me ha apasionado —hasta el delirio— ha sido mi oficio. Lo he sacrificado todo a mi oficio, pero puede que aún haya habido una cosa que me ha apasionado más: mi libertad privada, íntima y pública. Comparado con esto, todo el resto lo doy por una pipada de tabaco». Espada, tan amante como exigente con uno de sus maestros, se apresura a raspar la palabra «delirio», porque en el vocabulario planiano «los delirios suelen ser siempre de los otros». Más sensual que moral, fruto «del gusto de masticar las palabras y de infligirles obstinados tocamientos», la obra de Pla alcanzó las treinta mil páginas encuadernadas, luego de atravesar la censura de Primo de Rivera, la censura fascista de Italia y de Alemania y la censura de Franco (después de la intimidación de la República). Por lo demás, «Pla fue desde su juventud un catalanista moderado que osciló entre la seducción intelectual y política de Acció Catalana y la seguridad ideológica y práctica de la Lliga de Cambó». «Durante la guerra civil tomó partido por los franquistas y trabajó a sueldo de Francesc Cambó (...). Pero

está muy lejos de aplaudir el régimen que surgió de la Victoria».

Los tres fenómenos permanentes en el diario de Pla del que se vale Espada son estos: el aspecto del cielo, la calidad de los alimentos, la obsesión de Aurora. Es Aurora (A. en el diario) a quien recordaba Pla al declararse «durísimo» cuando se duerme aquella madrugada... Pero muchas otras veces esta mujer le quitará el sueño: «No he dormido un solo momento en toda la noche. Taquicardia, fatiga del corazón, erotismo». La vida de un viejo colgada todavía del sexo, como comenta Espada, que da noticia cabal de la personalidad de A., Aurora Perea Mené, con la cual vivió Pla en algunas localidades ampurdanesas y a la que visitó allende el mar —y tocó los «maravillosos muslos»— cuando ella se fue a América, cincuentona de buen ver, mejor tocar y caliente hablar, esposa de un setentón en una casa mísera y llena de animales, con el suelo cubierto de papel de periódico para las deposiciones, en Buenos Aires. «Escribo en verde», anotaba el señor Josep al referirse a A.

Un día de sol, sin nieblas. Copiemos medio al azar una frase cualquiera del diario de Pla de esa fecha: «A las diez me hago un revoltillo de dos huevos, tomates y calabacín, que resulta excelente». Y ahora veamos lo que inmediatamente, a continuación, escribe Espada: «Se cumplen las condiciones básicas de la vida: la soledad elegida, con el eco aún de las voces de anoche (resaca de una fiesta en multitud, lo cual le agradaba); el clima tónico y los alimentos frescos, bien cocinados...». Con trampolines como ése, en

apariencia triviales, Arcadi Espada salta por encima de la anécdota para encajar cada detalle en el cuadro de una vida y darnos una visión cenital. Sobrevolamos con él, así, la biografía. Trae el autor en el pico una ramita de aquí, otra de allá, y al final resulta que hemos visto casi entero el árbol de Pla.

Sus grandes viajes, que duraron décadas. Su retirada a la casa de Llofriu después de la Guerra Civil —hasta la muerte—, y allí, sin más compañía que la de una sirvienta, el memorialismo, la morosa reescritura. La memoria de una educación fría, si bien caldeada por los pucheros de una madre que «educó su boca». El whisky. Baroja, Leopardi, Proust, Stendhal, Montaigne... El dinero: «A mi entender —dice Pla—, la moneda es lo más importante en la vida: no me refiero a la moneda en sí, sino al precio de la moneda. He rechazado colaboraciones porque estaban demasiado bien pagadas». La juventud, «esa edad siniestra». El contraste entre la impostada indiferencia de siempre hacia su ingente obra («insignificante, yo no creo en mí mismo») y su pregunta, ya casi agonizante, al editor Vergés: «¿Se venden mis libros?». Las virtudes simbólicas que más apreciaba Pla: «el trabajo, el orden y la ausencia de cualquier exhibicionismo dramático». «El Cuaderno gris», que en 1966 marcó la frontera entre su consideración de periodista y su celebridad como escritor. Elusión del matrimonio: «Jamás me he metido en la vida de cualquier contemporáneo, sea hombre o mujer. De ahí que no me haya casado». Las cosas claras: «En política, todo se reduce a una cuestión transaccional.

Cuando la transacción termina, el desorden y el hambre son inmediatos».

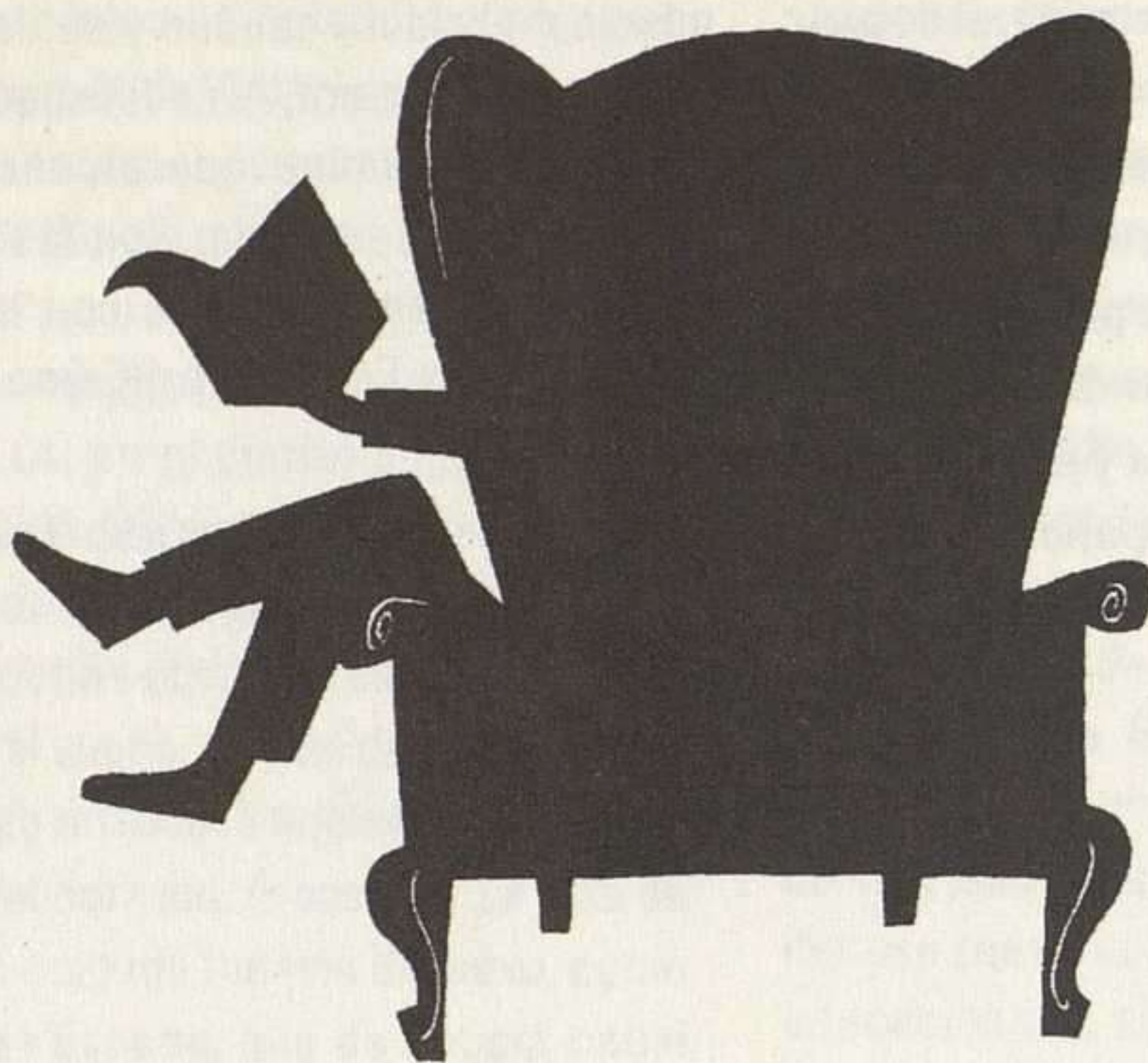
Cachondo latente o eremita de masía, trotamundos hablador o vividor solitario del vuelo gallináceo más próximo, Pla se convirtió en la mayor fronda de la historia de la lengua catalana y en tallo principal de la lengua española. Con la

misma mezcla de calidad y sutileza de aquel a quien honra, Arcadi Espada nos presenta al hombre que alcanzó esa doble estatura literaria. Son las notas sobre un gigante. Acorde con ello, la nota que saca Espada es altísima.

IGNACIO TORRIJOS

RESEÑAS

La cultura pasa por aquí



AV Monografías	Clarín	Ecología Política	Letras Libres	Reales Sitios
AV Proyectos	Claves de Razón Práctica	El Ecologista	Libre Pensamiento	Renacimiento, Revista de Literatura
Ábaco	CLIJ	Er, Revista de Filosofía	Litoral	Revista HispanoCubana
Academia	Contrastes	La Estafeta del Viento	Más Jazz	Revista de Estudios Orte- guianos
ADE-Teatro	El Croquis	Exit Expresss	Matador	RevistAtlántica de Poesía
Afers Internacionals	Cuadernos de la Academia	Exit, Imagen y cultura	Melómano	Revista de Libros
Álbum	Cuadernos de Alzate	Experimenta	Mientras Tanto	Revista de Occidente
Archipiélago	Cuadernos Escénicos	El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia	Le Monde Diplomatique	Ritmo
Arquitectura Viva	Cuadernos Hispanoamericanos	Foreign Policy	Nación Árabe	Scherzo
Archivos de la Fimoteca	Cuadernos de Jazz	FotoVideo	Nickel Odeon	El Siglo que viene
Arte y parte	Cuadernos de Pensamiento Político. FAES	Goldberg	Nuestro Tiempo	Sistema
Artecontexto	Cuadrante	Grial	Nueva Revista	Telos
Aula, Historia Social	DCidob	Guaraguao	Ópera Actual	Temas para el Debate
L'Avenç	Debats	Historia, Antropología y Fuentes Orales	La Página	A Trabe de Ouro
Ayer	Delibros	Historial Social	Papeles de la FIM	Tribuna Americana
Barcarola	Dez.Eme	Ínsula	Papers d'Art	Turia
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza	Dirigido	Intramuros	Pasajes	Utopías/Nuestra Bandera
Caleta	Doce Notas	Lápiz, Revista Internacional de Arte	Política Exterior	El Viejo Topo
Campo de Agramante	Doce Notas Preliminares	Lateral	Por la Danza	Visual
CD Compact		Leer	Primer Acto	Zona Abierta
El Ciervo		Letra Internacional	Quimera	
			Quodlibet	
			Quórum	
			El Rapto de Europa	

Información y suscripciones:

C/ Covarrubias, 9 2.º dcha.
28010 Madrid
Teléf.: +34 913 086 066
Fax: +34 913 199 267
www.revistas culturales.com
www.arce.es
info@arce.es



Asociación de
Revistas Culturales
de España

Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español

LA FUNDACIÓN CAJA MADRID dedica una parte principal de su actividad y recursos a la **conservación del Patrimonio Histórico**. Este programa ha destinado hasta 2004 **más de 108 millones de euros**.

Las actuaciones en este ámbito se dirigen principalmente a la restauración de monumentos promoviendo un **método basado en el rigor científico de la intervención** y en el respeto por los valores históricos y documentales del patrimonio.

Plan de conservación y restauración de iglesias románicas y entornos rurales. Cantabria. 2000-2005



Plaza San Martín, 1. 28013 MADRID
ppatrimonio@cajamadrid.es
www.fundacioncajamadrid.es

